

# Sobre la historia de las intervenciones armadas norteamericanas



**EDITORIAL PROGRESO**

**MOSCÚ<sup>1</sup>**

Traducido por M. Ciutat

Consejo de redacción

A. Glinkin, I. Grigulévich, I. Kumarián,  
I. Mints, A. Narohnitski, E. Rovínskaya

**«ИЗ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКИХ  
ВООРУЖЕННЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ»**

*на испанском языке*

© Editorial Progreso, 1984

Impreso en la URSS

Digitalización y Maquetación:

Demófilo, 2018



Biblioteca Libre

**OMEGALFA**

2019

Ω

---

<sup>1</sup> La redacción de la traducción fue corregida por el escaneador. La paginación no coincide con la original.

---

# SUMARIO

## PARTE I

V. Selivánov.

LAS ETAPAS DE LA EXPANSIÓN EN AMÉRICA LATINA

I. Kumarián.

LAS AGRESIONES A MÉXICO

E. Larin.

CUBA: OBJETO DE AGRESIÓN POR PARTE DE LOS EE.UU

Nelli Poyárkova.

PUERTO RICO: UNA COLONIA NORTEAMERICANA

V. Lunin.

LOS EE.UU. Y EL CANAL DE PANAMÁ

N. Lutskov.

VEINTE AÑOS DE OCUPACIÓN DE HAITÍ

Elena Anánova.

DESEMBARCO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

I. Grigulévich.

NICARAGUA INDÓMITA

Marina Chumakova.

GUATEMALA: EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO

DE ARBENZ

M. Górnov.

LA CONSPIRACIÓN CONTRA CHILE

S. Semiónov.

EL GENOCIDIO EN EL SALVADOR

A. Glinkin.

LA ADMINISTRACIÓN REAGAN AGUDIZA EL RUMBO

## **PARTE II**

Yu. Poliakov.

LA CRUZADA ANTISOVIÉTICA DE LOS IMPERIALISTAS

A. Lunin.

UNA INTERVENCIÓN OLVIDADA

A. Petrov.

LA GUERRA DE VIETNAM

V. Zhurkin.

DESLIZÁNDOSE POR LA VERTIENTE

A. Kislov.

LA POLÍTICA INTERVENCIONISTA EN EL PRÓXIMO ORIENTE

## PREFACIO

A los estadistas estadounidenses les agrada representar el papel de pacificadores, moralizadores y guardianes de la justicia y el respeto en los asuntos internacionales; sin embargo, sus acciones se encuentran en flagrante contradicción con su verborrea. ¿Qué vale, por ejemplo, la afirmación del presidente de los EE.UU., R. Reagan, en la segunda sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el desarme, de que los Estados Unidos nunca han sido agresores?

De prestar oídos a los representantes del *establishment* norteamericano, podría parecer que los Estados Unidos han sido la potencia más adicta a la paz en la historia de la humanidad, que jamás han agredido a nadie y que siempre han actuado en bien de los demás.

¿Cuál es el cuadro de la política estadounidense en realidad? Según aseveraciones de la propia prensa norteamericana, en sus años de existencia, los EE.UU. han realizado más de 200 agresiones armadas contra otros pueblos. Según datos de la fundación norteamericana *Brookings Institution*, sólo de 1946 a fines de 1981, los EE.UU. emplearon la fuerza armada en apoyo a sus fines de política exterior y estrategia militar 250 veces, recurriendo reiteradamente a la amenaza del empleo del arma nuclear.<sup>1</sup>

Los dueños de los destinos de los EE.UU. afirman en la actualidad que sólo a causa de los “manejos del comunismo mundial” y la careada “amenaza soviética” los EE.UU. intensifican la carrera armamentista y tienen soldados en tantos puntos del globo terráqueo; sin embargo, los EE.UU. libraban guerras de rapiña en América Latina y el Oriente mucho antes de aparecer la URSS en el mapamundi. Enviaron muchas veces sus tropas a México, arrebatando a este país más de la mitad de su territorio, ocuparon Cuba en 1898, convirtieron a Puerto Rico en su colonia. En el hemisferio oriental, corrieron la misma suerte las Filipinas. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, los EE.UU. intervinieron reiteradas veces en Haití, la

---

<sup>1</sup> Revista: *EE.UU. Economía. Política. Ideología*, 1981, N. 5, p. 112-118.

República Dominicana, Nicaragua y otros países de América Latina.

Tras el triunfo de la primera revolución socialista en octubre de 1917, los EE.UU. enviaron sus tropas a la Rusia Soviética. Entre las dos guerras mundiales, los EE.UU. implantaron en América Latina a dictadores “gorilas” a su gusto, aplastando con su ayuda todo intento de los pueblos de defender su independencia. Por indicación directa de Washington, fueron asesinados los jefes campesinos mexicanos Emiliano Zapata y Pancho Villa, el general Augusto César Sandino en Nicaragua, los luchadores contra el imperialismo Farabundo Martí en El Salvador, Julio Antonio Mella y Antonio Guiterras en Cuba, y otros muchos patriotas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los apetitos de los EE.UU. tomaron carácter “global”. Comenzaron a intervenir en los asuntos de todas las regiones del mundo. China, Corea, Vietnam, los países del Oriente Próximo y África fueron objeto de sus agresiones directas o indirectas. Impusieron el Pacto Atlántico a Europa Occidental. Con ayuda de pactos “defensivos”, han tratado de atar a América Latina a su carruaje militar. Los EE.UU. se inmiscuyen en los asuntos internos de la comunidad socialista, amenazando con el boicot económico y no respetando los acuerdos firmados anteriormente con la Unión Soviética.

El estudio de la política exterior estadounidense muestra que a lo largo de los 200 años de historia de los Estados Unidos, la estrategia política de los círculos dirigentes norteamericanos en el exterior se ha basado en dos postulados básicos: 1) la fuerza militar es el medio fundamental de resolver los problemas internacionales y 2) los EE.UU. no son un país cualquiera sino exclusivo, “destinado” (Manifest Destiny) a la misión civilizadora de llevar a los demás pueblos el *american way of life*.

“Desde el comienzo de nuestro desarrollo como nación —hacia constar el diario norteamericano *The New York Daily News* el 31 de marzo de 1981—, se observa el camino trazado por medio de la fuerza y los tiros hacia las fronteras del oeste (la usurpación de las tierras mexicanas); sin embargo, hoy nos consideramos una nación de la ley y el orden. No, seguimos siendo fruto de aquella época”.

Siguiendo ese mismo camino, los EE.UU. intentaron ante todo subyugar a los pueblos del hemisferio occidental, y luego desplazaron su atención hacia otros continentes. En un reciente pasado, sostuvieron la guerra contra los pueblos de Indochina, anegando en sangre, quemando con napalm e intoxicando con venenos la tierra pacífica de Vietnam, Laos y Kampuchea. Ahora el gobierno estadounidense, además de estimular al agresor israelí a cometer crímenes sangrientos en el Líbano, ha introducido en este país sus efectivos militares (los *marines*), sometiendo a cañoneo la capital libanesa. Las tropas de Tel-Aviv, que exterminan a los palestinos y los libaneses, están equipadas con armas norteamericanas. Los sionistas cometen sus crímenes y practican el genocidio en las tierras árabes con la bendición de Washington.

El golpe militar fascista en Chile, las decenas de miles de muertos en El Salvador y Guatemala, el bloqueo a Cuba, el financiamiento, el apertrechamiento y la tutela a los asesinos somocistas en Nicaragua, el apoyo al régimen racista en la RSA, y la complicidad fáctica con Londres en la guerra colonialista de Inglaterra contra Argentina en el Atlántico Sur, son respaldados por la política de los EE.UU., encaminada a apoyar los regímenes más reaccionarios y a establecer la hegemonía norteamericana en los asuntos internacionales.

Las fuerzas agresivas del imperialismo estadounidense aprovechan todos los medios para romper el equilibrio estratégico militar existente en el mundo y obtener la posibilidad de dictar su voluntad a otros países. Una prueba de ello es, por ejemplo, la campaña hostil antisoviética montada en los EE.UU. en torno al mito de la “amenaza militar” del Este. Esta mentira elevada a la categoría de política oficial está dirigida a facilitar a los EE.UU. el fomento de una carrera armamentista que conduce al incremento del peligro de una nueva guerra mundial. En los últimos años, en el período de la administración Reagan, esta política se ha hecho especialmente peligrosa para los destinos de los pueblos del mundo.

El presupuesto militar de los EE.UU. en 1982 alcanzó la cifra astronómica de 208.600 millones de dólares, y en 1986 llegará a 327.700 millones de dólares. Los EE.UU. cuentan hoy con 2.500 bases militares situadas en 114 países del mundo, en las que se encuentra me-

dio millón de soldados norteamericanos. Los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, el Mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico y los Mares del Sur son surcados por escuadras y submarinos militares norteamericanos dotados de los medios más modernos de exterminio en masa. Centenares de aviones con mortíferas armas nucleares a bordo, despegan diariamente de sus aeropuertos. Los EE.UU. producen oficialmente sustancias químicas tóxicas en enormes cantidades, pretenden imponer a sus aliados europeos una nueva generación de cohetes nucleares, amenazan con emplear el cosmos con fines militares, y hablan irresponsablemente de la guerra nuclear “limitada”, que abarcará supuestamente “sólo” a Europa, aunque es claro para todo el mundo, que donde sea que estalle la tromba nuclear, provocará inevitablemente la catástrofe general.

En los últimos años, los EE.UU. procuran asimismo cometer sus actos agresivos con “manos ajenas”, azuzando a unos países contra otros, exacerbando y haciendo llegar a límites peligrosos los conflictos locales, con tal de servirse de ellos para ocupar nuevas posiciones estratégicas y cercar aún más a la Unión Soviética y otros países socialistas con el cinturón de sus bases militares. A este propósito sirve igualmente el comercio de armamentos. Sólo durante el decenio 1970-1980, los EE.UU. vendieron a 131 países, pertrechos militares por una suma de 123.500 millones de dólares, de ellos 47.700 millones a los países de Oriente Próximo, principalmente a Israel y Egipto. La exportación anual de armas de los EE.UU. ha crecido de 4.300 millones de dólares en 1970 a 20.000 millones de dólares en 1981.<sup>1</sup>

Los peligrosos pasos de los círculos gobernantes de los EE.UU., que empujan al mundo a la catástrofe nuclear, provocan por doquier una creciente preocupación y la indignación de los pueblos. En los propios EE.UU., personalidades públicas y eclesiásticas, conocidos políticos y diplomáticos critican la política aventurera de confrontación que no cuenta con la situación real en el mundo. Por su parte, la Unión Soviética siempre ha propuesto con empeño y convicción a los Estados Unidos, iniciar negociaciones y ponerse de acuerdo sobre una base recíprocamente aceptable, respecto al cese de la de-

---

<sup>1</sup> *Granma*, La Habana, 3 de agosto de 1982.

mencial carrera armamentista y el paso al desarme.

En su intervención en el acto solemne dedicado al 60 aniversario de la URSS el 21 de diciembre de 1982 en el Palacio de los Congresos del Kremlin, Yu. V. Andrópov, secretario general del CC del PCUS, dijo: “Estamos por una colaboración amplia y fructífera entre todos los pueblos del planeta, sin imposiciones ni injerencias en sus asuntos, para su provecho mutuo y en beneficio de toda la humanidad”.<sup>1</sup>

Los materiales publicados en esta recopilación, cuyos autores son conocidos científicos soviéticos —historiadores y especialistas en asuntos internacionales—, muestran con elocuencia que el rumbo agresivo de los EE.UU. no es nuevo, fue aplicado ya antes por los círculos gobernantes de este país. Basándose en sólidos materiales documentales, los autores estudian la historia de las intervenciones armadas norteamericanas en diferentes países. Se analiza la intervención de los EE.UU. en la Rusia Soviética de 1918 a 1920, la política agresiva estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial en el Oriente Próximo y en Indochina. La parte fundamental del libro está dedicada a la política de los EE.UU. en América Latina. La atención particular prestada al continente latinoamericano se debe a que esta inmensa región siempre ha sido considerada por los círculos gobernantes de los EE.UU. como “zona de los intereses norteamericanos”. Allí precisamente los EE.UU. aplicaron por primera vez la “política del gran garrote”, desembarcando sus tropas en territorios de Estados soberanos e implantando regímenes pro norteamericanos. Allí precisamente se probó la “diplomacia del dólar” aplicada luego en otras partes del mundo.

El auge del movimiento de liberación en América Latina en los últimos decenios, la construcción del socialismo en Cuba, y el triunfo de una revolución popular en Nicaragua, intensificaron la agresividad de los círculos imperialistas estadounidenses en el hemisferio occidental. Se fomenta una campaña de subversión contra la República soberana de Cuba que persigue obligar a la dirección cubana a renunciar a las transformaciones revolucionarias en el país. Se hace

---

<sup>1</sup> Yu. Andrópov. *Sesenta Aniversario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas*. Moscú, 1982, p. 27.

realidad la intervención armada en la Nicaragua revolucionaria por mercenarios reclutados por los EE.UU. entre la escoria somocista expulsada del país por el pueblo.

Pero la política agresiva imperialista de los círculos gobernantes de los EE.UU. no hace sino aumentar la cohesión de las fuerzas progresistas y democráticas de América Latina.

En octubre de 1983, los Estados Unidos agredieron a mano armada a Granada, pequeño Estado caribeño. En su Declaración, la Agencia Telegráfica de la Unión Soviética señala que “con sus actos contra Granada, el Gobierno de los Estados Unidos pone al descubierto su desprecio absoluto hacia las normas del Derecho Internacional universalmente aceptadas, y pisotea los elevados principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Es una prueba manifiesta de que, en aras del logro de sus objetivos expansionistas, Washington se propone no hacer caso del derecho de los pueblos al desarrollo independiente y lanza un reto abierto e insolente a la voluntad de los pueblos y a la opinión pública mundial”.<sup>1</sup>

La experiencia de la historia de las intervenciones armadas de los EE.UU., de las que se habla en el presente trabajo, muestra que en las nuevas condiciones creadas actualmente en la palestra internacional, los intentos de los Estados Unidos de volver a la “política del gran garrote” están condenados al fracaso. En el libro no se han reflejado todos, ni siquiera la mayoría de estos actos agresivos de los EE.UU. Para ello se necesitarían muchos volúmenes. Tampoco se ha prestado espacio a las agresiones psicológicas y económicas de los EE.UU. contra los regímenes indeseados, a todo tipo de bloqueos y sanciones, a las campañas propagandísticas agresivas, a las acciones de los “boinas verdes” y los mercenarios, a la política de la “guerra fría” fomentada desde Washington y a otras acciones adversas a la causa de la paz y el progreso social.

Nuestra tarea era mostrar ante todo, las fuentes del origen de la política exterior agresiva de los Estados Unidos en diversos países y en diferentes períodos. Es al mismo tiempo, la historia del fracaso de los designios estratégicos de los círculos gobernantes estadounidenses.

---

<sup>1</sup> *Pravda*, 27.X.1983.

ses orientados a mantener a los pueblos bajo la esfera del dominio imperialista, del fracaso de la política de amenazas e intervenciones, de desencadenamiento de nuevas guerras antipopulares y de puesta en práctica de concepciones político militares inhumanas.

# PARTE I

V. SELIVÁNOV

## LAS ETAPAS DE LA EXPANSIÓN EN AMÉRICA LATINA

El 4 de julio de 1776 el pueblo norteamericano aprobó la Declaración de Independencia, que confirmaba el derecho natural de cada pueblo a decidir por sí mismo su propio destino; sin embargo, la política posterior de los EE.UU. en el extranjero, ha estado dirigida a dominar a otros pueblos. Ello se ha manifestado con fuerza especial en los países de América Latina.

Las premisas del expansionismo continental de los EE.UU. fueron creadas ya en las guerras contra los indios indígenas, en los intentos de la burguesía del norte de los EE.UU. de ocupar Canadá, y las reclamaciones de los latifundistas del sur de ampliar el territorio del joven país a costa de sus vecinos. Las tendencias expansionistas de los círculos gobernantes de los EE.UU., madurando y tomando vigor a ritmo acelerado, se dirigieron a los territorios situados al sur de los EE.UU. Es sintomático que incluso el propio nombre que dio la Convención Constituyente a la nueva república burguesa —“Los Estados Unidos de América”— subrayaba significativamente las pretensiones panamericanas del joven Estado, su aspiración a desempeñar un papel dominante en todo el continente americano. William Foster, estudioso de la historia política del Continente Americano, señaló que “ningún otro país del hemisferio occidental ha pretendido alguna vez monopolizar el término América”.<sup>1</sup>

A comienzos del siglo XIX, la contradicción entre los principios humanistas y democráticos proclamados por los dirigentes de los EE.UU. y la práctica de la política exterior del primer Estado capitalista de América, llevó de hecho definitivamente a la renuncia a las tradiciones liberadoras de la revolución. Hasta la doctrina del Derecho natural de todo pueblo a decidir su propio destino —uno

---

<sup>1</sup> W. Foster. *Outline Political History of the Americas*. New York, 1951, p. 205.

de los fundamentos de la Declaración de Independencia— llegó a interpretarse de modo que justificara presuntamente como “natural” el expansionismo norteamericano. Este fue el pretexto que empleó el presidente Jefferson para argumentar las pretensiones de los EE.UU. al territorio de Luisiana, cuando aprovechando las guerras napoleónicas en Europa, los EE.UU. compraron a Francia en 1803 a ínfimo precio estas extensas y fértiles tierras. En 1811, no conformes con la Luisiana, los EE.UU. conquistaron la Florida, que pertenecía a España. Al pasar unos años, el secretario de Estado norteamericano y futuro presidente, John Adams, justificando las anecciones realizadas y las próximas a realizar de los territorios aledaños a los EE.UU., declaró que el mundo se debía ir acostumbrando a la idea de que el continente norteamericano era propiedad de los Estados Unidos de América.<sup>1</sup>

El 2 de diciembre de 1823 en un mensaje del presidente James Monroe al Congreso, fue proclamada la famosa Doctrina Monroe, en la que se expresaban sin ambages, las pretensiones estadounidenses a la hegemonía en todo el hemisferio occidental, incluyendo América del Sur y América Central. La historiografía norteamericana desde hace mucho, interpreta de manera deforme la Doctrina Monroe, afirmando que esta suponía solamente el compromiso de los EE.UU. de intervenir contra los países de la Santa Alianza en caso de que estos intentaran ahogar por la fuerza el movimiento de liberación en América Latina, y que el propio hecho de la proclamación de la Doctrina vino a evitar la intervención de los monarcas europeos en el continente, asegurando la independencia de los pueblos latinoamericanos.

En realidad la Doctrina Monroe reflejaba las tendencias expansionistas de los círculos gobernantes estadounidenses, interesados en poner fin a la influencia de las potencias europeas en el hemisferio occidental y abrirse paso hacia el sur. La situación en el continente era propicia para sus designios.

El primer cuarto del siglo XIX estuvo signado por la guerra cruenta y tenaz de los países latinoamericanos que luchaban por independizarse de los colonizadores españoles. Como resultado de las guerras

---

<sup>1</sup> *Ibídem*, p. 258.

de liberación de 1810 a 1826, en lugar de las colonias españolas, surgieron las jóvenes repúblicas latinoamericanas que se encontraron frente a un poderoso saqueador: los Estados Unidos.

La historia de las relaciones interamericanas en el siguiente siglo y medio, representa en realidad una enumeración de actos de expansión territorial, agresiones bélicas, y penetración económica e ideológica de los EE.UU., que alcanzaron proporciones especialmente acrecidas al comenzar la época del imperialismo.

De fundamento ideológico de la expansión norteamericana, sirvió la concepción, formada en el siglo XIX, del “Destino Manifiesto” (Manifest Destiny). Partiendo de la aseveración de la existencia de no se sabe qué exclusividad del pueblo de los Estados Unidos y del desarrollo histórico de los EE.UU., esta concepción proclamaba el “Derecho natural” de los norteamericanos a ampliar su territorio por medio de la fuerza. En los primeros tiempos, la idea del “Destino Manifiesto”, perfilada en las declaraciones de los políticos estadounidenses desde fines del siglo XVIII, se refería a la ampliación del territorio de los EE.UU. dentro de los límites de América del Norte. En sus marcos tuvo cabida la agresión de 1846 a 1848 de los EE.UU. a México, sin parangón por su cinismo, como resultado de la cual México perdió más de la mitad de su territorio. Manifestaciones no menos características de esta concepción fueron las incursiones piratas de Walker en América Central a mediados del siglo XIX.

La tesis de que los norteamericanos son una “raza superior” destinada “por la providencia” a decidir el rumbo del desarrollo de otros países, y a gobernar a otros pueblos, comprendida en la fórmula del “Destino Manifiesto”, condujo al chovinismo más descarado. Josiah Strong, predicador de esta concepción, declaró en 1885 que “los anglosajones serán una raza que desarrollará una peculiar agresividad, destinada a establecer sus instituciones en la humanidad, y a extender su dominio a todo el mundo. Si no me equivoco, la raza poderosa avanzará sobre México, América Central y del Sur, las islas del océano, África y más lejos... Esta raza... está destinada a desplazar a las razas débiles, a asimilar otras, y a moldear a las restantes hasta que realmente toda la

humanidad sea anglosajonizada.”<sup>1</sup>

Vemos, pues, que el franco apologista de la “raza superior” norteamericana señala, en calidad de objetivo de primer orden, la expansión a México, América Central y América del Sur. La expansión estadounidense en el hemisferio occidental siguió precisamente este orden. A fin de establecer su dominio en los países latinoamericanos, los círculos gobernantes de los EE.UU. recurrieron a la propaganda demagógica de la idea de comunidad geográfica, cultural e histórica de todos los países de América, de la comunidad de sus intereses en la perspectiva histórica. A partir de ello, se promovió la consigna de la “solidaridad continental”, en la que el papel rector debía pertenecer a los Estados Unidos de América. Esta dirección de la política interamericana de los EE.UU. recibió el nombre de “panamericanismo” y se manifestó por primera vez abiertamente durante la primera Conferencia Panamericana celebrada en Washington de 1889 a 1890.

En las postrimerías del siglo XIX, cuando los EE.UU. se preparaban a iniciar la lucha por el reparto del mundo, se incrementó la influencia del aparato burocrático militar en la política exterior del país. La camarilla gobernante estadounidense empezó a prestar oídos atentos a las voces de los teóricos militares, que señalaban los métodos concretos de la expansión y señalaban la necesidad de utilizar en gran escala la fuerza militar como factor determinante en la política exterior. El más relevante de ellos fue A. T. Mahan, cuyas concepciones político estratégicas hasta ahora ejercen cierta influencia en las doctrinas no sólo del Pentágono, sino además, de los departamentos militares de otros Estados imperialistas. *La influencia de las fuerzas navales en la historia de 1660 a 1783*, obra principal de Mahan, apareció en 1890, y ha sido editada más de 30 veces en los Estados Unidos e Inglaterra.

Partiendo de la tesis de que el núcleo del poder de todo país marítimo reside en una fuerte marina de guerra, una red de bases navales y el dominio de las rutas marítimas, Mahan llamaba a los Estados Unidos a adueñarse ante todo de la cuenca del Caribe. “En el Caribe —decía— se encuentra la llave estratégica de dos grandes océanos

---

<sup>1</sup> J. Strong. *Our Country*, 1963, p. 214, 216, 217.

—el Atlántico y el Pacífico— y de nuestras propias fronteras marítimas principales.”<sup>1</sup> Mahan calificaba la ocupación del Caribe de premisa primordial para lograr el dominio de los EE.UU. en el continente. “Los Estados Unidos —afirmaba de manera categórica— deben obtener bases en el Caribe que puedan servir para iniciar operaciones. Gracias a sus ventajas naturales, sus posibilidades defensivas y su proximidad a una región de importancia estratégica, estas bases permitirán a las flotas de los EE.UU. permanecer tan cerca del escenario de las operaciones militares como cualquiera de sus adversarios... Con la preparación militar apropiada, los EE.UU. alcanzarán en esta región un predominio que se deriva, con precisión matemática, de su situación geográfica y su poder.”<sup>2</sup>

En una serie de trabajos escritos en vísperas de la guerra hispano americana de 1898, que dio inicio a la expansión imperialista de los EE.UU., Mahan exhortaba a la aplicación de una política colonial activa en el hemisferio occidental, aprovechando las contradicciones allí existentes en interés de los Estados Unidos.

El extenso programa de expansión territorial, expuesto en los trabajos de Mahan, reflejó con bastante plenitud el punto de vista formado entre la burguesía norteamericana sobre los países del Caribe como el objeto más próximo de penetración político militar, el que más tarde serviría de plaza de armas desde donde extender su influencia a otros países de América Latina.

Haciendo eco a Mahan, el senador H. Lodge proclamaba en 1895 refiriéndose a las repúblicas de Centroamérica y del Caribe: “Los Estados pequeños se han anquilosado y no tienen futuro... Las grandes naciones absorben rápidamente los lugares vacíos de la tierra para su actual defensa y para una futura expansión política y económica en los países pequeños. Es un movimiento que hace bien a la civilización y al avance de la raza. Los Estados Unidos como gran potencia mundial, no deben rezagarse en este sentido”.<sup>3</sup>

Al comenzar la época imperialista, los Estados Unidos dieron ejem-

---

<sup>1</sup> G. Marion. *Bases and Empire*. N. Y., 1948, p. 50.

<sup>2</sup> A. T. Mahan. *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783*. Boston; Little, Brown and Company, 1945, p. 34-35.

<sup>3</sup> *The Forum*. March. 1895, vol. 19, N. 1, p. 17.

plos elocuentes de intervención descarada en los asuntos de los países latinoamericanos.

Uno de los primeros actos de esta intervención fue la actitud de los EE.UU. durante la crisis venezolana de 1895, cuando el secretario de Estado Olney declaró: “...Hoy en día los Estados Unidos ejercen la supremacía en el continente y su voluntad es ley en todas las cuestiones en que intervienen”.<sup>1</sup> En confirmación de ello, los Estados Unidos emprendieron una impresionante exhibición de fuerza en las aguas del Caribe, dando a entender unívocamente que consideraban la región del Caribe como zona de su influencia ilimitada.

Como resultado de la guerra de los Estados Unidos contra España en 1898, le fueron arrebatadas a España, con su economía debilitada, Cuba y Puerto Rico. Las nuevas posesiones tenían valor para los EE.UU. no sólo porque estas islas representaban importantes fuentes de materias primas y mercados. La proximidad de Cuba y Puerto Rico a las costas del continente y el establecimiento allí de bases navales, cuya eficacia había sido comprobada en siglos de guerras en el mar Caribe y el Atlántico en general, creaban condiciones propicias para continuar la expansión de los EE.UU. en América Latina. La importancia estratégico militar de estas islas creció enormemente cuando se construyó el Canal de Panamá y los Estados Unidos tuvieron las llaves de las rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico.

La concepción de la importancia de la cuenca del Caribe para la estrategia militar fue aprobada oficialmente por los medios gobernantes de los EE.UU. ya en los primeros años posteriores a la guerra de los Estados Unidos contra España. El presidente Theodore Roosevelt formuló en 1904 una “adición” a la doctrina Monroe que respondía al deseo del ascendente imperialismo norteamericano de hacer aún más dinámica y agresiva la política exterior de los EE.UU.

El sentido de esta “adición” se reducía a la necesidad de que los EE.UU. intervendrían en los asuntos latinoamericanos en calidad de “fuerza policial internacional”. Así es como T. Roosevelt inició una

---

<sup>1</sup> W. Z. Foster. *Op. cit.*, p. 262.

nueva etapa en las relaciones interamericanas. T. Roosevelt profesaba la doctrina agresiva de Mahan ya antes de asumir la presidencia, siendo aún ayudante del secretario de la Marina. Precisamente durante el gobierno de Roosevelt, comenzó a crecer intensamente el poderío naval de los Estados Unidos.

La argumentación teórica de la necesidad del predominio en la región del Caribe no era suficiente, era preciso respaldarla con acciones cuyo éxito debía ser asegurado por la fuerza militar: tal era el punto de vista del imperialismo norteamericano, que halló su expresión en la llamada doctrina de T. Roosevelt, o en otros términos, la política del “gran garrote”.

Los EE.UU. la pusieron en práctica ya en los años 1902 y 1903, durante la segunda crisis venezolana, cuando Inglaterra, Alemania e Italia emprendieron el bloqueo por mar de Venezuela para satisfacer por la fuerza sus pretensiones financieras y económicas. Los EE.UU., que también tenían intereses económicos en Venezuela, asumieron una actitud de amenaza hacia los países europeos, reiterando su derecho exclusivo a intervenir en los asuntos de esta soberana república latinoamericana. En los años posteriores, los EE.UU. no perdieron oportunidad de exhibir su poderío naval. En 1907 y 1908 la flota atlántica de los EE.UU. —16 novísimos acorazados con una tripulación de 15 mil efectivos—, navegó alrededor del continente sudamericano haciendo escala en los puertos más importantes.

Pero lo principal es que la política del “gran garrote” fue aplicada a los países caribeños, ante todo, a Cuba, la República Dominicana y Nicaragua. A Cuba se le impuso la “enmienda Platt”, que convirtió de hecho, al país en un protectorado estadounidense. En la República Dominicana y Nicaragua, desembarcaron reiteradas veces unidades de la infantería marina. Las finanzas y las aduanas de estos países fueron tomadas bajo control de los EE.UU.

La evolución de la doctrina político militar de los EE.UU. con respecto a los países al sur del Río Grande, llevó durante la presidencia de W. H. Taft a la llamada “política preventiva”, lo cual significaba una nueva interpretación del “derecho” de los EE.UU. a intervenir en las repúblicas latinoamericanas. La “política preventiva” fue estrenada en Cuba. Su esencia consistía en justificar la vigilancia po-

lial sobre Cuba so pretexto de “conservar la paz” en este país, es decir, emplear la influencia de los EE.UU. para prevenir supuestamente el “surgimiento de un estado de anarquía” que “haría necesaria” la intervención armada. La aplicación de la “política preventiva” en Cuba creaba un precedente para otros países latinoamericanos. La interpretación de esta política tuvo una larga proyección en las relaciones interamericanas y llevó en realidad, a justificar la intromisión permanente de los Estados Unidos en la vida económica y política de los países latinoamericanos.

La construcción del Canal de Panamá fortaleció aún más las posiciones político militares del imperialismo norteamericano en la zona del Caribe. Los Estados Unidos tuvieron la posibilidad de controlar allí la economía y la política de las pequeñas naciones aun antes de la Primera Guerra Mundial. Las intervenciones militares fueron elevadas a la categoría de política oficial de los EE.UU. en los países de la cuenca del Caribe. La infantería de la marina estadounidense desembarcó más de una vez en Cuba, Nicaragua, Haití y la República Dominicana. Se orquestaron intervenciones armadas contra México, donde se desarrollaba la revolución de 1910 a 1917.

Tras la Primera Guerra Mundial, se esbozó una nueva tendencia en la política latinoamericana de los EE.UU., cuya aparición está relacionada con la victoria de la Gran Revolución Socialista de Octubre y la gran influencia de las ideas socialistas en el mundo. En su afán de hacer frente al auge del movimiento emancipador en los países latinoamericanos, los Estados Unidos continuaron en los años 20 la práctica de las intervenciones militares: basta recordar la ocupación de Nicaragua entre 1927 y 1933 contra la que luchó el héroe nacional de Nicaragua, Augusto César Sandino.

Al propio tiempo, los círculos gobernantes de los EE.UU. comprendían que sólo con la fuerza armada no era posible “mantener embriados” a los países latinoamericanos, cuyos pueblos se alzaban contra el dominio imperialista por la independencia nacional. En los años 30, los EE.UU. propugnaron la política del “Buen vecino” en Latinoamérica, contando ante todo con los regímenes reaccionarios que ya habían implantado y con la liquidación del movimiento de liberación en los países latinoamericanos a manos de sus marione-

tas. Nombraremos sólo a dos figuras: Trujillo en la República Dominicana y Somoza en Nicaragua, a ellos está asociada toda una época de sostén y ayuda en todo lo posible a unas de las dictaduras más sangrientas de nuestros tiempos.

La Segunda Guerra Mundial ayudó a los Estados Unidos a acrecentar su influencia económica, política y militar en América Latina; pero encontraron una resistencia resuelta por parte de los pueblos del continente. En los años 50, en una serie de países fueron derrocados los regímenes dictatoriales pro imperialistas. A los EE.UU. no les era fácil seguir empleando los “viejos métodos” frente al creciente poderío de las fuerzas de oposición en América Latina. Era necesario revisar la táctica, manteniendo intacta la estrategia imperialista.

Un factor decisivo que obligó a los medios gobernantes a buscar nuevos métodos de expansión en Latinoamérica, fue la Revolución Cubana. Esta constituyó un nuevo paso de avance fundamental en la lucha de los pueblos latinoamericanos por la liberación del yugo imperialista, el fortalecimiento de la soberanía nacional, la independencia económica y profundas transformaciones sociales.

La política imperialista estadounidense en América Latina adoptó principalmente la forma del neocolonialismo, que representa un conjunto de medidas políticas, económicas, militares e ideológicas, elaboradas por los círculos dirigentes de los EE.UU. en medio de la creciente crisis general del capitalismo y encaminadas a mantener y ampliar el control sobre los países soberanos con economías subdesarrolladas. La nueva política estadounidense halló su plasmación ante todo, en el programa de la *Alianza para el progreso*, uno de cuyos principales objetivos era debilitar la influencia de la Revolución Cubana sobre las amplias masas latinoamericanas.

Pero el fracaso de la *Alianza para el progreso*, que no logró resolver ninguno de los problemas del desarrollo de América Latina, los éxitos del movimiento revolucionario en el continente en el último decenio marcado por importantes jalones como la victoria del pueblo chileno en las elecciones de 1970, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, y el avance de Granada en la senda de la construcción del socialismo, movió a los círculos gobernantes de los Estados Unidos a recurrir de nuevo al intervencionismo.

A la par del envío directo de unidades militares (República Dominicana en 1965, Granada en 1983), los EE.UU. cuentan cada vez más con la contrarrevolución interna. En Chile organizaron, planearon y costearon el complot contra el presidente Salvador Allende, propiciando el acceso al poder de una dictadura militar fascista. Organizan y preparan intervenciones a los países del Caribe, reclutando mercenarios de la escoria contrarrevolucionaria que han expulsado de sus países los pueblos que han emprendido el camino del desarrollo independiente. Un ejemplo de ello fue la intervención en Cuba de 1961, que terminó con la derrota de los mercenarios en Playa Girón. Ahora se prepara la intervención en la Nicaragua revolucionaria. En octubre de 1983, los Estados Unidos realizaron una intervención armada contra Granada so pretexto de “proteger en la isla a los ciudadanos norteamericanos” no amenazados por nadie, pretexto viejo, pero probado en más de una ocasión.

La política de exportación de la contrarrevolución provoca creciente indignación en los países latinoamericanos. Los llamamientos a revisar el sistema interamericano resuenan cada vez con mayor energía.

Las relaciones interamericanas en la etapa actual del desarrollo histórico, experimentan profundos cambios de principio. En Latinoamérica prevalece la tendencia a mancomunar la acción en aras de una “segunda liberación”, o sea, de la verdadera independencia del imperialismo. Esta tendencia se perfiló ya a principios del siglo XIX, inmediatamente después de que la mayoría de los pueblos latinoamericanos se liberaran del yugo colonial español. Simón Bolívar, el gran luchador por la independencia de América Latina, aspiraba ya entonces a establecer una estrecha colaboración entre las jóvenes repúblicas, colaboración de la que excluía a los Estados Unidos, vislumbrando las intenciones expansionistas de este país.

El legado de Bolívar se pone en la actualidad en práctica. Los pueblos latinoamericanos, librándose de las ataduras del panamericanismo, arriban a la solidaridad latinoamericana, unen los esfuerzos de sus países en defensa de las riquezas nacionales y de la verdadera soberanía. Es una tendencia que adquiere un carácter antiimperialista cada vez más nítido.

## I. KUMARIÁN

### LAS AGRESIONES A MÉXICO

La historia de las relaciones mexicano estadounidenses es sobre todo una historia de agresiones directas, de la anexión de territorios mexicanos, y de reiteradas intervenciones armadas; es, por último, la historia de la permanente presión de los EE.UU. con la finalidad de subordinar el Estado mexicano soberano a sus intereses.

Ya a principios del siglo XIX, los EE.UU. se anexaron la Florida, que pertenecía a España, aprovechando el hecho de que el pueblo mexicano libraba una cruenta y encarnizada guerra de liberación contra los colonizadores españoles. La mayor parte de los indios seminoles pobladores de la Florida, quienes ofrecieron una resistencia tenaz a los conquistadores, fue aniquilada y los sobrevivientes fueron confinados a territorios reservados.

Más tarde se hace objeto inmediato de la expansión estadounidense la provincia mexicana fronteriza de Texas, territorio mexicano que los EE.UU. habían intentado arrebatar infructuosamente más de una vez. Entonces para penetrar en Texas, se recurrió al método del caballo de Troya. A comienzos de los años 20, a instancias de las autoridades estadounidenses, México permitió a colonos norteamericanos establecerse en tierras de Texas bajo determinadas condiciones. Los colonos, ante todo latifundistas esclavistas de los Estados sureños, se valieron de ello para ocupar y poblar a ritmo acelerado grandes áreas de tierra. Aunque la parte mexicana anuló pronto su decisión, los norteamericanos continuaron llegando y a mediados de los años 30, llegaron a ser más de 30 mil. Desde el comienzo se establecieron en grupos pequeños en todo el territorio de Texas, creando con anticipación, los futuros puntos de apoyo para la anexión.

Ejerciendo su política de colonización de Texas, los Estados Unidos buscaban por vía diplomática, al mismo tiempo lograr del gobierno mexicano la cesión de este y algunos otros territorios. En la misma

dirección actúa con gran empeño, pero sin éxito, en la segunda mitad de los años 20, Joel R. Poinsett, enviado estadounidense a México.

Tampoco tuvieron éxito los intentos de comprar Texas emprendidos por su sucesor, A. Butler, dueño de grandes tierras y esclavista, quien comunicaba a su gobierno que la opinión pública mexicana se hallaba fuertemente indispuesta a la adquisición de Texas por los EE.UU., y que el gobierno mexicano no estaba interesado en escuchar proposiciones al respecto y aún menos, en ceder Texas a los EE.UU.<sup>1</sup>

Al encontrar la oposición de México, los Estados Unidos se dispusieron a preparar la anexión de Texas por las armas. A Texas fue enviado el coronel Samuel Houston, amigo personal del presidente A. Jackson, quien se ocupó de preparar la acción armada de los colonos contra México.

En junio de 1835 un destacamento de colonos bajo el mando de W. Travis, tomó por asalto el poblado Anáhuac. En los meses que siguieron, los sublevados tomaron varios poblados y establecieron el control sobre casi todo el territorio de Texas. Así comenzó la guerra no declarada de los Estados Unidos contra México. Seguidamente los colonos proclamaron la separación de Texas de México y formaron un “gobierno provisional”. Los Estados Unidos continuaron prestando amplio apoyo a los sublevados.

A finales de 1835, México, rechazando de modo categórico las pretensiones de los EE.UU. respecto a Texas, envió contra los sublevados un ejército de 6.000 hombres bajo el mando del presidente Santa Anna. Esta tropa cubrió 1.700 km de camino difícilísimo en territorios desérticos y, cruzando el Río Grande, tomó por asalto en febrero de 1836, San Antonio de Béjar, la capital de Texas. Temiendo el fracaso de la sublevación que habían organizado, los Estados Unidos mandaron sus tropas regulares al mando del general Gaines a Texas en ayuda de los sublevados.

El 21 de abril de 1836, las tropas norteamericanas junto a los suble-

---

<sup>1</sup> F. Palavicini. *México, historia de su evolución constructiva*. México, 1945, t. 1, p. 362.

vados, atacaron por sorpresa y derrotaron a los mexicanos. Santa Anna, hecho prisionero, firmó un tratado capitulador con los sublevados tejanos para el cese de las operaciones militares y la retirada de las tropas mexicanas del territorio de Texas. En marzo de 1837 los EE.UU. interpretaron el espectáculo del reconocimiento oficial de la “independencia” de Texas, que se encontraba bajo su control desde los primeros días de la sublevación.

Poco después, siguieron su ejemplo Inglaterra y Francia, quienes suponían que la nueva “república” actuaría como especie de barrera a la posterior expansión de los EE.UU. hacia el sur. Las potencias europeas estaban interesadas en que apareciera un Estado barrera, ya que tenían sus propios intereses egoístas en México. Ello quedó confirmado al pasar unos cuantos decenios, cuando entre 1861 y 1867 fue ejecutada la intervención anglo franco española en México.

Al negarse de manera categórica a reconocer la “independencia” de Texas, el 23 de agosto de 1843 el gobierno mexicano declaró resueltamente que la anexión de Texas por los Estados Unidos sería considerada como una declaración de guerra a México y que éste se disponía a defender su territorio por todos los medios; sin embargo, para los expansionistas norteamericanos la “independencia” de Texas era sólo una etapa en el camino de las adhesiones a los Estados Unidos. A pesar de las protestas mexicanas, el Congreso estadounidense aprobó el 29 de diciembre de 1845 la decisión de unir el Estado esclavista de Texas a los Estados Unidos de América.

En aquellos tiempos, sobre México se cernió un nuevo peligro siniestro por parte de los EE.UU., quienes realizaban planes para nuevas conquistas territoriales.

Con esta finalidad, la parte norteamericana continuaba concentrando fuerzas a lo largo de las fronteras norte de México. En octubre de 1845 tenía concentradas allí casi la mitad de sus tropas regulares. Al mismo tiempo mandaron considerables fuerzas de la marina a la región del Golfo de México y, en el Pacífico, a las costas californianas. Simultáneamente los Estados Unidos apoyaron y estimularon la afluencia de colonos norteamericanos a California y otras tierras mexicanas.

A mediados de enero de 1846, el general Zachary Taylor recibió la orden de avanzar sus tropas hacia el Río Grande, y ya en marzo se aproximaron a sus riberas del norte. U. Grant, oficial del ejército de Taylor y futuro presidente de los EE.UU., señaló que el movimiento premeditado de las unidades norteamericanas hacia el Río Grande, perseguía el objetivo de obligar a México a iniciar acciones militares. “Fuimos enviados a provocar la contienda —escribe Grant a continuación—, pero era importante que comenzara México”, para que se le pudiera declarar agresor y presentar a los EE.UU. como víctima de los “indígenas mexicanos”.<sup>1</sup>

A principios del mismo año, fue enviado a California un destacamento norteamericano bajo el mando del oficial Fremont, con la misión de llevar a cabo “una investigación científica” del territorio mexicano. Allí también se procedió a la preparación activa de una insurrección de colonos norteamericanos siguiendo el ejemplo de Texas.

El 8 de marzo de 1846, las unidades norteamericanas sin declarar la guerra, comenzaron a penetrar en territorio mexicano. Ocuparon varios poblados y acamparon en la orilla norte del Río Grande junto a la ciudad de Matamoros, que en aquel entonces, era un importante punto estratégico.

A orillas del Río Grande entre el 8 y el 9 de mayo tuvo lugar el primer gran enfrentamiento entre el ejército mexicano del general Mariano Arista y las tropas norteamericanas de Taylor. Valiéndose de su ventaja en artillería, los norteamericanos bombardearon fuertemente a los mexicanos causándoles grandes pérdidas. El ejército mexicano fue derrotado y retrocedió a la orilla sur del Río Grande. Las tropas del agresor cruzaron el río pisándoles los talones a los mexicanos y ocuparon Matamoros casi sobre la marcha.

Varios meses después del comienzo real de las operaciones bélicas, el 13 de mayo de 1846, los Estados Unidos declararon oficialmente la guerra a México. Para entonces las tropas norteamericanas ya habían ocupado no sólo Texas, que antes pertenecía a México, sino además, el enorme territorio mexicano entre los ríos Nueces y

---

<sup>1</sup>*Personal Memoirs of U. S. Grant*. Grosset and Dunlop, N.Y., 1962, p. 30.

Grande. El presidente de los EE.UU., James Polk, en su mensaje al Congreso del 11 de mayo de 1846, tergiversando groseramente los hechos, declaró que “México ha violado la frontera de los Estados Unidos, ha invadido nuestro territorio y vertido sangre estadounidense sobre tierra estadounidense.”<sup>1</sup> Abraham Lincoln, desenmascarando las falsas afirmaciones de Polk en el Congreso, dijo que “fue él (Polk —I. K.) quien ordenó al general Taylor penetrar en un Estado pacífico para provocar una guerra”.<sup>2</sup>

Lo mismo afirmaban otros conocidos personajes de los EE.UU. de aquellos tiempos. Por ejemplo, Henry Clay, presidente de la Cámara Baja del Congreso, consideraba “mentira evidente” la acusación de que México hubiera iniciado la guerra. “Yo sé —decía— que todas las naciones nos ven, al llevar a cabo esta guerra, actuando con espíritu de rapacidad, movidos por un desorbitado deseo de expansión territorial.”<sup>3</sup>

El presidente Polk, a pesar de los tratados de paz, amistad y fronteras firmados por los EE.UU. y México, declaró con cinismo en una reunión del gabinete el 30 de mayo de 1846, que su propósito “es que los EE.UU. obtengan California, Nuevo México y posiblemente algunas otras provincias del Norte de México.”<sup>4</sup>

De acuerdo con los planes del presidente, los colonos norteamericanos de California, dirigidos por Fremont, al que hemos mencionado con anterioridad, se alzaron en armas a principios de junio de 1846. La sublevación fue apoyada activamente por la escuadra norteamericana. Tras dos meses de encarnizados combates, los insurrectos tomaron varias localidades, entre ellas las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. Ya en el curso de los combates, proclamaron a California “república independiente”. Poco después, al igual que Texas, fue proclamada parte de los Estados Unidos.

---

<sup>1</sup> *A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1897*. Washington, 1899, vol. IV, p. 442.

<sup>2</sup> Fuentes Díaz. *La intervención norteamericana en México, 1847*, México, 1947, p. 69.

<sup>3</sup> C. Schurz. *Henry Clay*. Boston; Houghton; Mifflin and Co., 1899, vol. II, p. 287.

<sup>4</sup> J. K. Polk. *The Diary of a President, 1845-1849*. London, Longmans, Green and Co., 1952, p. 105.

Los EE.UU. intentaron reiteradamente sin éxito, inclinar a la población mexicana de California, Nuevo México y otras provincias a pronunciarse por la incorporación de sus tierras a los Estados Unidos; pero los mexicanos recibieron por doquier a los agresores con odio, lucharon contra ellos, y jamás manifestaron el deseo “voluntario” de unirse a los Estados Unidos.

En julio de 1846, otro ejército norteamericano, bajo el mando del general Kearny esta vez, avanzó sobre el territorio de Nuevo México. En un mensaje a la población local, Kearny declaró que el ejército norteamericano exterminaría a “todos los habitantes que opongan resistencia”.<sup>1</sup> En breve tiempo, fue ocupado casi todo Nuevo México y a mediados de agosto, la capital Santa Fe. Los intervencionistas se apresuraron a declarar la incorporación de Nuevo México a los Estados Unidos.

A fines de septiembre, Kearny fue enviado con la mayor parte de su ejército a California, donde los patriotas mexicanos al mando del capitán José María Flores llevaban a cabo una lucha enérgica contra los invasores. El mando norteamericano tuvo que enviar urgentemente refuerzos de los EE.UU. a California para derrotar el creciente movimiento guerrillero y mantener en sus manos el nuevo Estado.

Después de cruentos combates, las tropas norteamericanas lograron ocupar de nuevo los principales puntos estratégicos en California y, de conformidad con la orden del general Kearny de enero de 1847, los invasores se dedicaron a saquear las ciudades ocupadas.

Entretanto las fuerzas norteamericanas principales se adentraron en México, esperando ocupar rápidamente la capital y así terminar la guerra; pero la creciente oposición del pueblo mexicano, la guerra de guerrillas desplegada en las tierras ocupadas, y la destrucción de las líneas de comunicación sometidas al permanente ataque de los patriotas, obligó a los norteamericanos a elegir otra dirección de ataque: desde el Este, a través de la ciudad portuaria de Veracruz.

Con este fin, en la primavera de 1847 en el Golfo de México se concentró una gran escuadra norteamericana de 150 buques de gue-

---

<sup>1</sup> H. R. Selph. *The Story of the Mexican War*. N. Y., 1950, p. 128.

rra y transporte con 13 mil efectivos del ejército expedicionario a bordo bajo el mando del general W. Scott. El 9 de marzo las unidades norteamericanas desembarcaron junto a Veracruz y comenzaron el sitio de la ciudad. El 22 de marzo, una vez rechazado el ultimátum de entrega, la ciudad fue sometida a un bombardeo vandálico de la artillería. La ciudad debió resistir durante tres días y tres noches el fuego directo de la artillería enemiga de 72 navíos de guerra. Scott prohibió salir de la ciudad incluso a las mujeres y los niños, declarando que nadie saldría vivo de allí hasta que los mexicanos depusieran las armas. “Por todas partes se ven charcos de sangre, huesos, y pedazos de carne de las infelices víctimas del fuego enemigo”<sup>1</sup> —comunicaba *El republicano* local—. El perjuicio material ocasionado a Veracruz llegaba a 5 millones de pesos, lo que constituía casi la tercera parte del presupuesto anual mexicano.<sup>2</sup>

Después de ocupar Veracruz, los intervencionistas se dirigieron al oeste, hacia la capital mexicana, por el mismo camino que tomaron en sus tiempos los conquistadores españoles encabezados por Cortés, y más tarde los intervencionistas franceses que colocaron en el trono mexicano a su testafarro Maximiliano.

Las tropas mexicanas al mando de Santa Anna se hallaban concentradas en la región de Cerro Gordo, al noroeste de Veracruz. Allí a mediados de abril, se libró una de las batallas más grandes entre las tropas mexicanas y las norteamericanas. En vísperas del inicio, Scott envió a parte de su ejército a realizar una maniobra de rodeo entre barrancos y bosques tupidos que Santa Anna consideraba intransitables. Los mexicanos fueron atacados por sorpresa por el flanco, lo que provocó desconcierto y pánico en sus filas. Varios generales y el propio comandante en jefe huyeron del campo de batalla. El ejército mexicano, abandonado por sus jefes, no logró organizar la defensa y fue derrotado. Sus restos retrocedieron en desorden por los caminos que llevaban a la capital.

Para colmo, Santa Anna estableció contactos secretos con el general Scott y comenzó a actuar en realidad como traidor de la nación me-

---

<sup>1</sup> C. M. Bustamante. *El nuevo Bernal Díaz del Castillo, o sea, la historia de la invasión de los angloamericanos en México*. México, 1949, v. II, p. 258.

<sup>2</sup> F. Palavacini. *Op. cit.*, t. 2, p. 180.

xicana a favor del enemigo.<sup>1</sup>

En condiciones extremadamente difíciles, merced a los esfuerzos de los patriotas para defender la capital con una población de 200 mil personas, fue creado un ejército de más de 20 mil efectivos dotado de unas 100 piezas de artillería. Además se incorporó a la defensa de la capital la división del dirigente campesino Juan Álvarez.

Los combates emprendidos en los accesos a la capital fueron los más crueles y cruentos de toda la guerra. Cuanto más se acercaban los invasores a la capital, tanto más obstinada se hacía la resistencia de los defensores de la ciudad. El 19 y el 20 de agosto tuvieron lugar combates sangrientos en la región de Churubusco, y el 8 de septiembre las tropas norteamericanas atacaron las posiciones mexicanas en Molino del Rey. Al principio los mexicanos se defendieron valientemente y luego, pasando al contraataque, batieron al enemigo y le asestaron varios golpes sensibles; pero el mando mexicano no llegó a desarrollar estos éxitos de su ejército.

Luego los combates se trasladaron a la región del Castillo de Chapultepec, que fue bombardeado intensamente por la artillería norteamericana. En la batalla de Chapultepec se distinguieron en particular por su valor y firmeza seis jóvenes cadetes de la escuela militar de Chapultepec. Desagrados, no quisieron abandonar sus puestos en la batería y lucharon hasta el último aliento. El pueblo mexicano honra la memoria de estos jóvenes héroes que ofrendaron sus vidas en la lucha contra el invasor.

El 14 de septiembre las tropas norteamericanas ocuparon la capital y establecieron allí un régimen de terror y arbitrariedad. En la Plaza de Armas y en la Alameda, el centro de la capital, fueron erigidos cadalsos en los que se daba muerte pública a los patriotas mexicanos para intimidar al pueblo que continuaba la lucha por la independencia de la patria.

La destrucción de poblados, los asesinatos, el saqueo, la violencia contra la población civil, y el merodeo de la soldadesca norteamericana se hicieron fenómenos habituales. Fueron saqueadas y destrui-

---

<sup>1</sup> C. Castañeda. *Relations of General Scott with Santa Anna*. —*The Hispanic American Historical Review*. November 1949, N. 4, p. 460-468.

das Matamoros, Monterrey, Veracruz y otras ciudades. Burlándose de los sentimientos religiosos de los mexicanos, los invasores convertían las iglesias en cuadras y cuarteles. En la ciudad de México, los intervencionistas norteamericanos saquearon el Palacio Nacional y otros edificios públicos y del Estado, así como multitud de casas particulares. Abrieron en la capital gran número de tabernas, prostíbulos y garitos.

Ya al comenzar la guerra, el general Taylor había recibido la orden de recaudar sistemáticamente impuestos de la población local para mantener a las tropas norteamericanas. El 15 de diciembre de 1847, Scott emitió una orden prescribiendo a los soldados y los oficiales no pagar a los mexicanos el alojamiento ni los servicios, y al cabo de dos semanas, por indicación del gobierno de Washington, impuso a los habitantes del Distrito Federal, una contribución en oro y platino por la suma de 3 millones de dólares<sup>1</sup>, cifra imponente en aquellos tiempos.

Los invasores practicaban operaciones punitivas en masa pretendiendo apaciguar al pueblo mexicano y expoliar de manera organizada el país. Scott pidió al gobierno de los Estados Unidos establecer un bloqueo riguroso de todos los puertos mexicanos para asegurar la exportación de los lingotes de oro y de plata.<sup>2</sup>

Pese al rigor de las autoridades de ocupación y la toma de la capital, los norteamericanos no se sentían vencedores. La masa principal de los 200 mil habitantes de la ciudad era hostil a los invasores y podía tomar las armas en cualquier momento, tanto más que en otros territorios ocupados por el enemigo, la lucha popular no cesaba.

Gracias a los esfuerzos enérgicos de hombres sencillos, fueron creadas varias unidades de voluntarios, que combatieron valientemente contra los intervencionistas, según reconoció el propio enemigo. N. Trist, representante del Departamento de Estado en el ejército del general Scout, comunicó al gobierno estadounidense que en los combates por la capital se habían distinguido especialmente las unidades voluntarias formadas entre las capas bajas y

---

<sup>1</sup> J. M. Roa Bárcena. *Recuerdos de la invasión norteamericana (1846 -1848)*, México, Ed. Porrúa, 1947, t. 3, p. 171-179.

<sup>2</sup> García Cantú. *Las invasiones norteamericanas en México*. México, 1971, p. 111.

medias del pueblo mexicano.

Roa Bárcena, contemporáneo de los acontecimientos, escribió que “no sólo aquí, sino en Veracruz, Nuevo México, California, Chihuahua y Tabasco, se vio a los ciudadanos pacíficos tomar las armas, oponerse con ellas a la invasión extranjera y batirse hasta consumir sus fuerzas y todos los recursos”.<sup>1</sup> En los destacamentos guerrilleros, ingresaban campesinos, artesanos, pobres de la ciudad, soldados y algunos oficiales que se encontraban en la retaguardia del enemigo. Participaron activamente los indígenas. Los destacamentos guerrilleros eran encabezados mayormente por militares. Los guerrilleros luchaban principalmente con escopetas de caza, lanzas, hoces, garrotes con clavos, machetes y lazos.

De las proporciones que alcanzó el movimiento guerrillero, habla el hecho de que a finales de 1847, aproximadamente dos quintas partes del ejército norteamericano que se encontraba en México luchaban contra los guerrilleros. En la primavera de 1847 el general Taylor comunicaba a su gobierno que la guerra revestía carácter encarnizado y que desde Monterrey hasta las costas del Golfo de México, los mexicanos armados luchaban contra las tropas norteamericanas. El coronel Price, jefe de las tropas de ocupación de Nuevo México, comunicó por su parte con preocupación a Washington: “Parece que los insurrectos persiguiesen el propósito de matar a cada norteamericano que se encuentra en su país”.<sup>2</sup>

Los invasores enfurecidos recurrieron a cruentas represalias. Ya el 29 de abril de 1847, el general Scott había emitido un decreto que ponía a los guerrilleros fuera de la ley, y declaraba responsables de sus actos a las autoridades locales. Ese decreto costó la vida a muchos mexicanos tomados como rehenes. En total, en la guerra perdieron la vida unos 50 mil mexicanos.<sup>3</sup> Cabe decir, en general, que la lucha de las masas del pueblo en la guerra desempeñó un gran papel en la resistencia a los invasores, la defensa de los intereses nacionales y la conservación de México como Estado independiente.

---

<sup>1</sup> Roa Bárcena. *Op. cit.*, t. 3. p. 344.

<sup>2</sup> R. Selph Henry. *The Story of the Mexican War*. The Bobbs Merrill Company, Inc., Indianapolis, 1960, p. 229.

<sup>3</sup> J. L. Ceceña. *México en la órbita imperial*. México, 1976, p. 23.

Al ser ocupada la capital por las fuerzas invasoras y al crecer el movimiento guerrillero, las clases gobernantes de México pusieron su empeño en conseguir el cese de las hostilidades, estando dispuestos a hacer grandes concesiones a los EE.UU. Santa Anna, principal responsable de las derrotas del ejército mexicano, fue destituido del mando político y militar del país en septiembre de 1847. El nuevo gobierno encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, Manuel de la Peña y Peña, con sede en Querétaro, declaró su disposición a iniciar las negociaciones sobre la firma de un tratado de paz.

A lo mismo aspiraban los círculos gobernantes de los EE.UU., considerando que la derrota del ejército mexicano y la ocupación de vastos territorios de México y su capital, así como de otros grandes centros del país les permitía dictar las condiciones de paz a la parte vencida. En agosto de 1847 el representante de los Estados Unidos exigió a la parte mexicana ceder a los EE.UU., Texas, Nuevo México, la Alta y la Baja Californias, donde algunas semanas antes de la firma del tratado fueron descubiertos grandes yacimientos de oro, así como parte considerable del territorio de los Estados mexicanos Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Sonora, es decir, aproximadamente tres cuartos del territorio del país. Los Estados Unidos reclamaban también el derecho de libre paso para sus mercancías y sus ciudadanos a través del istmo de Tehuantepec, que era el camino más corto en el continente de América del Norte entre los océanos Atlántico y Pacífico. Los círculos más agresivos de los Estados Unidos se pronunciaron incluso por la anexión de todo México o su mayor parte, con el establecimiento de un protectorado sobre las demás regiones, expulsando a los mexicanos a territorios reservados como a los indios en los Estados Unidos. Aceptar estas condiciones monstruosas, transmitidas por N. Trist, significaba de hecho la pérdida total de la soberanía del país y la conversión de México en colonia norteamericana. Los mexicanos declinaron esas condiciones de esclavitud.

Las condiciones de la paz con México fueron debatidas en los EE.UU. en medio de una aguda lucha política entre los esclavistas del sur y la burguesía industrial del norte. Esta última consideraba que la expansión territorial en aquellas condiciones fortalecería excesivamente las posiciones de los latifundistas del sur, lo que no le

convenía. Estos factores influyeron ciertamente en el gobierno de Polk, propiciando la firma de la paz.

Bajo la amenaza de recurrir de nuevo a las armas, los Estados Unidos obligaron a México a firmar el tratado de paz del 2 de febrero de 1848 en el poblado Guadalupe Hidalgo. Conforme al tratado, México cedía a los EE.UU. no sólo Texas, sino además, Nuevo México, Alta California, la parte norte de Tamaulipas, Coahuila y Sonora, o sea, más de la mitad (1,3 millones de km<sup>2</sup>) del territorio del país con una superficie total de unos 2,3 millones de km<sup>2</sup>. Se establecía como frontera norte de México, el Río Grande del Norte. En concepto de compensación, los EE.UU. pagarían 15 millones de dólares, restando 3 millones de dólares de sus pretensiones financieras a México.

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, denominado oficialmente, con la hipocresía propia de la burguesía norteamericana, *Tratado de Paz, Amistad y Límites y Arreglo Definitivo*, legalizó la anexión de un inmenso territorio mexicano como resultado de una guerra que, según W. Z. Foster, fue la más bárbara e injusta en la historia de los Estados Unidos y de todo el hemisferio occidental.<sup>1</sup>

Incluso muchos conocidos representantes de los círculos gobernantes de los EE.UU., han reconocido el carácter rapaz e injusto de la guerra contra México. El presidente de los EE.UU. U.S. Grant, quien había participado en la guerra, escribió: “Esta guerra es una de las más injustas que alguna vez haya mantenido una nación fuerte contra una débil.”<sup>2</sup>

No habían pasado cinco años del fin de esta guerra agresiva, cuando los EE.UU. presentaron en 1853 a México nuevas reivindicaciones territoriales, exigiendo la cesión de una gran parte del territorio mexicano entre los ríos Colorado, Gila y Grande (el Valle de la Mesilla). El embajador J. Gadsden, jefe de la delegación norteamericana en las conversaciones sobre la cesión del territorio mexicano, declaró con cinismo a la delegación mexicana: “Señores, tiempo es ya de reconocer que el Valle de la Mesilla en cuestión, ha de pertenecer a

---

<sup>1</sup> W. Z. Foster. *Outline Political History of the Americas*. N. Y., 1951, p. 580.

<sup>2</sup> U. S. Grant. *Op. cit.*, vol. 1, p. 53.

los EE.UU.”<sup>1</sup>

Bajo presión de la fuerza grosera y la amenaza de una nueva intervención armada, México se vio obligado a firmar el llamado acuerdo de Gadsden, según el cual los EE.UU. se anexaron unos 140 mil km<sup>2</sup> más de territorio mexicano.

En lo sucesivo, los EE.UU. basarían su política con relación a México en el principio de la “Conquista pacífica”, que significaba en la práctica la aplicación de la política de la expansión económica. Los EE.UU. capitalistas contaban ahora principalmente con la exportación de capitales y la inversión en diferentes ramas de la economía mexicana. México atraía al capital norteamericano ante todo por su proximidad geográfica, su riqueza de materias primas y su situación estratégica.

Actuando en esta dirección, los capitalistas estadounidenses ya para 1897 habían invertido en la economía de México 202,2 millones de dólares; o sea, mucho más que en cualquier otro país del mundo.<sup>2</sup> Al cabo de diez años, estas inversiones alcanzaron la suma de 750 millones de dólares, y para 1911 habían superado la cifra de mil millones, constituyendo casi el 40% de las inversiones de capital de los EE.UU. en el extranjero. Para entonces, los capitalistas norteamericanos tenían en sus manos los ferrocarriles, empresas industriales, explotaciones petroleras, bancos, latifundios, el 58% de las importaciones y el 76% de las exportaciones de México.

A la par del fomento de la expansión económica, los EE.UU. no renunciaron de ningún modo a la política de intervenciones armadas.

En 1910 el pueblo mexicano se levantó en lucha revolucionaria contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Fue una lucha larga y sangrienta.

El carácter democrático de la revolución mexicana de 1910 a 1917, su orientación antiimperialista y la participación de amplias masas populares, fueron motivo de una seria preocupación por parte de los imperialistas de los Estados Unidos. El jefe del gobierno mexicano,

---

<sup>1</sup> A. L. de Santa Anna. *Mi historia militar y política*. México, 1905, p. 108-109.

<sup>2</sup> G. G. Cantó. *Op. cit.*, p. 228.

Francisco Madero, defendiendo los intereses nacionales de su país, se pronunció abiertamente contra el dominio del capital extranjero en la economía de México y realizó varias reformas progresistas. El objetivo principal de la política imperialista de los EE.UU. respecto a México era aplastar la revolución mexicana. En febrero de 1913 títeres del imperialismo estadounidense mataron al presidente Francisco Madero y al vicepresidente Pino Suárez. El poder pasó a manos de un grupo reaccionario que encabezó el general Victoriano Huerta.

Precisamente entonces, los EE.UU. comenzaron a preparar una intervención armada contra México. No faltaba sino el pretexto para justificar la agresión, pero fue encontrado rápidamente.

El 9 de abril de 1914 un grupo de *marines* de la tripulación del buque de guerra “Delphin”, anclado frente a las costas mexicanas, bajó a tierra sin permiso de las autoridades mexicanas en el puerto de Tampico, que se encontraba en estado de guerra. Los norteamericanos fueron detenidos, pero en menos de una hora y media no sólo fueron liberados, sino que además, recibieron excusas por lo acontecido de parte del general mexicano que mandaba las tropas gubernamentales en Tampico; sin embargo, la parte norteamericana calificó las acciones de las autoridades mexicanas como una ofensa intolerable al honor de los EE.UU. Doce días después, el presidente, Woodrow Wilson, dado a divagaciones acerca de la moral y la justicia, escribió en su mensaje al Congreso refiriéndose a México: “Vengo a pedirles vuestra aprobación para que pueda yo emplear las fuerzas armadas de los EE.UU. tan ampliamente como pueda ser necesario”, y a continuación: “En lo que hacemos no puede haber pensamiento de agresión o de engrandecimiento egoísta... Deseamos conservar incólume nuestra gran influencia para el servicio de la libertad tanto en los EE.UU. como en cualquier otra parte.”<sup>1</sup>

Mientras el presidente pronunciaba estas palabras ante los congresistas, de los navíos de guerra *Prairie*, *Utah*, *Florida* y *Montana* desembarcaba en Veracruz la infantería de la marina de los EE.UU. apoyada por el fuego intenso de la artillería. En el litoral mexicano desembarcó un ejército de 15 mil invasores, mientras otros tantos

---

<sup>1</sup> M. Gill. *Nuestros buenos vecinos*. México, 1957, p. 155.

permanecían a bordo de las naves prestos a seguirlos en cualquier momento. Además, los agresores norteamericanos bloquearon la costa de México con 87 barcos militares.

Estos hechos confirmaban las palabras de Lenin de que “la idealizada república democrática de Wilson ha resultado en la práctica, una forma de imperialismo de lo más rabioso, de la más desvergonzada opresión y estrangulamiento de los pueblos débiles y pequeños.”<sup>1</sup>

La población de Veracruz junto a los cadetes marinos, emprendió con valor la lucha contra los invasores. Combatieron heroicamente contra los ocupantes de los EE.UU. durante una semana.

Venustiano Carranza, jefe del movimiento constitucional de México, envió una nota de protesta al presidente Wilson, declarando que las acciones de las autoridades estadounidenses eran agresivas y groseras. “Mas la invasión de nuestro territorio —escribía Carranza—, la permanencia de vuestras fuerzas en el puerto de Veracruz, o la violación de los derechos que determinan nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, sí nos arrastrarían a una guerra desigual, pero digna, que hasta hoy hemos querido evitar.”<sup>2</sup>

La firme resistencia del pueblo mexicano y las poderosas manifestaciones antiimperialistas en los propios EE.UU., obligaron a la Casa Blanca a renunciar a la iniciada aventura bélica y retirar las tropas de ocupación de México en noviembre de 1914.

No obstante, los imperialistas norteamericanos, preocupados por las amplias y crecientes proporciones del movimiento antiimperialista en México, y por el triunfo cada vez más próximo de la revolución democrático burguesa, no abandonaron la idea de intervención armada en los asuntos del país vecino.

El gobierno mexicano, de acuerdo con los intereses nacionales del país, el 7 de enero de 1915 emitió un decreto que prohibía a los extranjeros sin permiso especial, la prospección de yacimientos petroleros y la perforación de pozos. Todas las riquezas del subsuelo mexicano, los bosques, la tierra y las aguas, fueron declarados pro-

---

<sup>1</sup> V. I. Lenin. *Las preciosas confesiones de Pitirim Sorokin. Obras Completas*, t. 37, p. 192-193.

<sup>2</sup> E. González Blanco. *Carranza y la revolución de México*. Valencia, 1944, p. 204.

piedad de la nación mexicana.

Los monopolios extranjeros, y ante todo los norteamericanos, pusieron el grito en el cielo. El gobierno estadounidense concentró en la zona limítrofe un ejército de 100 mil hombres dispuesto a invadir en cualquier momento el territorio mexicano.

Los monopolios norteamericanos crearon en México bandas mercenarias para defender sus monopolios, organizaron motines y complots. Los círculos dirigentes de los EE.UU. desplegaron una vasta campaña antimexicana y el 9 de marzo de 1916 provocaron en Columbus, ciudad norteamericana, un choque entre mexicanos y norteamericanos que utilizaron como pretexto para iniciar la intervención armada contra el Estado soberano.

El 15 de marzo de 1916 tropas estadounidenses al mando del general J. J. Pershing, derribando los postes fronterizos, pasaron la frontera mexicana y avanzaron hacia el interior del país. En un tiempo relativamente corto, esta inmensa máquina militar, que se denominaba “expedición punitiva” y contaba con más de 26 mil efectivos, entre ellos 10 mil de caballería, centenares de camiones y automóviles, un número considerable de aviones y otros materiales de guerra, avanzó en el territorio mexicano más de mil kilómetros.

Por este motivo, México envió al gobierno de los EE.UU. una nota de resuelta protesta exigiendo la retirada de las tropas norteamericanas de su territorio. El gobierno mexicano declaró que se oponía al comienzo de la guerra, pero que, si esta se iniciaba, sería resultado de la política premeditada del gobierno norteamericano. Contra la aventura militar emprendida se pronunciaron muchos representantes del pueblo norteamericano. En muchas ciudades importantes de los EE.UU., tuvieron lugar mítines de protesta.

A la sazón, los EE.UU. se preparaban activamente a intervenir en la guerra mundial y no les convenía empezar una guerra duradera con México. Todas estas circunstancias en su conjunto, obligaron a los intervencionistas a abandonar el suelo mexicano.<sup>1</sup>

Después de la victoria de la revolución democrático burguesa de

---

<sup>1</sup> M. Alperóvich, B. Rudenko. *La revolución mexicana de 1910-1917 y la política, de los EE.UU.* Ed. en ruso, Moscú, 1958.

1910 a 1917, el pueblo aspiraba a ser el verdadero dueño de sus riquezas naturales. La Constitución de 1917, de carácter democrático y antiimperialista, proclamó el subsuelo y sus riquezas patrimonio popular inalienable.

En los años 30, el movimiento democrático en México cobró nuevo vigor. Como resultado de ello en diciembre de 1934 fue elegido presidente Lázaro Cárdenas, representante de la burguesía progresista. Por iniciativa de Cárdenas, el Congreso mexicano promulgó el 6 de octubre de 1936 una ley que concedía al gobierno derechos jurídicos para la nacionalización de las compañías foráneas que operaban en territorio mexicano. Sobre la base de esta ley, el presidente Cárdenas firmó el 18 de octubre de 1938 la ley sobre la nacionalización de la industria del petróleo que pertenecía a compañías extranjeras, y su entrega a manos de PEMEX, compañía petrolera mexicana gubernamental.

En respuesta, los EE.UU. e Inglaterra recurrieron a organizar el bloqueo económico, ejercer presión diplomática y hasta intentaron derrocar al gobierno de Cárdenas. Las acciones resueltas del gobierno, apoyadas enérgicamente por vastas masas del pueblo, frustraron los planes de las potencias imperialistas.

El gobierno de Cárdenas realizó también otras transformaciones, nacionalizando en particular los ferrocarriles, expropiando muchos grandes latifundios, creando cooperativas agrícolas, etc. Estas medidas concretas asestaron un duro golpe a las posiciones del capital extranjero y su aliado —la reacción local—. Con estos actos México fortaleció su independencia, y los EE.UU. temieron en adelante llevar a cabo acciones militares contra ella.

Posteriormente la industria petrolera mexicana obtuvo considerables éxitos en su desarrollo. Estos éxitos se han hecho sobre todo palpables en la economía del país después de que hace unos años fueron descubiertos nuevos grandes yacimientos de petróleo. Gracias a ello México ha ocupado uno de los primeros lugares en el mundo por las reservas de petróleo prospectado (más de 11.000.000.000 t) y por su extracción (más de 120.000.000 t al año).

El descubrimiento de nuevas grandes reservas de petróleo mexicano ha atraído inmediatamente especial atención de los EE.UU. El ve-

cino del norte exige derechos particulares para sí respecto a las cantidades de petróleo extraído, procura dictar a quién y a qué precio debe ser vendido el petróleo; pero México, consciente de la esencia neocolonialista de las pretensiones de los círculos gobernantes de los EE.UU., aplica también en esta cuestión una política independiente, contando con el apoyo enérgico de amplias capas de la sociedad mexicana.

El pueblo mexicano, que avanza por el camino de la paz y el progreso social, aspira a hacer su aporte a la causa de la solución por vía pacífica de los problemas que surgen en la palestra internacional y se opone al dictado de los EE.UU. en el hemisferio occidental. En los años 60, México fue el único país de América Latina que se negó a romper relaciones diplomáticas con Cuba y a participar en las sanciones contra ella. México fue uno de los primeros países que reconoció al gobierno sandinista de Nicaragua y previno a Washington de la inadmisibilidad de cualquier tipo de acción armada contra este país.

En agosto de 1981 México reconoció al Frente de Liberación Nacional y al Frente Revolucionario Democrático de El Salvador como representante de las fuerzas políticas de El Salvador, llamando a resolver los problemas de este país por vías políticas.

Vemos, pues, que México, que ha sido más de una vez objeto de intervenciones armadas de foráneas, continúa en nuestros días defendiendo su libertad y su independencia y sigue fiel a su rumbo tradicional de política exterior, basado en la adhesión a los principios de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en sus asuntos internos. Con estos esfuerzos, México se ha granjeado un merecido respeto en el mundo.

E. LARIN

**CUBA:**

## **OBJETO DE AGRESIÓN POR PARTE DE LOS EE.UU.**

La política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba se encuentra enraizada en un pasado remoto. “La aspiración de anexarse a Cuba fue siempre, por otro lado, un fuerte propósito de los dirigentes de los Estados Unidos desde los inicios mismos de esta república”<sup>1</sup> — recalcó Fidel Castro en el I Congreso del Partido Comunista de Cuba.

En mayo de 1847 el periódico *New York Sun* escribía: “Cuba por su posición geográfica, por necesidad y por derecho, debe pertenecer a los Estados Unidos, puede y debe ser nuestra”.<sup>2</sup> Estas palabras pueden ser consideradas como la consigna de todas las acciones político militares que los EE.UU. aplicaron a la isla antillana en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

### **CIENTOS AÑOS DE INTERVENCIONISMO**

Ya el presidente T. Jefferson había expresado la idea de convertir la isla en una de las estrellas de la bandera norteamericana. En 1805 comunicó al embajador de Gran Bretaña en Washington que en caso de guerra contra España, los Estados Unidos tendrían que ocupar Cuba para... defender Luisiana. Es decir, que los círculos dirigentes estadounidenses ya en los albores de su historia, justificaban los afanes expansionistas del capitalismo norteamericano con la necesi-

---

<sup>1</sup> *Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba*. Informe Central. La Habana, 1975, p. 7.

<sup>2</sup> R. Madden. *La isla de Cuba. Sus recuerdos, progresos y perspectivas*. La Habana, 1964, p. 116.

dad de “defender sus intereses vitales”. Los estadistas norteamericanos plantearon de nuevo la cuestión de la anexión de Cuba en los años 1807, 1809 y 1823. “Confieso con candor —escribía T. Jefferson— que siempre he mirado a Cuba como la adición más interesante que podría hacerse a nuestro sistema de Estados.”<sup>1</sup>

Las pretensiones expansionistas de los EE.UU. hallaron su reflejo en varias doctrinas de política exterior formuladas por dirigentes norteamericanos. La doctrina de la “fruta madura” del secretario de Estado norteamericano John Quincy Adams ha resultado ser la de más larga vida entre ellas. En 1823 Adams divagaba acerca de la existencia de ciertas leyes de la gravitación tanto físicas como políticas, y “así como una fruta separada de su árbol por la fuerza del viento, no puede aunque quiera, dejar de caer al suelo, así Cuba una vez separada de España y rota la conexión artificial que la liga a ella, será incapaz de sostenerse por sí sola, y tendrá que gravitar necesariamente hacia la Unión Norteamericana, y hacia ella exclusivamente, mientras que a la Unión misma, en virtud de esta propia ley, le será imposible dejar de admitirla en su seno”.<sup>2</sup> ¡Qué “profunda” argumentación y qué cinismo!

Transcurrieron los años y en Washington se sucedieron los presidentes, pero cada uno de ellos guardó la firme convicción de que el porvenir de la isla estaba predeterminado: y tarde o temprano se convertiría en un Estado norteamericano. ¿Pero cuándo? La respuesta dependía de muchas circunstancias. Quizás una de las más sustanciales fue a lo largo de la mayor parte del siglo XIX la oposición activa de la poderosa Inglaterra y de Francia, que la apoyaba en esta cuestión. La postura de Londres y París, interesados en prevenir la expansión estadounidense en la región de sus colonias de las Indias Occidentales, contenía a los Estados Unidos. Por ello la Casa Blanca, ante la que se planteaba el dilema de anexarse a Cuba por la fuerza de las armas o por la del dólar, durante largo tiempo se vio obligada a dar preferencia al segundo camino. A fines de los años 40 del siglo XIX, el gobierno de los EE.UU. ofreció a la Corte de Madrid 100 millones de dólares por Cuba, cifra fabulosa en aque-

---

<sup>1</sup> F. Barreda. *Las dos Américas: dos mundos*. Madrid, 1952, p. 88.

<sup>2</sup> A. Núñez Jiménez. *La liberación de las Islas*. La Habana, 1959, p. 459.

llos tiempos; pero Madrid se negó obstinadamente a acceder a cualquier trato, consciente de la enorme importancia de la isla para los intereses económicos y militares de España.

De 1848 a 1851, los latifundistas más ricos del sur de los EE.UU., aplicando su política anexionista de extensión de la esclavitud, equiparon varias expediciones armadas contra Cuba encabezadas por el antiguo general español Narciso López, venezolano de origen. Rodeando hipócritamente a López de una aureola de virtudes caballerescas, y creando de él la imagen de un noble mártir que consideraba sus fines, esperanzas y deseos a través del prisma de los intereses de Cuba, la prensa norteamericana de aquellos tiempos presentaba a N. López como “un combatiente por la república cubana independiente”; mas los cubanos no apoyaron a López, y su aventura fracasó.

Las expediciones anexionistas de López fueron causa de una agudización de las relaciones entre Inglaterra y Francia, por una parte, y de estas con los EE.UU., por otra. La reina Victoria ofreció al emperador Napoleón III y al presidente de los EE.UU., Fillmore, concertar un acuerdo triple, basado en que estas grandes potencias se comprometieran a no intentar adueñarse de Cuba en el futuro y garantizaran a España el poder sobre la isla. Los Estados Unidos no sólo dieron su negativa, sino que consideraron agravioso el mero planteamiento de la cuestión.

Durante la guerra libertadora de los Diez Años del pueblo cubano por la independencia (1868-1878), Colombia, Argentina, México, Perú, Ecuador, Guatemala, Chile y El Salvador reconocieron a la República de Cuba en Armas creada por los patriotas y se dirigieron al Departamento de Estado de los EE.UU. con la proposición de que reclamara a España la concesión de la independencia a Cuba. El gobierno de los EE.UU. se negó categóricamente.

La perspicacia política permitió al gran hijo del pueblo cubano, José Martí, predecir inequívocamente ya en 1882, que en la rivalidad entre España y los Estados Unidos por Cuba, no habría compromisos. “Son intereses —decía— de tal manera encontrados, que no

pueden llegar a avenimiento sin catástrofe”.<sup>1</sup>

El 24 de febrero de 1895 comenzó la segunda guerra de liberación nacional del pueblo cubano (1895-1898). Al igual que en la Guerra de los Diez Años, Washington se negó a reconocer a los patriotas cubanos como parte beligerante. Más aún, en el momento en que la victoria de los insurrectos se hacía cada vez más evidente, la Casa Blanca de nuevo procuró concertar un acuerdo comercial con España ofreciéndole esta vez por Cuba 300 millones de dólares, pero el acuerdo no fue firmado.

La guerra por la independencia se aproximaba a su lógico fin: la victoria del pueblo cubano y la formación del Estado independiente. Este era el desenlace más temido en la Casa Blanca. Los Estados Unidos empezaron a preparar la guerra contra España.

Aquella guerra fue la primera por el reparto del mundo. Significó el paso del capitalismo a la fase imperialista. El objetivo más próximo del joven rapaz imperialista eran las colonias de la España rezagada económicamente y desgarrada por contradicciones internas. La principal de ellas era Cuba.

“Si no nos apoderamos de Cuba —declaró el 23 de septiembre de 1897 Theodore Roosevelt, subsecretario de la Marina de los EE.UU. en aquellos tiempos—, la isla continuará en manos de una nación débil y decadente, y la posibilidad de obtener Cuba se podría considerar perdida para siempre. No creo que Cuba pueda ser pacificada con la autonomía (prometida en aquel período por España a la isla. —*E.L.*) y confío en que en un tiempo no muy lejano, ocurrirán allí acontecimientos tales, que nos obligarán a intervenir”.<sup>2</sup> La “profecía” de T. Roosevelt se sustentaba en planes suficientemente determinados por la Casa Blanca: a finales de 1897 en los Estados Unidos fueron formadas tropas encabezadas por el general N. A. Miles destinadas a ocupar las colonias españolas.

Un testimonio de las tareas planteadas a estas tropas, es el mensaje secreto que envió a Miles el 24 de diciembre de 1897, el subsecretario de Defensa de los EE.UU., J. C. Breckinridge.

---

<sup>1</sup> J. Martí. *Obras Completas*. La Habana, 1963-1965, t. 23, p. 223, 224.

<sup>2</sup> *Monopolios norteamericanos en Cuba*. La Habana, 1973, p. 253.

“Esta Secretaría —se decía en el mensaje—, de acuerdo con la de Asuntos Extranjeros y la de la Marina, se considera obligada a completar las instrucciones que, para la organización militar de la próxima campaña en las Antillas, ha recibido con algunas observaciones relativas a la misión política que, como General en Jefe de nuestras fuerzas, recaerá en usted.” En el mensaje se señalaba que a finales del siglo XIX el carácter de la anexión de nuevos territorios se diferenciaba de modo sustancial del que había tenido lugar en las décadas del 30 y el 40, cuando los EE.UU. ocuparon Texas, en cuya conversión en un Estado norteamericano desempeñaron un considerable papel los colonos estadounidenses. Ahora, en Cuba, por ejemplo, se contaba sobre todo con la ocupación armada. “Habrá que destruir cuanto alcancen nuestros cañones —declaraba el subsecretario— con el hierro y con el fuego, habrá que extremar el bloqueo para que el hambre y la peste, su constante compañera, diezmen a su población pacífica y mermen su ejército; y el ejército aliado (el cubano —*E.L.*) habrá de emplearse constantemente en las exploraciones y la vanguardia, para que sufran indeclinablemente el peso de la guerra entre dos fuegos, y a él se encomendarán precisamente todas las empresas peligrosas y desesperadas.

“Dominadas y retiradas todas las fuerzas regulares de los españoles, sobrevendrá una época, por el momento incierta, de pacificación parcial, durante la cual seguiremos ocupando militarmente todo el país ayudando con nuestras bayonetas al gobierno independiente que se constituya, aunque sea informalmente mientras esté en minoría en el país. El terror por un lado y la propia conveniencia por otro, han de determinar que esa minoría se vaya robusteciendo y equilibrando sus fuerzas, constituyendo en minoría al elemento autonomista y a los peninsulares que se queden en el país.

“Llegado este momento, son de aprovecharse, para crear conflictos al gobierno independiente, las dificultades que a éste tiene que acarrear la insuficiencia de medios para atender a nuestras exigencias y los compromisos con nosotros contraídos, los gastos de la guerra y la organización de un nuevo país...

Resumiendo: nuestra política se concreta en apoyar siempre al más débil contra el más fuerte, hasta el completo exterminio de ambos,

para lograr anexarnos la Perla de las Antillas.”<sup>1</sup>

El documento expuesto demuestra que los círculos gobernantes de los EE.UU. a fines de 1897 no sólo tenían elaborado con detalle el plan de la guerra con España, sino que habían trazado los métodos de atraer a Cuba a su órbita hasta su anexión total.

Los Estados Unidos habían preparado y deseaban la guerra, no faltaba sino el pretexto para desencadenarla. Este pretexto pronto se presentó. El 15 de febrero de 1898 en la bahía de La Habana, fue volado el crucero norteamericano *Maine*, que se encontraba allí, según aseveraciones del Departamento de Estado, para “defender los intereses de los ciudadanos norteamericanos”. En la catástrofe perdieron la vida 264 marineros y dos oficiales. Las causas de la explosión hasta ahora se desconocen, pero la mayoría de los investigadores piensa que los marineros fueron sacrificados por Washington en aras de la realización de sus aventuras militares. ¿No son una prueba de ello las palabras de Sigsbee, capitán del *Maine* que murió en 1923:<sup>2</sup> “Yo no he dado mi opinión sobre quién hundió el *Maine* y nunca la daré”<sup>3</sup>?

Una comisión integrada solamente por norteamericanos acusó a España de la acción que causó la destrucción del crucero. En las intervenciones de personalidades oficiales de los EE.UU. y en la prensa norteamericana, aparecieron llamamientos al “desquite”. Todas las tentativas del gobierno español de lograr un arreglo pacífico de las complicaciones en las relaciones entre ambos países provocadas por Washington, fueron inútiles: según expresión figurada de un historiador cubano “el gatillo estaba levantado”.

Para entonces, la quiebra del dominio colonial español en Cuba se hizo evidente. La victoria final de los insurrectos se esperaba de un día a otro. “Cuando ha llegado la hora más favorable para el éxito revolucionario y de mayor detrimento para España —decía en abril de 1898, hablando en el Senado de los EE.UU., el senador John W.

---

<sup>1</sup> H. Pichardo. *Documentos para la historia de Cuba*. La Habana, 1971, t. 1, p. 513, 514.

<sup>2</sup> En el momento de la explosión, el capitán y sus ayudantes más próximos asistían a un banquete en La Habana.

<sup>3</sup> E. L. Nitoburg. *El robo de la perla*. Moscú, 1968, p. 41.

Daniel—, se reúne el Congreso de los Estados Unidos para entregarle el ejército de los Estados Unidos al presidente para que vaya y ponga en vigor un armisticio entre las dos partes, una de las cuales ya ha bajado sus armas...”<sup>1</sup> El senador incurrió en una inexactitud muy sustancial: Washington de ningún modo aspiraba al papel de mediador entre España y Cuba.

El 11 de abril, el presidente de los EE.UU., W. McKinley, dirigió un mensaje al Congreso pidiendo poderes extraordinarios, e inclusive la organización de una intervención armada para “resolver el problema cubano”.

El 18 de abril, el Congreso de los EE.UU. aprobó una resolución conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, en la que se decía: “El aborrecible estado de cosas existente en la isla de Cuba, tan próxima a nuestro territorio, en estos tres últimos años, ha herido el sentido moral del pueblo de los Estados Unidos y afrentado la civilización cristiana, y ha culminado en la destrucción de un barco de guerra de los Estados Unidos... y tal estado de cosas no puede ser tolerado por más tiempo, según manifestó ya el presidente de los Estados Unidos en su mensaje al Congreso del 11 de abril de 1898”. El Congreso reconoció con hipocresía el derecho del pueblo cubano a la libertad y la independencia y, de hecho, presentó un ultimátum a España, exigiendo renunciar inmediatamente a sus pretensiones sobre Cuba y retirar sus tropas de la isla. En la resolución se recalca asimismo que “Los Estados Unidos por la presente declaran que no tienen deseo ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha isla”.<sup>2</sup>

El fariseísmo de los medios gobernantes norteamericanos no tenía límites. Mientras en Washington los congresistas se denominaban “luchadores por la independencia de Cuba”, en Filadelfia se imprimían mapas de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas bajo un título común elocuente: “Nuestras nuevas colonias”.

El 25 de abril de 1898, los Estados Unidos declararon oficialmente

---

<sup>1</sup> P. S. Foner. *La guerra hispano-cubano-norteamericana y el surgimiento del imperialismo yanqui*. La Habana, 1978, t. 1, p. 306.

<sup>2</sup> H. Pichardo. *Documentos para la historia de Cuba*. La Habana, 1971, t. 1, p. 509, 510.

la guerra a España, aunque las operaciones bélicas habían comenzado ya el 22 de abril, cuando el barco de guerra norteamericano *Nashville* se apoderó del barco español *Buenaventura*. Los propósitos que perseguían los Estados Unidos en esta guerra eran claros. “La causa principal de la guerra hispano norteamericana —escribió el coronel del Estado Mayor del ejército ruso Zhilinski que se encontraba entonces como observador en Cuba— radica en el antiguo deseo de los Estados Unidos de América de anexarse las islas de Cuba y Puerto Rico a las que les unen importantes intereses comerciales”.<sup>1</sup>

Esta primera guerra por el reparto del mundo, en lo fundamental ya dividido entre los imperialistas, duró sólo tres meses y medio. Los norteamericanos contaban con la supremacía en el mar, pero en tierra las tropas norteamericanas rehuían las operaciones militares. El número de combates en Cuba en que participó el ejército de los Estados Unidos es insignificante. A las tropas españolas, desmoralizadas y en realidad derrotadas por los patriotas cubanos, les pertenecía la iniciativa estratégica en los combates con los norteamericanos, los cuales para evitar las derrotas, pedían invariablemente ayuda al mando del Ejército Libertador de Cuba. Se llegó incluso a la circunstancia de que tanto el general Shafter, jefe de las tropas norteamericanas en Cuba como su ayudante, el general Lawton, después de los primeros reveses, decidieron dimitir la jefatura de las tropas estadounidenses ofreciendo el cargo... al general patriota cubano Calixto García, que se negó rotundamente a servir de vehículo de la política expansionista de los Estados Unidos en Cuba.

El 16 de julio de 1898 los norteamericanos tomaron la ciudad de Santiago de Cuba, merced a que el Ejército Libertador cubano con su lucha heroica y abnegada no permitió a 230 mil soldados españoles dislocados en otras provincias llegar a la provincia de Oriente; sin embargo, con todo cinismo, el mando norteamericano no permitió ni al general García ni a las unidades del Ejército Libertador entrar en esta ciudad cubana. Sobre el palacio del gobernador de

---

<sup>1</sup> *La guerra hispano-norteamericana*. Informe del coronel del Estado Mayor Zhilinski enviado por orden real a las tropas españolas. San Petersburgo, 1899, p. 5.

Santiago, en lugar de la bandera española, se izó la bandera norteamericana. C. García hizo una severa protesta. Shafter contestó que actuaba con el conocimiento y la indicación directa del presidente W. McKinley.<sup>1</sup>

A fines de julio, España comenzó las negociaciones con la Casa Blanca sobre el cese de las hostilidades y el 12 de agosto de 1898 fue firmado el protocolo sobre el armisticio. La derrota de España se debía a toda una serie de razones de índole interior y exterior, pero una de las más importantes de ellas fue sin duda la derrota de las tropas españolas en Cuba y las Filipinas por los ejércitos patriotas; pero de los frutos de estas victorias se aprovecharían los EE.UU. “La victoria le fue arrebatada a nuestro pueblo por la intervención del imperialismo norteamericano”<sup>2</sup> —se dice en la plataforma programática del Partido Comunista de Cuba.

El 10 de diciembre de 1898, se firmó en París el Tratado de Paz entre los Estados Unidos y España. La suerte de las antiguas colonias españolas se decidió sin sus representantes y en contra de la voluntad de sus pueblos. Puerto Rico y Filipinas fueron convertidos en colonias de los EE.UU., y en Cuba fue establecido un régimen de ocupación militar.

El 1° de enero de 1899 España transmitió definitivamente Cuba a los Estados Unidos y en la isla fueron introducidas tropas de ocupación norteamericanas. Parecía que “el fruto” deseado al fin había madurado; sin embargo, los Estados Unidos no lograron arrancarlo. En primer término porque en Cuba existía el Ejército Libertador, con Máximo Gómez a la cabeza, cuya fuerza los generales norteamericanos ya habían tenido la oportunidad de comprobar. En segundo lugar, la implantación de la “civilización” en Filipinas por medio de las armas ya duraba tres años y medio. La población filipina luchaba heroicamente contra los nuevos colonizadores norteamericanos. Los EE.UU. no podían librar operaciones militares en dos frentes (Filipinas y Cuba) tan alejados uno del otro. En tercer lugar, Washington temía que una eventual guerra con Cuba compli-

---

<sup>1</sup> *Historia de Cuba*. La Habana, 1971, p. 513.

<sup>2</sup> *Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Memorias*. La Habana, 1976, t. 3, p. 31.

caría sus relaciones con los países latinoamericanos y se convertiría en un grave obstáculo a la expansión económica de los EE.UU. en la región; no obstante, el problema de la anexión de Cuba no se retiraba de la agenda. El general L. Wood, gobernador militar de Cuba, escribía al secretario de Defensa de los EE.UU., E. Root: “Todos los americanos y todos los cubanos que miran al porvenir saben que la isla va a formar parte de los Estados Unidos, y que es tanto de interés nuestro como de ellos permitirle alcanzar una posición sólida”.<sup>1</sup>

Los Estados Unidos llevaron los preparativos en dos direcciones. Ante todo fue formado el llamado gobierno militar de la isla, encabezado consecutivamente de 1899 a 1902 por los generales norteamericanos J. Brooke y L. Wood, que tenían poderes prácticamente ilimitados. La isla fue dividida en siete departamentos militares (seis provinciales y uno capitalino), que fueron encabezados por generales norteamericanos. En esta situación, cuando en la isla quedó establecida en realidad una dictadura militar norteamericana, cada uno de sus decretos era una orden militar para las “autoridades” civiles cubanas.

Aun antes de comenzar la ocupación militar de la isla, Washington inició la lucha contra las fuerzas cubanas patrióticas y ante todo contra el Partido Revolucionario Cubano, fundado en 1892 por José Martí, y decidió disolver, costara lo que costara, el Ejército Libertador de Cuba. Para ello, los Estados Unidos contaban con el apoyo de los círculos burgueses y terratenientes de Cuba: los latifundistas, los dueños de los ingenios azucareros, los comerciantes, y los representantes de las clases pudientes, que vendiendo los intereses nacionales y defendiendo sus estrechos intereses de clase, comenzaron a ayudar al nuevo amo del país. En diciembre de 1898, el Partido Revolucionario Cubano, que pretendidamente había cumplido su misión histórica en la lucha por la independencia de Cuba, dejó de existir. Con intrigas, mediante amenazas y promesas, las autoridades militares de ocupación consiguieron el 12 de marzo de 1899, la destitución de Máximo Gómez del cargo de jefe del Ejército Liber-

---

<sup>1</sup> E. Roig de Leuchsenring. *Males y vicios de Cuba republicana*, La Habana, 1959, p. 84.

tador, y la disolución del propio ejército.

Estas acciones contribuyeron a dispersar y desmoralizar a las fuerzas patrióticas cubanas. Desempeñó un papel negativo la circunstancia de que a la cabeza del movimiento de liberación nacional cubano ya no se encontraban líderes tan destacados como José Martí y Antonio Maceo, que cayeron en la lucha en 1895 y 1896.

Los Estados Unidos se convirtieron en dueños absolutos de la isla. Los generales J. Brooke y L. Wood, gobernadores militares de Cuba, aprovecharon al máximo sus poderes ilimitados. L. Wood, por ejemplo, gobernador en Cuba de diciembre de 1899 a mayo de 1902, entregó a las compañías estadounidenses, 223 concesiones para la explotación de los recursos naturales de la isla. Lo más valioso del subsuelo de Cuba —metales no ferrosos, manganeso, plomo, zinc, grafito, etc.— pasó a manos del capital norteamericano.

La prensa norteamericana ya denominaba a Cuba “norteamericana”. Esta afirmación llegó incluso a las páginas de los libros de texto escolares editados en los Estados Unidos para Cuba. Así, en el libro de Montgomery *Primeras nociones sobre la historia de América* (1898), Cuba tenía en el mapa el mismo color que los Estados Unidos. Evidentemente, los ideólogos norteamericanos querían sugerir a la juventud cubana la idea de que su país pronto sería propiedad de los Estados Unidos.

Pero los patriotas cubanos no habían luchado contra el yugo colonial español para ver convertida su patria en colonia norteamericana. La aspiración a crear la República de Cuba independiente era tan fuerte en el país, que los EE.UU., sin decidirse a la anexión directa, comenzaron a allanar el terreno para las condiciones de una “independencia” de Cuba que en realidad significarían el protectorado de los EE.UU.

En junio de 1900 se celebraron en Cuba elecciones municipales, y en septiembre, elecciones a la Asamblea Constituyente que debía aprobar una Constitución que determinaría las relaciones entre Cuba y los EE.UU. La Constitución de Cuba, promulgada en febrero de 1901, contenía el típico repertorio de libertades democrático burguesas. Al parecer, el juego a la democracia representativa había sido logrado, pero a la Casa Blanca no le convenía esa Constitución

que, desde el punto de vista de los círculos gobernantes estadounidenses, no tenía lo principal: no reflejaba el carácter de las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.

El 9 de febrero de 1901 el secretario de Defensa norteamericano, E. Root, en una carta a L. Word, definió las cinco condiciones que debían servir de base para las relaciones cubano norteamericanas: 1º. reconocer el derecho de los EE.UU. a intervenir en los asuntos internos de Cuba, 2º. limitar los derechos de Cuba a firmar acuerdos y tratados con potencias extranjeras o a concederles cualquier tipo de privilegios sin acuerdo previo con los EE.UU., 3º. limitar los derechos de Cuba a obtener empréstitos en el extranjero, 4º. reconocer el derecho de los EE.UU. a adquirir tierras y tener bases navales en Cuba, y 5º. el reconocimiento y la observación por Cuba de las leyes promulgadas por las autoridades militares norteamericanas y los derechos derivados de estas leyes.

Estas disposiciones debían ser incluidas en la Constitución de Cuba. La Asamblea Constituyente rechazó las proposiciones de Root que significaban el menoscabo total de la soberanía cubana; sin embargo, bajo la presión de las autoridades de ocupación, el 27 de febrero la Asamblea se vio obligada a aprobarlas, aunque no como adición a la Constitución; sino como “opinión”, siendo omitida la cuestión del derecho de los EE.UU. a la intervención y al uso de bases navales.<sup>1</sup>

Ese mismo día, el Senado de los EE.UU. aprobó un documento que sirvió de fundamento para establecer el control ilimitado de los EE.UU. sobre la isla. Ese documento recibió el nombre de “enmienda Platt”, porque fue introducido en calidad de enmienda a la ley sobre la concesión de créditos para la manutención de las tropas norteamericanas en Cuba por el senador Orville H. Platt, presidente de la comisión del Congreso para los asuntos de Cuba. La enmienda condicionaba la evacuación de las tropas norteamericanas de la isla a la aprobación y la inclusión en la Constitución cubana de 8 condiciones —las cinco disposiciones de E. Root y otras tres: 1ª. “Que el Gobierno de Cuba ejecutará y, en cuanto fuere necesario, cumplirá los planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el

---

<sup>1</sup> H. Pichardo. *Documentos para la historia de Cuba*. La Habana, 1973, t. 2, p. 110-117.

saneamiento de las poblaciones de la Isla, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciosas, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que al comercio y al pueblo de los puertos del sur de los Estados Unidos. 2ª. Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para un futuro arreglo por Tratado la propiedad de esta. 3ª. El gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones (es decir, las siete disposiciones. —*E.L.*) en un Tratado Permanente con los Estados Unidos.”<sup>1</sup>

Tras largos debates y como resultado de la grosera presión por parte de las autoridades de ocupación norteamericanas, el 12 de junio de 1901, la Asamblea Constituyente de Cuba aprobó esta enmienda como adición a la Constitución. Cuando se conocieron los resultados de la votación, el general Lacret, diputado de la Asamblea Constituyente, exclamó: “Tres fechas tiene Cuba: el 10 de octubre de 1868 aprendimos a morir por la patria; el 24 de febrero de 1895 aprendimos a matar por la independencia; y hoy 28 de mayo de 1901, día para mí de luto, nos hemos esclavizado para siempre con férreas y gruesas cadenas.”<sup>2</sup>

Así fue como la “diplomacia de la bayoneta” le permitió a Washington, representando la farsa de la concesión de la independencia formal a Cuba, convertirla en realidad en su protectorado. Unos días después de aprobada la “enmienda Platt”, L. Wood escribió a T. Roosevelt, entonces ya vicepresidente de los EE.UU.: “Por supuesto que con la “enmienda Platt”, a Cuba le hemos dejado poca o ninguna independencia... Lo práctico ahora es conseguir la anexión. Esto requerirá un poco de tiempo... Con el control que tenemos sobre Cuba, la que sin dudas en no mucho tiempo se convertirá en posesión, pronto controlaremos todo el comercio de azúcar del mundo. Creo que Cuba es una adquisición de lo más apetecible para los Estados Unidos.”<sup>3</sup>

Para aplicar su política cubana, la Casa Blanca puso a la cabeza de su administración en Cuba a su títere Tomás Estrada Palma, antiguo

---

<sup>1</sup> *Ibíd.*, p. 120.

<sup>2</sup> *Antiimperialismo y República*. La Habana, 1970, p. 26, 27.

<sup>3</sup> *Humanismo*. La Habana, 1959, N. 53, 54, p. 38, 39.

partidario de la anexión a los Estados Unidos, justamente denominado por sus compatriotas “padre cubano de la enmienda Platt”. Sólo después de ser “elegido” presidente, las tropas norteamericanas fueron evacuadas de Cuba (en mayo de 1902).

A partir del 20 de mayo de 1902, cuando asume la presidencia del país Estrada Palma, comienza la historia de la República de Cuba. Esta “seudorrepública” o “república mediatizada”, como la denominaban, respondía ante todo a los intereses de los círculos gobernantes estadounidenses y al capital monopolista norteamericano.<sup>1</sup>

En los años que fue presidente (1902-1909), T. Estrada Palma convirtió el país en una enorme subasta en la que todo se vendía al poderoso vecino del norte: la tierra, las minas, las plantaciones de azúcar y tabaco, los yacimientos minerales... Entre los días 16 y 23 de febrero de 1903, Cuba y los EE.UU. firmaron un tratado sobre el arrendamiento a EE.UU. de parte de la bahía de Guantánamo y el territorio adyacente para crear allí una base naval, así como del territorio en la región de Bahía Honda para construir carboneras. Por el arrendamiento de estos territorios, Washington prometió pagar anualmente... 2 mil pesos, una miserable limosna. En 1912 los Estados Unidos renunciaron formalmente a Bahía Honda (el territorio fue devuelto a Cuba sólo en 1934), pidiendo a cambio la ampliación de su base naval en Guantánamo. Desde entonces y hasta nuestros días, el territorio de esa base es de 110 km<sup>2</sup>, de ellos 75 km<sup>2</sup> son de tierra firme y 35, de espacio acuático (ríos y mar).

El 22 de mayo de 1903 fue firmado el Tratado Permanente sobre las relaciones cubano norteamericanas. Incluía todos los artículos de la “enmienda Platt”, y la Casa Blanca utilizó luego con amplitud particular el Artículo 3º que preveía el “derecho” de los EE.UU. a la intervención militar.

El 11 de noviembre de 1902, hablando en un banquete de la Cámara de Comercio en Nueva York, T. Roosevelt, elegido presidente de los EE.UU., declaró: “Creo que puedo decir que con nuestra actitud respecto a Cuba y China hemos mostrado que en lo que concierne a las naciones más débiles, nuestro deseo es que puedan vivir por sí

---

<sup>1</sup> L. Y. Sliozkin. Historia de la República Cubana. Moscú, 1966.

mismas y, si adoptan una conducta honesta y franca con el resto de la humanidad, siempre nos encontrarán dispuestos a ayudarlas y no a oprimirlas”.<sup>1</sup> Desde el punto de vista de la Casa Blanca, en el curso del primer cuarto del siglo XX, Cuba se portó “deshonestamente con respecto al resto de la humanidad” en tres ocasiones, dando motivo a los Estados Unidos para las intervenciones armadas de turno en la isla mártir.

La primera de ellas se produjo en 1906, cuando la traicionera política antinacional de T. Estrada Palma provocó un amplio descontento en las masas populares, lo cual fue aprovechado por los adversarios políticos del presidente —los liberales—, quienes reunieron un ejército de 15 mil hombres que se enfrentó a las tropas gubernamentales. El 8 de septiembre de 1906, Estrada Palma pidió a T. Roosevelt la ayuda de las tropas norteamericanas y el 28 de septiembre del mismo año abandonó el cargo presidencial y transmitió de nuevo el poder a los generales norteamericanos. El secretario de Defensa, W. Taft, quien llegó a Cuba al frente de 24 mil *marines*, y actuó en la isla como si fuera suya. Ante todo disolvió las tropas gubernamentales y las unidades armadas de los liberales y se proclamó Gobernador Militar Provisional de Cuba. “Al implantar el orden”, Taft transmitió los poderes de Gobernador Militar al general norteamericano Charles E. Magoon.

La prensa estadounidense se dedicó a pregonar de nuevo “la incapacidad” de los cubanos y la misión civilizadora “de la gran democracia del norte”. El 13 de mayo de 1908 el embajador de Cuba en Washington, Gonzalo de Quesada, escribió al líder de los liberales, José Miguel Gómez: “Hoy se pregona (en los Estados Unidos) nuestra incapacidad para mantenernos sin la ayuda del extranjero. Se resaltan nuestras faltas, y nuestros hombres son motivo de mo-fa... Los centenares de millones de pesos invertidos en Cuba son, a sus ojos, de más monta que nuestro futuro intelectual y moral. El oro exige estabilidad, tranquilidad, prosperidad... y paz, aunque sea la de los sepulcros.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barral-Monferrat. *De Monroe a Roosevelt, 1823-1905*. París, 1905, p. 334.

<sup>2</sup> Iglesia Martínez. *Cuba: primera república, segunda ocupación*. La Habana, 1976, p. 409.

Pero el pueblo cubano estaba contra tal “estabilidad”. En toda la isla se produjo una ola de huelgas sin precedentes en Cuba. Los trabajadores exigían ante todo la evacuación de las tropas de ocupación norteamericanas y la independencia inmediata y completa de Cuba. El propio Magoon se vio precisado a reconocer en uno de sus informes la extrema impopularidad del régimen de ocupación militar entre los cubanos: “Indudablemente el deseo de ponerse bajo la jurisdicción y la dirección del gobierno de los Estados Unidos continúa vivo entre el gran contingente extranjero (según el censo de 1907 en Cuba vivían 229 mil extranjeros. —*E.L.*), y un corto número de cubanos que poseen bienes y temen que se repitan los desórdenes. Una abrumadora mayoría de cubanos no está dispuesta a abdicar su independencia y su soberanía.”<sup>1</sup> El aumento de los ánimos antinorteamericanos y el fomento de la lucha antiimperialista del pueblo cubano obligaron a Washington a poner fin a la ocupación militar de la isla, que había durado casi tres años; sin embargo, las tropas estadounidenses, retiradas a comienzos de 1909, no abandonaban la isla por mucho tiempo.

Según un dicho cubano, en el mundo no hay nada más parecido que un conservador a un liberal y viceversa. El gobierno liberal (1909-1913) que encabezó José Miguel Gómez, al igual que el gobierno conservador de T. Estrada Palma, no fue capaz de resolver ninguno de los problemas planteados ante el joven Estado. Los veteranos del movimiento de liberación nacional cubano exigieron que Gómez retirara del aparato estatal a las personas que se habían manchado colaborando con las autoridades coloniales españolas y luego con las autoridades de ocupación norteamericanas. La situación política en el país se hacía cada vez más grave.

En la lucha de las fuerzas patrióticas cubanas contra los elementos antinacionales plattistas, Washington vislumbró otra “afrenta a toda la humanidad”. En una nota del 16 de enero de 1912, el gobierno de los EE.UU. advirtió a Gómez que la situación creada en la isla provocaba “inquietud y preocupación” en la Casa Blanca. Al poco tiempo, pretextando el movimiento iniciado en Cuba por los negros y los mulatos contra la discriminación racial, Washington declaró

---

<sup>1</sup> *Documentos de Cuba republicana*. La Habana, 1972, t. 1, p. 73, 74.

que los intereses de los ciudadanos norteamericanos en la isla corrían peligro y de nuevo envió entre mayo y junio de 1912 a Cuba, la infantería de la marina norteamericana. Esta vez su permanencia no duró mucho, lo que se debió en medida considerable a la agudización de las relaciones entre las potencias imperialistas en vísperas de la Primera Guerra Mundial y a la preocupación de Washington por el creciente incendio de la Revolución Mexicana (1910-1917).

Los Estados Unidos pasan en Cuba a la llamada “política preventiva”, cuya esencia consiste, según el historiador cubano J. Le Riverand, en no realizar la intervención, sino en mantener “una acción de vigilancia directa sobre los pasos de cada gobierno. En buen lenguaje, la tesis se reduce a lo siguiente: *intervenir todos los días*, y decirle al mundo que lo hacemos para evitar los desembarcos y las ocupaciones cada seis u ocho años.”<sup>1</sup>

El nuevo presidente de Cuba, Mario García Menocal (1913-1917), pasó un curso de aprendizaje en el cargo de jefe de la policía en el período de gobierno en la isla del general norteamericano L. Wood. Luego fue administrador de los bienes de la *Cuban American Co.* norteamericana y estando estrechamente relacionado con el capital monopolista de los EE.UU., no ocultaba sus simpatías anexionistas. En una palabra, la Casa Blanca había elegido a su títere acertadamente.

El carácter reptil de la política del gobierno de Menocal permitió a los EE.UU. consolidar aún más las posiciones de su capital en Cuba, especialmente en la industria azucarera. En la isla empezaron a formarse de hecho “supercorporaciones” norteamericanas, que gozaban del apoyo financiero de influyentes círculos industriales estadounidenses y, particularmente, de los bancos.

Washington estaba interesado en la reelección de Menocal en las elecciones presidenciales de noviembre de 1916, pero la franca política pronorteamericana de este último había apartado a los electores cubanos de los conservadores. Los resultados del escrutinio dieron una victoria indudable al candidato de los liberales, Alfredo Zayas. Los conservadores, que estaban en el poder, recurrieron a todo tipo

---

<sup>1</sup> J. Le Riverand. *La República. Dependencia y Revolución*. La Habana, 1966, p. 141.

de fraudes y maquinaciones. Después de seis semanas, se declaró que había sido elegido presidente de Cuba a García Menocal.

Al igual que en 1906, los liberales tomaron las armas.

Washington aprovechó la discordia entre los burgueses para una nueva intervención cínica en los asuntos internos de Cuba. El 13 de febrero de 1917 el gobierno de los EE.UU., alegando sus compromisos de “mantener el orden” en Cuba, envió a la isla varios barcos militares, y el 18 de febrero calificó al movimiento de los liberales de “acto ilícito y anticonstitucional”. Fueron enviados a Cuba, más de dos mil efectivos de la infantería de la marina norteamericana. Los destacamentos de los liberales, mal armados y mal preparados militarmente, se encontraron frente a las unidades del ejército regular de los EE.UU. Tras una serie de enfrentamientos desiguales, los intervencionistas obligaron a los liberales, encabezados por el ex presidente J. M. Gómez, a abandonar Santiago y otras localidades que se encontraban bajo su control. Las armas norteamericanas aseguraron la segunda “reelección” de García Menocal a la presidencia, y las tropas norteamericanas ocuparon la isla durante seis años.

Fueron retiradas sólo en 1922, cuando en Cuba gobernaba ya el líder de los liberales Alfredo Zayas (1921-1925). En los dos primeros años de su administración, el cargo presidencial no fue sino un adorno en la escena política de Cuba, en tanto que el poder real en la isla pertenecía al general norteamericano Enoch Crowder.

E. Crowder había llegado a Cuba el 6 de enero de 1921 como representante extraordinario del presidente W. Wilson. Crowder dirigió al gobierno de A. Zayas 15 memorandos en contra de todo intento de muestra de independencia. El presidente cubano se vio obligado a disolver el gobierno, creando en su lugar el “gabinete de la honradez” (el pueblo lo llamó el “gabinete de Crowder”), formado por ministros al gusto de Washington.

Decenas de años de mangoneo incontrolado en Cuba, permitieron a los EE.UU. crear un bloque de fuerzas cubanas conservadoras que apoyaban irrestrictamente la expansión económica y política de Washington. Los latifundistas, la gran burguesía, a la que pertenecía parte de la industria azucarera, y la burguesía comercial importante, especializada en las importaciones, se convirtieron en un firme pilar

de los círculos gobernantes de los EE.UU. y sus monopolios. Precisamente la traición a los intereses nacionales por parte de la oligarquía cubana dio lugar en Cuba a la forma extrema de dominio de la burguesía: los regímenes dictatoriales de Machado y de Batista.

Gerardo Machado, al ser elegido presidente, un mes antes de ocupar este cargo, en abril de 1925, realizó un viaje a los EE.UU., donde se entrevistó con representantes del Washington oficial y de los círculos de negocios norteamericanos. Les reiteró su lealtad y prometió no poner obstáculos a sus intereses en Cuba. Flirteando con los negociantes norteamericanos, Machado fue implacable con el pueblo cubano. “Ojalá mis compatriotas me comprendan y no me obliguen a realizar lo que no quiero hacer, pero que haría si fuera necesario”.<sup>1</sup> —amenazó en mayo de 1925. Machado se mantuvo fiel a todos sus compromisos. “Dios en el cielo y Machado en la tierra” era una oración obligada en las misas del arzobispo de La Habana. Por lo visto, era un axioma también en la Casa Blanca. Pero la Revolución del 33 puso fin al régimen sangriento pronorteamericano. Los EE.UU. tuvieron que anular la “enmienda Platt”; sin embargo, su descarada intervención en los asuntos internos de Cuba tuvo otra vez, como en 1898, consecuencias funestas para el pueblo cubano.<sup>2</sup>

El 5 de septiembre de 1933 el embajador norteamericano en La Habana, Sumner Welles, escribió en su diario: “Vinieron a verme los sargentos Batista y Santana. El propósito de su visita era aclarar mi actitud hacia el llamado grupo revolucionario y cuán favorable sería la reacción de los EE.UU. a la formación de un gobierno encabezado por este grupo.”<sup>3</sup> El embajador expresó su apoyo a los sargentos. Este apoyo se convirtió en el trampolín de la vertiginosa carrera de Fulgencio Batista.

El siguiente cuarto de siglo de la historia cubana está directamente relacionado con esta odiosa figura, que gozaba del apoyo sin límites de Washington y que hizo todo lo posible para mantener la depen-

---

<sup>1</sup> J. A. Tabares del Real. *La revolución del 30: sus dos últimos años*. La Habana, 1973, p. 78.

<sup>2</sup> E. L. Nitoburg. *La política del imperialismo norteamericano en Cuba. 1918-1939*. Moscú, 1965.

<sup>3</sup> E. A. Larin. *El Ejército Rebelde y la Revolución Cubana*. Moscú, 1977, p. 24.

dencia semicolonial de Cuba respecto de los EE.UU.

Los EE.UU. prestaron al régimen batistiano generosa ayuda económica y militar, y sostén político multilateral. Durante la permanencia del dictador en el Palacio Presidencial, los consejeros militares norteamericanos velaron por el ejército batistiano, adiestrándolo para las funciones punitivas y la lucha contra el propio pueblo. La confesión elocuente del embajador norteamericano en Cuba (1957-1959), E. Smith, de que antes del triunfo de la Revolución Cubana el embajador de los EE.UU. era el segundo hombre en la isla, y a veces desempeñaba incluso un papel más importante que el presidente de Cuba<sup>1</sup>, muestra cuán grande era la dependencia de Cuba respecto de Washington. Pero a Batista también le esperaba un triste final. El 1º de enero de 1959 triunfó la revolución antiimperialista del pueblo cubano. Triunfaron los ideales de José Martí, quien quería ver su patria verdaderamente libre e independiente. Terminó para siempre el dominio de los EE.UU. El pueblo de la Isla de la Libertad comenzó la construcción de la primera sociedad socialista en el hemisferio occidental.

## **LOS EE.UU. Y LA REVOLUCIÓN CUBANA**

El 8 de enero de 1959, cuando el Ejército Rebelde entró en la capital, Fidel Castro, jefe de la Revolución Cubana, dijo dirigiéndose a la población jubilosa de la ciudad: “Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y, sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil.”<sup>2</sup> Esta previsión de Fidel Castro se ha justificado. El pueblo cubano ha tenido que defender las conquistas de la Revolución en condiciones de una lucha durísima con la contrarrevolución interna y la reacción imperialista, que ha utilizado

---

<sup>1</sup> B. Álvarez Ríos. *Cuba: Revolución e imperialismo*, La Habana, 1969, p. 47.

<sup>2</sup> *Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central*. Op. cit., p. 30.

para aplastar a la Revolución Cubana todo el arsenal de medios para sofocar los movimientos de liberación nacional y revolucionarios: desde la intervención armada y el bloqueo económico, hasta la guerra psicológica en gran escala.

La maquinaria de propaganda norteamericana comenzó el diversionismo ideológico contra los insurrectos encabezados por F. Castro mucho antes del derrocamiento de la dictadura de Batista. Así, en abril de 1958, colaboradores de la agencia washingtoniana *Universal Research and Consultants Inc.* prepararon para los consejeros del dictador, el informe *Sobre la psicología de la guerra y la propaganda*, en el que se proponía, en particular, quitar a F. Castro la aureola de líder, “demostrando” su dependencia de personas absolutamente indiferentes a los intereses presentes y futuros de Cuba.

El 16 de febrero Fidel Castro encabezó el Gobierno Revolucionario que tomó el rumbo resuelto a la realización de transformaciones socioeconómicas radicales y una política exterior independiente.

Ya el 15 de enero de 1959 Fidel Castro dijo, refiriéndose a las relaciones cubano norteamericanas, que los cubanos querían tener buenas relaciones con los EE.UU., pero no cabía hablar de sumisión alguna y que los intereses de unas cuantas compañías no eran los intereses de Cuba.<sup>1</sup> Tuvieron amplia resonancia las palabras de Fidel Castro de que Cuba no estaba dispuesta a apoyar a los Estados Unidos en sus esfuerzos por fomentar la atmósfera de la “guerra fría” en el mundo. “El neutralismo de Castro es un desafío directo a los EE.UU.” —se indignó la revista *Time*<sup>2</sup>. Un desafío a los Estados Unidos, desde el punto de vista de la Casa Blanca, fue igualmente la respuesta de F. Castro a la pregunta de qué pensaba él sobre el comercio con la Unión Soviética y otros países comunistas. “Les venderemos si están dispuestos a comprar”<sup>3</sup>, fue la respuesta dada al enviado de la revista *U. S. News and World Report*. Semejante independencia, en opinión de Washington, contradecía todas las normas de las relaciones de los EE.UU. con los países latinoamericanos, tanto más tratándose de las relaciones con su semicolonias de

---

<sup>1</sup> *U. S. News and World Report*, 16.01.1959, p. 47

<sup>2</sup> *Time*, 6.04.1959, p. 110.

<sup>3</sup> *U. S. News and World Report*, 16.03.1959, p. 68.

ayer. Los círculos dirigentes estadounidenses ya en los primeros meses después del triunfo de la Revolución Cubana, dieron a sus servicios secretos el beneplácito para la realización de acciones hostiles contra la Isla de la Libertad.

En su libro *Operaciones secretas de la CIA*, H. Rositzke, quien coordinaba las operaciones de la CIA contra los países socialistas y los gobiernos progresistas, hace una revelación muy elocuente: “Entre 1959 y 1962 la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y su Grupo Especial... hablaban seriamente de la eliminación de líderes de países extranjeros. En dos casos la CIA ordenó preparar los atentados. El líder congolés Patricio Lumumba y el Primer Ministro cubano Fidel Castro eran considerados en los círculos más altos de Washington, como una amenaza muy grave a la seguridad nacional (de los EE.UU. —E.L.), lo que justificaba su eliminación física.”<sup>1</sup>

El 15 de abril de 1959, comenzó una visita de Fidel Castro a los EE.UU. invitado por la Sociedad de redactores de los periódicos norteamericanos. Ya en la primera conferencia de prensa, a Fidel Castro le preguntaron si no venía a pedir ayuda económica, a lo que el líder de la Revolución Cubana respondió que no, que los cubanos se sentían orgullosos de su independencia y estaban dispuestos a no pedir nada. La visita no era oficial; no obstante, el 17 de abril, F. Castro tuvo un encuentro con el vicepresidente de los EE.UU., R. Nixon, que duró dos horas y veinte minutos. Nixon expresó el descontento del gobierno de los EE.UU. por los actos de justicia aplicados a los criminales de guerra batistianos y el aumento de la influencia de los comunistas cubanos en la vida social y política de Cuba. Al informar después al gobierno de los EE.UU. sobre este encuentro, el vicepresidente concluyó que era necesario preparar grupos armados formados con los contrarrevolucionarios cubanos para derrocar al Gobierno Revolucionario encabezado por Fidel Castro.<sup>2</sup>

El 17 de mayo F. Castro firmó la ley de la reforma agraria, cuyas disposiciones fundamentales estaban orientadas a cambiar la estructura de la posesión del suelo en el país. El golpe principal se asesta-

---

<sup>1</sup> H. Rositzke. *The CIA's Secret Operations*, New York, 1977, p. 196.

<sup>2</sup> Véase A. Quiroga. *La Revolución Cubana*. Barcelona, 1976. p. 143.

ba a los latifundistas, se nacionalizaban las plantaciones que pertenecían a las compañías extranjeras, ante todo, a las norteamericanas. Entre los afectados se encontraron algunos representantes de los círculos gobernantes norteamericanos, por ejemplo, el director de la CIA, Allen Dulles, dueño de la *Francisco Sugar Co.*, que tenía en Cuba 71.303 ha.

La reforma agraria radicalizó aún más a las amplias masas populares. Fue a la vez una especie de Rubicón que atravesó el Gobierno Revolucionario llamando sobre sí el “fuego masivo” de las fuerzas contrarrevolucionarias dentro del país y de la reacción imperialista en el extranjero, ante todo en los Estados Unidos. Entre julio y octubre de 1960, el Gobierno Revolucionario nacionalizó todas las compañías extranjeras, entre ellas, las norteamericanas, e intervino las grandes empresas de los capitalistas cubanos. A finales de 1960, cuando cerca del 80% de los centros industriales de Cuba se encontraban en manos del Estado, fue resuelta una de las principales tareas de la revolución antiimperialista: el logro de la independencia económica. En respuesta, el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono y los monopolios estadounidenses iniciaron una amplia campaña hostil contra la Isla de la Libertad. Ante todo, fueron puestas en acción las palancas de presión económica. Ya antes de la nacionalización, las compañías petroleras norteamericanas cesaron las operaciones en Cuba, se negaron a suministrar petróleo y a elaborar el petróleo que Cuba compraba a la Unión Soviética. Luego el gobierno de D. Eisenhower, actuando en defensa de los intereses de los monopolios, redujo en 700 mil toneladas la cuota de venta de azúcar cubano a los Estados Unidos, disminuyó bruscamente la exportación de mercancías norteamericanas a Cuba, privándola de créditos. Estas acciones de la Casa Blanca tendientes a paralizar la economía cubana, fueron en realidad el comienzo del bloqueo económico directo, un intento de poner a Cuba de rodillas.

En ayuda de Cuba acudió la Unión Soviética. A fines de 1960, cuando la agresión económica de los EE.UU. alcanzó límites extremos, la Unión Soviética y la República de Cuba firmaron un contrato, según el cual, la URSS se comprometía a aumentar las compras del azúcar cubano y abastecer a Cuba por completo de petróleo y productos derivados.

Al no conseguir sus propósitos con sanciones económicas, Washington empezó a preparar aventuras militares. “Ya a comienzos del año 1960 —escribía sobre el “problema cubano” el presidente de los EE.UU., D. Eisenhower— la administración no tenía dudas respecto a la necesidad de hacer algo. La cuestión estribaba sólo en qué, cuándo y en qué circunstancias.”<sup>1</sup> Se atribuía gran importancia a las fuerzas cubanas contrarrevolucionarias atrincheradas en los EE.UU. El 17 de marzo de 1960, D. Eisenhower dio a la CIA la orden de comenzar en territorio guatemalteco el entrenamiento de mercenarios cubanos, y a finales de 1960, comenzó la formación del llamado “frente de lucha anticastrista”.

El plan elaborado por el Departamento de Estado, según palabras de sus autores, tenía previsto que la ruptura de los acuerdos diplomáticos y económicos con el gobierno de Castro debía preceder al comienzo de las operaciones militares de los mercenarios contrarrevolucionarios contra Castro.<sup>2</sup> Con este propósito, Washington dio varios pasos encaminados a conseguir el aislamiento diplomático de la Isla de la Libertad. En su deseo de neutralizar la inmensa influencia de la Revolución Cubana en el proceso revolucionario en América Latina, los dirigentes de los EE.UU. trataron de inclinar a los gobiernos latinoamericanos a participar en sanciones colectivas contra Cuba.

En agosto de 1960 en San José, se celebró una conferencia de los cancilleres de los países de la OEA.

Empleando los métodos de presión tradicionales, la delegación estadounidense consiguió la aprobación de una declaración anticubana, que condenaba a Cuba como “Estado sometido a influencia extracontinental”, lo cual se calificaba de amenaza a la soberanía y la independencia de todos los países del hemisferio occidental. En septiembre de 1960 el Congreso de los Estados Unidos promulgó una ley para sancionar a cualquier Estado que brindara ayuda económica o militar a Cuba.

La agresión económica y política de Washington, la guerra psicológica en gran escala y basada en la calumnia contra la Revolución

---

<sup>1</sup> D. Eisenhower. *Waging Peace. 1956-1961*, New York, 1965, p. 525.

<sup>2</sup> B. Álvarez Ríos. *Op. cit.*, p. 88.

Cubana y sus líderes, las actividades subversivas y de espionaje de los servicios especiales norteamericanos alcanzaron a fines de 1960 proporciones extraordinarias. La ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba a principios de enero de 1961 fue el final lógico de las acciones hostiles de los EE.UU. La preparación de la intervención militar abierta contra Cuba había entrado en su fase decisiva.

Para entonces, unos 6 mil mercenarios cubanos bajo la dirección de instructores de la CIA, habían pasado el curso de “enseñanza” en campamentos de Guatemala y Nicaragua. Del 24 al 27 de febrero, una comisión especial del Pentágono inspeccionó la brigada contrarrevolucionaria.

Primeramente se planeó organizar una “guerra de guerrillas contra Castro”. En la Casa Blanca confiaban en que el sabotaje en las montañas y el bandidaje en el campo, realizados por estos “guerrilleros”, junto a las dificultades económicas debidas al bloqueo, provocarían descontento en masa y pánico, y contribuirían a acrecentar la oposición entre la clase obrera y a desorganizar el ejército revolucionario. Tras un estudio escrupuloso, la CIA rechazó esta variante, dado que, según palabras de Lyman B. Kirkpatrick, conocido personaje de la CIA, “el gobierno de Castro era sobre todo popular entre los obreros, los campesinos y los soldados..., la oposición real a la revolución estaba sólo en las clases pudientes, y la mayoría de los representantes de éstas habían abandonado Cuba”.<sup>1</sup>

En lugar de la “guerra de guerrillas”, cuyas perspectivas, conforme a las conclusiones de la CIA, no eran nada claras, se decidió recurrir a una abierta intervención armada. Así fue como en los gabinetes de la CIA y el Pentágono, nació la “operación Plutón”. Su idea consistía en desembarcar a mercenarios en Playa Girón, ocupar parte del territorio cubano y formar un gobierno pelele, que sería reconocido inmediatamente por los Estados Unidos y recibiría todo tipo de ayuda para derrocar al poder revolucionario.

Según testimonios del jefe de la sección de inteligencia del Departamento de Estado, R. Hilsman, el director de la CIA, A. Dulles, y su adjunto, R. Bissell, responsable directo de la realización de la

---

<sup>1</sup> L. Kirkpatrick, *The Real CIA*, New York - London, 1968, p. 192.

“operación Plutón”, aseguraron al presidente J. Kennedy que el éxito sería logrado sin la intervención de las fuerzas armadas de los EE.UU.<sup>1</sup> No obstante, en la intervención, que comenzó el 17 de abril de 1961, participaron 20 pilotos norteamericanos.

El desembarco de 1.500 mercenarios en Playa Girón provocó una ola de indignación en todo el mundo. El 18 de abril de 1961 el Gobierno soviético, al condenar resueltamente esta acción provocadora, declaró que “la Unión Soviética, así como otros países adictos a la paz, no abandonará al pueblo cubano en la desgracia y le prestará toda la ayuda y el apoyo necesarios en su justa lucha por la libertad y la independencia de Cuba.”<sup>2</sup>

El 16 de abril, Fidel Castro, dirigiéndose al pueblo, recalcó el carácter socialista de la Revolución Cubana. Toda Cuba se levantó en defensa de la Revolución. La operación, minuciosamente preparada por los EE.UU., sufrió un fracaso total. En menos de 72 horas las tropas revolucionarias al mando de Fidel Castro derrotaron a la escoria contrarrevolucionaria. En los combates de Playa Girón, los intervencionistas tuvieron las siguientes pérdidas: 92 muertos, de ellos 88 mercenarios cubanos y 4 norteamericanos, 1 197 prisioneros; 10 aviones B-26 derribados, y dos barcos de transporte hundidos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias perdieron 156 hombres.<sup>3</sup>

¿A quiénes llamaban en Washington hipócritamente “libertadores de Cuba”? La “brigada 2506”, que llegó a Playa Girón en buques de transporte norteamericanos y bajo cobertura de la aviación y los buques de guerra de los EE.UU., estaba compuesta por 100 latifundistas, 67 ricos propietarios de casas, 112 grandes comerciantes, 37 capitalistas, 194 criminales de guerra batistianos y más “libertadores” de esta calaña, que “luchaban” ante todo por recuperar las tierras expropiadas por la revolución, las empresas y los centrales azucareros, las casas y los lujosos apartamentos, los bancos, los cabarets, etc.

Los acontecimientos de Playa Girón muestran que han pasado para

---

<sup>1</sup> R. Hilsman. *To Move a Nation*. New York, 1967, p. 32.

<sup>2</sup> *Pravda*, 19.IV.1961.

<sup>3</sup> Playa Girón: significación histórica y enseñanzas. Moscú, 1982, p. 53.

siempre los tiempos de las marchas triunfales de los *marines* y los mercenarios tales como la “brigada 2506” por los países de Centroamérica y la cuenca del Caribe. El heroísmo y la unidad política y moral del pueblo cubano, la posición firme, de principio, de los países de la comunidad socialista, y su apoyo multilateral a la Cuba revolucionaria condenaron al fracaso la aventura anticubana organizada, preparada y financiada por Washington.

Pero los círculos gobernantes estadounidenses preparaban nuevos planes para derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. “Nuestra política es eliminar el régimen de Castro”<sup>1</sup> —declaró en septiembre de 1962 el vicepresidente de los EE.UU., L. Johnson. Tras el fracaso de la “operación Plutón” se endureció aún más el bloqueo económico. El 3 de febrero de 1962, J. Kennedy anunció el embargo total del comercio con Cuba. Pisoteando groseramente las normas del Derecho Internacional, los Estados Unidos exigieron a los países dependientes del capital norteamericano cesar incluso la venta de alimentos y medicamentos a Cuba. Los barcos extranjeros que tocaban los puertos de la Isla de la Libertad no podían entrar en los puertos norteamericanos. Los Estados que desoían el dictado de la Casa Blanca, eran sometidos a presión política y todo tipo de sanciones económicas. A principios de 1962 en la VIII conferencia consultiva de los cancilleres de la OEA, celebrada en Punta del Este, el Departamento de Estado logró hacer aprobar una resolución sobre la exclusión de Cuba de la OEA y sobre la ruptura por parte de los países latinoamericanos de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Cuba.

Comenzó un verdadero asedio a Cuba. Menudearon los ataques aéreos y de la marina de guerra realizados contra los poblados costeros de la isla desde el territorio de los EE.UU. Se activaron las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, organizadas y costeadas por la CIA. Desde 1959 hasta 1965, en Cuba actuaron en total 179 bandas integradas por unos 3.600 gusanos.<sup>2</sup> La CIA elaboró con empeño planes de atentados contra Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y otros estadistas cubanos. En un informe de

---

<sup>1</sup> B. Álvarez Ríos. *Op. cit.*, p. 102.

<sup>2</sup> *Granma*, 25.05.1970.

la comisión senatorial de los EE.UU. para la investigación de las actividades de la CIA, publicado en 1975, se decía: “Hemos descubierto pruebas concretas sobre al menos ocho complots para asesinar a Fidel Castro entre 1960 y 1965 en los cuales ha estado involucrada la CIA”.<sup>1</sup> Creció bruscamente el número de provocaciones (más de 5 mil de 1962 a 1967)<sup>2</sup> por parte de la guarnición de la base naval de Guantánamo. Se preparaba una nueva intervención armada.

En estas circunstancias, el gobierno cubano tomó la decisión de emplazar en su territorio armas estratégicas soviéticas para reforzar la capacidad defensiva del país. En respuesta, los EE.UU. decretaron a partir del 22 de octubre de 1962 el bloqueo de Cuba con la marina de guerra. Alrededor de la Isla de la Libertad se hallaban concentrados 183 buques de guerra de los Estados Unidos. El Pentágono puso en estado de alarma a 100 mil soldados y oficiales norteamericanos en la Florida y a los contingentes de sus tropas acantonados Europa Occidental, llamando a filas complementariamente a 150 mil reservistas y reforzando considerablemente la guarnición de Guantánamo.<sup>3</sup>

La política demente de los círculos reaccionarios de los EE.UU. fue causa de una crisis internacional agudísima. El mundo se encontró al borde de una nueva guerra mundial. Con tal de prevenir el conflicto armado, la Unión Soviética, al recibir en las negociaciones soviético norteamericanas celebradas a fines de octubre y comienzos de noviembre de 1962, garantías sobre la no intervención en Cuba, retiró las armas estratégicas de su territorio. Como resultado de los acuerdos alcanzados en dichas negociaciones, el 21 de noviembre del mismo año, los EE.UU. levantaron el bloqueo naval a Cuba; sin embargo, la lucha—subversiva, económica, diplomática e ideológica— de los EE.UU. contra Cuba, continuó. Fidel Castro señaló que en los primeros diez años el pueblo cubano casi no pudo ocuparse de la economía, lo principal era sobrevivir, mantenerse en pie.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Cita del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, p. 188.

<sup>2</sup> *Granma*, 25.05.1970.

<sup>3</sup> A. Gromiko. *1 036 días del presidente Kennedy*. Moscú, 1968, p. 211-227.

<sup>4</sup> F. Castro. *La fuerza de la revolución se encuentra en la unidad*. Moscú, 1972, p.

Después de la derrota de Playa Girón, a la CIA se le encomendó activar la guerra secreta contra Cuba. Con este propósito, en febrero de 1962, se crea en Miami un grupo especial bajo la dirección de T. Shackley, antiguo jefe del servicio de operaciones secretas en el hemisferio occidental. Este centro operativo recibió el nombre cifrado de “J. M. Wave”. Su plantilla (700 personas) y su presupuesto (más de 50 millones de dólares) eran los más grandes de las secciones de la CIA responsables de la labor subversiva contra los países latinoamericanos. Entre los objetivos de “J. M. Wave” figuraban: la organización de actos terroristas en Cuba, el financiamiento de los grupos cubanos contrarrevolucionarios, y la vigilancia a los exiliados cubanos en los EE.UU. T. Shackley tuvo a su disposición una red ramificada de agentes, extendida a todos los países de Centroamérica. Además, en cada sección importante de la CIA en el extranjero, funcionarios especiales se ocupaban de preparar operaciones contra Cuba dirigidas a la ruptura de las relaciones diplomáticas y otras contra los países que las mantuvieran con Cuba, y al aumento de las actividades anticubanas.<sup>1</sup> La Sección de Miami existió hasta 1969 cuando sus funciones pasaron a manos del aparato central de la CIA.

Además de la CIA, participó activamente en la organización de provocaciones contra Cuba el Pentágono. En los años 60 los aviones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos penetraron en el espacio aéreo de Cuba más de mil veces, y fueron detenidos muchas veces los barcos pesqueros cubanos en aguas neutrales.

El valor, la firmeza, y la vigilancia revolucionaria de los combatientes del ejército cubano, de los Comités de Defensa de la Revolución, y de todo el pueblo cubano, frustraron los planes más sutiles de la lucha contra la Isla de la Libertad. Al recibir una réplica resuelta, subrayaba F. Castro, “el enemigo fue obligado a abandonar las formas directas y, a corto plazo, se abrió paso una nueva modalidad; y con ella, una lucha que será mucho más larga, con diversas formas de penetración, mediante agentes clandestinos, el sabotaje

---

117.

<sup>1</sup> K. Tarásov. *La guerra secreta del imperialismo de los EE.UU. en América Latina*. Moscú, 1978, p. 101-102.

económico, el intento de penetración, la confusión ideológica, y cuantas formas puedan tener a su alcance para combatir a la Revolución”.<sup>1</sup>

A mediados de los años 70 en Miami, se creó de nuevo el *Frente Cubano de Liberación Nacional*, formado por las principales organizaciones contrarrevolucionarias cubanas radicadas en los Estados Unidos. Como forma de lucha fundamental fue elegido el terror: la agresión a los aviones, los barcos cubanos, las embajadas y las representaciones de la República de Cuba en diferentes países. Las acciones del “frente” son dirigidas y coordinadas por la CIA.

Durante casi un cuarto de siglo, los servicios especiales del “vecino del norte” llevan a cabo una labor subversiva destinada a combatir la Revolución Cubana. En la segunda mitad de los años 70 y a comienzos de los 80, es decir, justamente cuando el autobombo de Washington como “luchador” por los derechos humanos rebasó todos los límites, a causa de la labor subversiva de la CIA, en Cuba hubo cinco epidemias que ocasionaron grandes pérdidas a la economía nacional y provocaron enfermedades en masa en la población. Fueron contagiadas con el virus del dengue, 237 mil personas. La epidemia alcanzó el clímax en el verano de 1981.<sup>2</sup>

Poco antes de llegar R. Reagan al poder, durante la campaña electoral, sus consejeros elaboraron la *Nueva política interamericana para los años 80*, que volvía a reclamar a Cuba en forma de ultimátum, el cambio radical de su política exterior. La administración de Reagan, avivando el mito de la “amenaza militar soviética”, de “los soldados rusos en Cuba”, y de “la agresión cubana en África”, aprovecha todos los pretextos para realizar nuevas acciones hostiles contra la Cuba socialista.

En agosto de 1982 el Senado de los EE.UU. aprobó una resolución provocadora amenazando directamente a la Isla de la Libertad. Es significativo que con una resolución similar, Washington pretendió atemorizar a los países latinoamericanos en 1962 durante la crisis del Caribe; pero al igual que entonces, a la política del “garrotazo”

---

<sup>1</sup> Primer Congreso... Informe Central. Op. cit., p. 191.

<sup>2</sup> J. Mader. *Plan secreto de la CIA contra Cuba*. Bohemia. La Habana, 1982, N° 10, p. 63.

resucitada por el Departamento de Estado y el Pentágono, le espera un inevitable fracaso. Ningunas amenazas, bloqueos, sanciones o actos terroristas de los Estados Unidos lograrán desviar al pueblo cubano del camino elegido. “Sigamos el ejemplo de los grandes constructores de la Patria y los creadores de un mundo nuevo. Sigamos fielmente sus ideas y no habrá fuerza en la tierra capaz de separar a nuestro Partido de nuestro pueblo y a nuestro pueblo del camino de la Revolución.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Bohemia*. La Habana, 1980, N° 52, p. 60.

---

NELLI POYÁRKOVA

**PUERTO RICO:  
UNA COLONIA NORTEAMERICANA**

La isla de Puerto Rico, que es parte del archipiélago de las Antillas Mayores, siempre ha sido considerada por los círculos gobernantes estadounidenses como baluarte geopolítico de Norteamérica en la cuenca del Caribe. Recientemente, en el verano de 1981, Jeane Kirkpatrick, representante de los EE.UU. en la ONU, confirmó este punto de vista, declarando que lo principal en el problema puertorriqueño es mantener la hegemonía de los EE.UU. en el Caribe, donde Puerto Rico debe desempeñar el papel de Gibraltar norteamericano.<sup>1</sup>

La historia de la anexión y de los ocho decenios de ocupación de la isla constituye un ejemplo palpable de la política intervencionista de los EE.UU. y su actitud ante la autodeterminación de las pequeñas naciones.

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que lograron la independencia política en el primer cuarto del siglo XIX, Puerto Rico, al igual que Cuba, fue colonia de España hasta fines del siglo XIX. El deseo de liberarse del yugo colonial, el desarrollo del movimiento de liberación nacional en la isla, y la nueva situación internacional en que se encontraba la metrópoli, obligaron a España a hacer varias concesiones a la población de la colonia con tal de sostener su dominio. Una de estas medidas fue la concesión de la autonomía a Puerto Rico en 1897.

De acuerdo a la Carta de 1897, en la isla se instituía un gobierno autónomo —el Consejo Ejecutivo— compuesto por puertorriqueños. Las dos cámaras del parlamento eran elegidas por votación de los hombres puertorriqueños con 25 o más años de edad. Incumbía a este gobierno la solución de los problemas de política interior (los judiciales, los impuestos, la enseñanza y la división administrativa)

---

<sup>1</sup> *Bohemia*, N° 25, 19.06.1981, p. 77.

y del comercio exterior. Puerto Rico obtuvo el derecho de representación en las Cortes españolas (21 miembros).

No obstante, la autonomía de la isla era bastante restringida: en Puerto Rico mandaba como antes, un Gobernador General nombrado por España, que tenía derecho a vetar cualquier disposición del gobierno local.

El gobierno autónomo de Puerto Rico procedió al ejercicio de sus funciones el 9 de febrero de 1898, y el 21 de abril de 1898 empezó la guerra entre España y los Estados Unidos, que determinó el destino de Puerto Rico hasta nuestros tiempos. España, una vez derrotada, tuvo que firmar en 1899 un tratado de paz que transmitía Puerto Rico y algunas colonias españolas más a los EE.UU. Aún antes de firmar el tratado, el 25 de julio de 1898, destacamentos del ejército norteamericano ocuparon uno de los puertos en la costa sur de Puerto Rico, y 19 días después, toda la isla.<sup>1</sup> El Tratado de París no hizo sino formalizar la ocupación militar de Puerto Rico, que se convirtió en posesión de los EE.UU.

La ocupación de la isla estuvo acompañada de una ruidosa campaña propagandística destinada a crear entre los puertorriqueños la ilusión de que se libraban del colonialismo en general. El mando militar de las tropas de ocupación procuraba forjar la misma ilusión. El general Nelson A. Miles, jefe de las tropas estadounidenses desembarcadas en Puerto Rico, ya en los primeros días, dirigió un mensaje a la población de la isla, afirmando que las tropas habían llegado a Puerto Rico con el único propósito de llevar allí la libertad, la justicia, el humanismo y librar a los EE.UU. y a Puerto Rico del enemigo común: España, y que los Estados Unidos no alterarían las leyes y las costumbres del país cuya tierra habían pisado. De la prolongación de la ocupación y del mantenimiento del status colonial, ni siquiera se hablaba.

Pero los verdaderos fines de la ocupación de la isla por los Estados Unidos estaban muy lejos de la nobleza y el humanismo pregonados en los mensajes del mando militar norteamericano a la población. La isla debía servir de importantísima plaza de armas estratégica de

---

<sup>1</sup> J. L. Vivas. *Historia de Puerto Rico*. Nueva York, 1960, p. 180-183.

los EE.UU. en el Caribe. T. Roosevelt, futuro presidente de los EE.UU., escribió en mayo de 1898 que era necesario oponerse a los planes de paz con España mientras no fuese ocupado Puerto Rico.<sup>1</sup> Además, Puerto Rico, país agrario con un débil desarrollo y una gran población, interesaba a los monopolios imperialistas de los EE.UU. como provechoso mercado de materias primas y ventas.

Al afianzarse en Puerto Rico, los EE.UU. suprimieron ante todo el sistema de gobierno autónomo, establecido de acuerdo con la Carta Autonómica española. Todos los poderes, incluyendo las cuestiones de la administración local, pasaron a manos del mando militar norteamericano.

La situación creada provocó descontento en la isla. Pronto se hizo claro que el gobierno de Norteamérica pretendía, no sólo no conceder inmediatamente a Puerto Rico una autonomía mayor de la que tenía hasta 1898, sino además, imponer el status político de la isla en general. En el Artículo 9º del Tratado de París se decía que los derechos civiles y la situación política de los habitantes de los territorios que pasaban a manos de los Estados Unidos, serían examinados por el Congreso de los EE.UU. Transcurrían los meses, y Puerto Rico continuaba denominándose en los documentos oficiales “territorio”, la cuestión del estado político permanecía inconclusa. La isla no tenía representación alguna en el Congreso norteamericano. En el territorio de Puerto Rico regían las leyes federales de los EE.UU. Los puertorriqueños no tenían acceso a la administración de la isla. El parlamento había sido disuelto y los derechos electorales, restringidos. Dicho en otros términos, inmediatamente tras establecerse el dominio de los EE.UU., en la vida política de la isla se operaron cambios que hicieron volver al país a las viejas posiciones del dominio colonial, la dependencia total y la ausencia de derechos. El problema de mayor actualidad de la vida social de Puerto Rico era el de su estructura política.

El 12 de abril de 1900, el presidente de los EE.UU., McKinley, firmó el Acta Orgánica (Ley Fundamental) para Puerto Rico, conocido como Acta de Foraker, que entró en vigor el 1º de mayo del mismo

---

<sup>1</sup> *Selections from Correspondence of Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge. 1884-1918.* New York, 1925, V. I, p. 229.

año. En Puerto Rico se establecía un gobierno civil. El poder ejecutivo era encabezado por un gobernador nombrado por el presidente de los EE.UU. cada cuatro años. El gobernador, que era al mismo tiempo el jefe militar, tenía derecho a vetar cualquier ley promulgada en la isla. Estaba obligado a presentar cada año, un informe sobre el estado de los asuntos en la isla al presidente de los EE.UU. Adjunto al gobernador, se creaba un Consejo Ejecutivo, cuyos miembros también eran designados por el presidente norteamericano cada cuatro años.

El poder legislativo pertenecía a una Asamblea constituida de dos cámaras: el Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados. La Cámara de Delegados era elegida por todos los hombres de Puerto Rico que habían alcanzado la edad de 25 años, y podían ser elegidos diputados los hombres mayores de 25 años que tenían bienes inmuebles y sabían leer y escribir en inglés. Las leyes aprobadas por la Asamblea, debían ser ratificadas por el Congreso de los EE.UU. Las leyes de los EE.UU. se hacían extensivas a Puerto Rico. El Acta instituía el cargo de un representante de Puerto Rico en el Congreso de los EE.UU. con voz consultiva. Se creaba “el distrito judicial de Puerto Rico” encabezado por un Juez Supremo designado por el presidente norteamericano. En la isla se estableció el sistema de correos y la moneda de los Estados Unidos.

Conforme a la cláusula económica del Acta, que conserva casi su pleno vigor hasta nuestros días, Puerto Rico era incluido en el sistema de tarifas aduaneras de los EE.UU., pero al mismo tiempo perdía la libertad de comercio exterior con otros países.

En cuanto a la estructura política, el Acta de Foraker repetía en cierto grado el modelo español de 1897: un gobernador, un comité ejecutivo adjunto a él, y un órgano legislativo bicameral. Cabe señalar, no obstante, que en algunos casos la Carta Autonómica establecía poderes locales más amplios que el Acta Orgánica (por ejemplo, en la participación de los puertorriqueños en el propio gobierno y en el de la metrópoli, y en la electividad de los órganos de poder).

El Acta de Foraker provocó una profunda desilusión en la sociedad puertorriqueña. En la isla se expresaba ampliamente el descontento con la política estadounidense, que era calificada en los periódicos

de colonialista e imperialista. Uno de los líderes políticos más importantes de Puerto Rico, Luis Muñoz Rivera, jefe del gobierno autónomo puertorriqueño en 1898, escribió al presidente McKinley: que “el pueblo de Puerto Rico..., como el norteamericano, supo administrar su fortuna; tuvo sufragio universal como el norteamericano, y supo votar con perfecta tranquilidad; tuvo una cámara y un gabinete autonómicos, y supo emplearlos para el bien; y demostró durante medio siglo<sup>1</sup> un pacifismo rayano en la mansedumbre. Y es en verdad extraño que estas virtudes se pierdan y se disipen cuando debían acentuarse y robustecerse”<sup>2</sup> en el contacto con los EE.UU. Algo más tarde Muñoz Rivera señaló en otra carta, que “aún en 1900 en la isla no había nadie que desconfiara de los EE.UU., pero ahora todos comprenden que los han engañado”.

Era criticada ante todo, la parte política del Acta de 1900. Provocaba insatisfacción en Puerto Rico, en primer orden, porque el Acta de Foraker no decía nada del problema principal: el status político de la isla en el futuro y no definía el estado vigente en Puerto Rico, que continuaba denominándose “territorio”.

La protesta contra la política de los EE.UU. halló su expresión en Puerto Rico, en particular, en que Muñoz Rivera y sus partidarios crearon en febrero de 1904 un nuevo partido —la Unión de Puerto Rico—, en cuyo programa se formulaba claramente la exigencia de autoadministración para Puerto Rico, y luego, la independencia bajo protectorado de los EE.UU. Así, por primera vez en el programa de un partido político puertorriqueño, se planteaba la cuestión de la independencia. Amplias capas de la sociedad del país aprobaron el programa de la Unión de Puerto Rico. Los ánimos antinorteamericanos que brotaron en el país encontraron salida en el apoyo al nuevo partido.

En relación con el auge de las ideas libertadoras, incluso los líderes del Partido Republicano de Puerto Rico (que se pronunciaba por la transformación de la isla en un Estado de los EE.UU., y que desde 1903 entró en el Partido Republicano de los EE.UU. convirtiéndose

---

<sup>1</sup> A partir de la última gran sublevación de 1868.

<sup>2</sup> B. Pagan. *Historia de los partidos políticos puertorriqueños*. (1898-1956). T. 1, p. 81.

en su sección territorial) se vieron obligados a pedir la autoadministración de Puerto Rico. En dicha situación, el gobierno de los EE.UU. necesitaba un medio, que sin cambiar en lo esencial el régimen colonial de Puerto Rico, fuera una salida al creciente descontento de la población de la isla. El 2 de marzo de 1917 la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano aprobó la segunda Acta Orgánica o Acta de Jones: a los puertorriqueños les fue “concedida” la ciudadanía norteamericana. En opinión de los ideólogos del colonialismo norteamericano, ésta era la salida que necesitaba la política estadounidense en la isla.

El Acta de Jones introducía cambios en el sistema de la administración local. Por primera vez desde de 1898, se establecía la plena elegibilidad de la Asamblea Legislativa.

El poder ejecutivo era ejercido por el gobernador y el Consejo Ejecutivo. Este último estaba integrado por siete personas, los jefes de los departamentos. Dos de ellos, los jefes de los departamentos de justicia y de instrucción, eran designados como antes por el presidente de los EE.UU., y los demás, por el gobernador de la isla. El Acta de Jones reservaba el derecho de veto del gobernador, así como el derecho del presidente de los EE.UU. a nombrar al gobernador y a los altos funcionarios judiciales.

Así pues, sólo después de 19 años de la anexión de la isla por los Estados Unidos, los puertorriqueños consiguieron restablecer los derechos políticos obtenidos... ya en 1897. En cuanto a la “concesión” de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, que la propaganda oficial utilizó como principal argumento para demostrar “la igualdad y la fraternidad” entre los EE.UU. y Puerto Rico, en realidad era una medida en considerable grado formal. La población de la isla obedecía como antes, todas las leyes federales aunque no participaba en su discusión y su aprobación, puesto que el único representante de Puerto Rico en el Congreso, como antes, tenía sólo voto consultivo; y los puertorriqueños, como antes, no participaban en las elecciones del presidente norteamericano y del Congreso. Los puertorriqueños que vivían en los EE.UU., aun después de obtener la ciudadanía norteamericana, eran sometidos a discriminación racial y ocupaban a menudo en la escala social un peldaño inferior al

de los negros norteamericanos. Al obtener la ciudadanía norteamericana, los puertorriqueños pasaron a ser enseguida “ciudadanos norteamericanos de segunda clase”.

El Acta de Jones no cambió casi nada en el destino de Puerto Rico. El status de la isla quedó indefinido. Después de 1917 Puerto Rico figuraba con frecuencia en los documentos oficiales como “territorio asociado a los EE.UU.”, siendo en realidad, igual que antes, una típica colonia, lo cual determinó en gran medida el carácter de la vida política y económica de Puerto Rico en los años sucesivos.

Después del establecimiento del dominio norteamericano sobre Puerto Rico, se acentuó bastante el carácter de monocultivo de la agricultura del país; el producto principal era el azúcar tal como convenía a los Estados Unidos. La mayor parte de las tierras, las mejores tierras, se encontraba en manos de los monopolios estadounidenses. Parte considerable de las ganancias provenientes de la agricultura iba a dar a los Estados Unidos. Mientras crecían los beneficios de los grandes propietarios de tierra, ante todo de los monopolistas norteamericanos, la situación del campesinado puertorriqueño empeoraba notablemente.

La industria local decaía al no resistir la competencia de los baratos artículos norteamericanos. Crecía el ejército de parados. Puerto Rico se veía forzado a comprar las mercancías que importaba, sólo en los EE.UU., privado del derecho de comerciar con otros países. En consecuencia aumentaba cada vez más la dependencia de su economía respecto de las importaciones norteamericanas.

La situación económica de Puerto Rico se agravó mucho después de 1929, cuando se produjo una gran crisis de la economía mundial capitalista. Las consecuencias de esta crisis, que asestaron un duro golpe a los Estados Unidos, repercutieron dolorosamente en Puerto Rico, cuya economía dependía totalmente de la economía norteamericana. En muchas regiones del país hubo hambrunas. Entre la población se propagaron las epidemias y creció la mortalidad. Más de 1.000 de cada 100 mil personas morían anualmente de enfermedades infecciosas. El gobernador de Puerto Rico, T. Roosevelt Jr., escribía en diciembre de 1929 que la población puertorriqueña vivía en la miseria y los niños pasaban hambre.

La colonización norteamericana de la isla estuvo acompañada de una considerable propagación de las ideas libertadoras y de ánimos antinorteamericanos en la sociedad puertorriqueña. En 1922 se creó el Partido Nacionalista, que se planteó como objetivo principal la lucha por la República de Puerto Rico libre, soberana e independiente. Por primera vez surgió un partido político que proclamaba la independencia del país no como un fin distante e ilusorio, sino como una reivindicación práctica y actual. La lucha de los nacionalistas, encabezados por Pedro Albizu Campos, condicionó el hecho de que en los años 30 en la isla no hubo ningún partido político que se manifestara abiertamente en contra de la demanda de la independencia de Puerto Rico.

Al chocar con una seria oposición política a su régimen por parte del Partido Nacionalista, los EE.UU. sometieron a los nacionalistas a una dura represión. Los participantes de las acciones que organizaba el partido, eran fusilados, muchos activistas del partido fueron detenidos, y Albizu Campos y otros dirigentes fueron encarcelados muchos años.

La situación política creada en la isla dio lugar a la aparición de varios proyectos presentados al Congreso de los EE.UU. con propuestas de nuevas concesiones respecto a la autoadministración puertorriqueña. Todos fueron rechazados. Los EE.UU. se avinieron sólo a algunas pequeñas concesiones que no cambiaban en nada sustancial la política colonial de los EE.UU. en la isla. Por ejemplo, el país se llamó de nuevo Puerto Rico en español, y no Porto Rico (como lo llamaban desde 1898 los norteamericanos), y se aceptó el sufragio de las mujeres. El inglés dejó de ser la lengua principal en que se impartía la enseñanza escolar. Puerto Rico obtuvo el derecho de izar su bandera junto a la norteamericana sobre las instituciones nacionales, y de interpretar durante las festividades el himno puertorriqueño después del de los EE.UU.<sup>1</sup>

La derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial contribuyó al auge del movimiento de liberación nacional en todo el mundo. El derrumbamiento del sistema colonial imperialista fue resultado de este proceso. En estas circunstancias, los EE.UU., para preservar su

---

<sup>1</sup> J. E. Soltero. *El camino de la libertad*. Río Piedras, 1946, p. 348.

dominio en Puerto Rico, se vieron obligados a buscar nuevas formas del régimen colonial. Con este fin, el Congreso de los EE.UU. aprobó en 1950 la ley 600, conforme a la cual la isla recibió una Constitución y un Gobierno formado íntegramente por puertorriqueños. La Constitución fue aprobada en 1952. De acuerdo con ella, Puerto Rico por primera vez desde 1898, recibió un status político oficial: “Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de América”.

El análisis de la Constitución de 1952 muestra que la autoadministración política local no fue ampliada mucho; quedó fijada en lo fundamental la situación política y económica de Puerto Rico existente en la isla en 1952, introduciéndose una nueva fórmula política que sirvió de pantalla para disimular y conservar el yugo colonial.

La esencia colonial del rótulo de “Estado Libre Asociado” se reveló en la absoluta falta de derechos económicos de Puerto Rico. Como antes, todas las relaciones del país con los países extranjeros son determinadas en Washington. Las instituciones gubernamentales norteamericanas ejercen pleno control sobre la cultura y la ideología de Puerto Rico. En el “Estado Libre Asociado” rigen todas las leyes federales (a excepción del impuesto de utilidades); sin embargo, a diferencia de otros Estados de los EE.UU., Puerto Rico no toma parte en la discusión de las leyes, puesto que su único representante en el Congreso, al igual que antes, no tiene voto decisivo.

Sólo algunos problemas de política interior (los impuestos locales, la construcción, etc.) son de la incumbencia de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aunque se encuentra limitada también en estos casos. Pese a la cacareada independencia del “Estado Libre Asociado”, las instituciones y los funcionarios gubernamentales de los EE.UU. actúan en Puerto Rico como en cualquier territorio norteamericano. En la Constitución de Puerto Rico pueden ser introducidas enmiendas sólo después de consultar a las autoridades norteamericanas.

Por último, el estado judicial de Puerto Rico tampoco cambió después de aprobada la Constitución de 1952. La Constitución conservó parte de la Ley de Jones (1917) bajo el nombre de *Ley sobre las relaciones federales de Puerto Rico*. Al mismo tiempo, el Artículo IV, apartado 3, § 2 de la Constitución de los EE.UU., en base a la

cual se confeccionó la ley, establece que el Congreso de los EE.UU. tiene derecho a efectuar todo lo que considere necesario respecto a los territorios u otras propiedades de los EE.UU. Ni la Constitución de los EE.UU. ni sus enmiendas incluyen mención alguna de la fórmula del “Estado Libre Asociado”. De esta manera, la única fórmula aplicable a Puerto Rico sigue siendo, como antes, la de “territorio”. El Congreso tiene derecho a intervenir unilateralmente en la labor de los órganos legislativos puertorriqueños y abolir cualesquiera leyes, incluso la propia Constitución.<sup>1</sup> Es decir, en Puerto Rico rige en pleno el poder legislativo del Congreso norteamericano.

Los defensores de la fórmula del “Estado Libre Asociado” pretenden demostrar que la Ley 600, siendo un acuerdo bilateral entre los EE.UU. y Puerto Rico, establece relaciones contractuales iguales entre ambos Estados, limitando de este modo el poder del Congreso de los EE.UU. sobre la isla; pero en realidad ni la Ley 600, ni la Constitución de 1952 suponen un compromiso contractual, porque Puerto Rico no es un país soberano, sino un “territorio”. *The New York Times* señaló que Puerto Rico no es un Estado ni en el sentido que da a este término el Derecho Internacional, ni en el sentido de miembro plenipotenciario de la Unión Panamericana, ya que la isla se “asoció” a los EE.UU. no siendo soberana.

En consecuencia, después de la aparición del nuevo status de “Estado Libre Asociado”, Puerto Rico, también desde el punto de vista jurídico, continuó siendo patrimonio de los EE.UU. y un “territorio” que pese a determinada autonomía económica y política, continúa siendo un apéndice colonial de la metrópoli norteamericana. Y aun cuando la Constitución de 1952 disimula el verdadero carácter de las relaciones mutuas entre los EE.UU. y Puerto Rico, la práctica cotidiana del “Estado Libre Asociado” lo hace cada vez más claro.

Puerto Rico no puede resolver ninguno de sus agudos problemas (entre ellos, el problema del paro y de la emigración masiva), y ello se debe ante todo al mantenimiento del régimen colonial y a la persistente ocupación de la isla por parte de los EE.UU. Este régimen, además de en las formas mencionadas, existe asimismo en la forma

---

<sup>1</sup> Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. San Juan, 1967, p. 82.

de ocupación militar directa.

En el transcurso de muchas décadas, Puerto Rico ha desempeñado un importantísimo papel en los planes agresivos de los imperialistas norteamericanos. La isla desempeña un papel significativo en la defensa de los intereses norteamericanos en la zona del Canal de Panamá; el territorio puertorriqueño es aprovechado para organizar intervenciones en diversos países latinoamericanos; es importante para la construcción de grandes bases militares que constituyen puntos de apoyo del Pentágono durante la realización de maniobras en la cuenca del Caribe y sirve de centro de control de las comunicaciones marítimas en el Atlántico; diversas regiones de Puerto Rico se utilizan como polígonos de pruebas de nuevos tipos de armas norteamericanas; la isla sirve también de fuente permanente de suministro de carne de cañón al ejército de los EE.UU.

En las dos últimas décadas, la importancia militar de Puerto Rico ha crecido inconmensurablemente debido a los cambios políticos que se operan en los países caribeños. El deseo de los EE.UU. de aislar a Cuba revolucionaria, el peligro que corren las posiciones norteamericanas en la zona del Canal de Panamá como resultado de la concertación del nuevo tratado panameño norteamericano, la victoria de la revolución sandinista en Nicaragua, la lucha armada de las fuerzas de izquierda en El Salvador, y la activación del movimiento de liberación en Guatemala, impiden al Pentágono utilizar los ejércitos centroamericanos para sofocar las acciones revolucionarias en la región del Caribe y han acrecentado la atención de los EE.UU. hacia Puerto Rico, convirtiendo a la isla en uno de los centros de militarización de la cuenca del Caribe.

El contralmirante R. Hedges, jefe de las fuerzas navales de los EE.UU. en el Caribe, en una intervención en San Juan en diciembre de 1981, declaró que en la actualidad la importancia de las bases militares estadounidenses en Panamá, Guantánamo y Puerto Rico ha crecido inconmensurablemente. Subrayó el papel estratégico militar de Puerto Rico en los planes de la política exterior de la administración de R. Reagan, dispuesta a convertir a la isla en una fortaleza militar de los EE.UU. y en un centro para llevar a cabo acciones subversivas y de agresión directa contra las fuerzas revo-

lucionarías de los países de la cuenca del Caribe. En los últimos años el Pentágono ha realizado algunos cambios en su manera de actuar en los países caribeños y en Puerto Rico en particular. El más importante de ellos ha sido la sustitución de las viejas formas de presencia militar de los EE.UU. en la región por otras nuevas más acordes con los nuevos tiempos.

En la actualidad los EE.UU. disponen de las siguientes bases militares fundamentales en Puerto Rico: Roosevelt Roads en el Este de la isla; Campo García en la isla Vieques; el fuerte Buchanan en el distrito capitalino de San Juan; Sábana Seca al oeste de San Juan; Campo Tortuguero en la costa norte de la isla; Salinas Training Area en el sudeste de Puerto Rico; y Ramey en el noroeste de la isla.

La existencia de tantas importantes bases militares en el pequeño territorio de la isla (9 mil km<sup>2</sup>) no sólo convierte a Puerto Rico en un objetivo singular en caso de acciones militares con participación de los Estados Unidos, sino que reafirma el dominio colonial de los EE.UU. en la isla. Puerto Rico obtiene “especialización”, se transforma en fortaleza naval y es uno de los centros de la Flota de los EE.UU. en el Atlántico, donde la OTAN realiza maniobras navales, es una plaza de armas para posibles agresiones no sólo contra Cuba y los pueblos del Caribe, sino contra los pueblos latinoamericanos en general.

Además, según palabras del secretario General del Partido Socialista puertorriqueño Juan Mari Bras, en el verano de 1981 los EE.UU. iniciaron el traslado de unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico a Panamá para enviarlas a El Salvador en ayuda a la junta militar. Fue una operación realizada en secreto; es ilegítima, pues la legislación norteamericana vigente en la isla prohíbe el envío de las tropas de la Guardia Nacional fuera de los límites de los EE.UU. sin permiso previo del presidente de los EE.UU., o sin la declaración por éste del estado de emergencia, y el paso de la Guardia Nacional bajo el mando de las autoridades federales, lo que no ocurrió. Así pues, los EE.UU. intentan atraer directamente a Puerto Rico a participar en la agresión contra el pueblo salvadoreño.

Un ejemplo elocuente de la situación agudizada en Puerto Rico debida a la presencia militar de los EE.UU. y a la creciente militariza-

ción de la isla es la suerte de la pequeña isla de Vieques perteneciente a Puerto Rico.

La isla de Vieques se encuentra a unos 10 km de la isla de Puerto Rico y durante los últimos 45 años ha estado ocupada prácticamente por la flota norteamericana. La infantería marina estadounidense desembarcó en las costas de la isla ya en 1937 y comenzó la expropiación de tierras para “las necesidades estratégicas de los Estados Unidos”. Los ocupantes dejaron a la población civil sólo 8 mil acres de tierra, es decir, aproximadamente 1/5 parte de todo el territorio de la isla. Desde entonces, Vieques es uno de los polígonos de los EE.UU. La isla se ha convertido en un blanco para los ejercicios de tiro de cohetes desde el mar y el bombardeo de precisión, y se usa para el ensayo de desembarcos navales y aéreos. El Pentágono controla en la actualidad más del 70% del territorio de la isla. La expropiación de las tierras campesinas en Vieques ha sido la causa de la destrucción de la producción azucarera y la ganadería, y de la forzada emigración en masa de la población. Es difícil la situación de los pescadores, a los que se ha prohibido dedicarse a su ocupación tradicional en las proximidades de la costa, puesto que Vieques es una base importantísima de la marina de guerra de los EE.UU.

En Puerto Rico se han creado varias organizaciones que encabezan la lucha por la liberación de Vieques de los ocupantes. El 19 de mayo de 1979 un grupo de puertorriqueños fue arrestado (y luego arrojado a la cárcel) en la zona militar de la isla, donde había penetrado en señal de protesta contra las maniobras realizadas por el Pentágono. En noviembre del mismo año, uno de los presos murió a causa de las torturas en la cárcel de Tallahassee (La Florida). La demanda por la liberación de Vieques fue apoyada por organizaciones internacionales de máxima importancia: la ONU y el Movimiento de los Países No Alineados.

Sin embargo, los EE.UU. hasta el momento no han dado paso alguno para cambiar la situación. Al contrario, el Pentágono considera necesario fortalecer las posiciones de los EE.UU. en Puerto Rico y, particularmente, en Vieques. Stown, uno de los jefes del Departamento de Defensa, declaró que Vieques es la única región donde la flota puede efectuar las pruebas, realizando simultáneamente el

bombardeo desde el aire y desde el mar, desembarcando la infantería marina en condiciones parecidas a la guerra... y que no se podría mantener el nivel debido de preparación de las fuerzas de la marina y la infantería sin la utilización de Vieques.<sup>1</sup>

Una de las nuevas direcciones de la labor del Pentágono es su creciente intervención en los asuntos de la enseñanza superior. El gobierno de Reagan ha declarado que con el fin de disminuir los gastos federales en necesidades sociales, entre ellas, la enseñanza — disminución prevista en el programa económico presidencial— una de las mejores maneras de asegurar ocupación de la juventud es atraerla al servicio militar. El Pentágono pone especial empeño en la realización de estos proyectos precisamente en Puerto Rico. En agosto de 1981 en la isla se hizo circular una carta del centro de estudios de las fuerzas navales (FN) de los EE.UU. de la Florida, invitando a los jóvenes a visitar el centro e ingresar en las FN. En julio de ese año en Puerto Rico se hicieron conocer las medidas elaboradas por el gobierno de los EE.UU. (multas, tribunal, prisión), que serán aplicadas a la juventud que eluda el registro militar.<sup>2</sup>

El problema principal de la vida de la sociedad puertorriqueña sigue siendo el status político de Puerto Rico. En 1978 en el Comité de los 24 de la ONU, pese a todos los esfuerzos de los EE.UU. por impedirlo, se aprobó una resolución que por primera vez calificaba a Puerto Rico de colonia. En agosto de 1981 el Comité recomendó que el problema de Puerto Rico fuera considerado en el XXXVII período de sesiones de la Asamblea General en 1982. La resolución fue aprobada por la mayoría de los miembros de la ONU en el XXXVI período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Todo ello obliga, como es natural, a Washington a reaccionar al problema puertorriqueño. En 1976, al abandonar el cargo presidencial, Ford formuló la proposición de reconocer a Puerto Rico como el 51er. Estado de los EE.UU. Este es también el punto de vista del presidente Reagan, quien incluyó este punto en su programa electoral. En enero de 1982 Reagan reiteró que su postura en el problema de Puerto Rico era la misma que había tenido durante el programa

---

<sup>1</sup> *Claridad*, San Juan, 6-12.IV.1980.

<sup>2</sup> *Claridad*, San Juan, 11-17.IX.1981; 2-8.X.1981.

electoral y que se pronunciaba por convertir a la isla en un Estado de los EE.UU.<sup>1</sup> El presidente expuso inequívocamente los motivos de su postura. En su opinión, los EE.UU. no sólo no deben perder su poder en la isla, sino que han de utilizarla para “asegurar su dirección y la estabilidad en la cuenca del Caribe”.

El fin de los círculos gobernantes estadounidenses es perpetuar la ocupación militar de la isla. Pero la causa de la liberación de la isla se convierte hoy en causa no sólo de un número cada vez mayor de patriotas puertorriqueños, sino de todas las fuerzas progresistas del planeta.

---

<sup>1</sup> *The New York Times*. 13.1.1982.

V. LUNIN

## LOS EE.UU. Y EL CANAL DE PANAMÁ

El camino del pueblo panameño a la independencia nacional ha sido uno de los más difíciles en América Latina. La causa de ello ha sido la permanente intervención de los EE.UU. en sus asuntos internos, la que bajo diferentes pretextos y formas, continúa hasta hoy día. Washington emprendió acciones intervencionistas en el Istmo de Panamá —el lugar más conveniente para construir un canal entre los océanos Atlántico y Pacífico— mucho antes de la proclamación de la independencia de la República de Panamá, y a partir de 1903 obtuvo para ello una base permanente, “legalizada”: la “Zona del Canal de Panamá”. No por casualidad Renato Pereira, conocido político panameño, señaló que en 1903 Panamá entró en la categoría de Estado nacional independiente con su propia “enmienda Platt”.<sup>1</sup>

La creación de la “Zona del Canal de Panamá” —en realidad enclave colonial norteamericano— fue impuesta a Panamá por el tratado de 1903, cuyas disposiciones, como señaló Rómulo Escobar Bethancourt, compañero del general Ornar Torrijos, líder del movimiento de liberación nacional de Panamá, “eran una perpetua bofetada a la opinión pública panameña”.<sup>2</sup> En principio, el año 2000 debe traer a la República Panameña y a su pueblo amante de la libertad, la plena liberación. El 31 de diciembre de 1999 justamente al medio día, de acuerdo con los tratados panameño norteamericanos de 1977 (tratados Torrijos-Carter) que entraron en vigor el 1º de octubre de 1979, el territorio panameño debe ser totalmente descolonizado, terminará así la presencia militar norteamericana, y el Canal pasará a ser patrimonio nacional del Estado panameño.

La realización de esta profunda aspiración de muchas generaciones de patriotas panameños ha reclamado y reclamará aún (teniendo en

---

<sup>1</sup> R. Pereira. *Panamá: fuerzas armadas y políticas*. Panamá, 1979, p. 2.

<sup>2</sup> R. Escobar Bethancourt. *Torrijos: ¡Colonia Americana, No!* Bogotá, 1981, p. 19.

cuenta el estado actual de las relaciones entre Panamá y los EE. UU., y los intentos desembozados de las fuerzas de derecha y extremistas de los EE.UU. de frustrar el proceso de descolonización) del pueblo de este país muchos años de una lucha dura y difícil, que ha costado ya numerosos sacrificios. El 31 de julio de 1981 pereció el general Omar Torrijos en un misterioso accidente aéreo. La muerte del gran patriota panameño hizo resurgir las esperanzas en los círculos expansionistas estadounidenses de reducir a la nada los resultados de muchos años de esfuerzos del pueblo de Panamá para recuperar parte de su territorio. En las actuales circunstancias, Panamá, que cuenta con un amplio apoyo a su justa causa en todo el mundo, está dispuesta a llevar hasta la victoria su lucha por el cese de la intervención norteamericana en los asuntos internos de la República.

\* \* \*

Los primeros proyectos de construcción de un canal interoceánico en el Istmo de Panamá surgieron a comienzos del siglo XVI, pero las premisas reales para encarnar esta idea se dieron sólo en la segunda mitad del siglo XIX. La Nueva Granada (actual Colombia), parte de la cual era Panamá, no podía realizar por sí sola este plan. De esta circunstancia se aprovecharon las potencias capitalistas más importantes de aquellos tiempos —Gran Bretaña, Francia y, por supuesto, los Estados Unidos—, que se disputaron el derecho a construir y controlar después de su construcción el canal interoceánico. En el curso de esta prolongada lucha se ignoraron en realidad por completo los derechos legítimos del pueblo panameño, que aspiraba a convertir la riqueza fundamental del país —su situación geográfica— en el elemento principal de modernización de las estructuras sociales y económicas caducas de Panamá. A principios del siglo XX el joven rapaz imperialista —los Estados Unidos— logró desplazar a sus competidores y reservarse el “derecho” monopolístico a la construcción del canal.

Pisoteando groseramente el afán de autodeterminación nacional del pueblo panameño, Washington recurrió al arma probada de la política del “garrotazo” y fundó la zona del Canal de Panamá —un nue-

vo puesto de avanzada de su imperio—, que como una espada, cortó el país en dos. El 18 de noviembre de 1903, pasados sólo 15 días de la proclamación de la República de Panamá, los EE.UU., aprovechando la debilidad del joven Estado, le impusieron el Tratado Hay-Bunau Varilla. La delegación panameña que había llegado para negociar a Washington, se vio ante el hecho consumado: el tratado ya había sido convenido entre el secretario de Estado norteamericano John Hay y el presidente de la nueva Compañía del Canal de Panamá francesa, Philippe Jean Bunau Varilla, quien “representaba” los intereses de Panamá en los EE.UU.

Según las condiciones del tratado, los EE.UU. recibían “a perpetuidad” los derechos exclusivos “para la construcción, el mantenimiento, el funcionamiento, el saneamiento y la protección” del canal interoceánico (Artículo II). A Washington se le concedía un territorio de 10 millas de anchura, que recibió posteriormente el nombre de “Zona del Canal de Panamá”. Panamá cedía a los EE.UU. “todos los derechos, todo el poder y toda la autoridad”, y los Estados Unidos poseerían y gobernarían esta zona como “si ellos fueran soberanos del territorio... con entera exclusión en el ejercicio de tales derechos soberanos, poder o autoridad por parte de la República de Panamá” (Artículo III). En calidad de “garante de la independencia” de Panamá, los Estados Unidos tuvieron hasta el año 1936 “derecho” a intervenir en sus asuntos internos<sup>1</sup> “para el mantenimiento del orden público en las ciudades Panamá y Colón y en los territorios y las bahías adyacentes, en caso de que la República de Panamá, a juicio de los Estados Unidos, no fuera capaz de mantenerlo” (Artículo VII). Ello significó en la práctica, la franca arbitrariedad de Washington, que recurrió reiteradas veces a acciones intervencionistas, enviando a Panamá su infantería de la marina y sus buques de guerra.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Este derecho quedó refrendado oficialmente en la Constitución de Panamá de 1904. Véase V. F. Goytía. *Las constituciones de Panamá*. Madrid, 1954, p. 582-583.

<sup>2</sup> Thelma King, conocida personalidad política, cita en su libro una larga relación de hechos relativos a la intervención norteamericana bajo el mencionado pretexto. —Véase T. King. *El problema de la soberanía en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de América*. Panamá, 1961, p. 197-198.

El tratado de 1903, sin precedentes por su carácter en la práctica jurídica internacional, otorgaba a Washington privilegios tan grandes que le permitían ejercer una influencia decisiva en todos los asuntos de la vida de la nación panameña, la que se convirtió de hecho en un protectorado de los Estados Unidos.

En el transcurso de toda la historia de la República, el pueblo panameño ha librado una tenaz lucha por su verdadera liberación, por el restablecimiento de la integridad territorial del país, y contra la intromisión imperialista de Washington que aspira a perpetuar su presencia en Panamá. Los círculos gobernantes de Panamá también eran conscientes de que el “precio de la independencia” resultó demasiado caro y que fueron afectados sus intereses directos, ante todo los económicos. Por eso la camarilla gobernante también se manifestó por la revisión de algunos artículos del tratado de 1903; sin embargo, los nuevos tratados de 1936 y 1955 firmados entre Panamá y los EE.UU., no cambiaron en nada sustancial los “derechos” norteamericanos sobre la Zona del Canal, contribuyendo sólo a aumentar ciertamente los privilegios económico comerciales de las clases gobernantes panameñas. Los EE.UU. pasaron por alto las tesis del tratado de 1903, que fijaban objetivos meramente civiles a su presencia en Panamá: “la construcción, el mantenimiento, el funcionamiento, el saneamiento y la protección” del canal. Convirtieron la Zona del Canal en un importante centro militar y de exploración fuera de su propio territorio, sirviendo a Washington de base de transbordo para acciones intervencionistas tanto en Panamá como en otros países de América Latina. Según datos oficiales, el 68% del territorio de la Zona, hasta la fecha de la entrada en vigor de los tratados de 1977, era empleado con fines militares, en primer lugar para las bases militares norteamericanas, el 25% no era utilizado en general, y sólo el 3,6% se aprovechaba directamente en las operaciones de la navegación.

En realidad, Washington convirtió la Zona del Canal en “un Estado dentro de otro Estado” con su administración, su ejército, su policía, sus tribunales, sus escuelas, etc. La estructura militar de la zona hacía recordar un “Pentágono en miniatura”. En su territorio se encontraban 14 bases militares norteamericanas (ahora son 5). Allí se encuentra igualmente el Comando Sur de los EE.UU., que dirige las

actividades militares norteamericanas en Centroamérica y América del Sur.

En las bases militares norteamericanas existen centros especiales de entrenamiento militar para instruir en los métodos de lucha contra el movimiento de liberación en el continente. En el mayor de ellos — la “Escuela de las Américas”, fundada en 1949— cursaron enseñanza decenas de miles de soldados y oficiales de los ejércitos de los países latinoamericanos. Adjunto a la escuela, funcionan cursillos para el estudio de la táctica de la guerra de guerrillas y contraguerrillera. Allí mismo eran instruidos los militares norteamericanos que iban a Vietnam, puesto que las condiciones de la selva panameña son semejantes a las de la jungla vietnamita. En Fort Gulick se encuentran los cuarteles centrales del 8º comando de las Fuerzas Especiales (“boinas verdes”) creadas en 1962. Ahora estas fuerzas son utilizadas enérgicamente por el Pentágono en El Salvador como “consejeros” de las unidades punitivas de la junta.

Los círculos extremistas estadounidenses les reservan a Panamá y al canal un papel especial en la estrategia militar global del imperialismo norteamericano. Por ejemplo, J. Speller tituló su libro de modo categórico: *El Canal de Panamá: corazón de la seguridad de América*.<sup>1</sup> El ex congresista D. Flood, quien estaba en contra de “toda concesión” a Panamá, declaró que el canal es “la vena yugular de la defensa del hemisferio” e incluso “parte de la línea costera de los Estados Unidos.”<sup>2</sup>

Sin embargo, el pueblo panameño nunca ha considerado el canal patrimonio de los EE.UU. Tras la 2da. Guerra Mundial, se incrementó la lucha de los patriotas panameños por el restablecimiento de los derechos soberanos de su patria en la Zona del Canal. En diciembre de 1947, en vista de las amplias protestas populares, la Asamblea Nacional de Panamá votó unánimemente contra el llamado “Tratado Filós-Hines” sobre el arrendamiento a los EE.UU. de

---

<sup>1</sup> J. Speller. *The Panama Canal: Heart of America's Security*. New York, 1972, p. 3.

<sup>2</sup> *U. S. News and World Report*. Washington, 1967, July 10, vol. 63, N° 2, p. 41; U. S. Congress. House. *Panama Canal*, 1971. Hearings before the Subcommittee on Inter-American Affairs of the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives. 92 Congress. September 22 and 23, 1971, Washington, 1971, p. 12

varios territorios panameños (fuera de la Zona) para bases militares. Después de que en 1955 se firmó un nuevo tratado entre Panamá y los EE.UU., que no eliminó el foco de las contradicciones en las relaciones entre ambos países, el movimiento por la eliminación del enclave colonial continuó cobrando un carácter cada vez más radical. En 1956, cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez, vastas capas de la sociedad panameña reclamaron la nacionalización del Canal de Panamá. En mayo de 1958 los estudiantes panameños realizaron en la Zona del Canal, la “Operación Soberanía”, izando decenas de banderas panameñas en diferentes partes de la Zona.

La victoria de la Revolución Cubana tuvo una trascendencia especial en la lucha del pueblo panameño por restablecer sus derechos soberanos sobre todo el territorio del país. “Si hoy podemos sentarnos a discutir de tú a tú con el gobierno norteamericano —señaló más tarde O. Torrijos—, lo debemos en gran parte a que existe la Revolución Cubana. Después del triunfo cubano, todos los pueblos de este hemisferio somos un poco más libres.”<sup>1</sup>

En el aniversario de la República de Panamá, el 3 y el 4 de noviembre de 1959, en el país tuvieron lugar enérgicas manifestaciones antinorteamericanas en las que los patriotas panameños intentaron enarbolar la bandera nacional en la Zona del Canal. En choques con las tropas de los EE.UU. dislocadas en la Zona, fueron heridas más de 80 personas.

El 9 de enero de 1964, las fuerzas armadas de los EE.UU. cometieron el mayor ataque no provocado en la historia del país contra una manifestación pacífica de panameños que exigían a Washington el respeto de los derechos legítimos de su país. Fueron muertos más de 20 personas y centenares fueron heridas. La ola de indignación por las acciones agresivas de los militaristas norteamericanos abarcó a todo el mundo. Interviniendo en el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 de enero de 1964, el representante de la URSS en la ONU, N. Fedorenko, condenó el uso de la fuerza armada por los Estados Unidos, señalando que “el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, las tentativas de un Estado de imponer por la fuerza su voluntad a otro Estado son inadmisibles e incluso intole-

---

<sup>1</sup> *Bayano*. Panamá. 01.11.1981.

rables”.<sup>1</sup>

Bajo la presión de una pujante solidaridad con Panamá en todo el mundo y, en particular, en América Latina, Washington se vio obligado a acceder a negociar con el gobierno panameño “para procurar una pronta eliminación de las causas del conflicto entre ambos países”.<sup>2</sup>

Pero la conformidad de los Estados Unidos de negociar, de ningún modo significaba satisfacer las reivindicaciones legítimas de Panamá. En el Congreso estadounidense prevalecía la opinión de la necesidad de mantener la presencia norteamericana en el territorio panameño prácticamente invariable. La postura de los “halcones” norteamericanos se reducía a que el tratado de 1903 obligaba a Panamá a cumplir sus compromisos independientemente de si éstos agradaban o no al pueblo del país.

En cuanto a la propia Panamá, el grupo de la oligarquía burguesa latifundista (las llamadas “20 familias”) que se encontraba en el poder, aspiraba en las negociaciones ante todo a satisfacer sus estrechos intereses de clase. La primera etapa de las negociaciones concluyó a fines de junio de 1967 con la rúbrica de tres proyectos de acuerdo: el primero, sobre las condiciones de funcionamiento del canal existente; el segundo, sobre la construcción de un canal sin esclusas; y el tercero, sobre la defensa del Canal de Panamá y su neutralidad. Estos tres proyectos de acuerdos, en caso de entrar en vigor, de ninguna manera eliminarían la tensión en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, y sí ocasionarían a la soberanía nacional de la república un perjuicio no menor que el tratado Hay-Bunau Varilla. Por eso el pueblo panameño rechazó resueltamente los proyectos.

De 1967 a 1971 las negociaciones fueron suspendidas, pero en este período en Panamá tuvieron lugar acontecimientos que cambiaron de manera sustancial la situación en el país. Como resultado del golpe militar del 11 de octubre de 1968, la agrupación oligárquica

---

<sup>1</sup> ONU. Consejo de Seguridad. Documentos oficiales. Reunión 1 086 de enero de 1964. Nueva York, p. 3.

<sup>2</sup> *Status jurídico de los tratados del Canal de Panamá. 1903-1963*. Panamá, 1964, p. 293.

fue apartada de la dirección de la República. El gobierno patriótico que arribó al poder exigió a los EE.UU. reanudar las negociaciones sobre “una nueva base”. El clima internacional benéfico establecido a principios de los años 70 en virtud del cambio en la correlación de fuerzas en la palestra mundial a favor de la paz, el socialismo, la liberación nacional y el progreso, creó el fundamento para reanudar las negociaciones panameño norteamericanas sobre una base positiva para Panamá.

Presionados por la opinión pública mundial, los Estados Unidos se vieron forzados a acceder a la reanudación de las negociaciones sobre el Canal de Panamá. A los círculos oficiales estadounidenses les interesaba fortalecer sus posiciones en Panamá aunque fuera mediante algunos cambios en el status del canal. La negativa absoluta a los cambios podía haber minado la influencia norteamericana no sólo en este país, sino en toda América Latina, donde se observaba un auge del movimiento antiimperialista.

La segunda etapa de las negociaciones comenzó a fines de junio de 1971. La postura de Panamá se reducía a lo siguiente: terminar con la situación de “un Estado dentro de otro Estado”, suprimir la jurisdicción de los EE.UU. en el territorio panameño, convertir la favorable situación geográfica de Panamá en una de las fuentes principales de desarrollo del país, asegurar la integridad territorial del Estado panameño, y garantizar la explotación de las rutas interoceánicas del territorio panameño con el fin de que Panamá obtuviera las máximas ventajas económicas.<sup>1</sup>

Al reanudar las negociaciones, el gobierno de los EE.UU. declaró demagógicamente que tenía el propósito de “mostrar a América Latina y a todo el mundo cómo los Estados Unidos, una gran potencia, pueden crear un sistema de relaciones contractuales justo y mutuamente aceptable con un Estado tan pequeño como Panamá”.<sup>2</sup> Sin embargo, en realidad la administración de Nixon se disponía sólo a modificar un tanto la forma, y no el carácter de la presencia norte-

---

<sup>1</sup> J. Tack. *Memoria que presenta al Consejo de Gabinete Ministro de Relaciones Exteriores*. Panamá, 1971, p. 91-92.

<sup>2</sup> *U.S. Congress. House of Representatives. Panama Canal*. 1971, Hearings..., p. 19.

americana en el país, reservándose el derecho de intervención. La parte más reaccionaria del Congreso de los EE.UU. sustentaba posiciones más rígidas que el Washington oficial. Algunos congresistas como D. Flood y T. Abernethy, proponían, en el espíritu “de los tiempos de Teddy Roosevelt” no devolver, sino ampliar aún más la zona del canal.<sup>1</sup>

La posición de la Casa Blanca en los asuntos claves del problema, resultaba absolutamente inadmisibles para el gobierno panameño. A finales de 1972 las negociaciones llegaron otra vez a un atolladero. “Los Estados Unidos están considerando el problema con la misma mentalidad de 1903 —señaló Nicolás González Revilla, embajador de Panamá en Washington. Quieren hacer un cambio que no cambie nada. Nosotros queremos un cambio que en realidad cambie el *status quo*”.<sup>2</sup> El único resultado de las negociaciones fue el acuerdo de principio de anular la disposición del tratado de 1903 que concedía a los EE.UU. privilegios en la Zona del Canal “a perpetuidad”.<sup>3</sup>

Para sacar las negociaciones del “punto muerto”, el gobierno de O. Torrijos se dirigió en enero de 1973 al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU con la petición oficial de celebrar en Panamá del 15 al 21 de marzo de 1973 una sesión fuera de la sede del Consejo de Seguridad.

En la discusión desarrollada en la sesión en torno a numerosos asuntos de la realidad latinoamericana —la necesidad de anular las sanciones anticubanas, la lucha contra el predominio de los monopolios transnacionales en la economía de los países de la región, la necesidad de liquidar los restos del colonialismo, etc.—, los representantes de la mayoría de los países del continente apoyaron la postura patriótica de Panamá, y se solidarizaron con las demandas legítimas de su gobierno.

Merced a los esfuerzos de los países socialistas y en vías de desarrollo miembros del Consejo de Seguridad, se preparó para la votación un proyecto de resolución que llamaba a las partes a concertar lo antes posible un nuevo tratado, que “respondiera plenamente a las

---

<sup>1</sup> *Ibíd.*, p. 11. 81.

<sup>2</sup> *La Estrella de Panamá*. Panamá, 18.11.1972.

<sup>3</sup> *Panama Tribune*. 27.05.1972.

aspiraciones legítimas de Panamá y garantizara el pleno respeto de la soberanía efectiva de Panamá sobre todo su territorio”.<sup>1</sup> Sin embargo, cuando este proyecto fue puesto a votación, el embajador de los EE.UU., J. Scali, como escribió la revista *Newsweek*, “sacó su propia versión del garrotazo: un fino lápiz amarillo, y vetó firmemente la proposición”.<sup>2</sup>

No obstante, la sesión fue un gran éxito para Panamá: su postura en las negociaciones obtuvo reconocimiento internacional. El vasto apoyo internacional y, lo que sobre todo preocupó a Washington, la creciente solidaridad de otros países latinoamericanos con Panamá, obligó a una parte de los círculos gobernantes de los EE.UU. a modificar ciertamente su criterio respecto al problema del canal. Después de la sesión, la administración Nixon manifestó una mayor disposición a un compromiso con Panamá, puesto que el problema, trascendiendo los marcos de un conflicto entre dos países, se había convertido en uno de los problemas claves del conjunto de las relaciones de Washington con América Latina. La revista norteamericana *U. S. News and World Report* escribió con este motivo que en las negociaciones en torno al canal “la apuesta es más que propiamente Panamá” y que el desenlace de las negociaciones sería “importante en las relaciones de los EE.UU. con toda América Latina”.<sup>3</sup>

Las negociaciones terminaron sólo en 1977. La nueva administración de J. Carter, que llegó al poder en enero de 1977, se planteó el objetivo de crear “un nuevo sistema” de relaciones con América Latina en el que ocuparon un lugar preferencial los métodos de presión oculta y las tentativas de prevenir el auge revolucionario mediante reformas parciales. Uno de los problemas más sustanciales que dividían a las dos Américas era el problema del Canal de Panamá. “Si el problema del canal se resuelve —subrayó J. Carter poco antes de asumir el cargo presidencial—, América Latina podrá de nuevo convertirse en el laboratorio de las políticas de los Estados

---

<sup>1</sup> Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/10931/Rev. I, 20 de marzo de 1973.

<sup>2</sup> *Newsweek*, New York, 2.04.1973, p. 16.

<sup>3</sup> *U. S. News and World Report*, 18.02.1974, p. 64.

Unidos hacia los países subdesarrollados”.<sup>1</sup>

En septiembre de 1977 en presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del hemisferio occidental (a excepción de Cuba), J. Carter y O. Torrijos firmaron en Washington los nuevos tratados sobre el Canal de Panamá. Estos tratados fueron el resultado de un compromiso y, por consiguiente, no pueden considerarse como un arreglo definitivo del problema del canal en interés del pueblo panameño; no obstante, constituyen un instrumento importante de descolonización de la Zona del Canal.

Los tratados de 1977<sup>2</sup> son todo un sistema de acuerdos entre Panamá y los EE.UU., que incluyen el Tratado del Canal de Panamá propiamente (tratado básico), tratados adicionales donde se encuentran elaborados los detalles de algunos artículos del tratado básico (los Artículos III y IV), el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá, y varias adiciones.

El tratado básico prevé la anulación de todos los tratados anteriores entre Panamá y los EE.UU.; la liquidación del enclave colonial norteamericano —la Zona del Canal—; la liquidación de los anteriores órganos jurídico administrativos de los EE.UU., encargados del funcionamiento del canal y de la administración de la zona —la Compañía del Canal de Panamá y la administración de la zona (Artículo I, p. 10)—; y el establecimiento de un plazo fijo de vigencia del nuevo tratado: hasta el 31 de diciembre de 1999 inclusive (Artículo II).

La eliminación de la Zona del Canal significa que se restablece plenamente la autoridad de Panamá como soberano territorial en la antigua zona. En señal del reconocimiento de la plena soberanía nacional de Panamá, su bandera estatal se alzó sobre todo su territorio, inclusive en la Zona. Después del 31 de diciembre de 1999 el canal y las construcciones auxiliares pasarán por completo al poder de Panamá.

Junto con el restablecimiento de la jurisdicción nacional de Panamá

---

<sup>1</sup> *Diálogo Social*. Panamá, 1980, N. 119, p. 18.

<sup>2</sup> *Tratado del Canal de Panamá (Torrijos-Carter)*. Panamá, 7.09.1977.

sobre el territorio de la antigua zona, el tratado básico reconoce la “responsabilidad principal” de los Estados Unidos de la administración, el funcionamiento y la defensa del canal durante el plazo de vigencia de este documento, es decir, hasta el fin de siglo. La Comisión del Canal está encabezada por un consejo directivo compuesto de nueve miembros —cinco norteamericanos y cuatro panameños— designados por el gobierno de Panamá y confirmados por los EE.UU. Hasta el 1° de enero de 1990 el cargo de administrador del canal será ocupado por un norteamericano, y luego por un panameño.

El Artículo XII, p. 5, fija que sin el acuerdo de Panamá, los Estados Unidos no pueden utilizar técnicas nucleares en los trabajos de excavación en el territorio de la República en caso de que se construyera un nuevo canal.

Panamá recibirá de la explotación del canal una ganancia considerablemente mayor: unos 80 millones de dólares anuales frente a los 1.930 dólares que obtenía antes según el tratado de 1955. Los Estados Unidos se comprometieron a conceder a la República importantes créditos para la construcción de viviendas, la compra de armamentos, etc.

Panamá y los Estados Unidos asumirán conjuntamente la responsabilidad de la defensa del canal interoceánico, y la participación de los panameños irá en aumento. Al expirar el plazo de vigencia del tratado, la República recibirá los derechos exclusivos a la administración del canal, el mantenimiento de las fuerzas armadas, y la creación de objetivos defensivos en todo el territorio nacional.

Precisamente en las cuestiones relacionadas con la defensa del canal, persisten elementos lesivos a Panamá. No por casualidad, O. Torrijos declaró que el Istmo de Panamá quedará “bajo la sombrilla protectora del Pentágono”<sup>1</sup>.

Según un acuerdo a cumplir —en el Artículo IV del tratado básico—, se prevé que Panamá conceda a los Estados Unidos “regiones de defensa” (5 en total) y la creación de numerosas “regiones de coordinación militar” para las operaciones conjuntas de las fuerzas

---

<sup>1</sup> *U. S. News and World Report*. September, 19, 1977, vol. 83, N° 12, p. 21.

armadas de Panamá y los EE.UU. Washington consiguió el derecho a la presencia de sus tropas en suelo panameño en tiempos de paz hasta el año 2000. Ninguno de los tratados anteriores otorgaba este derecho a los norteamericanos. La presencia de las fuerzas armadas de los EE.UU. y sus 14 bases militares fue resultado de acciones unilaterales de Washington.

Según un acuerdo especial relativo a las actividades norteamericanas no vinculadas directamente con el canal (acuerdo que constituye parte integrante de los tratados de 1977), luego de entrar en vigor este documento, Washington tiene derecho a continuar la instrucción de militares de los ejércitos de los países latinoamericanos en centros docentes especiales, y ante todo en la “Escuela de las Américas”, al menos en el transcurso de cinco años. En el territorio panameño queda también el Mando Sur de los EE.UU.

La presencia militar de los EE.UU. debe terminar formalmente al expirar el plazo de vigencia del tratado básico (el 31 de diciembre de 1999); sin embargo, Washington considera el Artículo IV del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá, como un derecho que le permitirá realizar acciones unilaterales con el fin de asegurar la neutralidad de la vía interoceánica.<sup>1</sup> Es decir que los EE.UU. podrán utilizar sus fuerzas armadas allí también después del año 2000.

Según el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal, el canal podrá ser usado por los barcos de todos los países, tanto en tiempos de paz como de guerra, sobre una misma base no discriminatoria (Artículo III); pero el tratado prevé también el derecho al paso rápido e incondicional a través del canal de los buques de guerra norteamericanos (Artículo VI), lo cual contradice realmente el artículo arriba mencionado.

---

<sup>1</sup> Del texto de este artículo se desprende que los EE.UU. no pueden emprender acciones para asegurar la neutralidad del canal sin el consentimiento de Panamá; sin embargo, durante la discusión del tratado en el Congreso, parte de los legisladores norteamericanos pidió garantías para acciones unilaterales de los EE.UU. e insistió en un encuentro entre Carter y Torrijos, el cual tuvo lugar en octubre de 1977 en Washington, donde el presidente norteamericano logró precisamente tal interpretación del Artículo IV. De tal modo, ya después de firmados los tratados, surgieron divergencias en la interpretación de algunos de sus artículos.

La neutralidad del canal es garantizada no por la Organización de las Naciones Unidas, sino sólo por Panamá y los EE.UU. (de hecho, sólo por los EE.UU.), lo que resta eficiencia al régimen de neutralidad (por ejemplo, cuando en las operaciones militares participen tropas norteamericanas). Con vistas a atenuar algo este punto negativo, el Tratado viene acompañado del Protocolo (cuya depositaria es la OEA), que comprende una exhortación a todos los países del mundo a adherirse al documento ideado para asegurar garantías multilaterales del régimen de neutralidad del Canal de Panamá.

El riesgo de que las autoridades estadounidenses intentaran extirpar la sustancia anticolonial de los tratados de 1977, surgió ya en la discusión y la ratificación de los tratados a fines de 1977 y comienzos de 1978.

Panamá fue quien primero aprobó los tratados. Acorde con la Constitución de 1972, a fines de octubre de 1977 tuvo lugar un referéndum nacional en el que el 66% de los votantes apoyó los tratados, pese al llamado de los círculos reaccionarios a oponerse. Sintomáticamente, durante la ratificación de los tratados, los esfuerzos de los círculos reaccionarios de los EE.UU. y Panamá se unificaron, tendiendo a impedir la firma de los nuevos tratados sobre el canal. Ronald Reagan, entonces futuro presidente de los EE.UU., quien encabezó el movimiento para impedir el proceso de ratificación, declaró que los tratados sobre el canal eran un reflejo de la “debilidad” de Washington y la continuación de una cadena de “repliegues” y “fracasos” en la política norteamericana en el mundo.<sup>1</sup>

En el curso de la discusión y la ratificación de los tratados en el Senado, fueron introducidas varias “reservas” para “especificar” los derechos de los EE.UU. En particular, el 16 de marzo de 1978 durante la ratificación del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, el Senado aprobó la llamada “reserva de De Concini”, conforme a la cual los Estados Unidos obtenían el “derecho” a intervenir militarmente en Panamá para asegurar el “funcionamiento normal” del canal. Esta “especificación” provocó indignación en Panamá, puesto que alte-

---

<sup>1</sup> R. Reagan. *The Canal as Opportunity: a New Relationship with Latin America*. “Orbis”, Philadelphia, 1977, vol. 21, N° 3, p. 547-563.

raba el espíritu y la letra de los tratados Carter-Torrijos.

Para asegurar a Panamá que los EE.UU. no tenían intención de vulnerar la independencia política o la integridad territorial del Estado panameño, el 18 de abril de 1978, durante la aprobación en el Senado del tratado básico sobre el Canal de Panamá, se aprobó, en particular, otra reserva (entre las demás) propuesta por R. Byrd, líder de la mayoría demócrata, H. Baker, líder de la minoría republicana, el senador F. Church y el propio De Concini. La nueva reserva perseguía el propósito de dar una “justa interpretación” a la difamada reserva de De Concini. El texto casuístico de las reservas permite suponer que Washington las puede interpretar amplia y arbitrariamente. Es más, resulta incomprensible, por ejemplo, cómo partiendo de las dos reservas mencionadas, se puede tomar medidas que se excluyen recíprocamente: llevar tropas norteamericanas al territorio de Panamá y “no vulnerar” al mismo tiempo su integridad territorial y su independencia política.

La tarde del 18 de abril de 1978, cuando en Panamá se conoció la noticia de que el Senado norteamericano había ratificado el tratado básico sobre el canal interoceánico, el general O. Torrijos, jefe del gobierno de Panamá, pronunció un discurso que puso de relieve el patriotismo y la resolución del mando de la Guardia Nacional para terminar con el enclave colonial en el territorio nacional. Como declaró O. Torrijos, en el caso de que se frustraran las negociaciones, el alto mando militar y político de la República tenía elaborado un plan especial de destrucción de las esclusas del canal —la “operación agua”— que se mantenía en riguroso secreto. Ornar Torrijos dijo con este motivo: “Y sé que cuando a un pueblo se le cierran todas las rutas de negociación pacífica, a quienes dirigimos no nos queda otro camino que elegir la ruta de la liberación nacional violenta. Así que en la madrugada de mañana se inicia otra etapa de lucha...”<sup>1</sup>

La firma de los nuevos tratados sobre el canal significó que la lucha del pueblo panameño por la completa descolonización del territorio nacional pasaba a un terreno práctico. Consiguiendo el instrumento jurídico para alcanzar sus objetivos, los panameños aspiran ahora a

---

<sup>1</sup> Cítase de R. Escobar Bethancourt. *Op. cit.*, p. 12-13.

obligar a Washington a observar estrictamente las disposiciones de los tratados sobre la liquidación del enclave colonial, el paso gradual del canal y sus instalaciones a la administración de Panamá, la reducción y en fin de cuentas, la eliminación de la presencia militar norteamericana. La vida muestra que esta etapa de la lucha de Panamá por sus justos derechos no es menos complicada que en los años precedentes.

En la situación internacional agudizada por Washington a fines de los años 70 y principios de los 80, aumentó la presión sobre Panamá por parte de los círculos más belicistas de los EE.UU., que pretenden reducir a la nada los resultados de la lucha del pueblo y el gobierno panameños por la liquidación del enclave colonial en el territorio nacional. El pretexto de turno para presionar fue el propio procedimiento constitucional en los EE.UU., que, además de la concertación de los tratados, prevé la aprobación por las dos cámaras del Congreso norteamericano (a diferencia de la ratificación) de la denominada ley sobre el cumplimiento, según la cual se instituirían los nuevos órganos jurídico administrativos para la dirección del canal y se financiarían sus labores.

Aprovechando esta oportunidad, el Congreso, unos días antes de entrar en vigor los tratados Torrijos-Carter, promulgó la ley 96-70 (“ley de Murphy”), por la cual se cercenaba sustancialmente la autonomía de la Comisión del Canal de Panamá, puesto que el financiamiento de sus actividades era sometido a un riguroso control por el Congreso, el cual se valió de esta prerrogativa para reducir bruscamente los recursos necesarios para mantener el funcionamiento normal del Canal de Panamá. Panamá se vio privada de las cantidades fijas de los pagos directos por la explotación del canal, que ahora se hacían depender de la rentabilidad del funcionamiento del canal. De acuerdo con esto, se infringía la legislación laboral establecida en los tratados de 1977. Aparte de eso, al presidente de los EE.UU. se le otorgaba el “derecho” a militarizar “en caso de necesidad” de forma unilateral el canal, y a poner el propio canal bajo administración del Pentágono. Un abierto desafío a Panamá, fue la disposición de la “ley Murphy” según la cual y en contradicción flagrante con el Artículo V del tratado sobre la neutralidad y el funcionamiento del Canal de Panamá, “los intereses supremos de los

Estados Unidos exigen que sus tropas y sus bases deben mantenerse aún después del año 2000”.<sup>1</sup> En sus cartas del 11 de julio de 1979 y del 9 de enero de 1980, el presidente de Panamá, A. Royo, expresó a J. Carter una resuelta protesta con motivo de esta ley, que contradice el espíritu y la letra de los tratados de 1977. A. Royo recalcó que la interpretación unilateral de los tratados por parte de Washington constituye el problema principal en las relaciones entre ambos países. En consecuencia, los nuevos tratados no han podido “poner fin a las causas del conflicto bilateral”.<sup>2</sup>

El 27 de mayo de 1980 el Departamento de Estado norteamericano en su respuesta oficial al gobierno panameño, se manifestó en defensa de la “ley de Murphy”, lo que prueba el deseo tenaz de Washington de extirpar bajo uno u otro pretexto, el contenido anticolonialista de los tratados Torrijos-Carter.

Después de entrar en vigor los tratados y restablecerse la jurisdicción nacional de Panamá en la antigua Zona (ahora “Área del Canal de Panamá”), la República recuperó la mayor parte de su territorio, los puertos oceánicos Cristóbal y Balboa, las islas Naos, Perico, Culebra y Flamenco, el Ferrocarril de Panamá, muchas instalaciones, edificios, etc. Según declaró el gobierno de A. Royo, parte considerable de los bienes y las instalaciones recibidas se encontraban en estado de abandono.

Después de acceder al poder la administración de R. Reagan, Panamá se ha visto sometida a presiones, chantajes y amenazas aún mayores. En los EE.UU. cobraron vigor las posiciones de los círculos ultraderechistas que recuerdan con nostalgia los “viejos buenos tiempos” de Theodore Roosevelt y su política del “gran garrote” reforzada por la “diplomacia de las cañoneras”. Estos círculos, sin reparar en nada, aspiran a resucitar de nuevo con métodos colonizadores la “grandeza de antaño” de los Estados Unidos, a restablecer no sólo “el imperio invisible”, sino sus fortalezas visibles: entre ellas, el enclave colonial en suelo panameño: la Zona del Canal de Panamá.

Pese a las insistentes demandas de Panamá de revisar la “ley de

---

<sup>1</sup> *Bayano*, 04.12.1979, 18.10.1980.

<sup>2</sup> *Latin America Weekly Report*. London, 1980, N° 3, p. 6.

Murphy”, esta está todavía en vigor. Más aún, las bases norteamericanas en la región del Canal de Panamá se emplean activamente, no para la defensa del canal, sino para la ayuda masiva a la junta salvadoreña y a otros regímenes antipopulares. En febrero de 1981, en contra de las exigencias de la parte panameña y vulnerando los tratados sobre el canal, el Pentágono realizó en la antigua zona las maniobras militares *Black Hawk IV* (“Halcón negro IV”).

Al no encontrar en Washington una respuesta positiva a sus reivindicaciones legítimas, el gobierno panameño decidió llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de sus relaciones con los EE.UU. En su intervención en el XXXVI período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Panamá, Arístides Royo, citó una larga relación de infracciones a los tratados sobre el canal cometidas por los Estados Unidos, subrayando que Washington quiere entregar a Panamá en el año 2000, no un canal interoceánico, sino “una chatarra inútil”.<sup>1</sup>

Alternando los métodos de presión abierta y oculta con medidas provocadoras, Washington no cesa en su empeño de desestabilizar la situación política en Panamá para hallar así un “motivo” para intervenir directamente en los asuntos internos de la República de Panamá so pretexto de la “defensa del canal” y de este modo restablecer sus dominios en tierras panameñas.

---

<sup>1</sup> *Bayano*, 17.10.1981; *Granma*, 03.10.1981.

N. LUTSKOV

## VEINTE AÑOS DE OCUPACIÓN DE HAITÍ

En 1915, los Estados Unidos desembarcaron sus tropas en la República de Haití y las mantuvieron allí hasta 1934. En los años de la intervención armada y la ocupación, los norteamericanos aplicaron todo el arsenal de medios militares, políticos y económicos para reafirmar su indivisible dominio en este país.

La República de Haití —pequeño Estado de las Indias Occidentales— ocupa la tercera parte occidental de la isla del mismo nombre y linda al Este con la República Dominicana. La isla fue descubierta por Colón en 1492 y fue una de las primeras colonias españolas en América. En 1697 su parte occidental pasó a Francia, que fundó allí la colonia Santo Domingo. La guerra revolucionaria de los esclavos negros a finales del siglo XVIII por su liberación social y contra el yugo colonial, condujo a la creación en 1804 de la República Independiente de Haití, que fue la primera revolución anticolonialista en Latinoamérica.

Después de triunfar la revolución, el pequeño grupo de colonizadores blancos fue expulsado de Haití. El poder pasó a manos de los grandes latifundistas locales —mulatos y negros—. En 1825 Francia accedió a reconocer la independencia de Haití por una compensación de 150 millones de francos pagada a los antiguos latifundistas por las tierras y los bienes confiscados. El erario estaba vacío y para hacer el primer pago el gobierno tuvo que pedir a los banqueros franceses un empréstito de 30 millones de francos. La amortización del empréstito y el pago de la compensación (rebajada posteriormente a 60 millones de francos) constituyeron un penoso fardo para la economía haitiana. Todo ello ejerció una influencia nefasta en el sucesivo desarrollo económico de la república de los negros y en el estado de sus finanzas.

La enconada rivalidad de las diversas facciones dentro de la camarilla gobernante en la lucha por el poder fue causa de numerosos gol-

pes de Estado. La élite gobernante de Haití, ocupada en querellas intestinas, hacía bien poco por desarrollar la economía y no podía, y a veces no deseaba, proteger al país de la expansión del capital extranjero. Entre 1913 y 1914, cerca del 80% de los ingresos estatales se destinaba a pagar los compromisos sobre empréstitos exteriores e interiores.<sup>1</sup> La República de Haití arribó a la época del imperialismo con un profundo atraso, extenuada por guerras civiles, e incapaz de defender sus derechos.

La penetración del capital norteamericano en Haití comenzó en la segunda mitad del siglo pasado. A inicios del siglo XX, los EE.UU. reavivaron la lucha por monopolizar el mercado haitiano; sin embargo, los capitales franceses ocupaban entonces una posición predominante en la economía haitiana.

En septiembre de 1910, el gobierno haitiano firmó un acuerdo con los banqueros franceses para un empréstito de 65 millones de francos. El gobierno puso el nuevo Banco Nacional de la República de Haití en manos de financieros franceses. El empréstito se aseguraba con los ingresos de las aduanas. En octubre de 1920, los EE.UU. protestaron ante el gobierno haitiano por el establecimiento del monopolio financiero, que según el Departamento de Estado, “era perjudicial a los intereses norteamericanos”.<sup>2</sup>

Bajo presión de los EE.UU., los representantes de los círculos bancarios franceses accedieron a permitir la participación de los norteamericanos en las actividades del Banco Nacional de la República de Haití. En 1912 fue nombrado vicepresidente del Banco Nacional el norteamericano R. Farnham, quien ocupaba al mismo tiempo el cargo de vicepresidente del National City Bank neoyorquino.

En 1911 se concedió a una compañía neoyorquina estrechamente relacionada con el National City Bank, la construcción del ferrocarril entre Puerto Príncipe, la capital de Haití, y la ciudad de Cap-

---

<sup>1</sup> *Inquiry into Occupation and Administration of Haiti and Santo Domingo*. Hearings before a Select Committee on Haiti and Santo Domingo. United States Senate. 67th Congress, 1st and 2d Sessions. U.S. Government Printing Office (más adelante – Hearings). Washington, 1922, p. 1232.

<sup>2</sup> R. L. Buell. *The American Occupation of Haiti*. – Foreign Policy Association, Information Service. New York, 1929, vol. 5, p. 334.

Haitien. En tres años la compañía construyó varios trechos aislados con una extensión total de 108 millas. En agosto de 1914 el gobierno haitiano comunicó a la dirección de la compañía que estaba dispuesto a anular el acuerdo y privar a la compañía del derecho a la concesión en vista de que no cumplía los compromisos contraídos. El vicepresidente del Banco Nacional, Farnham, que era entonces presidente de la compañía ferroviaria, pidió ayuda al Departamento de Estado de los EE.UU., a pesar de que según lo acordado, la compañía había prometido no acudir a la intervención diplomática. El 23 de septiembre de 1914, el secretario de Estado, W. Bryan, declaró al gobierno haitiano que en caso de peligro para los bienes norteamericanos, los EE.UU. “tomarán las medidas necesarias para proteger los derechos de la compañía”.<sup>1</sup> Esta fue una de las primeras amenazas abiertas del gobierno estadounidense al pequeño país.

Los grupos financieros norteamericanos, interesados en un ambiente favorable para sus actividades, exigían al gobierno de los EE.UU. intervenir activamente en los asuntos de Haití. Farnham, valiéndose de su cargo de “consejero” para los asuntos de Haití en el Departamento de Estado, insistía en establecer el control de los EE.UU. sobre las aduanas para “estabilizar” la situación política dentro del país y limitar la influencia francesa y alemana en la República.

Washington apoyó las demandas de los banqueros norteamericanos. El 2 de julio de 1914, el Departamento de Estado envió al presidente Oreste Zamor un proyecto de acuerdo norteamericano haitiano. Alegando el “estado insatisfactorio de los ingresos y las finanzas” de Haití, Washington propuso al gobierno firmar un acuerdo sobre la entrega a los norteamericanos de la administración de las aduanas y el paso a los EE.UU. del control sobre los gastos del Estado con vistas a “afianzar las finanzas del país sobre una base firme”. El Artículo IX del proyecto de acuerdo daba a los Estados Unidos el derecho a tomar las medidas necesarias para “cumplir todas las condiciones previstas en el presente acuerdo”, es decir, el derecho a intervenir en los asuntos internos de Haití.

Aprovechando la inestable situación del presidente Zamor (en aquel

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1915, Washington, 1924, vol. 1, p. 538.

tiempo el general D. Theodore había comenzado una sublevación antigubernamental en el Norte de Haití), los EE.UU. demandaron la firma del acuerdo a cambio de su apoyo al gobierno haitiano. El presidente rehusó, pero el sabotaje financiero del Banco Nacional debilitó aún más su precaria situación. En septiembre de 1914, el Banco Nacional rescindió el llamado “convenio presupuestario”, según el cual concedía préstamos al gobierno. A fines de octubre, el presidente Zamor pidió ayuda a los EE.UU., y de este modo el gobierno norteamericano obtuvo el pretexto para intervenir directamente en los asuntos de Haití. El 29 de octubre fueron enviados a Puerto Príncipe el buque militar *Hancock* con 800 *marines* y el buque de línea *Kansas*. Pero los barcos norteamericanos tardaron: el presidente Zamor dimitió y abandonó el país el 30 de octubre. Ese mismo día la capital fue ocupada por las tropas del general Theodore, que el 7 de noviembre fue proclamado presidente de Haití.

El Departamento de Estado envió el proyecto de acuerdo norteamericano haitiano al nuevo gobierno. Esta vez Washington no se limitó a demandar un acuerdo sobre la transferencia a los EE.UU. del control sobre las aduanas y los gastos estatales. El Departamento de Estado condicionó igualmente el reconocimiento al gobierno de Theodore, al arreglo de todas las cuestiones litigiosas entre el Banco Nacional, la compañía ferroviaria y el gobierno haitiano, y a la firma de un acuerdo especial sobre el puerto Le Mole Sant Nicolas.

Con tal de colocar al gobierno en una situación difícil y obligarlo a aceptar las condiciones de los EE.UU., el Banco Nacional decidió pasar al National City Bank de Nueva York parte de las reservas de oro de Haití. Los EE.UU. pusieron un buque de guerra a disposición del banco. El 17 de diciembre de 1914, los *marines* desembarcaron en la capital haitiana y sustrajeron de las cajas fuertes del Banco Nacional una cantidad de oro por la suma de 500 mil dólares. El Departamento de Estado justificó esta acción con la necesidad de “proteger los intereses norteamericanos, que estaban siendo gravemente amenazados”.<sup>1</sup>

En enero de 1915, se izó la bandera norteamericana en lugar de la francesa sobre el edificio del Banco Nacional, con lo cual se demos-

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1914, p. 380.

traba el paso del banco a la protección de los Estados Unidos. Simultáneamente los banqueros norteamericanos reforzaron la presión sobre su propio gobierno. En una carta a Bryan Farnham, amenazaban con reducir las actividades de todas las empresas norteamericanas en el país, si los EE.UU. no intervenían en los asuntos de Haití.

Las acciones del Banco Nacional agravaron la situación política de por sí inestable en el país. El presidente Théodore, que no llegó a ser reconocido por los EE.UU., pronto fue derrocado. El poder pasó a manos del general V. G. Sam. El Departamento de Estado repitió sus proposiciones y condicionó el reconocimiento al nuevo presidente a una solución satisfactoria del problema aduanero. En marzo y mayo, los EE.UU. enviaron a Puerto Príncipe dos delegaciones intentando imponer a Haití el acuerdo de las aduanas. En caso de fracasar las negociaciones, Washington pensaba recurrir a la fuerza armada. El secretario de Estado Bryan, comunicó al presidente Wilson, que en cuanto a la intervención no restaba sino determinar “el tiempo y la manera” de su realización.<sup>1</sup>

Ya en noviembre de 1914, el Departamento de la Marina de Guerra de los EE.UU. había elaborado el plan de desembarcar tropas y ocupar Puerto Príncipe. El pretexto para efectuar este plan debía ser un golpe de Estado.<sup>2</sup> Desde el verano de 1914 en las aguas territoriales de Haití había buques de guerra norteamericanos con infantería a bordo.

A comienzos de junio de 1915, la situación política en el país de nuevo se agravó. En el norte de Haití levantó un movimiento el ex ministro de Asuntos Interiores, Rosalvo Bobo, que se pronunció contra la entrega del control sobre las aduanas a los EE.UU. y contra su intervención en los asuntos de Haití. El 27 de julio de 1915, los partidarios de Bobo atacaron el palacio presidencial en Puerto Príncipe. El presidente Sam se refugió en la embajada francesa, ordenando previamente fusilar a 173 presos políticos. Esta acción provocó una explosión de ira entre los habitantes de la capital. El 28 de julio, después de que los representantes de la embajada se nega-

---

<sup>1</sup> The Hispanic American Historical Review. May 1940, vol. 20, N2, p. 225.

<sup>2</sup> H. Schmidt. *The United States Occupation of Haiti. 1915-1934*. News Brunswick, 1971, p. 64-65.

ron a entregar al presidente, varios hombres penetraron en el edificio, sacaron a Sam a la calle y le dieron muerte. En esos momentos en la bahía de Puerto Príncipe entraba el buque insignia del contralmirante W. Caperton con la infantería marina de los EE.UU. a bordo. Había recibido la orden de realizar el desembarco en Haití para “proteger los intereses norteamericanos y foráneos”.<sup>1</sup> Así comenzó la intervención armada estadounidense en Haití.

Las declaraciones del Departamento de Estado de que los EE.UU. habían realizado la intervención armada para restablecer el orden y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos norteamericanos no correspondían a la realidad. Más tarde el contralmirante Caperton reconoció que la vida y los bienes de los ciudadanos extranjeros en Haití no corrían ningún peligro.<sup>2</sup> Los diplomáticos norteamericanos pretendieron justificar la intervención con consideraciones estratégico militares, en particular con la necesidad de no permitir que Alemania estableciera su control en Haití; sin embargo, en los años 1914 y 1915 la situación militar en la región del Caribe excluía prácticamente cualquier posibilidad de intervención en Haití por parte de Alemania.

El desembarco de los infantes de marina norteamericanos cambió bruscamente la situación política en el país. Las acciones de Bobo contra la intervención foránea en los asuntos de Haití constituían el principal obstáculo en la realización de los planes expansionistas de los EE.UU. El mando norteamericano hizo todo lo posible por impedir que fuera elegido un presidente del país. Caperton buscaba un candidato que aceptara todas las condiciones de los EE.UU. y, ante todo, la de entregarles el control de las finanzas.

Al chocar con la renuencia de los políticos importantes a convertirse en presidentes peleles, el mando estadounidense se dirigió al presidente del Senado, Philippe S. Dartiguenave, representante de la parte de la camarilla gobernante haitiana que manifestaba una abierta disposición a colaborar con las autoridades norteamericanas. Esta circunstancia puede explicar la decisión de los estadistas estadounidenses de conservar en Haití los órganos de administración naciona-

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1915, vol. 1, p. 475.

<sup>2</sup> *Hearings*, p. 358-359.

les. El secretario de Estado, R. Lansing, escribió a Wilson: “Creo que no será muy difícil establecer el control sobre el gobierno y el presidente, así como sobre el Congreso haitiano”.<sup>1</sup> En las negociaciones con los representantes de las autoridades militares de los EE.UU., Dartiguenave prometió, en caso de ser elegido, cumplir las condiciones exigidas por los Estados Unidos.

Caperton recomendó elegir a Dartiguenave. Lansing apoyó al contralmirante en un telegrama del 9 de agosto: “Puede autorizar la elección del presidente. Los Estados Unidos prefieren la elección de Dartiguenave”.<sup>2</sup> El 12 de agosto de 1915, en presencia de la infantería de la marina norteamericana, la Asamblea Nacional eligió a Dartiguenave presidente de Haití por un período de 7 años.

Inmediatamente tras las elecciones, los EE.UU. presentaron al nuevo gobierno un convenio con la condición de firmarlo “sin modificaciones”. Ese convenio, según palabras de Lansing, daba a los EE.UU. “un control mucho mayor que el acuerdo inicial”, o sea, el que los EE.UU. habían pretendido imponer a Haití antes de la intervención.

Las nuevas demandas presentadas a Haití provocaron brucas protestas en el país. Incluso el gobierno títere se negó a firmar el documento en la forma ofrecida por los EE.UU. El Departamento de Estado advirtió a Dartiguenave de que si su gobierno no firmaba pronto el convenio, se establecería la administración militar de los EE.UU. en Haití. Al propio tiempo la infantería de la marina norteamericana tomó las aduanas bajo su control. Ahora el financiamiento del gobierno haitiano dependía directamente de las autoridades de ocupación. En el país se impuso el estado de sitio, se instituyeron tribunales militares y se limitó la libertad de prensa. Al fin, el 16 de septiembre de 1915, el convenio norteamericano haitiano fue firmado; pero, según la Constitución, debía ser ratificado por la Asamblea Nacional de Haití. Para obligar a los órganos legislativos haitianos a ratificar cuanto antes el convenio, el contralmirante Caperton dio al Banco Nacional instrucciones de no dar dinero al gobierno haitiano para los gastos corrientes.

---

<sup>1</sup> *The Lansing Papers* 1914-1920. Washington, 1940, vol. 2, p. 534.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

El 6 de octubre la Cámara de Representantes del Congreso de los EE.UU. ratificó el convenio; sin embargo, el Senado haitiano mantenía su resistencia. Caperton recibió la orden de “eliminar toda oposición y asegurar la inmediata ratificación”.<sup>1</sup> El 11 de noviembre, bajo presión de las autoridades de ocupación, el Senado aprobó el convenio.

El convenio de 1915 preveía la designación para Haití de un consejero financiero y un recaudador de tarifas aduaneras, quienes recibirían amplios poderes para la administración de las finanzas del Estado. El gobierno haitiano no tenía derecho a tomar empréstitos ni cambiar las tarifas aduaneras sin permiso de los EE.UU. De acuerdo con el convenio, el gobierno debía formar un cuerpo de gendarmes bajo la dirección de oficiales norteamericanos. El Artículo XIV estipulaba que “en caso de necesidad, los EE.UU. tomarán medidas efectivas para asegurar la independencia de Haití y sostener en el poder a un gobierno capaz de proteger la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos”. Este artículo se convirtió de hecho en el fundamento jurídico para mantener el régimen de ocupación en el país.

El pueblo haitiano ofreció resistencia a los invasores norteamericanos desde el primer día de su aparición en la isla. La resistencia cobró especial fuerza luego de formarse el gobierno títere de Dartiguenave. Los insurrectos se negaban a reconocer al testaferro norteamericano declarando la guerra al “gobierno existente y a los ocupantes norteamericanos”. Los EE.UU. hicieron todo para quebrar cuanto antes la resistencia del pueblo haitiano. Sólo en octubre de 1915, los norteamericanos lograron ocupar las principales ciudades y baluartes de los insurrectos al noreste de Haití. La infantería de la marina castigaba severamente a los participantes en la lucha de liberación. En noviembre se logró acabar en lo fundamental con la resistencia, pero las autoridades norteamericanas no consiguieron “apaciguar” por completo el país.

Los EE.UU. ocuparon todo el territorio de la república y procedieron a formalizar jurídicamente el régimen de ocupación militar. Todas las Constituciones de la República de Haití promulgadas

---

<sup>1</sup> *Hearings*, p. 394, 1490.

después de proclamada la independencia en 1804, prohibían a los extranjeros blancos tener bienes inmuebles, entre ellos, tierras en el territorio haitiano. Al elaborar el proyecto de la nueva Constitución, el Departamento de Estado de los EE.UU., los estadistas norteamericanos, consideraba la revisión de este punto como uno de los aspectos más importantes de la modificación de la Constitución. La introducción en la nueva Constitución de la enmienda sobre la concesión a ciudadanos y compañías extranjeros del derecho a poseer tierras y otros bienes inmuebles en Haití, abría el camino a una amplia penetración del capital norteamericano en la economía del país. En el proyecto de Constitución puesto a consideración del gobierno haitiano, se incluía un artículo especial confirmando todas las disposiciones de las autoridades de ocupación.

Sin embargo, todos los intentos del mando norteamericano y del presidente Dartiguenave de lograr la aprobación de la nueva Constitución en la Asamblea Nacional, fracasaron. A principios de 1917, bajo la mirada de la infantería de la marina, transcurrieron las elecciones de la nueva composición del Senado y de la Cámara de Diputados; pero la nueva Asamblea Nacional tampoco ratificó la Constitución. Más aún, preparó y comenzó la discusión de su propio proyecto que no comprendía las enmiendas incluidas en la Constitución del Departamento de Estado norteamericano. En respuesta, las autoridades de ocupación disolvieron la Asamblea Nacional.

El Departamento de Estado sancionó la celebración el 12 de junio de 1918, del llamado “plebiscito popular” para la aprobación de la Constitución. El plebiscito realizado por las autoridades de ocupación en condiciones de estado de guerra era una pura formalidad. Los “altos principios” de la democracia y la legalidad predicados por el presidente de los EE.UU., Wilson, tomaron en Haití la forma de una grosera violación de las normas democráticas más elementales.

La nueva Constitución de Haití otorgaba a los ciudadanos extranjeros el derecho a poseer tierras, confirmaba todas las disposiciones de las autoridades militares norteamericanas, preveía crear fuerzas armadas —la Gendarmería de Haití— bajo el mando de militares norteamericanos, y refrendaba el derecho de los tribunales militares

norteamericanos a ejercer las funciones de supremas instancias judiciales. En agosto y diciembre de 1918, fueron firmados dos acuerdos norteamericano haitianos conforme a los cuales la misión diplomática de los EE.UU. en Puerto Príncipe recibió el derecho de “vetar” cualquier proyecto de ley haitiano, y el consejero norteamericano para las finanzas obtuvo el control sobre los gastos del gobierno. La República de Haití se convertía, de hecho, en un protectorado de los Estados Unidos.

La Gendarmería (desde 1928, La Guardia de Haití) fue un instrumento seguro y dócil de los invasores. El Primer jefe de la Gendarmería fue en 1915, el teniente coronel del cuerpo de infantería de la marina de los EE.UU. Smedley Butler (antes de ser destinado a Haití, Butler había participado en el aplastamiento de los movimientos de liberación nacional en Filipinas, China, Nicaragua, Honduras, Panamá y México). La Gendarmería que organizó se convirtió en el sostén del aparato de ocupación y del gobierno títere. En 1916 para aumentar la eficacia del control en la república, las autoridades norteamericanas emprendieron la construcción de carreteras. Puesto que el gobierno haitiano no tenía recursos suficientes, Butler restableció la ley, hacía mucho olvidada, del año 1863 sobre la “corva”, prestación obligatoria para la construcción de caminos. Los trabajos forzosos provocaron desde el comienzo descontento entre los campesinos, descontento que crecía a medida que aumentaba el número de abusos con la aplicación de la “corva” por la Gendarmería y las autoridades locales, sobre todo en las regiones con escasa población en el noreste de Haití. En otoño de 1918, en medio de la tensa situación provocada por la intervención extranjera, el descontento con el régimen de ocupación militar y con el restablecimiento de la prestación personal para los caminos, desembocó en un levantamiento armado del pueblo haitiano encabezado por Charlemagne Peralte contra los ocupantes norteamericanos.

Peralte era de una familia acaudalada que gozaba de influencia en su distrito natal de Hinche. En el momento de la intervención norteamericana en Haití, Peralte tenía 29 años y comandaba las tropas del distrito de Leógane. En octubre de 1917 a la cabeza de un grupo insurrecto, atacó la casa del jefe de gendarmes de la ciudad de Hinche. Pronto fue detenido y en 1918, condenado por el tribunal mili-

tar norteamericano a cinco años de trabajos forzados. En septiembre de 1918 realizó una atrevida fuga y se ocultó en los montes.

Los insurrectos reconocieron inmediatamente a Peralte como “comandante en jefe del ejército revolucionario que combate contra los norteamericanos que han invadido Haití”. La insurrección se extendió a varias regiones del país. En sus filas combatieron de 5 mil a 15 mil hombres. Según datos del mando norteamericano, en los destacamentos de Peralte había 3.000 hombres, y en los de su ayudante Benoit Batrville, 2.500. Peralte era jefe del gobierno y del estado mayor del ejército de los insurrectos. La insurrección militar tomó la forma de guerra de guerrillas.

En el otoño de 1918 los sublevados iniciaron operaciones militares activas. Realizaron unos 20 asaltos a las guarniciones de gendarmes en Hinche, Mirebalais, Las Caobas y otros sitios. En octubre los destacamentos de Peralte atacaron Puerto Príncipe. El mando norteamericano lanzó contra los campesinos, que apenas tenían armas de fuego, grupos de infantería de la marina, la artillería y la aviación norteamericanas.

Pese a la superioridad militar y las represalias en masa, los invasores y los gendarmes no lograron liquidar al ejército guerrillero. Entonces el mando norteamericano elaboró un péfido plan para dar muerte a Peralte. Con ayuda de un esbirro, los *marines*, acompañados de un grupo de gendarmes haitianos, en la noche del 1° de noviembre de 1919, penetraron disfrazados de insurrectos en el campamento de Peralte y mataron al jefe guerrillero; sin embargo, la lucha contra los invasores continuó bajo la dirección de B. Batrville. En enero de 1920, sus destacamentos atacaron la capital. La resistencia duró aún varios meses después de que Batrville pereciera en mayo de 1920.

El levantamiento contra los invasores fue aplastado cruelmente, pero ejerció profunda influencia en todo el movimiento de liberación nacional posterior y, al final, contribuyó a la evacuación de las tropas norteamericanas de Haití.

Según datos del mando militar norteamericano, de 1915 a 1920, las tropas estadounidenses exterminaron a más de 3 mil personas, en tanto que los EE.UU. supuestamente tuvieron sólo 16 militares

mueritos.<sup>1</sup> Los dirigentes de los departamentos militares en Washington, trataron por todos los medios de ocultar las acciones criminales de los *marines* en Haití; pero en 1920 se conoció públicamente una carta confidencial del general G. Barnett, jefe del cuerpo de la infantería de la marina estadounidense dirigida al general J. Russell, comandante de la brigada de *marines* en Haití, en la que se ordenaba poner fin a “el exterminio indiscriminado” de la población.<sup>2</sup> El Secretario de la Marina estadounidense, J. Daniels, se vio obligado a enviar a Haití en el otoño de 1920, una comisión de instrucción, que declaró “legales” las acciones de los militares norteamericanos en Haití.

La lucha del pueblo haitiano por su liberación, y el auge generalizado del movimiento antiimperialista y de liberación nacional en los países de América Latina en este período, contribuyeron a fortalecer a los diferentes grupos políticos que impugnaban el régimen de ocupación militar estadounidense. En noviembre de 1920, se creó la Unión Patriótica de Haití en la que participaron representantes de la oposición pertenecientes a la pequeña y la mediana burguesía liberal, intelectuales, políticos, ex funcionarios del gobierno y miembros del parlamento. La Unión Patriótica desplegó vastas actividades para investigar y denunciar los actos de arbitrariedad de las autoridades de ocupación tanto en Haití como en el extranjero.

En mayo de 1921, personalidades de renombre de la Unión Patriótica viajaron a los EE.UU. Presentaron al Departamento de Estado y la Comisión Senatorial para Asuntos Extranjeros un memorándum sobre la situación en Haití, en el que se reprobaba la arbitrariedad de las autoridades de ocupación, se daba ejemplos del genocidio practicado por los EE.UU. contra los haitianos, de casos de torturas y de exterminio en masa de los presos. Organizaciones y órganos de prensa norteamericanos progresistas y representantes del movimiento de los negros se pronunciaron en apoyo de las demandas del pueblo haitiano por su liberación. La ocupación militar de Haití fue sometida a acerbos críticas también en el Senado estadounidense.

Las amplias protestas dirigidas al gobierno de los EE.UU., obliga-

---

<sup>1</sup> Hearings, p. 1727-1728.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 427, 1722. *The New York Times*, 14.X.1920.

ron al presidente Harding a formar una comisión senatorial especial para estudiar el problema de la ocupación y la administración de Haití y de la República Dominicana. La comisión sesionó bajo la presidencia del senador McCormick desde agosto de 1921 hasta junio de 1922; no obstante, los materiales de la investigación no influyeron mucho en sus recomendaciones: la comisión se pronunció contra el “brusco retiro o la evacuación prematura de la infantería de la marina norteamericana” de Haití y contra la anulación del convenio de 1915. La comisión recomendó designar para Haití a un comisario supremo con poderes de embajador extraordinario para dirigir las tropas de ocupación, la Gendarmería haitiana y los funcionarios norteamericanos. Estas recomendaciones reflejaban la línea de la política exterior de la administración Harding, quien a comienzos de los años 20 afianzaba enérgicamente las posiciones ocupadas por los EE.UU. en América Latina en el período de la Primera Guerra Mundial.

En febrero de 1922 Harding destinó al cargo de comisario supremo de Haití al general Russell, quien había mandado casi ininterrumpidamente de 1917 a 1921 las tropas de ocupación. Con el nombre de Russell estaba relacionada la cruenta represión de las acciones del pueblo haitiano contra los invasores norteamericanos. El Departamento de Estado había elegido a “un hombre fuerte” para encabezar a las autoridades de ocupación, lo que mostraba bien a las claras la intención del gobierno norteamericano de seguir aplicando al pueblo haitiano la política “del garrotazo” y de subordinar por completo el sistema de la administración local al aparato de ocupación norteamericana.

La llegada de Russell a Haití coincidió con el término del plazo legal de Dartiguenave, cuyo gobierno bajo la presión del movimiento de liberación nacional haitiano, comenzó a expresar su disconformidad con la política de ocupación estadounidense. En el Departamento de Estado, provocó especial descontento la negativa de Dartiguenave a aprobar un nuevo empréstito de los Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas depositaron sus esperanzas en una nueva marioneta.

Uno de los candidatos al cargo presidencial era Luis Borno, repre-

sentante de la camarilla burocrática mulata. Su orientación pronorteamericana y la promesa de aceptar el empréstito de los bancos estadounidenses le aseguraron el apoyo del comisario supremo. El 10 de abril de 1922, el Consejo de Estado eligió a Borno presidente de Haití por un período de cuatro años. En junio el gobierno títere aprobó la ley del empréstito. De 1922 a 1926 fueron emitidas 3 series de empréstitos por una suma total de 22.894.000 dólares. El empréstito estaba destinado a cubrir el endeudamiento exterior a los banqueros franceses, compensar las pretensiones de los ciudadanos y las compañías extranjeros, y cubrir la deuda del gobierno con la compañía ferroviaria y el Banco Nacional de Haití. Los banqueros norteamericanos se embolsaron con el “empréstito”, más de 2 millones de dólares.<sup>1</sup>

El empréstito impuesto a Haití por los Estados Unidos tuvo consecuencias políticas y económicas de largo alcance. Al pasar de Francia a los EE.UU. el endeudamiento exterior de la república haitiana, Washington tuvo la posibilidad de disponer a su antojo de los recursos monetarios de Haití y establecer un control total de las actividades financieras del gobierno. La política del aparato de ocupación, que perseguía el pago anticipado del empréstito en beneficio de los acreedores norteamericanos, privaba a Haití de los medios tan necesarios para su desarrollo económico y cultural.

Los campesinos haitianos también fueron objeto del saqueo y la explotación directa por parte de las compañías norteamericanas. La Constitución de 1918 impuesta por los ocupantes, eliminó el principal obstáculo en el camino de la penetración del capital norteamericano en la agricultura de Haití. En los años subsiguientes, el gobierno de Borno promulgó varias leyes que facilitaron aún más a las compañías norteamericanas la adquisición de tierras. Personas particulares y compañías agrícolas de los EE.UU. adquirieron en Haití no menos de 100 mil hectáreas de tierra.<sup>2</sup> Miles de campesinos fueron desalojados de las tierras que el gobierno estaba entregando en concesión. Fueron eliminadas muchas de las haciendas campesinas

---

<sup>1</sup> S. Castor. *La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias (1915-1934)*. México, 1971, p. 103.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 78.

del Macizo del Norte, donde las empresas norteamericanas recibieron unas 16 mil hectáreas de tierra. La miseria, el paro y la arbitrariedad de las autoridades hacían emigrar del país a los campesinos. En los 19 años de la ocupación norteamericana abandonaron el país más de 300 mil haitianos.<sup>1</sup>

En 1926 el Consejo de Estado reeligió a Borno en el cargo presidencial. Para afianzar su poder, éste introdujo en la Constitución, por recomendación de Russell, una serie de enmiendas que le permitieron promulgar leyes destinadas a restringir aún más la libertad de prensa y el procedimiento judicial.

El descontento con la situación existente —el régimen de ocupación militar— y con la política pro norteamericana del presidente Borno abarcaba capas cada vez más amplias del pueblo haitiano. Se unieron a la oposición determinados círculos de la burguesía nacional que no habían obtenido las ventajas esperadas con el establecimiento del régimen de ocupación. El racismo descubierto de los invasores norteamericanos provocaba descontento incluso en la camarilla gobernante haitiana dependiente de los EE.UU.

Precisamente entonces —a partir de los años 20—, entre los intelectuales, negros en su mayoría, surge un movimiento por el rescate de la cultura nacional, que constituyó una reacción normal a la ocupación militar y al racismo de los funcionarios y los militares norteamericanos. Uno de los más brillantes representantes de la nueva generación de haitianos que se habían integrado en la lucha de su pueblo por la independencia nacional era Jacques Roumain, destacado escritor, poeta y ensayista. Roumain desarrolló sus actividades con amplitud particular desde el año 1929, contribuyendo a formar los primeros grupos marxistas del país y a fundar en 1934 el Partido Comunista de Haití.

En 1928 no hubo elecciones a la Asamblea Nacional, pero Borno prometió convocarlas en 1930; sin embargo, un año después, por una recomendación de Russell aprobada por el Departamento de Estado, Borno declaró que no habría elecciones. La noticia de que se anulaban las elecciones parlamentarias y de que Borno estaba

---

<sup>1</sup> P. Moral. *Le paysan haitien. Etude sur la vie rurale en Haiti*. París, 1961, p. 71. S. Castor. *Op. cit.*, p. 83.

dispuesto a continuar desempeñando el cargo presidencial caldeó extremadamente el ambiente político. La oposición creó la Liga Nacional de Acción Constitucional que se pronunció contra la reelección de Borno y por la convocatoria a elecciones parlamentarias.

La crisis económica mundial que afectó a los países capitalistas desde el año 1929, agravó seriamente la situación económica de Haití. El pueblo consideraba culpables de su calamitosa situación al gobierno títere de Borno y a las autoridades de ocupación. A finales de octubre de 1929 los estudiantes del instituto agrícola en Damien, en las afueras de la capital, se declararon en huelga, después de que el director —el norteamericano George Freeman— se negó a aumentarles los estipendios. La huelga de los estudiantes desembocó en manifestaciones de capas multitudinarias del pueblo haitiano contra el régimen de ocupación y el gobierno de Borno. La agitación se extendió a todo el país. En muchas ciudades se celebraron mítines y manifestaciones con las consignas de “¡Fuera Borno!” y “¡Fuera Freeman!”. El 4 de diciembre Russell impuso el estado de sitio en el país. El 6 de diciembre unos 1.500 campesinos se dirigieron a la ciudad de Le Quai en el sur del país para tomar parte en las manifestaciones y protestar contra la difícil situación económica. Un destacamento de *marines* los detuvo y abrió fuego. Fueron muertas 24 personas y heridas más de 50.<sup>1</sup>

La noticia sobre el fusilamiento de esta manifestación pacífica en Haití, provocó protestas de la opinión pública. En vista de la vasta indignación por la política imperialista de los EE.UU. en América Latina, Washington se vio obligado a abordar la solución de la crisis haitiana para prevenir un nuevo estallido de descontento. El 7 de diciembre de 1929 el presidente Hoover pidió al Congreso enviar a Haití una comisión para estudiar la situación del país. A fines de febrero, la comisión encabezada por el ex gobernador de las Filipinas, W. G. Forbes, llegó a Puerto Príncipe donde fue recibida con carteles de “¡Viva la República Libre de Haití!” y “¡Fuera el Consejo de Estado!”. Informando a Hoover de la “crítica situación en Haití”, Forbes recalcó que las elecciones presidenciales eran “la única

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1929, vol. 3, p. 195; *The Nation*, 12.03.1930, p. 310.

vía de satisfacer las demandas del pueblo haitiano”.<sup>1</sup> Propuso sustituir a Borno por un presidente provincial y convocar a elecciones para los órganos legislativos.

Las recomendaciones de la comisión presidencial que aprobó Hoover, preveían la “haitización” de las instituciones públicas, la supresión del cargo de comisario supremo, la designación en su lugar de un representante diplomático de los EE.UU., y la retirada gradual de la infantería de la marina norteamericana, que debía ser formalizada por un acuerdo entre ambos países. Así pues, las manifestaciones del pueblo haitiano contra el régimen de ocupación y contra el gobierno títere, así como el amplio movimiento antiimperialista en América Latina, obligaron a los círculos gobernantes de los EE.UU. a hacer algunas concesiones en su política respecto a Haití.

Las elecciones parlamentarias significaron un triunfo convincente de la oposición que consiguió la mayoría aplastante en las dos cámaras. El 18 de noviembre de 1930 fue elegido presidente de Haití, Stenio Vincent.

El plan de “haitización” de los establecimientos públicos gobernados por funcionarios norteamericanos —plan propuesto por el gobierno de Vincent en diciembre de 1930— dio inicio a largas negociaciones norteamericano haitianas. En agosto de 1931 se firmó un acuerdo para la “haitización”, según el cual, algunas instituciones pasaban a la gestión del gobierno, pero éste, como antes, no podía disponer de los recursos estatales sin la sanción del consejero para las finanzas norteamericano. La postura conciliadora que adoptó el gobierno de Vincent en las negociaciones, provocó el descontento de vastas capas del pueblo haitiano, que exigían el cese de la ocupación norteamericana y del control financiero estadounidense. Al fin, el 3 de septiembre de 1932, después de un año de negociaciones secretas, fue firmado un nuevo acuerdo que preveía la transferencia del mando de la guardia a oficiales haitianos el 1º de diciembre de 1934, pero no eliminaba el control norteamericano sobre las finanzas de la República. La Asamblea Nacional no ratificó este acuerdo. La llegada al poder en los EE.UU. de la administración de F. Roo-

---

<sup>1</sup> *Ibidem*, 1930, vol. 3, p. 198; *The New York Times*. 01.03.1930.

sevelt, quien proclamó la política de “el buen vecino” en América Latina, se reflejó también en las relaciones con Haití. El fin de la ocupación de Haití debía constituir uno de los primeros pasos en la realización práctica de la política del “buen vecino”.

En abril de 1934 el presidente Vincent se dirigió a Washington para negociar la firma de un nuevo acuerdo. Las negociaciones prosiguieron luego en Cap-Haitien, adonde llegó el 5 de julio de 1934, el presidente Roosevelt. El 24 de julio fue firmado el acuerdo definitivo sobre la retirada de las tropas norteamericanas. El 15 de agosto abandonaron Haití los últimos contingentes de la infantería de la marina norteamericana.

Pero la evacuación de las tropas norteamericanas no significó ni mucho menos, la verdadera liberación del país. Los EE.UU. continuaron ejerciendo el control sobre las finanzas de Haití hasta 1947, cuando se llegó a amortiguar por completo el crédito norteamericano de 1922. Washington podía contar también en adelante con los servicios de los representantes de la reacción y con la guardia haitiana creada por las autoridades de ocupación.

Los casi 20 años de intervención abierta de los EE.UU. en los asuntos de Haití y la amplia penetración del capital norteamericano, dejaron una profunda huella en el posterior desarrollo económico y político del país, subordinándolo a los intereses del imperialismo norteamericano. La situación de Haití, donde el pueblo vive condenado a la miseria y al hambre, es consecuencia de la larga dependencia de Haití de los Estados Unidos, que ocupan las posiciones claves en la economía del país y apoyan a la sangrienta dictadura hereditaria de los Duvalier.

ELENA ANÁNOVA

## DESEMBARCOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La historia de las relaciones entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana constituye otro ejemplo elocuente de la política intervencionista de una potencia imperialista hacia un pequeño país. El interés particular de los EE.UU. en esta república isleña se debe ante todo a su proximidad territorial, lo cual es tomado en cuenta al confeccionar los planes estratégicos de los EE.UU. en la cuenca del Caribe.

Incluso el más breve resumen de las ignominiosas acciones de los expansionistas norteamericanos en la República Dominicana, revisite la forma de una sentencia acusatoria.

Ya en los años 60 del siglo XIX, cuando quedó establecida definitivamente la independencia de la República Dominicana, los EE.UU. tendieron sus manos a la bahía de Samaná, importante estratégicamente. El gobierno dominicano, necesitado de recursos, accedió a arrendar esta región de interés para los EE.UU., pero para entonces en Washington ya habían ideado un nuevo plan: los EE.UU. propusieron al gobierno dominicano comprar la bahía de Samaná y su litoral prometiendo pagar la suma redonda de un millón de dólares y venderle armas y pertrechos por otro millón de dólares; sin embargo, resultó que la Constitución de la República Dominicana no preveía la posibilidad de la venta de partes del territorio nacional. Soslayando al gobierno dominicano, Washington empezó a negociar con el ex presidente Buenaventura Báez, hombre más complaciente y no tan apegado al respeto a la Constitución. En febrero de 1868, B. Báez es reelegido presidente de la República Dominicana con la ayuda de los EE.UU. y abrió las puertas de su país a los empresarios norteamericanos. Más aún, Báez ofreció a Washington no pensar sólo en la posibilidad de adquirir la Bahía de Samaná, sino en la de comprar toda la República Dominicana.

En diciembre de 1868, el presidente A. Johnson declaró oficialmente en su mensaje al Congreso, el propósito de anexar la República Dominicana<sup>1</sup>, y el 1º de febrero de 1869 fue presentada a la Cámara de Representantes una resolución sobre la integración de la República Dominicana a los EE.UU. como “territorio de Santo Domingo”.<sup>2</sup>

La cínica resolución no fue aprobada, pero el nuevo presidente de los EE.UU., U. Grant (1869-1877), no renunció a los planes de anexar la República Dominicana. Por orden suya, llegaron navíos militares a las costas de Santo Domingo para prestar “apoyo moral” a Báez con el fuego de sus cañones. Fue una intervención abierta de los EE.UU. en la lucha que libraban los patriotas dominicanos contra el gobierno antinacional de Báez. Este último no tardó en expresar su gratitud a los amigos norteamericanos firmando el 4 de septiembre de 1868 el acuerdo que le habían ofrecido sobre la anexión del territorio de la República Dominicana. Sin esperar la ratificación del acuerdo en el Senado, el gobierno de Grant pagó a Báez un anticipo de 100 mil dólares, concediéndole además material militar para reprimir al pueblo por una suma de otros 50 mil dólares. La flota norteamericana entró en aguas territoriales de la República Dominicana, y a finales de 1870 el régimen de Báez ya se encontraba protegido por 7 buques de guerra de los EE.UU. En estas circunstancias, se celebró un plebiscito tras el cual, el 16 de marzo de 1870, se proclamó en Santo Domingo que “el pueblo de la República Dominicana tiene la voluntad de unirse a los Estados Unidos de América”.<sup>3</sup>

En Washington, los republicanos radicales encabezados por Sumner, presidente de la Comisión senatorial para asuntos extranjeros, se opusieron a esta anexión. El general Luperón, dirigente de los patriotas dominicanos, en aquellos días críticos llamó al pueblo a las armas para defender su independencia. El Senado no se arriesgó a una lucha armada contra el pueblo dominicano y declinó el acuer-

---

<sup>1</sup> *A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1897*. S.E., Washington, 1899, vol. VI, p. 689.

<sup>2</sup> *Congressional Globe*, 40<sup>th</sup> Congress, 3<sup>d</sup> Session, p. 769.

<sup>3</sup> M. Henríquez Ureña. *Los yanquis en Santo Domingo*. Madrid, 1929, p. 18.

do. El movimiento antianexionista en la República Dominicana hizo fracasar los planes de Báez y Grant.

Las últimas décadas del siglo XIX estuvieron signadas por la penetración económica de los EE.UU. en la República Dominicana. En los años 90, la *Clybe Steamship Co.* norteamericana monopolizó de hecho, el comercio de azúcar dominicano. Los negociantes que llegaban de Norteamérica compraban tierras y edificaban sus empresas.

A este período se remonta el comienzo del sojuzgamiento financiero del país por los Estados Unidos. En 1892 se creó la *San Domingo Improvement Co.* norteamericana que firmó con el gobierno dominicano un contrato de empréstito que preveía la reconversión de los anteriores empréstitos europeos y la redistribución de los títulos entre tenedores norteamericanos. Fue así como, bajo el pretexto de “defender” al país de los acreedores europeos, los EE.UU. dieron un importante paso de avance en el sojuzgamiento de la República Dominicana. El Departamento de Estado norteamericano obró como defensor de los intereses de las compañías estadounidenses, y bajo su presión, el gobierno dominicano firmó en enero de 1903 un protocolo reconociéndose deudor de las compañías norteamericanas por una suma de 4,5 millones de dólares.<sup>1</sup>

El presidente de los EE.UU., Theodore Roosevelt, manifestó su máximo interés en los asuntos dominicanos, contribuyendo por todos los medios a ampliar la influencia norteamericana e inmiscuyéndose con este fin, en la lucha política entre los líderes de las diferentes agrupaciones en la República Dominicana. Ordenó que buques de guerra norteamericanos sometieran a bombardeo las posiciones de los adversarios del presidente Morales, el que, en recompensa, dio su anuencia a la entrega a los Estados Unidos de la administración de todas las aduanas dominicanas. El texto preliminar del documento pertinente fue redactado a bordo del navío norteamericano *Detroit* por su capitán Dillingham y el enviado de los EE.UU. Dawson. El documento concedía plenos derechos a los EE.UU. a reorganizar el servicio aduanero de la República Dominicana, y la revisión por los EE.UU. de todo el sistema de recauda-

---

<sup>1</sup> M. Knight. *The Americans in Santo Domingo*. New York, 1970, p. 20.

ción de aranceles aduaneros del país. Los Estados Unidos podrían designar a su gusto a un funcionario norteamericano al cargo de recaudador general de los aranceles aduaneros, quien administraría los ingresos del país y utilizaría el 55% de las sumas recolectadas para pagar a sus empleados y cubrir las reclamos de los acreedores extranjeros, y pondría un 45% a disposición del gobierno dominicano para la satisfacción de sus necesidades.<sup>1</sup> El presidente Roosevelt prometió al cobrador general la protección de la flota norteamericana, en caso de que alguna potencia pretendiera ignorar sus derechos, y así asumir la defensa de los intereses de sus ciudadanos poseedores de títulos de empréstitos dominicanos.

El 7 de febrero de 1905 el gobierno de Morales firmó el protocolo impuesto al país, que establecía el control financiero de los EE.UU. sobre una nación formalmente independiente, convirtiéndola así en un protectorado norteamericano. La política de Morales era dictada por su plena dependencia de la ayuda de los EE.UU. Dillingham reconoció, no casualmente, que tenía “plena responsabilidad por haber colocado a Morales en el poder”.<sup>2</sup> El pueblo dominicano sentía indignación por la intervención de los EE.UU. y la política de su criatura, Morales. Para sofocar la indignación, Roosevelt mandó a aguas dominicanas toda una armada con el crucero *New Mark* — buque insignia de la escuadra caribeña— a la cabeza.

El 15 de febrero de 1905, Roosevelt entregó al Senado de los EE.UU. el texto del acuerdo del 7 de febrero; pero no logró que el protocolo fuera ratificado. Entonces el gobierno de Roosevelt decidió resolver la cuestión poniendo en vigor el protocolo como “modus vivendi”. Bajo la presión de Roosevelt, el gobierno dominicano anunció que el protocolo entraba en vigor a partir del 1º de abril de 1905.<sup>3</sup>

Fue designado recaudador general de impuestos aduaneros el coronel norteamericano G. Colton, quien tenía experiencia en esta labor en las Filipinas, donde había desempeñado funciones análogas.

El presidente Roosevelt le encargó al profesor Hollander esclarecer

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1908, p. 366.

<sup>2</sup> *Hispanic American Historical Review*. Vol. XVII, N 4, Nov. 1937, p. 444.

<sup>3</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1905, p. 357.

cuánto y a quién le debía la República Dominicana. Resultó que la deuda externa global del país había llegado a 33 millones de dólares, y que entre los acreedores había franceses, belgas, alemanes, españoles, italianos, ingleses y norteamericanos, correspondiendo a estos últimos sólo 6 millones de dólares, o sea, una cifra insuficiente para tomar en sus manos la administración de las finanzas dominicanas. Bajo presión de los EE.UU., se renegoció reducir el endeudamiento dominicano con los acreedores europeos de 27 a 12 millones de dólares, y de 6 a 5 millones la deuda con los norteamericanos. De este modo, se logró aumentar el peso específico de los acreedores norteamericanos. Este fue el primer paso. En 1906 el gobierno dominicano firmó un acuerdo sobre un nuevo empréstito de 20 millones de dólares con el banco norteamericano *Kuhn, Loeb and Co.* Esta suma fue asignada al pago de la deuda del país con los acreedores europeos. Los EE.UU. pasaron a ser el único acreedor y el dueño absoluto de las aduanas de la República Dominicana. Así se estableció en la práctica, el control de los EE.UU. sobre las finanzas. El Convenio de 1907 lo formalizó jurídicamente.

Las finanzas del país estaban ahora en manos del recaudador norteamericano, quien remitía al gobierno dominicano el 45% de los ingresos de las aduanas. Sin previo acuerdo con este funcionario, el gobierno dominicano no tenía derecho a tomar nuevos empréstitos ni a disponer a su arbitrio de los recursos propios. De este modo, sólo podían permanecer en el poder los presidentes que sirvieran en cuerpo y alma a los intereses de los imperialistas norteamericanos.

Una nueva etapa en el ejercicio de la política intervencionista de los EE.UU. en América Latina se vincula al nombre del presidente Woodrow Wilson (1913-1921). En lo que a la República Dominicana se refiere, el gobierno de Wilson envió a Santo Domingo nuevos consejeros financieros y comerciales. Bajo control norteamericano se celebraron elecciones, y en diciembre de 1914 se hizo cargo de la presidencia Juan Isidro Jiménez, riquísimo latifundista e influyente político en el que los Estados Unidos depositaban determinadas esperanzas.

Washington decidió que ya era tiempo de continuar el sometimiento de la República Dominicana. En noviembre de 1915 presentaron al

presidente Jiménez varias exigencias de carácter bastante categórico. Debía aprobar al nuevo contralor de las finanzas dominicanas, Charles Johnson, designado ya en mayo, otorgándole los más amplios poderes en los asuntos presupuestarios. Se recalca la necesidad de poner bajo su administración igualmente todos los ingresos internos del país (de ello no se decía nada en el convenio de 1907). Además, se proponía disolver el ejército dominicano, sustituyéndolo por fuerzas policiales adiestradas por instructores norteamericanos. Por último, debían ampliarse los poderes de los consejeros norteamericanos, entre ellos, del director general de obras públicas, un ingeniero norteamericano debía dirigir la red telefónica y telegráfica del país, etc.<sup>1</sup>

Aceptar semejante ultimátum significaría reconocer abiertamente la condición de pelele de los EE.UU. El gobierno de los EE.UU. advirtió por si acaso a las fuerzas patrióticas de Santo Domingo, que no permitiría manifestación alguna y utilizaría, en caso de necesidad, la fuerza armada para “mantener el orden”.

Seguidamente se comunicó al presidente Jiménez, al que ya se le había incriminado el incremento de la deuda del Estado sin permiso de los EE.UU., que no se le permitiría violar de nuevo el convenio de 1907. Dejando a Jiménez sin dinero y amenazándolo constantemente con nuevas exigencias cínicas, los EE.UU. privaron de hecho al presidente de poder. Pero su adversario político, Arias, tampoco complacía a los EE.UU. Contra Arias fueron dirigidos buques de guerra y en la costa desembarcó la infantería de la marina estadounidense. La agresión se encubrió con la necesidad de defender a los ciudadanos norteamericanos y sus bienes, quienes no se consideraban amenazados por nadie.

El 3 de mayo de 1916, el enviado de los EE.UU., Russell, pidió refuerzos. El 5 de mayo, informando de disturbios en diferentes regiones del país, exigió enviar más barcos de guerra a la República Dominicana. El secretario de Estado Lansing apoyó inmediatamente estas peticiones, y los buques de guerra norteamericanos ocuparon Puerto Plata y otros puertos del país.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1915, p. 297-299.

<sup>2</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, p. 224.

En esa situación, el presidente Jiménez dimitió. Russell y el contralmirante Caperton, jefe de la escuadra norteamericana en las aguas dominicanas y de las fuerzas norteamericanas en Santo Domingo, y los capitanes de los buques de guerra de los EE.UU., ofrecieron a las fuerzas opositoras rendir armas amenazando con bombardear Santo Domingo.<sup>1</sup> Los *marines* desembarcaron a tres millas de la capital. A las seis de la mañana del 15 de mayo de 1916, las fuerzas armadas de los EE.UU. ocuparon, sin hallar resistencia, la capital; por orden de Caperton los *marines* tomaron Monte Cristi y otros puertos.

El 16 de junio el gobierno de los EE.UU. concedió facultades al recaudador general para cobrar los ingresos internos. El 18 de julio llegó a Santo Domingo el cuarto regimiento de la infantería de la marina bajo el mando del coronel Pendleton. El contralmirante Caperton declaró su intención de ocupar Santiago, Moca y La Vega para prevenir su ocupación por los “revoltosos”.

El 25 de julio de 1916, fue nombrado presidente provisional Francisco Henríquez y Carvajal, quien en vano pretendió convencer al enviado Russell de su buena fe y prometió establecer la paz y el orden. Los EE.UU. no pensaban reconocer al nuevo presidente constitucional de la República Dominicana mientras no aceptara las condiciones del ultimátum presentado a su antecesor en noviembre de 1915; esperaban de Henríquez y Carvajal un compromiso escrito en forma de decreto que reconociera el *status quo* establecido tras la intervención norteamericana, que confirmara el derecho del recaudador norteamericano a cobrar todos los impuestos dominicanos y a disponer de esos recursos; se conformara con que continuara la ocupación norteamericana de los puntos estratégicos más importantes del país; declarara la inutilidad práctica del ejército dominicano y excluyera su personal de las listas de pago; y aceptara la propuesta norteamericana de sustituir el ejército por formaciones de policías creadas por oficiales norteamericanos para cumplir el servicio policial bajo el control de los EE.UU.<sup>2</sup>

Henríquez y Carvajal declaró que jamás a un presidente se le había

---

<sup>1</sup> *Ibidem*, p.226-227.

<sup>2</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1916, p. 234

impuesto condiciones tan humillantes. Su gobierno, en la práctica, no podría actuar privado de todos los recursos. Después del 16 de junio todos los ingresos del país se encontraban en manos de funcionarios norteamericanos, y el aparato y el ejército gubernamentales no recibían salarios. El enviado Russell aconsejaba al secretario de Estado Lansing continuar la política de coacción, señalando que el gobierno dominicano carecía de medios y no podría pagar las cuentas. Así “crearemos en el país condiciones de turbulencia interna que tendremos que reprimir”, escribió Russell.<sup>1</sup> De este modo, los Estados Unidos provocaron premeditadamente indignación en la República Dominicana para tener la oportunidad de llevar a cabo la planeada ocupación militar del país.

El 22 de noviembre de 1916, Lansing dirigió al presidente Wilson un mensaje farisaico, comunicando que “la situación en la República Dominicana se aboca a una crisis y tenemos que enderezar inmediatamente el curso de las acciones, si no, la revolución y el desastre económico serán inminentes”.<sup>2</sup>

El gobierno de los EE.UU., que preparaba su entrada en la Primera Guerra Mundial, se disponía a ocupar posiciones convenientes en el Mar Caribe. La ocupación militar de la República Dominicana debía redondear la acción militar de los EE.UU. contra la República de Haití, transformando toda la isla en un baluarte de los EE.UU.

El presidente Wilson aprobó el proyecto de disposición que le presentaron sobre el establecimiento de la administración militar estadounidense en la República Dominicana. El 29 de noviembre de 1916, el capitán Knapp, jefe de la escuadra norteamericana en Santo Domingo, hizo pública la disposición que implantaba el estado de guerra en el país, destituía al gobierno constitucional y establecía en la República, formalmente soberana, la administración militar de los EE.UU.

El capitán Knapp disolvió el gabinete de Henríquez y Carvajal y comenzó a gobernar el país con ayuda de los nuevos “ministros” que había nombrado de entre los oficiales de la flota estadounidense. Aquellos hombres no tenían ninguna idea del país y del pueblo

---

<sup>1</sup> *Ibídem*, p. 237

<sup>2</sup> *Ibídem*, p. 240

que les habían sido confiado. No estaban capacitados para el ejercicio de funciones administrativas y muchos de ellos ni siquiera hablaban el idioma español. El presidente Wilson y su secretario de Estado dedicaban cada vez mayor atención a Europa y a la guerra mundial, mientras que la República Dominicana, de hecho, había sido entregada a “los cuidados” de los gobernadores militares norteamericanos.

El régimen de ocupación militar permitió al capital monopolista de los EE.UU. penetrar profundamente en la economía del país. La administración militar promulgaba sus propias leyes sobre la tierra y los impuestos, favoreciendo ante todo los intereses del capital norteamericano. Más de medio millón de acres de cultivo de caña pasó a manos de los monopolios estadounidenses. La construcción de carreteras, puentes y otras medidas, que suelen ser interpretadas como “prueba del efecto benéfico y del papel civilizador” de las autoridades de ocupación sobre el desarrollo económico del país colonizado, respondía a los intereses de estos monopolios. “La oficina de obras públicas” gastaba a manos llenas el dinero del pueblo dominicano. Los funcionarios del régimen de ocupación, los comerciantes y los industriales azucareros norteamericanos prosperaban a cuenta de la miseria y las calamidades de la población del país; pero incluso todos los ingresos del país resultaban insuficientes para satisfacer el insaciable apetito de los buscadores del lucro. Entonces el gobernador militar permitió el aumento de la deuda estatal, emitiendo en 1918 un empréstito con un 5% de interés anual, y en 1921, otro empréstito de 2,5 millones de dólares con un 8% de interés.<sup>1</sup> En los años de la ocupación, la carga de la deuda exterior creció, enriqueciendo a los banqueros norteamericanos.

El pueblo dominicano no se resignó a la ocupación militar de su país. Los invasores se veían obligados a recurrir a la fuerza armada y los tribunales militares para luchar contra los patriotas. En las regiones orientales del país continuaba la guerra de guerrillas.<sup>2</sup> El

---

<sup>1</sup> *Hearing before a Select Committee on Haiti and Santo Domingo*. Washington, 1922, p. 1333.

<sup>2</sup> Y. Yanchuk. La política de los EE.UU. en América Latina, 1918-1928, Moscú, 1982, p. 211.

movimiento por el cese de la ocupación norteamericana alcanzó especial envergadura después de terminar la Primera Guerra mundial; sus ecos se escuchaban en toda América Latina.

La administración de W. Harding (1921-1923) se vio forzada a aplicar otra política respecto a la República Dominicana que respondiera a los intereses presentes norteamericanos en el continente. El 14 de junio de 1921, el nuevo gobernador militar, Samuel Robinson, publicó una proclama en la que se formulaban las condiciones de la retirada de las tropas de ocupación de la República Dominicana. Este “Plan Harding” estipulaba la firma de un documento que obligaría al futuro gobierno dominicano a ratificar todas las acciones del gobierno militar, incluidos los empréstitos, la ampliación de los poderes del recaudador general norteamericano para permitirle recaudar y gastar los ingresos internos si los de la Aduana no alcanzaran a cubrir los pagos de la deuda externa; y aprobar la creación y la instrucción por la misión militar norteamericana de una Guardia Nacional costeadada con el presupuesto dominicano.<sup>1</sup> El gobernador militar debía convocar a elecciones al Congreso Nacional y a una sesión extraordinaria de este para aprobar un acuerdo sobre la retirada de las tropas norteamericanas en estas condiciones.

Sólo después de esto, y también bajo el control de las autoridades de ocupación, se podrían convocar las elecciones para presidente de la república, quien firmaría el acuerdo ratificado ya en el Congreso y recibiría los poderes entregados por el gobernador militar.

Evidentemente, el “Plan Harding” era inaceptable para la República Dominicana. Nadie creía en elecciones libres bajo control de las autoridades de ocupación norteamericanas; por consiguiente, podía hablarse sólo de un presidente dispuesto a servir de títere norteamericano. Era igualmente evidente que una Guardia Nacional formada por los intervencionistas sería un instrumento que ayudaría a los EE.UU. a mantener su dominio militar en el país incluso después de la retirada de las tropas de ocupación.

Las demandas de los EE.UU. fueron declinadas y el secretario de Estado, Hughes, anunció el 22 de febrero de 1922 que la ocupación

---

<sup>1</sup> M. Henríquez Ureña. *Op. cit.*, p. 243, 244.

duraría hasta lograr sus propósitos.

Mientras tanto, las autoridades de ocupación continuaban reorganizando las fuerzas armadas del país. En agosto de 1921 en la ciudad de Haina se inauguró una academia militar donde los oficiales norteamericanos comenzaron a instruir a los futuros cuadros de mando de la Guardia Nacional.<sup>1</sup> Se creó un centro especial para el entrenamiento de los soldados. El 10 de octubre de 1922, el jefe del cuerpo de *marines* acantonado en Santo Domingo informó que habían sido preparados más de 800 hombres que podían relevar a la infantería de la marina de los EE.UU. Uno de los alumnos más destacados de la academia militar de Haina, fue Rafael Trujillo; los invasores depositaron con él grandes esperanzas, poniéndolo posteriormente a dirigir las fuerzas armadas dominicanas y luego, el Estado.

Hughes designó a Sumner Welles para negociar con los líderes dominicanos la retirada de las tropas de los EE.UU. nombrándolo embajador extraordinario y plenipotenciario. Justo Welles es quien logra imponer a los representantes dominicanos las condiciones que convenían a los EE.UU. Se aprobaron todas las medidas de las autoridades de ocupación, fueron reconocidos los empréstitos de 1918 y 1921, y ampliados los poderes del administrador de aduanas. El 12 de julio de 1924 asumió la presidencia Horacio Vázquez, y al fin, el 18 de septiembre de 1924, los *marines* abandonaron el país que habían estado pisoteando durante 8 años.<sup>2</sup>

La intervención militar había terminado, pero la voz del embajador norteamericano en la República Dominicana seguía decidiendo. Los responsables del “orden” eran un presidente sumiso y una policía adiestrada por oficiales de la infantería de la marina norteamericana. El nuevo convenio firmado en diciembre de 1924, conservaba el cargo de recaudador general hasta la amortiguación total de la deuda exterior, y el gobierno de los EE.UU. podía prestarle todo tipo de protección. La República Dominicana recuperó la independencia sólo en el sentido jurídico; en realidad, seguía siendo un territorio dependiente.

---

<sup>1</sup> Desde junio de 1921 la guardia nacional se llamó policía nacional dominicana.

<sup>2</sup> S. Welles. *Naboth's Vineyard*. Washington, 1966, p. 866.

La siguiente etapa de la expansión norteamericana en la República Dominicana corresponde al período denominado “la era de Trujillo” que se extendió hasta 1961. El rasgo característico de este período sería la consiguiente penetración del capital norteamericano en la economía nacional en condiciones de un cruento régimen dictatorial. Trujillo, elegido presidente en 1930, convirtió el país en una fuente de enriquecimiento personal y en una mazmorra policial, donde se daba muerte sin instrucción de causa, a todos los indeseables al dictador.

La dictadura mantenía por todos los medios, el “orden” conveniente a los monopolios norteamericanos, cuyas inversiones directas en la República Dominicana aumentaron, no casualmente, de 41 millón de dólares en 1940 a 104,7 millones en 1950.<sup>1</sup> En política exterior, Trujillo también se guió en todo por los Estados Unidos. En 1952 firmó un tratado de alianza militar con los EE.UU., asegurándose la ayuda militar y el apoyo político del imperialismo norteamericano.

El triunfo de la Revolución Cubana ejerció enorme influencia en los países y los pueblos latinoamericanos. Los EE.UU. se vieron obligados a maniobrar y sacrificar a sus aliados más comprometidos. El gobierno del presidente Kennedy (1961-1963) proclamó la política de las “nuevas fronteras” para América Latina, prometiendo que no apoyaría a dictadores sanguinarios como Trujillo, sino a regímenes de “democracia representativa”. Naturalmente, la esencia de la política del imperialismo norteamericano continuaba siendo la misma, debía cambiar sólo la forma y los métodos.

Trujillo comprendía que su poder en el país era sostenido por las bayonetas de bandidos con armas norteamericanas y que sólo el apoyo del imperialismo norteamericano aseguraba la solidez de su régimen, por ello no escatimaba medios para sus lobbistas en Washington y Nueva York; no obstante, a comienzos de 1961 los EE.UU. negaron el apoyo directo a su testaferrero. El gobierno de los EE.UU. rompió relaciones diplomáticas con la República Dominicana, revocó a su embajador y tomó parte en las sanciones económicas declaradas por la OEA. Con la participación de la CIA, se organizó un complot para eliminar al odioso dictador, y el 30 de

---

<sup>1</sup> *Survey of Current Business*. August 1962, p. 111-113.

mayo de 1961 Trujillo fue asesinado.

Las relaciones diplomáticas entre los EE.UU. y la República Dominicana fueron restablecidas en enero de 1962. A Santo Domingo llegó una nueva misión para prestar ayuda económica al país; pronto se firmó un acuerdo sobre la adhesión de la República Dominicana a la *Alianza para el Progreso*.

En diciembre de 1962 en las elecciones presidenciales venció Juan Bosch, candidato del Partido Dominicano Revolucionario. El vicepresidente de los EE.UU., L. Johnson, asistió a la ceremonia de asunción del cargo a fin de manifestar su pleno apoyo al nuevo gobierno de la República Dominicana; pero el intermedio democrático fue muy corto: tras un golpe de Estado, Bosch fue detenido y luego deportado del país, la Constitución de 1963 fue derogada y los partidos políticos, aplastados. El poder pasó a manos de fuerzas que contaban con la confianza de los monopolios norteamericanos y cooperaban con ellos.

El 23 de abril de 1965, las fuerzas democráticas de la República Dominicana derrocaron al gobierno del testaferro norteamericano Reid Cabral, tomaron el Palacio Nacional y formaron un gobierno provisional que declaró restablecida la Constitución de 1963, liberó a los presos políticos e invitó al presidente Bosch a regresar a su cargo en Santo Domingo. Las masas populares saludaron con emoción el derrocamiento del títere norteamericano y el restablecimiento del orden democrático.

Nada más conocer la noticia de los sucesos en Santo Domingo, el gobierno de los EE.UU. decidió apoyar a la reacción dominicana agrupada en torno al general Wessin y Wessin. La escuadra estadounidense del Caribe, con el portaviones *Boxer* a la cabeza, zarpó hacia Santo Domingo. Seis buques de guerra llevaban a bordo tanques, artillería y otros armamentos, así como 1.500 *marines* prestos a desembarcar en la costa. Fue puesta en estado de alarma la brigada de infantería de la marina de Camp Legène y la división de desembarco aéreo de Fort Bragg (Carolina del Norte).<sup>1</sup> El general Wessin tampoco perdió tiempo: alentado por los consejeros norteamerica-

---

<sup>1</sup> *Congressional Records*. 29.07.1965, p. 18133.

nos y disponiendo de los tanques y la aviación de la base militar en San Isidro, comenzó en la mañana del 26 de abril el bombardeo del Palacio Nacional, el radiocentro y los cuarteles militares. Sus aviones, en vuelos rasantes, abrieron fuego contra la población de la capital que levantaba barricadas para defender la orilla derecha del río Ozama, adonde se dirigían los tanques de Wessin.

En la mañana del 27 de abril, los helicópteros *Boxer* empezaron a desembarcar la infantería de la marina norteamericana en las canchas deportivas del hotel *Embajador*, desde donde se estableció enseguida comunicación radial entre el hotel, la embajada de los EE.UU. y la base de San Isidro. Simultáneamente el embajador norteamericano en Santo Domingo reclamó al gobierno provisional de los constitucionalistas el cese de la lucha y la capitulación ante Wessin. Debido al peligro de intervención militar estadounidense, muchos miembros del gobierno optaron por refugiarse en embajadas de países latinoamericanos. Sólo el coronel Caamaño no depuso las armas y encabezó la lucha por la independencia del país y por su Constitución democrática. El pueblo, bajo su dirección, tomó los arsenales de las comisarías de la policía y rechazó la ofensiva de Wessin. La revolución había emprendido el camino de la victoria. Entonces Wessin pidió ayuda al embajador norteamericano.

La Casa Blanca venía considerando la decisión de intervenir militarmente desde el 24 de abril, se tomaron de inmediato medidas para su preparación y el gobierno de Johnson no esperaba sino el momento oportuno para intervenir de manera oficial en los asuntos internos de la República Dominicana. El objetivo de la intervención era asfixiar a la revolución dominicana.

A las ocho y media de la noche del 29 de abril, el presidente Johnson anunció por la radio y la televisión el comienzo de la intervención militar estadounidense. En la mañana del 29 de abril habían desembarcado en Santo Domingo 1.700 intervencionistas. En el puerto Haina se descargaban los tanques, la artillería y los transportes blindados. En la base aérea de San Isidro comenzaban a aterrizar los paracaidistas de la 82ª división de desembarco aéreo de los EE.UU. La Casa Blanca decidió mandar otros 2.500 *marines* en ayuda a la reacción dominicana. Esta vez los EE.UU. actuaron

abiertamente al lado de Wessin: los paracaidistas norteamericanos ocuparon posiciones junto a los partidarios de Wessin y tomaron parte en la batalla contra los constitucionalistas.

La concentración de tropas norteamericanas en Santo Domingo prosiguió. El 2 de mayo ya se encontraban allí 9.200 soldados y paracaidistas. Los intervencionistas crearon una “zona internacional de seguridad”, que incluía el hotel *Embajador* y el distrito de las embajadas. Entre la “zona” y la región del puente Duarte, se estableció un “corredor de seguridad” de 5,5 km de largo, que cortó la ciudad en dos partes, aislando en la *Ciudad nueva* al Estado Mayor constitucionalista del distrito que se encontraba bajo su control al norte de la capital. En la “zona” y en el “corredor” se ubicaron los tanques y la artillería. Montaban el servicio de guardia los *marines*. A la República Dominicana fueron enviadas también tropas especiales, los difamados “boinas verdes”.

El 2 de mayo, el presidente Johnson pronunció un discurso por la radio y la televisión de los EE.UU. formulando la cacareada “doctrina Johnson”, que proclamaba la violación abierta del principio jurídico internacional de no intervención. “Las naciones americanas —dijo Johnson— no deben permitir y no permitirán el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental”.<sup>1</sup> La doctrina Johnson no se refería solamente a la República Dominicana, tenía en cuenta a todos los países de América Latina y perseguía el fin de intimidar a las fuerzas progresistas de los pueblos latinoamericanos amenazándolos con el uso de las armas.

Por aquel entonces, el 2 de mayo de 1965, la prensa soviética publicó una Declaración de TASS, en la que se decía que la intervención norteamericana en Santo Domingo constituía un acto de agresión directa contra el pueblo de un pequeño país. El representante permanente de la URSS en la ONU, N. Fedorenko, demandó la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad para considerar el problema de la intervención armada por parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de la República Dominicana.<sup>2</sup> El Consejo de Seguridad debía reunirse el 3 de mayo. Dos días antes de esa fecha,

---

<sup>1</sup> *The Department of State Bulletin*. Vol. 52, N 1351, May 17, 1965, p. 746.

<sup>2</sup> *Conseil de Sécurité*. s/6316. Nations Unies, New York, 1966, p. 70.

el 1º de mayo, comenzó su labor la Conferencia Consultiva de Cancilleres de la OEA.

El gobierno de los EE.UU. decidió servirse de la OEA como pantalla para su intervención en la República Dominicana: propuso crear una fuerza armada interamericana para realizar la acción militar en Santo Domingo. En la reunión de la Comisión General de la X Conferencia Consultiva de la OEA, la resolución respectiva obtuvo el número de votos necesario, pero entre estos 14 votos, figuraban el voto de los propios Estados Unidos y el dominicano a título del derrocado gobierno de Reid Cabral. Ya el 6 de mayo, los EE.UU. tenían en la República Dominicana más de 14 mil efectivos de tropas terrestres, más de 8 mil de las fuerzas navales, 626 de las unidades aéreas y 6.924 *marines*; en total, más de 30 mil hombres. Para proveerlos de todo lo necesario y sustentar a los “gorilas” dominicanos, los EE.UU. tuvieron que tender un puente aéreo entre San Juan (Puerto Rico) y la base de San Isidro. 275 aviones cubrían el servicio. Esta enorme máquina de guerra debía ser camuflada con los contingentes simbólicos de los países que accedieron a enviar a soldados a “las fuerzas de paz interamericanas”.

Resultó que los EE.UU. recibieron la mayor ayuda del Brasil: este país envió 1.250 efectivos; Honduras mandó 250 soldados; Costa Rica, 20 policías sin armas, pero bajo el mando de un coronel; y El Salvador..., 3 oficiales.

Allegando la “doctrina Johnson”, el representante de los EE.UU. ante la ONU, Stevenson, aclaró que la intervención respondía a la necesidad de tomar medidas defensivas contra los desórdenes y la “amenaza comunista” en la República Dominicana, pero no pudo convencer a nadie. Tampoco pudo engañar a nadie el carácter de las fuerzas de paz interamericanas, aunque fue nombrado jefe el general brasileño Hugo Panasco Alvim, mientras el general norteamericano Bruce Palmer, figuraba como su modesto ayudante.

Los acontecimientos de Santo Domingo centraron la atención de la opinión mundial, y los EE.UU. se vieron obligados a iniciar negociaciones con Caamaño. Para ablandarlo, decidieron cambiar la correlación de fuerzas existente: el 15 de junio las tropas norteamericanas comenzaron una ofensiva contra la zona de los constituciona-

listas. El bombardeo de la artillería contra la zona duró más de 10 horas, los constitucionalistas rechazaron heroicamente durante 48 horas el ataque de las fuerzas incomparablemente mayores del enemigo. Los invasores ocuparon cerca del 30% del territorio de la zona de los constitucionalistas, uniendo los barrios ocupados al “corredor internacional”. En las calles de la ciudad mártir, quedaron cientos de muertos. El cese del fuego se logró sólo con ayuda de la ONU.

Las negociaciones duraron más de dos meses. Terminaron con la firma del *Acta de Reconciliación dominicana* entre los constitucionalistas (Caamaño) y las fuerzas de la reacción dominicana, apoyadas por los intervencionistas. El 3 de septiembre, Héctor García Godoy fue nombrado jefe de un gobierno provisional que en el curso de 9 meses debía preparar y celebrar elecciones generales en el país. Este gobierno de compromiso debía servir de instrumento de la política de los EE.UU. Podía existir sólo con el apoyo económico y político de los EE.UU., y protegido por las armas de los intervencionistas. La meta principal planteada a Godoy era el desarme de los constitucionalistas. La reacción desató el terror, pero el pueblo reclamó cada vez con mayor fuerza la retirada de las tropas extranjeras de Santo Domingo. “¡Fuera los yanquis!”, decían los dominicanos. El gobierno de Godoy no podía pasar por alto estas demandas; sin embargo, los EE.UU. no se apresuraban a la evacuación.

El 28 de junio de 1965, fue trasladado de los EE.UU. a Santo Domingo, Joaquín Balaguer, político de la era trujillista, presidente fantoche de los tiempos de la dictadura, quien contaba con plena confianza del gobierno y los monopolios estadounidenses. Precisamente él debía ser el nuevo presidente del país “apaciguado”.

Las elecciones celebradas el 1° de junio de 1966, transcurrieron en condiciones de ocupación militar y bajo la mirada de “observadores” expertos. Por consiguiente, según era de esperar, resultó electo presidente, Joaquín Balaguer. La prensa extranjera calificó los resultados de las elecciones como la primera verdadera “victoria” de los EE.UU. en la causa dominicana.<sup>1</sup> Ahora los EE.UU. podían prestar oídos a los ruegos de Godoy de poner fin a la intervención.

---

<sup>1</sup> *Politique étrangère*. París, 1966, N 3, p. 302.

El 24 de junio de 1966, la X Conferencia Consultiva de la OEA aprobó una resolución sobre la retirada de las “fuerzas interamericanas de paz” a partir del 1° de julio y con el fin de terminar la operación en 90 días. Para desembarcar más de 40 mil hombres bastó una semana; sin embargo, para evacuarlos, se necesitaron 3 meses. El 1° de julio, el presidente Balaguer prestó juramento como nuevo presidente de la República Dominicana. Ahora debía pagar la factura, y es preciso reconocer que no desilusionó a sus tutores norteamericanos.

El último grupo de tropas intervencionistas partió de Santo Domingo el 21 de septiembre de 1966, pero quedaron unos 2 mil militares norteamericanos para prestar “ayuda técnica” a Balaguer: fueron destinados como instructores del ejército dominicano.

La casta militar dominicana fue depositaria del armamento traído por los invasores. Estas armas sirvieron para fortalecer las fuerzas armadas dominicanas, que constituían el pilar del régimen de Balaguer y se hallaban de hecho subordinadas a los asesores yanquis. El país fue cubierto por toda una red de agentes de la CIA, de la Agencia de Información, del Cuerpo de Paz y otros. La plantilla de la embajada norteamericana en Santo Domingo creció de 89 a más de 600 personas.

La intervención armada de los EE.UU. de 1965 a 1966 en la República Dominicana constituye una gravísima auto acusación del imperialismo norteamericano, demostró una vez más a la opinión mundial que la “política de las cañoneras” no ha pasado. En la segunda mitad del siglo XX, este anacronismo político continúa siendo un instrumento importante del arsenal de los EE.UU., y un método antiguo, pero no caduco, de ejercer la política del dictado norteamericano.

I. GRIGULÉVICH

## NICARAGUA INDÓMITA

América Central es considerada una de las regiones más pobres y atrasadas del hemisferio occidental. Hasta hace poco, las repúblicas que la componen eran denominadas con desprecio por la prensa burguesa de los EE.UU. “bananeras”. Durante decenios han sido gobernadas en realidad por la compañía bananera norteamericana *United Fruit*, la “Mamita Yunái” como la llama el pueblo.

Las normas allí reinantes sirvieron al escritor O Henry de material inicial para su célebre obra *Cabbages and Kings*.

Cualquiera de los países centroamericanos podría ser la República Anchuria que inventó el escritor y donde mandan aventureros y negociantes norteamericanos.

Desde hace mucho, esta región ha sido objeto de la intervención permanente de los Estados Unidos, de sus invasiones, largas ocupaciones, golpes de Estado inducidos, todo tipo de presiones, amenazas y chantajes. Los EE.UU. han aplicado allí durante decenios, la “política de las cañoneras” y del “gran garrote”.

Según representantes de Washington, el acusado interés por esta región responde a consideraciones estratégicas, que siempre han ejercido una influencia particular en la elaboración del rumbo de la política exterior de los EE.UU. En Washington miran habitualmente a Centroamérica como la “barriguera” de los Estados Unidos y una obligada zona de su exclusiva influencia. Además, considerando América Central como una de las regiones claves del mundo en el sentido estratégico, Washington siempre ha aspirado a ocupar allí sólidas posiciones político militares con el fin de asegurarse el control de vastos espacios en el Pacífico y el Atlántico.

En beneficio de los intereses de los bancos y los consorcios norteamericanos, los Estados Unidos han administrado justicia y castigado a los países del Caribe, derribado gobiernos y llevado al poder a

sus testafierros. Han mantenido allí durante décadas, sus tropas, han controlado las aduanas, la recaudación de impuestos y las relaciones exteriores. Esta fue hasta hace poco, la suerte de todas las repúblicas de Centroamérica y la cuenca del Caribe, Cuba y Nicaragua entre ellas, cuyos pueblos han terminado por vía revolucionaria con el predominio norteamericano y han emprendido en sus países al camino de la construcción de una nueva vida.

Nicaragua fue la república centroamericana que reclamó mayor atención de los EE.UU., debido a su importante situación estratégica en el istmo entre ambos océanos.

En 1848 fueron descubiertas las minas auríferas de California. Miles de norteamericanos de los Estados del Este de los EE.UU. se dirigieron al oeste en busca de fortuna; los partícipes de esta extraordinaria epopeya regresaban de California al Este enriquecidos o completamente arruinados. No existía aún un ferrocarril transcontinental que enlazara el Este y el oeste norteamericano, y el camino a California, atravesando regiones apenas exploradas, era largo y peligroso. Lo mismo se puede decir del camino alrededor del Cabo de Hornos. La vía a través de Centroamérica era bastante más expedita aunque relativamente cara.

En 1849 el multimillonario Cornelius Vanderbilt y su socio Joseph White firmaron con el gobierno de Nicaragua un acuerdo sobre la construcción de un canal transoceánico, y en 1851 obtuvieron el derecho monopolístico al transporte de cargas y viajeros por el territorio del país. Crearon para ello la *Accessory transit Company* que prometió pagar al gobierno nicaragüense 10 mil pesos al año y el 10% de las ganancias líquidas anuales. La compañía trasladaba mensualmente a California y desde California, atravesando Nicaragua, hasta 2 mil pasajeros, embolsándose grandes sumas. Vanderbilt pagó la primera cuota y no se molestó más en pagar a Nicaragua, pese a las reiteradas demandas del gobierno.

El enviado norteamericano, Solon Boland, al entregar en 1853 sus cartas credenciales al presidente de Nicaragua, declaró amenazador que un país con una situación geográfica tan conveniente no podía pretender “poseer esta riqueza para sus intereses exclusivos, impi-

diendo el acceso a esta a las demás naciones”.<sup>1</sup>

Por indicación de Washington, Boland obligó al gobierno nicaragüense a firmar a principios de 1854, un acuerdo que permitía el paso de las tropas norteamericanas a través del territorio de Nicaragua. Precisamente entonces, el norteamericano William Quinney fundó una compañía para colonizar Centroamérica, comprando 30 millones de acres de tierra al “rey de la Costa de los Misquitos” con este propósito; pero esta vez los nicaragüenses no resistieron y protestaron; bajo su presión, el “rey de los Misquitos” anuló el trato con Quinney. Lo que por otra parte, no privó a los aventureros norteamericanos del deseo de apoderarse de las tierras “de nadie” en Centroamérica; sus planes demenciales eran apoyados por las autoridades norteamericanas. Carlos Marx escribió a este respecto: “Las constantes expediciones piratescas de los filibusteros contra los países centroamericanos... eran dirigidas por la Casa Blanca desde Washington”.<sup>2</sup>

Su objetivo era conquistar nuevas tierras para propagar la esclavitud y el dominio de los esclavistas.

Las expediciones de William Walker, aventurero norteamericano, a Centroamérica, constituyen un ejemplo elocuente de las actividades de estos filibusteros. Nació en 1823, cursó estudios superiores primero jurídicos en Nashville y luego médicos en Filadelfia. Soñaba con ser rico y tener influencia. A principios de los años 50 del siglo pasado, esto podía lograrse con mayor facilidad en el Oeste, en California. Hacia allí se dirigió este aventurero, que entonces tenía 27 años.

Acababa de concluir la guerra norteamericano mexicana. En México no cesaban las querellas intestinas, uno tras otro estallaban los golpes de Estado. En este ambiente Walker decidió anexar el Estado mexicano de Baja California, efectuando allí una operación a semejanza de la de Texas (los norteamericanos proclamaron el Estado mexicano de Texas primero Estado “independiente” y luego lo

---

<sup>1</sup> Cit. de N. Leónov. *Ensayos de la nueva y novísima historia de los países de América Central*. Moscú, 1975, p. 90.

<sup>2</sup> C. Marx. *La guerra civil en Norteamérica*. C. Marx y F. Engels. *Obras*, t. 15, p. 342.

unieron a los Estados Unidos). El 30 de octubre de 1853 Walker, nombrándose coronel, desembarcó al mando de una banda de mercenarios cerca de La Paz, capital de la península, tomó la capital, arrestó al gobernador local, hizo arriar la bandera mexicana y se proclamó “presidente de la República de Baja California”.

Las autoridades norteamericanas de San Francisco acogieron las acciones del filibustero con entusiasmo y abrieron una oficina para reclutar mercenarios en su ayuda, pero a Walker le pareció insuficiente la Baja California y se encaminó al vecino Estado mexicano de Sonora, que también se proclamó “República independiente”.

El ejército mexicano expulsó a los invasores de Sonora y luego los obligó a abandonar La Paz y refugiarse en los EE.UU., lo que lograron realizar con ayuda de unidades fronterizas norteamericanas. Walker permaneció en México cerca de siete meses y logró escapar sólo con 38 de sus secuaces. En tierra mexicana encontraron la muerte unos 200 filibusteros.

Sin embargo, la lección recibida en México no aprovechó a Walker, quien eligió como nuevo “campo de acción” a Nicaragua.

En aquel entonces, en Nicaragua se libraba una larga guerra civil entre los conservadores y los liberales. Los norteamericanos decidieron aprovecharse del conflicto. Un tal Bayron Cole convenció al líder liberal, Castillón, de que debía llamar en su ayuda a los 200 filibusteros encabezados por Walker, prometiendo armarlos debidamente. A cambio, recibió una concesión para la extracción de oro. Castillón prometió que, en caso de vencer, pagaría todos los gastos relacionados con el mantenimiento de la banda de Walker y pondría a su disposición 21 mil acres de tierras fértiles. La compañía de tránsito de Vanderbilt costó el traslado de los mercenarios a Nicaragua.

El propio Walker aceptó involucrarse en la nueva aventura sólo cuando Castillón le prometió aumentar a 52 mil acres los terrenos para sus bandidos.<sup>1</sup>

El 13 de junio de 1855, Walker con 55 filibusteros (llamaba ahora a su banda “La falange americana de los inmortales”) desembarcó en

---

<sup>1</sup> F. Cramer. *Our Neighbour Nicaragua*. New York, 1929, p. 79-80.

Realejo, puerto nicaragüense del Pacífico.

Walker declaró que su intención era unir América Central y Cuba a la Confederación de los Estados del Sur (los Estados esclavistas de los EE.UU.). Abrió ampliamente las puertas de Nicaragua a los inmigrantes blancos de los EE.UU., cada uno de los cuales recibía, sin pago alguno, un terreno de 250 acres, y si venía con la esposa, 350 acres.

El gobierno de Walker en Nicaragua provocó que se levantaran contra él no sólo los nicaragüenses, sino también los habitantes de otras repúblicas centroamericanas que, uniendo sus fuerzas, derrotaron a los filibusteros. Walker fue fusilado, aunque las autoridades norteamericanas intentaron salvarlo.

La acción de Walker no fue ni mucho menos, sólo una página en la biografía de uno de estos numerosos aventureros; reflejaba las tendencias que impregnaron la política exterior estadounidense. He aquí lo que dijo aún en vida de Walker el senador Brown: “Nos interesa poseer Nicaragua. Acaso se considerará extraordinario que yo hable así, y que manifieste la necesidad que tenemos de apoderarnos de la América Central; pero si tenemos esta necesidad, lo mejor que podríamos hacer es obrar como amos: ir a esa tierra como dueños. Si sus habitantes quieren tener un buen gobierno, perfecto, tanto mejor; y si no, que se larguen a otra parte. Acaso existan tratados; pero, ¿qué importa eso? Lo repito: si necesitamos la América Central, sepamos apoderarnos de ella, y si Francia e Inglaterra osan intervenir, les leeremos la doctrina Monroe”.<sup>1</sup>

William Walker es una encarnación temprana de la política exterior agresiva y la diplomacia norteamericanas, su padre espiritual y su apóstol.

Después de Walker, el poder en Nicaragua perteneció durante más de 30 años a los conservadores. En este tiempo los EE.UU. sometieron al país económica y políticamente, desplazando en definitiva a Inglaterra a un segundo plano en la región. En 1893 asumió la presidencia de Nicaragua el general José Zelaya (1893-1909), líder de

---

<sup>1</sup> M. Medina Castro. *Estados Unidos y América Latina, Siglo XIX*. La Habana, 1968, p. 354.

los liberales y partidario de la unidad de América Central. Formó por primera vez en la historia del país un ejército profesional, inauguró la Escuela Politécnica, fundó una compañía naviera nicaragüense en el lago de Nicaragua. Zelaya abrió escuelas, estimuló la producción cafetalera, tendió ferrocarriles, dirimió conflictos fronterizos con Costa Rica, y tomó varias medidas con el fin de aminorar la influencia económica y política de los EE.UU. Washington desplegó inmediatamente actividades enérgicas tendentes a eliminar al indeseable presidente.

Precisamente a esos tiempos, se remonta el comienzo de la aplicación de la política del “gran garrote” por parte de los EE.UU. El presidente Theodore Roosevelt, autor de esta doctrina, declaró: “El desorden crónico o la impotencia debidos a la disolución general de los lazos de la sociedad civilizada, pueden, tanto en América como en cualquier parte, requerir apremiantemente la intervención de una de las naciones civilizadas”.<sup>1</sup> Como es natural, según T. Roosevelt, el país “civilizado” más apropiado para tal intervención era los Estados Unidos, y la región ideal para tal intervención, las repúblicas centroamericanas, y ante todo, Nicaragua.

En 1909 en Bluefields, el general Juan J. Estrada se amotinó contra Zelaya. Participaron en la conspiración el líder de los conservadores Emiliano Chamorro Vargas, el empleado de la *Luz y Los Angeles Mining Company* norteamericana Adolfo Díaz, el enviado de Nicaragua en Washington Espinosa y otros. Los financiaron los dirigentes de la *United Fruit Company*, y los apoyaron los círculos oficiales de los EE.UU. Cuando Zelaya mandó el ejército a aplastar el motín, los EE.UU. desembarcaron en Bluefields 4.000 *marines* bajo el mando del comandante Smedley Butler. Estrada, al llevar a cabo sus acciones militares contra Zelaya, se valió en particular de los servicios de dos mercenarios norteamericanos que volaron los barcos militares del gobierno que se dirigían a Bluefields por el río San Juan. Ambos saboteadores norteamericanos cayeron en manos de las autoridades y fueron sentenciados al fusilamiento. El secretario de Estado estadounidense, Ph. Knox, fingió noble indignación con

---

<sup>1</sup> E. Crawley. *Dictators Never Die. A Portrait of Nicaragua and the Somoza Dynasty*. London, 1979, p. 37.

este motivo y expulsó de Washington al enviado nicaragüense. Fueron rotas las relaciones diplomáticas con Managua. Aprovechando el pretexto del fusilamiento de los mercenarios, los EE.UU. pasaron a la intervención militar directa.

Por orden del gobierno de los EE.UU., fueron enviados a Nicaragua 8 buques de guerra, que desembarcaron en su tierra a 2.600 *marines* y 125 oficiales. Los yanquis sometieron Managua y Masaya a bombardeo. Zelaya tuvo que dimitir. Se hizo cargo del poder José Madriz, otro liberal, pero los EE.UU. le negaron el reconocimiento diplomático. Entre tanto, los amotinados de Estrada sufrían un descalabro tras otro, y en su poder quedaba sólo Bluefields. Cuando las tropas de Madriz cercaron a los amotinados en esta ciudad, el crucero norteamericano *Paducah*, anclado en el puerto, tomó a los amotinados bajo su protección y desembarcó más *marines* en tierra nicaragüense. El 20 de agosto de 1910, Madriz, a su vez, abandonó el cargo de presidente de Nicaragua, que pasó al general Estrada, testaferro de los norteamericanos. Así comienza uno de los períodos más sombríos de la historia del pueblo nicaragüense.

Nicaragua permaneció bajo la férula de los EE.UU. casi ininterrumpidamente desde 1910 hasta 1979, es decir, hasta el triunfo de la revolución popular sandinista, que derribó el odioso régimen pronorteamericano del clan somocista. En estos años en el país se sucedían las sublevaciones, los complots, los motines, las “revoluciones”, y las guerras civiles. Un presidente sustituía a otro, pero el poder permanecía invariablemente en manos de testaferros de los EE.UU., cuyas tropas no abandonaron de hecho el país, y pasaban a operaciones militares activas cada vez que los intereses norteamericanos se veían amenazados, resolviendo los conflictos a su favor. En Managua, el embajador norteamericano, protegido por las bayonetas de los *marines*, fabricaba constituciones, cambiaba a los ministros, y destituía a los presidentes. Por indicación suya, en 1911 fue relevado el general Estrada del cargo presidencial y sustituido por Adolfo Díaz, obediente pelele de los norteamericanos, quien sirvió más de una vez a la aplicación de las políticas convenientes a Washington en Nicaragua.

En 1911 los financieros norteamericanos concedieron a la Repúbli-

ca un empréstito de 1,5 millones de dólares, y como garantía de su pago, pusieron al mando de la Aduana nicaragüense al coronel norteamericano Ham, quien controló las finanzas del país durante casi 20 años. A manos de financieros norteamericanos, pasaron pronto el Banco Nacional, los ferrocarriles y las demás palancas de la vida económica de Nicaragua.

En julio de 1912, cuando ocurrió un levantamiento contra el presidente Díaz, los EE.UU. enviaron inmediatamente a Nicaragua “para proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos norteamericanos”, un destacamento de 100 *marines*. Pronto el número de soldados norteamericanos rebasó los 2.500. Tomaron las principales ciudades del país. Incluso el autor norteamericano F. Cramer, apologista de la política expansionista estadounidense, tuvo que reconocer: “Para el nicaragüense común, el derrocamiento por los norteamericanos de la revolución (o sea, de la insurrección contra Adolfo Díaz. —*I.G.*) había sido, según sus recuerdos, más devastador que cualquier guerra civil. Los *marines*, en menos de tres meses, ocuparon con sus acciones mucho mas territorio, mataron más personas y destruyeron más propiedades que cualquier ejército nativo alguna vez en tres años”.<sup>1</sup>

La infantería de la marina de los EE.UU. permaneció en Managua 12 años a fin de privar a cualquier grupo rebelde del deseo de cambiar el *status quo*. En 1914, cuando empezó la navegación por el Canal de Panamá y en Europa estalló la Primera Guerra Mundial, los EE.UU. y Nicaragua firmaron el Tratado Bryan-Chamorro, que otorgaba “a perpetuidad” a los Estados Unidos el derecho a construir un canal interoceánico en cualquier parte del territorio nicaragüense y entregaba en arriendo a los EE.UU. por 99 años (renovable según el deseo unilateral de los EE.UU.) las islas Maíz Grande y Maíz Chico. Además, los EE.UU. recibieron el derecho a construir una base naval en la región del Golfo de Fonseca en el litoral del Pacífico. Los EE.UU. pagaron por estos “derechos” a Nicaragua, 3 millones de dólares en oro.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> F. Cramer. *Op. cit.*, p. 160-161.

<sup>2</sup> Véase el texto del tratado. I. J. Cox. *Nicaragua and the United States. 1909-1927*, p. 838-840.

Los hechos enumerados muestran la falsedad y la hipocresía de los círculos gobernantes estadounidenses que pretenden ahora justificar su intervención en los asuntos internos de las repúblicas latinoamericanas con afirmaciones míticas sobre la supuesta presencia en estos países del peligro de dominio comunista. Los EE.UU. enviaban sus tropas al Sur del Río Bravo mucho antes de la Revolución de Octubre en Rusia. Las razones no eran diferentes: geográficas, estratégicas y políticas. Unas veces los gobernantes norteamericanos pretendían figurar como guardianes del orden internacional, legisladores del régimen democrático, campeones de la justicia, guardianes de la paz, y otras veces desempeñaban sencilla y llanamente el papel de gendarmes, pensando siempre exclusivamente en sus propios intereses.

De 1910 a 1926 en Nicaragua se sucedieron en 16 años 7 presidentes. Y todos estos años, la prensa norteamericana llamó a Nicaragua con mofa “la república de los hermanos Brown”, por el nombre del banco *Brown Brothers and Co.*, que concedía créditos leoninos al gobierno nicaragüense.

La infantería de la marina de los EE.UU., establecida en el país desde 1912, permaneció en Nicaragua 13 años. Después de la Primera Guerra Mundial, el movimiento antiimperialista que abarcó toda América Latina, planteó también la cuestión de la retirada de las tropas norteamericanas de Nicaragua. El conservador Carlos Solórzano, quien venció en las elecciones presidenciales de 1924 (con el líder liberal Juan B. Sacasa como vicepresidente) firmó con los EE.UU. un acuerdo sobre la sustitución de la infantería de la marina estadounidense por un cuerpo de policía de 400 hombres al mando del general norteamericano Carter, de la policía de Texas. El 1º de agosto de 1925 los *marines* abandonaron el país, pero como mostraron los acontecimientos posteriores, no por mucho tiempo.

Apenas la infantería de la marina de los EE.UU. abandonó el país, los partidarios del general Emiliano Chamorro hicieron un intento de tomar el poder. El 25 de octubre de 1925, Chamorro ocupó la fortaleza de La Loma, que dominaba la capital, y obligó a Solórzano a nombrarlo jefe del ejército. El vicepresidente Sacasa huyó al extranjero. El 13 de enero de 1926, Chamorro fue nombrado minis-

tro de Defensa y al cabo de 4 días, el 17 de enero, dio un golpe de Estado proclamándose presidente.

Sacasa promovió un programa de lucha contra el presidente impositor. Logró asegurarse el apoyo de México, Guatemala y algunos otros países latinoamericanos. En junio de 1926 sus partidarios, formando un ejército constitucionalista, irrumpieron simultáneamente en Nicaragua desde las costas del Este y el oeste. Gran parte del territorio del país se halló bajo el control de los liberales.

El almirante J. Latimer, jefe de los buques norteamericanos dislocados a lo largo de las costas de Nicaragua, tratando de reconciliar a las partes contrarias, insistió en la dimisión de Chamorro, relevado en el cargo por el conservador Adolfo Díaz, ya conocido del lector: otro testaferro norteamericano elegido por el obediente Congreso. Pero estas maniobras no pusieron fin a la guerra civil desatada en el país. Los liberales insistían en el derecho constitucional de su líder a ocupar el puesto presidencial.

El 7 de diciembre de 1926 Sacasa regresó al país. En Puerto Cabezas en el litoral Atlántico, formó un gobierno y prometió no hacer concesiones a los Estados extranjeros. En respuesta, se produjo el desembarco de los *marines* en varios puntos del litoral Atlántico, donde establecieron “zonas neutrales”. Al propio tiempo, el secretario de Estado, Kellogg, con tal de justificar de algún modo las acciones agresivas de los EE.UU., publicó en enero de 1927 un documento titulado *La labor y la política bolcheviques en México y América Latina*, procurando demostrar con hechos fabricados que los EE.UU. intentaban “salvar” a la región de la amenaza del comunismo.

La intervención armada norteamericana se hacía otra vez realidad en Nicaragua. No quedaba sino darle la forma correspondiente. De ello se ocupó el presidente Díaz, que a mediados de enero de 1927 se dirigió a los EE.UU. pidiendo “protección militar” para su gobierno. El presidente de los EE.UU., Coolidge, ordenó al instante enviar a las costas de Nicaragua otros 15 buques de guerra con 4.500 *marines* que pronto ocuparon Managua y otras ciudades. Así comenzó la segunda intervención armada de los EE.UU. en Nicaragua.

Los periodistas norteamericanos preguntaron al secretario de Estado, Frank Kellogg:

— ¿Por qué los Estados Unidos envían toda una flota de guerra contra la diminuta República de Nicaragua?

Kellogg respondió:

— Porque el gobierno de los Estados Unidos no puede tolerar que los mexicanos apoyen el dominio del bolchevismo en un territorio que se encuentra entre los Estados Unidos y el Canal de Panamá.

Ahora es precisa una pequeña regresión. Como hemos visto, en Washington consideraban casi como su feudo la extensa región ubicada entre el Río Grande y el Canal de Panamá. La revolución burguesa democrática mexicana (1910-1917) hizo ciertas enmiendas en estas miras tradicionales de la Casa Blanca. México declaró su subsuelo patrimonio de la nación, proclamó la reforma agraria y estableció, por primera vez en América Latina, relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Todo ello provocó gran irritación en la Casa Blanca.

A finales de 1926 el gobierno estadounidense emprendió un contundente ataque a las relaciones soviético mexicanas. Con motivo de la prevista entrada en vigor en México de una nueva ley petrolera, el subsecretario de Estado norteamericano R. Olds, declaró el 15 de noviembre de 1926 que el gobierno mexicano era “filial del gobierno bolchevique”. La declaración de Olds produjo tanta indignación en ese país, que provocó una respuesta del propio presidente, P. Calles, quien estaba lejos de simpatizar con el comunismo.

En una entrevista al periódico mexicano *Excélsior*, Calles dijo: “¿Cómo pueden atribuirse a México ideas bolcheviques, a un país que se encuentra en plena organización, sin ejércitos para conquistar y sin una sombra de marina de guerra, incapaz de amenazar las defensas del Canal de Panamá o la defensa de otros países? Esta propaganda de bolcheviquismo que se nos atribuye es algo nuevo para México, y una falsedad tendiente a desacreditar al país”.<sup>1</sup>

Por supuesto, todas las acusaciones contra México y la URSS de

---

<sup>1</sup> G. Selser. *El pequeño ejército loco. Operación México-Nicaragua*. La Habana, 1960, p. 51.

“intervención” en los asuntos de Nicaragua, eran pura invención. Los verdaderos propósitos de la intervención en Nicaragua y de la campaña antimexicana montada en los EE.UU. fueron revelados en un memorándum confidencial fechado el 2 de enero de 1927 por el subsecretario de Estado, Robert Olds, quien declaró que “los EE.UU. controlan los destinos de América Central y lo hacen partiendo de sus propios intereses nacionales”.

En el clímax de estos acontecimientos, en Moscú se publicó un libro titulado *Por qué los Estados Unidos luchan contra Nicaragua*. “Para los soviéticos —escribía su autor— que siguen desde lejos los acontecimientos de Nicaragua, estos tienen un significado importante y efectivo, puesto que la aventura imperial de los Estados Unidos en Nicaragua es uno de los episodios más relevantes en la historia del gran movimiento de liberación de los pueblos coloniales y semi-coloniales.

“Hace pocos años que ese mismo terrible peligro de sojuzgamiento se cernió sobre los trabajadores de Rusia. Casi cuatro años duró la guerra civil entre el proletariado y el campesinado rusos, por una parte, y nuestros vende patrias, los generales blancos provistos de armas y recursos suministrados por los imperialistas europeos y los propios norteamericanos, por la otra.

“No hemos olvidado que la misma infantería de la marina que no ha abandonado aún el territorio nicaragüense, estuvo en el territorio de Rusia con el mismo propósito de ayudar a los reaccionarios a asfixiar la revolución popular obrero campesina. Hemos salido victoriosos de aquella lucha, pero estamos conscientes de que las fuerzas de la reacción aún no han sido quebrantadas, y que esperan ahora la oportunidad de reanudar la agresión contra nuestro país.

En todo el mundo se libra con fuerza insostenible la lucha magna y heroica de los oprimidos contra los opresores.”<sup>1</sup>

La segunda intervención armada de los EE.UU. en los asuntos de Nicaragua comenzó sólo 18 meses luego de concluir la primera. Pronto el número de *marines* en Nicaragua rebasó los 5 mil.

---

<sup>1</sup> V. Ivanóvich. *Por qué los Estados Unidos luchan contra Nicaragua*. Moscú, 1927, p. 29.

En febrero de 1927, el presidente Coolidge mandó a Nicaragua a su representante Henry Stimson, investido de poderes casi dictatoriales. Stimson —ex secretario de Defensa en el gobierno de Taft— al llegar a Nicaragua se proclamó “pacificador” y se dedicó a “aconsejar” a los liberales. Tuvo un encuentro con el general José María Moncada, jefe del ejército constitucionalista, y lo convenció de la necesidad de llegar a un compromiso con Díaz (el llamado pacto Espino Blanco del 4 de mayo de 1927). Las condiciones del acuerdo que alcanzó Stimson con las dos partes preveían: el desarme completo de todas las tropas nicaragüenses (las del gobierno y las de los liberales) por los *marines*, la organización del cuerpo de policía de Nicaragua bajo control estadounidense, la amnistía política, la libertad de prensa, que Díaz siguiese siendo presidente hasta las elecciones de 1928, que estas se celebrasen bajo control norteamericano, y que los liberales recibiesen varios cargos en el gobierno.

De las condiciones señaladas, se desprende que ambas partes habían transigido con la ulterior ocupación del país por las tropas norteamericanas.

El 11 de mayo de 1927, el general Moncada comunicó a Stimson que había convencido —aunque no fácilmente— a sus generales de la necesidad de aceptar las condiciones planteadas, y en breve tiempo todos los jefes de las unidades liberales dieron la orden del desarme. Todos, a excepción de uno —el general Augusto César Sandino— que subió a las montañas y juró no dejar las armas hasta que el último soldado norteamericano abandonara el suelo de Nicaragua.

De este modo, los EE.UU. chocaron por primera vez en Nicaragua con un enemigo que los desafiaba audazmente, y con cuyo nombre estaría relacionada toda la lucha futura por la liberación de la república del dominio de los EE.UU. y sus testaferreros.

Jamás los Estados Unidos habían parecido tan poderosos y afortunados como en 1927, eran los tiempos de la “opulencia”. Después de la Primera Guerra Mundial era la potencia capitalista más fuerte. Sus presidentes adoctrinaban a las personalidades de otros países en la manera de gobernar a los pueblos, pretendían dictar las leyes del comportamiento internacional blandiendo el “gran garrote”; amena-

zaban, instruían, advertían, amonestaban, censuraban, sermoneaban, ponían el ejemplo a los “padres fundadores” de su república, y citaban la Biblia, lo que, por otra parte, no les impedía enviar a sus soldados a establecer el “orden” en las repúblicas vecinas, derribar y colocar presidentes.

Los países de América Latina conocían desde antaño el verdadero valor de la palabrería hipócrita de los presidentes de los Estados Unidos acerca de la democracia, la libertad, el deber, y el respeto a la propiedad privada y al individuo. Todo ello no hacía sino encubrir la aplicación de la violencia, las sanciones, la ocupación y el saqueo de territorios y bienes ajenos, las intervenciones militares en México, Cuba, Haití, la República Dominicana y Nicaragua. A los gobiernos que intentaban oponer la más mínima resistencia a los yanquis, Washington pronto los hacía “entrar en razón” recurriendo a distintas formas de presión.

Aún no existía el diabólico instrumento de la CIA, pero cuando era necesario “retirar” a personalidades indeseables a los EE.UU., los amos de la Casa Blanca siempre se las arreglaban para hacerlo por manos de asesinos a sueldo, aparentando al mismo tiempo indignación con motivo de las “acciones bárbaras de los incorregibles latinos”. Así, por indicación de Washington, fueron eliminados en México el presidente Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez, los líderes campesinos Emiliano Zapata y Francisco Villa, los presidentes Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Y esto sólo en México, en aquel entonces, el país latinoamericano más fuerte, donde acababa de acontecer una revolución democrática. La pequeña Nicaragua no podía compararse con él. ¿Qué podía esperar, pues, en aquellas circunstancias Sandino al lanzar su reto a los norteamericanos? Los liberales no podían ni siquiera derribar a la camarilla de Adolfo Díaz, y contra Sandino se habían armado ahora no sólo Díaz, sino los propios liberales, partidarios de Moncada, y, lo que era más importante, los invasores norteamericanos con sus modernas armas: potente artillería, aviación y buques de guerra. Tenían a su disposición la radio, los vehículos y las novedades de la técnica, que empleaban en la lucha contra los insurgentes. Además, poseían dólares, y ¿acaso no dice el proverbio que no hay

muralla que no traspase un burro cargado de oro? Hasta entonces los norteamericanos habían ido comprando a los politiqueros nicaragüenses, tanto a los conservadores como a los liberales.

Sandino era un patriota convencido de que su pueblo era capaz de enfrentar a los enemigos internos y externos de Nicaragua, y vencerlos: lo mismo que creyeron los patriotas de la guerra de independencia que se alzaron contra los colonizadores españoles a principios del siglo XIX. La práctica ulterior de la guerra de siete años contra los invasores norteamericanos y sus agentes locales no hizo sino confirmar su razón. Por ello, Sandino suscitó sentimientos de verdadera admiración y respeto en las siguientes generaciones de latinoamericanos.

Augusto César Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en un pequeño pueblo con el nombre indígena de Niquinohomo (su nombre español era La Victoria) en el departamento de Masaya.

Su padre —don Gregorio— tenía fama de rico en Niquinohomo y era juez, su madre —Margarita Calderón— había sido jornalera en casa de su padre.

Desde pequeño Sandino había manifestado interés hacia todo tipo de mecanismo. A los 20 años abandonó la casa paterna, trabajó de ayudante de mecánico en varias granjas, y luego navegó en barcos mercantes y visitó muchos países. Pasó algún tiempo en los EE.UU. y estuvo dos años en México. Cambió con frecuencia de empleo, fue mecánico, guarda, y operador en una torre de sondeo. En el México de entonces, se intentaba —apenas terminada la revolución más radical en la historia del país— llegar a una vida de paz, no obstante la actitud hostil de los círculos gobernantes de los EE.UU. En el país se habían propagado ampliamente los ánimos antiimperialistas, agraristas y sindicalistas.

En 1925 las tropas norteamericanas se retiraron de Nicaragua. Los liberales se reanimaron. Pero con el paso del poder a la camarilla de Chamorro, la situación en el país cambió. El vicepresidente Sacasa, líder liberal, asegurándose el respaldo de México, preparaba un desembarco en Nicaragua, donde ya actuaban destacamentos armados de los constitucionalistas. A juzgar por todo, Sandino conocía los proyectos de los liberales y por ello se apresuró a regresar a su país.

Decidió formar un grupo de voluntarios, armarlos y ofrecer su servicio a Sacasa.

Al llegar a Nicaragua en junio de 1926, Sandino se enteró de la derrota de los destacamentos guerrilleros de los liberales; pero al poco tiempo llegó a sus oídos la noticia del desembarco de un destacamento liberal encabezado por Moncada en el litoral Atlántico. Moncada había declarado la formación de un ejército constitucionalista y la proclamación de un gobierno constitucional con el Doctor J. B. Sacasa a la cabeza. Al conocer todo esto, Sandino propuso a sus compañeros formar un destacamento guerrillero y comenzar la lucha armada del lado de los constitucionalistas. Pronto encabezó un destacamento guerrillero que actuaba cerca de la frontera con Honduras.

Cuando Moncada dio a Stimson su conformidad con deponer las armas, Sandino se negó a seguir su ejemplo. Según sus palabras, había comprendido que de seguir el ejemplo de Moncada, Nicaragua sería para siempre un país sin derechos y sin ninguna esperanza en el futuro. Reunió a sus combatientes en su sede de El Chipote, habló con los soldados y con los jefes. Informándoles de la situación creada en el país y de la capitulación de Moncada, les dijo que ahora ya no se trataba de luchar contra los nicaragüenses indignos, sino contra los propios invasores llegados de Norteamérica. Los combatientes que lo desearan, podían dejar las armas; pero que él y los que se quedaran con él, seguirían combatiendo hasta el final. Ninguno de sus hombres quiso abandonar el destacamento. Entonces ordenó retornar a sus hogares a todos los casados que eran necesarios en sus familias. Después de ello, quedaron 1.500 hombres de los 2.000; pero muchos de los 500 combatientes que se habían ido, pronto regresaron. La mayoría por su propio deseo y algunos porque fueron sometidos a persecuciones y represalias por parte de los conservadores y los yanquis por su participación junto a Sandino en las operaciones en las montañas de Las Segovias.<sup>1</sup>

Así comenzó la desigual lucha de Sandino y sus compañeros contra las fuerzas superiores de los yanquis, que tenían aviones de combate, una potente artillería, decenas de buques de guerra cerca de las

---

<sup>1</sup> Campos Ponce. *Los yanquis y Sandino*, México, p. 44, 45.

costas de Nicaragua y contaban con agentes locales colaboracionistas, delatores y verdugos. Fue una lucha que duró siete años sin interrupción. Los intervencionistas norteamericanos no escatimaron medios ni hombres para derrotar a Sandino. Los EE.UU. desembarcaron en esos siete años, más de 50 mil soldados en Nicaragua. Al mismo tiempo, en suelo nicaragüense permanecían hasta 7 mil invasores. El mando estadounidense comunicó reiteradamente que Sandino había sido liquidado, muerto, y que habían hallado y reconocido su cadáver; pero pronto resultaba que estas noticias eran una falacia, y la lucha de los patriotas continuaba.

Por lo general, los invasores norteamericanos permanecían en puntos poblados protegidos por alambradas, nidos de ametralladoras, fosos, trincheras y fortificaciones; pero de vez en cuando enviaban patrullas a limpiar el terreno, aterrorizar a los campesinos, y entrenar a sus soldados en operaciones militares en la selva tropical. Estas patrullas eran atacadas por los combatientes sandinistas, quienes a veces esperaban pacientemente semanas en la jungla, a menudo bajo lluvias torrenciales, padeciendo hambre, sed y las picaduras de los insectos. Los guerrilleros les permitían a los soldados norteamericanos aproximarse a corta distancia, abrían fuego y desaparecían sin dejar rastro.

Los norteamericanos emplearon masivamente la aviación contra los sandinistas. Bombardeaban sistemáticamente desde el aire los poblados campesinos y los objetos móviles en la zona de operaciones militares: a las personas, el ganado y los vehículos. Miles de campesinos nicaragüenses, mujeres, niños y ancianos murieron en estos bombardeos “a ciegas” norteamericanos. Mas tampoco la aviación ayudó a los EE.UU. a acabar con Sandino. Después de algún tiempo, los combatientes de Sandino aprendieron la táctica de luchar contra los aviones. Cada combatiente buscaba una posición conveniente en el bosque, subía a un árbol alto o a una roca y disparaba contra los aparatos en el aire. Los frecuentes aciertos obligaron a los norteamericanos a renunciar a los vuelos rasantes, lo que, a su vez, tuvo como efecto la disminución de la eficacia de los bombardeos. Tras varios años de guerra, los norteamericanos pasaron a la práctica del desalojo forzoso de los campesinos de sus tierras en las zonas “de peligro” y su concentración en poblados especiales, donde per-

manecían bajo vigilancia de los soldados; sin embargo, esta táctica tampoco dio resultados palpables. Los campesinos, ante el peligro de ser llevados a estos poblados, se iban con los sandinistas, y a los norteamericanos no les quedó otro remedio que suspender esos campamentos.

En el transcurso de la lucha contra los ocupantes extranjeros, Sandino se convirtió en un verdadero jefe popular. Unió a sus combatientes en el Ejército de defensa de la soberanía nacional. El objetivo principal del movimiento sandinista consistía en lograr la retirada de las tropas de los intervencionistas en Nicaragua. Ello se expresaba en la consigna de Sandino “Patria y Libertad”, con la que terminaban todas sus órdenes, mensajes, cartas y llamamientos. El sello de Sandino llevaba la imagen de un *marine* derribado, sobre el que estaba un nicaragüense con su machete. Los colores rojo y negro de la bandera de los sandinistas y de la pañoleta que llevaban al cuello los combatientes, simbolizaban las metas revolucionarias del movimiento sandinista y el juramento de luchar hasta el final, hasta alcanzar esas metas. Al propio tiempo, Sandino venía subrayando reiteradamente que no aspiraba a cargo alguno en la futura Nicaragua libre, no deseaba ocupar los puestos de presidente, ministro o jefe del ejército.

El influyente diario *World*, de Nueva York, afirmó a comienzos de 1927 que lo que hacía el presidente Coolidge en Nicaragua y México no serviría sino para aumentar el odio general de los países sudamericanos contra los Estados Unidos.

En la opinión pública de los Estados Unidos causó enorme impacto la entrevista que hizo a Sandino a comienzos de 1928, el conocido periodista norteamericano Carleton Beals, quien visitó a los guerrilleros en las montañas de Segovia, y que fue publicada en la revista *The Nation*. Sandino nombró durante la entrevista las tres condiciones necesarias para poner fin a las acciones bélicas: la evacuación total de las tropas norteamericanas de Nicaragua, el nombramiento como presidente provisional de una persona civil aceptable para todos los partidos, y elecciones presidenciales bajo la observación

de representantes de países latinoamericanos.<sup>1</sup>

Sandino dijo a C. Beals en aquella entrevista: “Estamos peleando en nuestra propia patria por nuestros derechos, que son inalienables. ¿Qué derechos tienen las tropas extranjeras a llamarnos bandidos y decir que somos nosotros los agresores? Estamos en nuestra casa. No nos resolveremos a vivir cobardemente en paz mientras haya un gobierno impuesto por las naciones extranjeras. ¿Se llama esto patriotismo, o no? Cuando el invasor sea vencido, como tiene que serlo, mis hombres se contentarán con sus pedazos de tierra, sus herramientas, sus mulas y sus familias.”<sup>2</sup> Las palabras del patriota nicaragüense arrancaban la máscara hipócrita de “protectores del orden y la justicia”, con que se encubrían los imperialistas norteamericanos.

Muchas personalidades progresistas y de espíritu liberal, entre ellos congresistas disconformes con la política intervencionista de la Casa Blanca, se pronunciaban en defensa de Sandino en los propios Estados Unidos. Crecía la protesta contra los atropellos de las tropas de los EE.UU. en Nicaragua, la liga antiimperialista convocaba manifestaciones multitudinarias frente a la Casa Blanca. “Nicaragua, ¿dónde queda eso? ¿Y qué hacemos nosotros allí?” En la población estadounidense se hicieron muy populares estas palabras del conocido actor norteamericano y comentarista de radio Wil Rogers. La campaña por la retirada de las tropas norteamericanas de Nicaragua adquiría cada vez más partidarios.

En Europa Occidental, alzó su voz en defensa de los guerrilleros Henri Barbusse. En París, a iniciativa del conocido escritor argentino Manuel Ugarte, surgió el comité *¡Manos fuera de Nicaragua!* En su apoyo se pronunciaron la Federación Universitaria Hispanoamericana de Madrid y la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos en París y Berlín.

La prensa soviética de aquellos tiempos, reflejaba con amplitud la lucha de Sandino y sus soldados. En febrero de 1928 un corresponsal de TASS, proveniente de México, visitó a Sandino en los montes de Segovia. Conversando con él, Sandino repitió lo que le había

---

<sup>1</sup> *El pensamiento vivo de Sandino*. La Habana, 1980, p. 107-108.

<sup>2</sup> *Ibídem*, p. 108.

dicho anteriormente a Carleton Beals: que mientras los norteamericanos no salieran de Nicaragua, la guerra continuaría y el ejército de combatientes por la soberanía nacional no depondría las armas.<sup>1</sup>

La evidente inutilidad de la guerra contra los guerrilleros, la presión de la opinión pública, y la ampliación en los propios Estados Unidos de la campaña por la retirada de las tropas de Nicaragua, llevó a los círculos gobernantes estadounidenses a la idea de que era necesario retirar pronto las tropas del país.

En las elecciones presidenciales de 1932 venció el candidato de los demócratas Franklin Delano Roosevelt, quien prometió aplicar en su país un programa de reformas para combatir el desempleo y el desbarajuste económico, practicar en América Latina la política de “el buen vecino” y retirar las tropas norteamericanas de los países de la cuenca del Caribe. Los EE.UU. comenzaron a preparar la evacuación de sus tropas de Nicaragua.

Juan Bautista Sacasa, líder de los liberales, elegido presidente, el día de la toma de posesión del cargo —el 1° de enero de 1933— firmó al dictado de los norteamericanos un decreto nombrando a su testaferro Anastasio Somoza, jefe director de la Guardia Nacional, adiestrado por especialistas norteamericanos y que era quien en realidad detentaba el poder en el país. Al día siguiente, los *marines*, con los bienes saqueados, embarcaron en los barcos militares anclados en el puerto de Corinto y abandonaron Nicaragua. Al fin salían de ese “maldito país” (*damned country*) como llamaban a Nicaragua; pero no se iban ni mucho menos como vencedores. Según el enviado Hanna, “Sandino seguía siendo fuerte, si no más fuerte que en los tiempos pasados”.<sup>2</sup>

Al parecer, Nicaragua podría inscribir ahora una página preclara en su historia; sin embargo, no pasaron ni dos años cuando esa página fue teñida con la sangre de sus mejores hijos.

La meta principal planteada por los norteamericanos a Sacasa y su ayudante Somoza, consistía en liquidar el movimiento sandinista. Se debía alcanzar por medios políticos lo que los EE.UU. no habían

---

<sup>1</sup> *Ibíd.*, p. 117.

<sup>2</sup> E. Grawley. *Op. cit.*, p. 78.

logrado conseguir por la fuerza de las armas en siete años.

Todo lo que ocurrió después es bien conocido por la opinión internacional. En 1934, por indicación del embajador norteamericano en Managua, Arthur Bliss Lane, y por orden de Anastasio Somoza, jefe director de la Guardia, Augusto César Sandino, su hermano Sócrates y sus compañeros más próximos fueron detenidos a traición y asesinados sin instrucción de causa. En 1936 Somoza fue “elegido” oficialmente con el respaldo de los EE.UU., presidente de Nicaragua. Este “hijo de puta nuestro”, como lo llamaban en la Casa Blanca, permaneció en el poder hasta 1956, cuando el patriota nicaragüense Rigoberto López Pérez puso fin a la vida del tirano con un disparo de pistola. Tras la muerte de Somoza, Nicaragua fue gobernada por sus hijos Luis y Anastasio “Junior”, quien heredó de su padre el cargo de jefe director de la Guardia Nacional.

La familia de los Somoza gobernó el país arbitrariamente más de 40 años, expoliando al pueblo, y persiguiendo implacablemente toda muestra de oposición. Los intentos de privar de poder al clan somocista no tuvieron éxito. A comienzos de los años 60, en Nicaragua surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que proclamó la guerra contra el somocismo. En el país creció de modo gradual una ola de resistencia al régimen, que seguía sirviendo a los intereses de los EE.UU.

El movimiento antisomocista, bajo la dirección del FSLN, se ampliaba, abarcando cada vez más, nuevas capas de la población. El régimen somocista procuró detener el incremento de la lucha liberadora por medio del terror sangriento, los asesinatos masivos y feroces torturas. Los somocistas eran armados por los EE.UU. e Israel, y “asesorados” por la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado. La Guardia bombardeaba con artillería pesada y con la aviación a los insurgentes. Combatiendo contra el régimen odioso de los herederos de Somoza, murieron más de 100 mil personas de los dos millones y medio que poblaban Nicaragua; pero el 19 de julio de 1979 el pueblo encabezado por el FSLN, triunfó; Somoza y sus allegados huyeron a los EE.UU., donde guardaban en los bancos parte considerable del capital hurtado: más de mil millones de dólares.

Así, como resultado de casi 150 años de lucha contra los invasores extranjeros, la pequeña Nicaragua obtuvo al fin la verdadera independencia y la libertad.

Desde el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, la Casa Blanca ha hecho todo lo posible por retrotraer el país a los tiempos del somocismo. No cesa de armar, financiar y entrenar a las bandas de la escoria somocista, trasladándola a Nicaragua para efectuar actos diversionistas. Exige al gobierno sandinista renunciar a la política de reformas sociales, y amenaza a la nueva Nicaragua con otra intervención armada, confiando aún en recuperar el poder en este país; pero sus esperanzas son vanas y estériles.

La historia de la lucha del pueblo nicaragüense por su liberación muestra que los planes de los imperialistas norteamericanos están condenados al fracaso.

ARINA CHUMAKOVA

**GUATEMALA:**

**EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO DE ARBENZ**

En la larga relación de actos de agresión e injerencias del imperialismo norteamericano en los asuntos de las repúblicas latinoamericanas, ocupa un lugar especial la intervención de 1954 en Guatemala. Esta intervención —una de las páginas más ominosas en la historia de las relaciones interamericanas— es una muestra moderna de la política del “gran garrote”, que pone de relieve a los ojos de los pueblos de Latinoamérica, la verdadera esencia agresiva y la orientación contrarrevolucionaria de la política de Washington en los países del hemisferio occidental.

La revolución democrático burguesa de 1944 a 1954 en Guatemala, a medida que se iba desarrollando, se hizo gradualmente blanco directo de los ataques de los círculos gobernantes de los EE.UU. y los regímenes centroamericanos obedientes a los EE.UU. La primera fase de la revolución, relacionada con la labor del gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951) y con su orientación reformista, no preocupaba demasiado a Washington; aunque ya entonces, aparecieron algunos síntomas de agudización en las relaciones guatemalteco norteamericanas. En 1948 los EE.UU. negaron al gobierno de Arévalo el suministro de armas, y en 1950 el gobierno guatemalteco tuvo que pedir la revocación del embajador norteamericano, R. Patterson, implicado en actividades antigubernamentales. Los permanentes conflictos entre la poderosa *United Fruit Company* y los obreros eran motivo de más choques entre el gobierno guatemalteco y los representantes diplomáticos norteamericanos.

Cuando en 1951 llega al poder el gobierno de Jacobo Arbenz y comienza la segunda fase de la revolución, cuyas fuerzas motrices eran la burguesía nacional, la pequeña burguesía con ánimos demo-

cráticos, la clase obrera y el campesinado<sup>1</sup>, cuando se hizo más hondo el proceso de transformaciones socioeconómicas, las relaciones guatemalteco norteamericanas se hicieron cada vez más tensas. El rumbo del gobierno de Arbenz, con su aspiración a aplicar una política independiente y soberana, orientada a proteger los recursos naturales del país, ampliar los vínculos con los países del oeste y el Este de Europa, y renunciar a la “ayuda” por parte de los EE.UU., venía a contrariar cada vez más los intereses de los círculos monopolistas norteamericanos y provocaba descontento en Washington.

Pero lo principal que no podía permitir Washington era la consolidación de los cambios políticos ocurridos en Guatemala. El gobierno de Arbenz refrendó legislativamente las conquistas sociales de los trabajadores, creó premisas para la labor legal de los partidos políticos democráticos y los sindicatos. Comenzó a actuar legalmente en el país el partido comunista (Partido Guatemalteco del Trabajo), y en diciembre de 1952, en condiciones de legalidad, fue convocado su II congreso. Todo ello motivó una campaña antiguatemalteca en la prensa norteamericana, en la que proliferaron los infundios acerca del “peligro rojo comunista”. El auge del movimiento obrero en Guatemala provocaba creciente temor en los medios monopolistas de los EE.UU., y las huelgas, cada vez más frecuentes en las plantaciones de la *United Fruit* eran consideradas una amenaza directa a los intereses del capital norteamericano.

Las relaciones guatemalteco norteamericanas se agudizaron aún más cuando en junio de 1952, el gobierno de Arbenz aprobó la Ley de Reforma Agraria, que preveía la expropiación de las tierras pertenecientes a la *United Fruit Company* y a la oligarquía agraria. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria provocó una brusca reacción por parte de la dirección de la *United Fruit*. Significativamente, en la lucha contra las transformaciones agrarias del gobierno de Arbenz, el papel principal lo desempeñó, no la oligarquía agraria local, sino la *United Fruit* y las fuerzas políticas con ella relacionadas en los Estados Unidos.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Véase H. Alvarado Arellano. *Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo*. Guatemala, 1975, p. 42.

<sup>2</sup> Véase N. Leónov. *Ensayos de la historia moderna y contemporánea de los países*

Con arreglo a la ley, en marzo de 1953 fueron expropiados 234 mil acres de tierras pertenecientes a la *United Fruit Co.*, a la que se le ofreció una compensación de 600 mil dólares en bonos de la reforma agraria con un interés del 3% anual; no obstante, ya los primeros intentos de realizar las transformaciones agrarias fueron recibidos de uñas en los EE.UU.

En aquellos tiempos, en la atmósfera de tensión internacional del período de la “guerra fría” y del desenfreno del macartismo, se fue formando la nueva estrategia latinoamericana de Washington. La base ideológica de esta estrategia era el anticomunismo beligerante. El periodista norteamericano J. Gerassi señaló posteriormente que “Arévalo y Arbenz eran considerados por todos los latinoamericanos como reformadores sociales y nacionalistas; sin embargo, para el Departamento de Estado y la prensa, eran comunistas y agentes rusos”.<sup>1</sup> Las acusaciones contra Arbenz de simpatizar con el comunismo y la participación de los comunistas en su gobierno fueron el principal motivo de la campaña iniciada por los servicios diplomáticos y secretos para desestabilizar el gobierno de Arbenz y preparar su derrocamiento.

El rumbo intervencionista estadounidense respecto a Guatemala, se desarrolló en varias direcciones y abarcó todo un conjunto de medidas económicas, diplomáticas y militares, comprendiendo igualmente una vasta campaña ideológica tendente a minar la base social del gobierno de Arbenz y apoyar a las fuerzas de la contrarrevolución local.

Una de las líneas principales del rumbo intervencionista de Washington durante la preparación del derrocamiento del gobierno democrático burgués de Arbenz y para asfixiar a la revolución, fue el uso del mecanismo del sistema interamericano para influir por los canales diplomáticos en el gobierno guatemalteco. De ahí, la apelación frecuente al Tratado de ayuda mutua interamericano y a la Carta de la OEA, así como a las resoluciones anticomunistas *Sobre la conservación y la defensa de la democracia en América* y *Sobre el*

---

*de América Central*. Moscú, 1975, p. 273.

<sup>1</sup> J. Gerassi. *The Great Fear. The Reconquest of Latin Americans*. New York, 1963, p. 163.

*fortalecimiento de la seguridad interior* aprobadas en 1948 y 1951. Estas resoluciones recomendaban introducir en las legislaciones de los países latinoamericanos disposiciones restrictivas a las actividades de los partidos comunistas.

Al propio tiempo, se tomaron medidas para coordinar las acciones de los países miembros de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) contra Guatemala. Menudearon los contactos entre representantes de la embajada norteamericana y el dictador nicaragüense Somoza con el propósito de asegurar el suministro de armas a las fuerzas antigubernamentales y contrarrevolucionarias de Guatemala. Las armas llegaban a Nicaragua en barcos de la *United Fruit Company*. Los representantes diplomáticos de los EE.UU. se aseguraron también el apoyo de otros regímenes centroamericanos reaccionarios.

La preparación del derrocamiento del gobierno guatemalteco se desarrolló a toda velocidad al llegar al poder en enero de 1953 la administración republicana de D. Eisenhower. Una de las figuras centrales en la elaboración y la realización de la “Operación Guatemala” fue el nuevo jefe del Departamento de Estado John Foster Dulles, director de la oficina de abogacía *Sullivan and Cromwell*, estrechamente ligada a los intereses de la *United Fruit*. Ya en los años 30, J. F. Dulles trabajó en la confección de los proyectos de acuerdos de dicha compañía con el gobierno del dictador guatemalteco Ubico. Como subsecretario de Estado para asuntos interamericanos fue nombrado John M. Cabot, también vinculado a la *United Fruit*. Allen Dulles, hermano del secretario de Estado —quien también había estado relacionado anteriormente con la *Sullivan and Cromwell*— tenía en sus manos la dirección de la CIA. Y por último, fue designado jefe de la delegación permanente de los EE.UU. en la ONU, Henry Cabot Lodge<sup>1</sup>, sobrino de John M. Cabot. Es decir, que en los puestos diplomáticos claves se encontraban personas directamente ligadas a los intereses del poderoso trust frutero.

La nacionalización de las tierras que pertenecieran a la *United Fruit* provocó de inmediato una brusca protesta por parte de los círculos gobernantes de los EE.UU. El Departamento de Estado envió al

---

<sup>1</sup> G. Toriello Garrido. *Tras la cortina de banano*. Caracas, 1979, p. 47.

gobierno guatemalteco varias notas insistiendo en que la decisión tomada fuese anulada. Los congresistas norteamericanos se apresuraron a pronunciar declaraciones amenazadoras, llamando a la intervención armada y al derrocamiento del gobierno legítimo de Arbenz.

Al mismo tiempo, en la prensa norteamericana se desató una campaña de propaganda contra Guatemala. Guatemala era tildada de “plaza de armas del comunismo soviético” y “satélite de la Unión Soviética”, y al gobierno de Arbenz se lo calificaba de comunista y adversario de las potencias occidentales. Al son de esta ruidosa campaña de la prensa y bajo la cortina de humo de las notas diplomáticas, los círculos gobernantes estadounidenses buscaban el medio de liquidar al gobierno indeseable. Ya a comienzos del año 1953, los estrategas washingtonianos enumeraban entre las variantes de la solución del “problema” guatemalteco la intervención armada y la organización de un movimiento antigubernamental con bases de apoyo en los países vecinos. Se aconsejaba introducir algunos cambios en la labor de las embajadas norteamericanas en los países de Centroamérica para coordinar mejor sus actividades. En el *Memorandum sobre el problema guatemalteco* presentado al Comité Político del Congreso, se recomendaba la concertación de un acuerdo secreto entre los gobiernos centroamericanos.<sup>1</sup> No quedaba sino encontrar al “ejecutor” del proyectado derrocamiento de Arbenz.

A principios de 1953, la diplomacia norteamericana, los círculos de negocios y los servicios de inteligencia estadounidenses desplegaron una cruzada contra el “peligro comunista” en Guatemala. Los preparativos del derrocamiento del gobierno de Arbenz emprendidos por la CIA, se llevaron a cabo con el acompañamiento de actos del Departamento de Estado tendientes a enmascarar la esencia intervencionista de la política de los EE.UU. en Guatemala.

El papel rector en la “legalización” de la injerencia proyectada, a los ojos de la opinión latinoamericana, se atribuía a la OEA, con ayuda de la cual los medios dirigentes estadounidenses pretendían lograr también el aislamiento diplomático del gobierno indeseable. En la X

---

<sup>1</sup> A. Berle. *Navigating the Rapids 1918-1971*. New York, 1973, p. 618.

Conferencia Interamericana celebrada en marzo de 1954 en Caracas, la delegación norteamericana insistió en la discusión de la cuestión *Acerca de la injerencia del comunismo internacional en los asuntos de las repúblicas americanas*. Precisamente sobre este punto de la agenda, J. F. Dulles presentó un proyecto de resolución que preveía la convocatoria a una conferencia consultiva en caso de surgir “un peligro de influencia del comunismo internacional”.<sup>1</sup> El canciller guatemalteco, G. Toriello, conceptuó la postura de los EE.UU. en la OEA durante la preparación de la intervención de “internacionalización del macartismo”.<sup>2</sup> El espíritu y los métodos del macartismo fueron llevados a las reuniones de Caracas, donde actuaron como cómplices de Dulles los representantes de las dictaduras reaccionarias de Batista (Cuba), Trujillo (República Dominicana), Somoza (Nicaragua) y Pérez Jiménez (Venezuela).

El delegado guatemalteco a la conferencia denunció en su intervención el verdadero sentido del plan de Dulles: tener la posibilidad de intervenir abiertamente en los asuntos de Guatemala y otros países latinoamericanos so pretexto de la lucha contra la penetración comunista. Manifestándose en defensa de la soberanía del país y del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, G. Toriello recalcó que la delegación de Guatemala se opondría resueltamente a toda resolución que violara los principios democráticos fundamentales so pretexto de la lucha contra la penetración comunista.

Como consecuencia de los groseros métodos de presión económica y la influencia política de los EE.UU., la conferencia aprobó por mayoría de votos la Declaración de Caracas de triste fama, basada en lo fundamental en el proyecto de resolución que presentó Dulles. “Al ser aprobada la Declaración de Caracas —señaló más tarde el diplomático inglés R. Steel—, el anticomunismo quedó inscrito en la definición de panamericanismo”.<sup>3</sup> La preparación del derrocamiento del gobierno guatemalteco se había puesto marcha.

A la par de los esfuerzos de la diplomacia norteamericana empeña-

---

<sup>1</sup> S. Gonionski. *América Latina y los EE.UU. 1939-1959*. Moscú, 1960, p. 295.

<sup>2</sup> G. Toriello. *Op. cit.*, p. 85.

<sup>3</sup> R. Steel. *Pax Americana*. New York, 1967, p. 202.

da en unir a los países miembros de la OEA sobre una base reaccionaria anticomunista, se aceleraron las actividades de los diplomáticos norteamericanos en Guatemala y los países colindantes. Los diplomáticos norteamericanos acreditados en Guatemala, participaron en actividades subversivas contra el gobierno legítimo coligados con los servicios secretos de los EE.UU. Bajo la dirección de los representantes diplomáticos norteamericanos se celebraron varias conferencias de los países miembros de la ODECA a las que no se invitó a Guatemala. De este modo, se infringió el Artículo 1º de la Carta de ODECA que estipula la actuación conjunta y solidaria de todos los miembros de esta organización. Los gobiernos de los países centroamericanos discriminaron política y jurídicamente a Guatemala, pisoteando los principios básicos del Derecho Internacional. Algunos diplomáticos guatemaltecos acreditados en los países centroamericanos fueron declarados *persona non grata*.<sup>1</sup> Washington utilizó el territorio de varios países centroamericanos como plazas de armas desde donde agredir a Guatemala y en las que se preparaba a las bandas contrarrevolucionarias. Debido a la actitud hostil de los regímenes centroamericanos, el gobierno de Arbenz decidió salir de la ODECA, considerando la ulterior permanencia en esta organización incompatible con la soberanía y la independencia del país.

A la CIA le correspondió el papel principal en la preparación de la intervención y el derrocamiento del gobierno de Arbenz. El grupo secreto 10/2 elaboraba y tomaba las decisiones sobre las operaciones secretas especiales, incluyendo la eliminación de regímenes indeseables a Washington. Entre los miembros de este grupo, además del director de la CIA, A. Dulles, había representantes del Departamento de Defensa de los EE.UU., del Departamento de Estado, y ayudantes especiales del presidente para la coordinación de la política exterior y las cuestiones de seguridad nacional.<sup>2</sup> Según testimonios de ex agentes de la CIA, en el grupo 10/2 se tomó, en rasgos generales, la decisión de intervenir en Guatemala, lo que fue aprobado por el presidente Eisenhower en el otoño de 1953.

---

<sup>1</sup> R. Schneider. *Communism in Guatemala, 1944-1954*, New York, 1979, p. 29.

<sup>2</sup> D. Wise and T. Ross. *The Invisible Government*. New York, 1964, p. 23-50.

Entre los dirigentes de la “operación Guatemala” estaba Tracy Barnes, funcionario de la CIA allegado a A. Dulles. Tomó también parte directa en los preparativos de la operación Richard Bissell, ayudante especial de A. Dulles. Significativamente, este mismo trío — Dulles-Bissell-Barnes— prepararía seis años después, la intervención por Bahía Cochinos en Cuba.

Bajo la cortina de humo de las acciones diplomáticas de los EE.UU. en la OEA, en el seno de la CIA se preparó la “Operación Guatemala”. El quid de la operación estaba en la organización y el financiamiento de las fuerzas contrarrevolucionarias. Se establecieron contactos con los contrarrevolucionarios guatemaltecos que habían huido del país y habían emigrado a los EE.UU. y los países de Centroamérica, y se mantenían contactos con la oposición al gobierno dentro del país.

La oposición al gobierno de Arbenz estaba integrada por representantes de la oligarquía terrateniente y por oficiales reaccionarios, empresarios y politiqueros burgueses atemorizados por la creciente influencia de las masas populares y descontentos con la democratización. Para cohesionar a la oposición antigubernamental, los funcionarios de los servicios especiales norteamericanos necesitaban una persona que pudiera desempeñar el papel de líder de la contrarrevolución guatemalteca.

La CIA encontró entre la oposición y las personas que habían participado en complots antigubernamentales, a tres posibles candidatos: el coronel Carlos Castillo Armas, Miguel Ydígoras Fuentes y Córdova Cerna, gran terrateniente, abogado y consejero de la *United Fruit*. Finalmente la CIA optó por la candidatura de Castillo Armas, quien había cursado instrucción militar en la escuela de mandos norteamericana de Kansas. Castillo Armas había sido detenido tras una intentona militar en 1952, pero huyó de la cárcel a Honduras. Pronto, en 1952, fue presentado a los funcionarios de la CIA como posible dirigente de la “liberación” de Guatemala.

Los agentes de la CIA tuvieron también varios encuentros con Ydígoras Fuentes, otro representante de la emigración contrarrevolucionaria, a quien se le ofreció ayuda para derribar al gobierno de Arbenz. Como resultado de estas negociaciones, el 31 de marzo de

1952 en San Salvador, se firmó el *Pacto secreto y obligaciones unitarias* entre Castillo Armas e Ydígoras. Según este “acuerdo caballeresco” entre los favoritos de la CIA, en caso de vencer los invasores, Castillo Armas sería nombrado jefe de Estado, e Ydígoras Fuentes promovido candidato al cargo presidencial en las elecciones siguientes.<sup>1</sup>

Los auténticos inspiradores y dirigentes de la intervención planeada comprendían que para el éxito de la “misión libertadora” de Castillo Armas, se requería el apoyo, o al menos la neutralidad, del ejército guatemalteco. La misión militar norteamericana se encargó de alcanzar este propósito estableciendo estrechos nexos con los oficiales guatemaltecos. Notoriamente, mientras las relaciones entre los miembros del gobierno de Arbenz y la embajada norteamericana eran bastante frías, los oficiales del ejército guatemalteco mantenían estrechos lazos de amistad y colaboración con los consejeros norteamericanos. Poco antes de la invasión, fueron enviados a Guatemala agentes especiales de la CIA encargados de convencer a los altos oficiales de negar su apoyo a Arbenz. Prueba elocuente de la estrecha alianza entre los oficiales guatemaltecos y los funcionarios de la misión militar de los EE.UU. fue la huida del país del ex jefe de las fuerzas aéreas de Guatemala en compañía de un miembro de la misión militar norteamericana poco antes de la invasión de las fuerzas contrarrevolucionarias. Esta acción provocó la desmoralización de las fuerzas aéreas guatemaltecas, que retiraron su apoyo al gobierno legítimo del país.

En territorios de países vecinos de Guatemala, se preparaba, bajo la guía directa de la CIA, “el ejército de liberación” compuesto de emigrados contrarrevolucionarios y mercenarios de otros países que recibían 300 dólares mensuales. A través del dictador nicaragüense, se suministraban armamentos a Castillo Armas, en Honduras cursaban instrucción militar los mercenarios, y en El Salvador transcurrían las conversaciones secretas entre los cabecillas contrarrevolucionarios. El embajador norteamericano en Guatemala, J. Peurifoy,

---

<sup>1</sup> En enero de 1954 el gobierno de Arbenz publicó la correspondencia entre Castillo Armas e Ydígoras, presentando con ello pruebas documentales de la existencia de una conspiración para derrocar al gobierno legítimo de Guatemala.

estrechamente ligado a la CIA, fue el coordinador real de las actividades preparatorias de la intervención. Tuvo que cumplir la misión de preparar el ascenso al poder de un gobierno más acorde con los intereses de los EE.UU., “más conveniente a la política norteamericana”.

Frente al incremento de las acciones hostiles por parte de los países vecinos y el peligro de intervención extranjera, el gobierno democrático burgués de Guatemala emprendió algunas medidas para reforzar la capacidad defensiva del país. Compró, en particular, armas a Checoslovaquia y tomó medidas con vistas a fortalecer los destacamentos de las milicias populares para poder rechazar una posible agresión.

Los preparativos de la invasión se aceleraron en la primavera de 1954. En abril de 1954, Peurifoy y los embajadores de los EE.UU. en otros países centroamericanos, acudieron a Washington a evacuar dudas sobre la ejecución de los planes para la “solución del problema guatemalteco”. Un mes más tarde, se inició una nueva ronda en la campaña antiguatemalteca del Departamento de Estado. Esta vez la retahíla de declaraciones hostiles estadounidenses al gobierno guatemalteco las motivaba la llegada a Puerto Barrios de un barco sueco<sup>1</sup> con las armas compradas por Guatemala a Checoslovaquia. Los estrategas washingtonianos se valieron de las informaciones sobre la compra de armas por Guatemala para sembrar infundios respecto a la amenaza a la seguridad del hemisferio occidental.

La diplomacia norteamericana comenzó a insistir en la convocatoria a una conferencia consultiva de cancilleres (de acuerdo con el guión orquestado previamente por Dulles en Caracas), y en la posterior aprobación de acciones multilaterales contra Guatemala. La Casa Blanca respondió con una negativa a la proposición de Guatemala de discutir las divergencias surgidas entre ambos países. El 19 de mayo los EE.UU. rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno de Arbenz alegando sus “tendencias comunistas”. El presidente Eisenhower aprobó personalmente el plan de intervención elaborado por la CIA, y los preparativos marcharon a ritmo acelera-

---

<sup>1</sup> G. Toriello Garrido. *Op. cit.*, p. 142.

do. El 25 de mayo comenzó a funcionar el puente aéreo para el traslado de armas de los EE.UU. a Honduras y Nicaragua. Se reanimatoron las actividades de los contrarrevolucionarios que actuaban en la clandestinidad.

A la par de las acciones militares, económicas y diplomáticas estadounidenses destinadas a desestabilizar la situación en Guatemala y apoyar a las fuerzas reaccionarias, en la estrategia antiguatamalteca de Washington ocuparon un lugar especial los métodos de lucha psicológica: una vasta campaña propagandística orientada a minar el apoyo social al gobierno de Arbenz. De este modo, los Estados Unidos pretendían, por una parte, intimidar a la opinión democrática y a los partidarios del gobierno y las reformas, y, por otra, exageraban en lo posible el poderío y las posibilidades de las fuerzas de la reacción, propalando falacias acerca de la política del gobierno, empeñados en paralizar así la voluntad de resistencia de la población civil y del ejército. Al mismo tiempo, las unidades invasoras del “ejército de liberación” eran presentadas como defensoras de los “intereses nacionales”.

Uno de los principales instrumentos de la guerra psicológica contra el gobierno de Arbenz, junto a la campaña antiguatamalteca en la prensa burguesa de los EE.UU. y de los países centroamericanos, eran las emisiones de la radio clandestina *La voz de la liberación*, preparadas por expertos de la CIA. Bajo la dirección de los funcionarios de la CIA, F. Wilsner, Barnes y King, se creó en Miami un grupo de emigrados guatemaltecos que comenzó el 1° de mayo de 1954 las transmisiones regulares hacia Guatemala.<sup>1</sup> Ya en las primeras emisiones de la radio subversiva, se afirmó que trasmitían desde el territorio de Guatemala, aunque en realidad los programas se emitían desde Honduras. La emisora creada por la CIA trasmitía bajo el lema de *Trabajo, pan y patria*, llevando a cabo el moldeamiento psicológico de la población en vísperas de la invasión. Los agentes de la CIA responsables de los programas de la emisora contaban con seis semanas —hasta el día “D”, el 18 de junio de 1954, la fecha designada para el comienzo de la invasión— para efectuar

---

<sup>1</sup> *El caso de Guatemala 1954. La CIA y la Voz de la liberación.* – En: *Política y sociedad.* Guatemala, 1977, N. 3, p. 215.

su misión subversiva.

A las dos semanas del inicio de las emisiones de la *Voz de la liberación*, la situación en el país se agravó: en parte de la población cundió el pánico, y las fuerzas de la oposición se sintieron seguras de que las bandas contrarrevolucionarias pronto vencerían. La emisora prodigaba promesas generosas a los enemigos del gobierno e intimidaba a sus partidarios. A los soldados del ejército guatemalteco se les sugería la conveniencia de incorporarse a las tropas invasoras.

Los dirigentes de la “operación Guatemala” atraían así a nuevos cómplices al campo de las fuerzas contrarrevolucionarias, sugiriendo a los guatemaltecos la idea de la inevitabilidad de la intervención. Simultáneamente, cada decisión o medida del gobierno de Arbenz iba acompañada de comentarios tendenciosos impregnados de mentiras anticomunistas que hacían desconfiar del gobierno. Desempeñaron un papel especial las emisiones de *La voz de la liberación* a raíz de la decisión de Arbenz de distribuir armas entre las milicias populares. La emisora comunicó en esta ocasión que Arbenz se proponía liquidar el ejército y sustituirlo por una guardia civil proletaria. Lo mismo se afirmaba en volantes contrarrevolucionarios que eran esparcidos desde aviones del “ejército de liberación”. Todo ello provocó en gran medida la táctica capituladora del ejército guatemalteco que, en realidad, no opuso resistencia a los invasores.

El 18 de junio de 1954, las bandas de Castillo Armas irrumpieron en el territorio de Guatemala. *La voz de la liberación* anunció el comienzo de la intervención propagando datos falaces acerca de que en las tropas de Castillo Armas había 5 mil hombres (cuando en realidad el número del “ejército de liberación” no pasaba de 150 mercenarios)<sup>1</sup> que avanzaban con éxito, exhortando a la población a sabotear y minar las medidas tomadas por el gobierno en su defensa. De hecho, las unidades invasoras poco numerosas, cruzando la frontera, ocuparon varios pueblos y no se arriesgaron a adentrarse en el territorio del país, temiendo ser aislados de sus puntos de apoyo en Honduras. Las emisiones clandestinas de la radio subversiva fueron uno de los más importantes instrumentos empleados por la

---

<sup>1</sup> *Ibíd.*, p. 225.

CIA para realizar la “Operación Guatemala”, que llevó a la caída del gobierno de Arbenz. Al mismo tiempo, la aviación atacó las ciudades de Guatemala. Los aparatos de los invasores eran pilotados por aviadores norteamericanos. Posteriormente Dulles reconoció el papel decisivo de los bombardeos a las ciudades guatemaltecas en el desarrollo de las acciones bélicas, afirmando que sin el apoyo de la aviación norteamericana las oportunidades de Castillo Armas “eran iguales a cero”.<sup>1</sup>

Al pasar una semana del comienzo de la intervención, se hizo claro que la ofensiva del “ejército de liberación” se había agotado sin recibir amplio apoyo de la población, pero precisamente en ese momento los medios gobernantes estadounidenses prestaron ayuda política y diplomática multilateral a los contrarrevolucionarios guatemaltecos. En el Congreso de los EE.UU. menudearon los llamamientos a intervenir en los acontecimientos de Guatemala y brindar ayuda militar a Castillo Armas.

En estas condiciones, el gobierno de Guatemala se dirigió al Consejo de Seguridad con una queja de agresión. El representante de Guatemala en la ONU, Carlos Ariola, en su intervención en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad del 20 de junio de 1954, declaró sin tapujos que la intervención había sido organizada por los monopolios norteamericanos, que los mercenarios de Castillo Armas, pertrechados de armas norteamericanas, recibían ayuda de los gobiernos de Honduras y Nicaragua, y reclamó que fueran tomadas medidas para poner fin a la agresión. En respuesta a la queja de Guatemala, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución llamando a suspender las acciones que provocaban al derramamiento de sangre y proponía a los miembros de la ONU abstenerse de contribuir a estas acciones; pero por cuanto los bombardeos de la aviación no cesaron y las bandas mercenarias continuaban su marcha en el país, a los dos días el representante guatemalteco pidió convocar otra reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad.

El representante de los EE.UU. en el Consejo de Seguridad, H. Cabot Lodge, se opuso por todos los medios a la inclusión en la agenda del problema guatemalteco, insistiendo en su transferencia a la

---

<sup>1</sup> P. Nehemkis. *Latin America. Myth and Reality*. New York, 1964, p. 113.

OEA. Esta táctica del representante norteamericano le convenía a la contrarrevolución guatemalteca y respondía al guión de la CIA. Finalmente, a despecho de la proposición soviética de debatir el problema guatemalteco en la reunión del Consejo de Seguridad del 25 de junio, la mayoría de sus miembros, presionados por los EE.UU., votó contra la discusión del problema. Así fue cómo, con ayuda de los representantes diplomáticos norteamericanos en la ONU, se ejecutó el plan intervencionista de asfixiar a la revolución guatemalteca y liquidar un gobierno progresista indeseable a Washington.

En la realización de este plan desempeñó un importante papel la alta oficialidad guatemalteca, una quinta columna, con cuyos representantes mantenían contactos permanentes los agentes de la CIA y los funcionarios de la misión militar norteamericana en Guatemala. La élite militar, sostenida por los servicios especiales estadounidenses, actuaba como un grupo influyente que ejercía presión sobre el gobierno e insistía en poner fin a las transformaciones progresistas. Dos semanas antes de comenzar la intervención, un grupo de altos oficiales presentó al presidente Arbenz un memorándum exigiendo prohibir el Partido Guatemalteco del Trabajo (Partido Comunista), deportar del país a varias personalidades progresistas, y romper con la política de apoyo a las fuerzas de izquierda.<sup>1</sup>

La actitud antipopular y contrarrevolucionaria de la cúspide militar guatemalteca se reveló con fuerza especial al comenzar la intervención. El mando militar demoraba premeditadamente las medidas de defensa y no emprendía pasos decisivos para rechazar a las bandas mercenarias. La actitud del ejército se debía, en medida considerable, a la amplia propagación de los conceptos y los ánimos anticomunistas entre los oficiales, a los frecuentes contactos con los miembros de la misión militar estadounidense, así como a la influencia directa del moldeamiento psicológico realizado por la radioemisora subversiva. No es de extrañar por tanto, que debido a la creciente tensión política y las dificultades económicas acrecentadas por de la intervención, fuera precisamente el mando militar quien hiciera dimitir a Arbenz, entregando el poder a una junta encabeza-

---

<sup>1</sup> R. Schneider. *Op. cit.*, p. 317.

da por el coronel J. Enrique Díaz. La dimisión de Arbenz provocó incertidumbre y desconcierto en las filas democráticas y revolucionarias, acelerando la victoria de la contrarrevolución.

Los cambios sucesivos dentro de la junta gobernante se efectuaron bajo la participación y la presión directa del embajador Peurifoy, empeñado en llevar al poder a un gobierno que respondiera a los intereses de los círculos monopolistas de los EE.UU. Peurifoy consiguió sustituir a Enrique Díaz, quien se negaba a firmar la lista de los comunistas que debían ser fusilados, por el coronel Elfego Monzón, “verdadero anticomunista”.<sup>1</sup> Pronto, con la participación activa de Peurifoy en la capital de El Salvador, fue firmado por el jefe de los mercenarios, Castillo Armas, y Elfego Monzón un acuerdo que preveía el paso posterior del poder a Castillo Armas. Al finalizar las negociaciones, Castillo Armas llegó “triumfalmente” a la capital guatemalteca en el avión del embajador norteamericano. El 8 de julio la junta dio su voto a Castillo Armas y el favorito de la CIA fue “elegido” presidente de Guatemala.

De esta manera, la intervención imperialista interrumpió el desarrollo de la revolución democrática burguesa y derribó al gobierno legal de J. Arbenz. La práctica de la intervención norteamericana en Guatemala fue la primera práctica de “guerra sucia” en el período posbélico, enfilada contra el movimiento de liberación en el continente.

El golpe contrarrevolucionario, preparado y perpetrado por el triángulo Departamento de Estado-CIA-*United Fruit Company* bajo la consigna de “salvar la democracia” acarreó consecuencias socio-económicas y políticas gravísimas para el país. La junta reaccionaria derogó la ley de la reforma agraria y se apresuró a devolver las tierras a la *United Fruit* y a los latifundistas locales. Ya en los primeros meses que siguieron al derrocamiento de Arbenz, fueron liquidadas las conquistas sociales de los trabajadores guatemaltecos y sometidos a represalias sangrientas los políticos progresistas y los activistas sindicales y campesinos. El régimen de Castillo Armas disolvió todos los partidos políticos y los sindicatos, reprimió cruen-

---

<sup>1</sup> D. James. *Red Design for the Americas: Guatemalan Prelude*. New York, 1954, p. 317.

tamente a los comunistas y declaró al Partido Guatemalteco del Trabajo fuera de la ley. Miles de guatemaltecos cayeron víctimas del terror desatado por la contrarrevolución.

El régimen militar de Castillo Armas, que estableció una dura dictadura en el país, tal como se podía esperar, aplicó una política destinada a fortalecer al máximo los nexos económicos y político militares con los EE.UU., firmando una serie de acuerdos leoninos que entregaron los recursos económicos, humanos y de defensa del país al control del imperialismo norteamericano. El establecimiento de una dictadura militar reaccionaria fue la consecuencia directa de la política intervencionista de Washington empeñada en derrocar al gobierno democrático burgués de Arbenz. Las sangrientas represalias y el terrorismo de Estado son los rasgos más característicos de la política de los ulteriores regímenes dictatoriales guatemaltecos desde Castillo Armas hasta Ríos Montt, y la experiencia de la intervención en Guatemala le sirvió a Washington más de una vez en su lucha contra el movimiento de liberación en los países en desarrollo. La “liberación” guatemalteca se convirtió en el cliché de otras operaciones de este tipo en América Latina.

Sin embargo, la derrota de la revolución guatemalteca no detuvo el auge del movimiento de liberación en el continente. A los cinco años de la intervención en Guatemala, triunfó la revolución en Cuba, y al cabo de un cuarto de siglo cayó el régimen despótico de Nicaragua.

Después del triunfo de la Revolución Cubana, los EE.UU. continuaron prestando atención especial a Guatemala, que era líder entre los países centroamericanos en cuanto al monto de la ayuda económica y militar norteamericana y seguía en el cauce de la política de Washington. De este modo, en abril de 1960, el régimen guatemalteco rompió relaciones diplomáticas con Cuba y emprendió el camino de las acciones anticubanas, ofreciendo su territorio para la instrucción de los mercenarios norteamericanos reclutados de entre la escoria contrarrevolucionaria cubana, que se preparaban a intervenir en la Isla de la Libertad.

Las acciones anticubanas del gobierno de Guatemala y la orientación proimperialista de su política exterior se conjugaron con la

política de puertas abiertas al capital de los EE.UU. En 1971 operaban en el país 110 compañías norteamericanas: 57 en la industria transformadora, 26 en el comercio, 10 en la esfera de los servicios, 13 en la industria minera, la construcción y las finanzas, y 4 en la agricultura.<sup>1</sup> Los consorcios extranjeros, en primer orden los norteamericanos, recibieron importantes concesiones para la prospección petrolera. La política antinacional del gobierno tuvo como consecuencias el reforzamiento de la dependencia económico financiera respecto de los EE.UU., la pauperización de las masas trabajadoras y el ahondamiento de las diferencias sociales.

Atributos inherentes a la política de los regímenes guatemaltecos durante todo el período postrevolucionario son un anticomunismo cavernario y belicoso, la represión permanente de las fuerzas de oposición, y la aspiración a conservar la estructura social caduca. En el período posterior al golpe contrarrevolucionario, en el país ha surgido un sistema político autoritario, en el que el papel rector pertenece al ejército. Los militares ocupan los cargos claves en el aparato del Estado, mantienen estrechos vínculos económicos y sociales con la oligarquía tradicional y la nueva burguesía fortalecida en los años de vigencia del Mercado común centroamericano. Las contradicciones que surgen entre las fracciones rivales del bloque dominante provocan frecuentes golpes de Estado, que llevan al poder a nuevos favoritos elegidos por Washington entre la élite militar. “Pacto de dominación y muerte” es el nombre que da el sociólogo guatemalteco E. Torres-Rivas a la coalición gobernante, responsable del “clima de terror”<sup>2</sup> reinante actualmente en Guatemala.

La prepotencia del alto mando militar entroncado con el aparato del Estado, la violencia y la arbitrariedad ejercidas por las autoridades, las bandas terroristas y las organizaciones paramilitares que se encuentran bajo su control, las farsas electorales, la separación de la mayoría absoluta de la población del país de la participación en la vida política, y la miseria y la discriminación de la población indí-

---

<sup>1</sup> G. Toriello Garrido. *Guatemala, más de 20 años de traición*. Caracas, 1980, p. 199.

<sup>2</sup> E. Torres-Rivas. *Vida y muerte en Guatemala: reflexiones sobre la crisis y la violencia política*. —En: *Centroamérica en crisis*. México, 1980, p. 53.

gena, son rasgos característicos de la realidad guatemalteca. La “estabilización” de la situación política se consigue por medio del terror, de la eliminación física no sólo de los miembros de las organizaciones insurreccionales revolucionarias, sino de los representantes moderados del reformismo burgués, el asesinato en masa de campesinos, y la anegación en sangre de las manifestaciones pacíficas de los obreros y los estudiantes. Sólo desde 1966 hasta 1980, según testimonios de la “Amnesty International” y del Frente Democrático Contra las Represalias, en el país han perecido 25 mil personas.<sup>1</sup> Este es el verdadero rostro de la “democracia” guatemalteca, instalada como consecuencia de la intervención de 1954 y del aplastamiento de la revolución guatemalteca.

El terror desatado por la casta militar y las bandas filofascistas, así como la militarización del sistema político, son resultado directo de la ayuda militar que prestan los EE.UU. a las fuerzas armadas de Guatemala. Una ayuda que de 1970 a 1981 rebasó los 30 millones de dólares. Más de 3 mil verdugos guatemaltecos han cursado enseñanza en centros militares de los EE.UU.<sup>2</sup>

A Guatemala le pertenece uno de los papeles principales en la aplicación de la política intervencionista estadounidense en Centroamérica, tendiente a desestabilizar a los gobiernos progresistas, asfixiar el movimiento revolucionario y prestar todo tipo de ayuda a las dictaduras fascistas. El ensayista latinoamericano Manuel Galich señala que los métodos y las formas de la estrategia actual de los EE.UU. en América Central guardan afinidad con la práctica de la intervención norteamericana en Guatemala, y las declaraciones de Reagan son “la reedición del lenguaje de Foster Dulles”.<sup>3</sup> La administración de Reagan se ha apresurado a acrecentar la ayuda económica y militar al régimen guatemalteco, que ha encabezado la cruzada contra el movimiento de liberación en la zona. Precisamente a la élite militar guatemalteca le pertenece la idea del plan del triángulo norte, o como suelen llamarlo con frecuencia, “férreo” de unifi-

---

<sup>1</sup> *Kóey'u latinoamericano*. Caracas, 1981, N. 18, p. 19.

<sup>2</sup> *Polémica*. San José, 1981, N. 1. p. 36.

<sup>3</sup> M. Galich. *Guatemala: una revolución con raíces centenarias*. – En: *Estrategia*. México, 1981, N. 39, p. 45.

cación de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras con el fin de llevar a cabo operaciones conjuntas contra los insurgentes. Guatemala se adhirió en 1982 a la llamada Comunidad Democrática Centroamericana, formada con el beneplácito de Washington para aislar a la revolución popular sandinista y respaldar al régimen antipopular salvadoreño.

Sin embargo, a pesar de las nuevas acciones intervencionistas de los EE.UU. en los asuntos de los países centroamericanos y la ayuda múltiple a los regímenes militares reaccionarios, las fuerzas revolucionarias y democráticas de Guatemala prosiguen su lucha contra el gobierno antipopular y por las transformaciones socioeconómicas, por las libertades políticas y por la democracia, y contra el imperia- lismo y sus acólitos.

M. GÓRNOV

## LA CONSPIRACIÓN CONTRA CHILE

El triunfo de las fuerzas populares en las elecciones presidenciales de 1970 no sólo inauguró una nueva etapa en el desarrollo socioeconómico de Chile, sino que marcó un nuevo hito en la lucha antiimperialista del pueblo chileno. Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, líder de los socialistas chilenos y relevante figura del movimiento popular por la libertad y la reafirmación de la independencia nacional, la democracia y el progreso social en Chile, impugnó en su programa electoral la política dictatorial imperialista que aplican los Estados Unidos en América Latina. En vista de ello, los EE.UU. tomaron todas las medidas posibles —desde la presión económica y política hasta la intervención directa en los asuntos internos— para impedir que Allende llegase al poder.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y la CIA, aun antes, durante las campañas electorales de 1952 y 1958, habían hecho todo lo posible por cerrar a S. Allende el camino al palacio presidencial de *La Moneda*. En las elecciones de 1964, los EE.UU. apoyaron abiertamente la candidatura del líder del Partido Demócrata Cristiano, E. Frei, quien había prometido, en caso de ser elegido, realizar en Chile una “revolución en condiciones de libertad” de acuerdo con el programa de la *Alianza para el progreso*. Los EE.UU., valiéndose de la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono, desataron una vasta campaña propagandística en apoyo a la candidatura de E. Frei, cuya envergadura quedó reflejada en varios documentos de los órganos oficiales estadounidenses.

En el informe oficial *Operaciones secretas en Chile, 1963-1973*, preparado por el comité senatorial del Congreso de los EE.UU. para el estudio de las operaciones gubernamentales en la esfera de las actividades de inteligencia y publicado el 18 de diciembre de 1975, se reportan los siguientes datos sobre la intervención de los órganos de inteligencia norteamericanos en la vida política de Chile durante las elecciones de 1964: “Durante la primera semana (tercera semana

de junio) de la intensa campaña de propaganda, el grupo propagandístico organizado por la CIA, realizaba veinte emisiones radiales diarias en Santiago y por 44 estaciones provinciales. Un noticiero de 12 minutos era transmitido 5 veces al día por tres estaciones capitalinas y 24 provinciales, se difundían miles de carteles y caros anuncios en los periódicos. A fines de junio, el grupo emitía por radio 24 veces las noticias en Santiago y las provincias, además de 26 programas de comentarios a la semana, y distribuía 3 mil carteles diariamente.”<sup>1</sup>

Del informe se ve que los residentes locales de la CIA no sólo llevaban a cabo la propaganda a favor de la candidatura de Frei. Los órganos de prensa controlados por la CIA en el extranjero copiaban artículos de determinado contenido, que después eran reimprimidos en la prensa favorable a Frei en Chile. En apoyo a Frei, fueron movilizados los contrarrevolucionarios cubanos que vivían en los EE.UU., políticos y militares reaccionarios de países latinoamericanos y de Europa Occidental, etc. La CIA efectuaba operaciones políticas en gran número de distritos electorales importantes desde el punto de vista de las elecciones, incluyendo las zonas habitadas por los pobres y los campesinos, así como en las organizaciones obreras y entre los socialistas de derecha. Se prestó igualmente apoyo a los miembros del Partido Radical con ánimos anticomunistas que aspiraban a altos cargos en la jerarquía del partido, para impedir así que este partido actuara en apoyo a Allende. “Según una conclusión de la CIA, la intervención de los EE.UU. a favor de Frei le permitió a éste alcanzar la mayoría absoluta y no relativa en las elecciones presidenciales”<sup>2</sup> se hace constar en el informe.

Para derrotar al candidato de la Unidad Popular, Allende, y asegurar la victoria de Frei, por indicación del presidente L. Johnson fue creado en Washington un Comité especial para las elecciones de Chile, compuesto por el subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos, T. Mann; el jefe de la Sección del hemisferio occidental de la CIA, D. Fitzgerald; y R. Dungan y M. Bundy del aparato de la Casa Blanca. Subordinado al Comité, actuaba en Santiago

---

<sup>1</sup> *Covert Action in Chile, 1963-1973*. Washington, 1976, p. 162, 163.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 17.

el centro operativo para las elecciones integrado por el embajador de los EE.UU., su adjunto, el residente de la CIA, y los jefes de la legación política y la económica de la embajada norteamericana.<sup>1</sup> Washington cubrió más de la mitad de los gastos del partido Demócrata Cristiano durante las elecciones (unos 3 millones de dólares), y subsidió las actividades del Partido Radical y otros grupos opuestos a la candidatura de Allende. Sólo la CIA gastó de 1962 a 1964, 4.431.000 dólares en actividades contra la candidatura de Allende. Aparte de ello, las compañías privadas norteamericanas que tenían intereses en Chile, brindaron 1,5 millones de dólares a la CIA para que los entregaran a los democristianos. La CIA afirma no haber aceptado esta suma; pero, a juzgar por todo, las compañías norteamericanas la entregaron a través de otros canales. En total, sólo en labores subversivas, la CIA gastó en Chile, de 1962 a 1973 —según reconocen sus dirigentes—, 16.706.000 dólares.

Los dirigentes de la CIA reconocieron todo esto después de que, por medio de un golpe militar, el gobierno legítimo de Salvador Allende fuera derribado, y en el país se instalara una dictadura fascista militar.

La contrarrevolución chilena e internacional fue incapaz de detener por la vía “democrática” el desarrollo del proceso revolucionario en Chile. Para ello tuvieron que derramar un mar de sangre, cometer crímenes que provocaron indignación en todo el mundo civilizado y en los propios Estados Unidos. Los medios gobernantes de los EE.UU., tratando de lavarse las manos de sangre chilena, se vieron en la necesidad de considerar en el Senado las actividades de la CIA y de otros departamentos norteamericanos en Chile. En esto desempeñó un importante papel el deseo de los demócratas de responsabilizar de todo lo cometido a la administración republicana y asegurar a la opinión pública que tales “excesos” no se repetirían; sin embargo, la historia de los últimos años ha brindado no pocos ejemplos elocuentes de la “guerra secreta” que sostienen los EE.UU. contra los países cuyos pueblos defienden su independencia.

Los motivos de la activa injerencia de los EE.UU. en los asuntos chilenos aun antes del triunfo de Allende, fueron revelados con su-

---

<sup>1</sup> *Ibídem*, p. 26.

ficiente claridad en el informe senatorial, en el que se dice que “Chile fue elegido entre todos los países del hemisferio en calidad de vitrina de la *Alianza para el Progreso*”. Chile disponía de una infraestructura institucional ramificada conveniente para planear y dirigir el programa de desarrollo nacional. Además, los socialistas, los comunistas y los demás partidos de izquierda gozaban en Chile de apoyo popular, lo que era calificado en Washington de flirteo con el comunismo. En 1962 y 1963 Chile recibió de los EE.UU. en concepto de ayuda directa y empréstitos, más de mil millones de dólares. A Chile le correspondía por habitante una ayuda mayor que a cualquier otro país del continente. Entre 1964 y 1970 Chile podía contar en todo momento con créditos a corto plazo de los bancos privados norteamericanos por un monto de 200 a 300 millones de dólares. Como vemos, el gobierno de los EE.UU. primero pretendió afirmarse en Chile por medio de créditos y empréstitos, y al no lograr su propósito, recurrió a la actividad subversiva. Fue sobre todo evidente la intervención de los EE.UU. en la campaña de las elecciones presidenciales de 1970.

Tres candidatos emprendieron la lucha preelectoral de 1970: R. Tomic, de los democristianos; Jorge Alessandri, de las derechas, y el candidato del bloque de las fuerzas de izquierda, Salvador Allende. S. Allende presentó un programa de profundas transformaciones socioeconómicas y obtuvo un amplio respaldo popular. Los círculos gobernantes estadounidenses se plantearon nuevamente el propósito de no permitir vencer a Allende en las elecciones. La CIA y el Departamento de Estado recibieron las atribuciones necesarias. “La CIA gastó en total de 800 mil a 1 millón de dólares para acciones subversivas encaminadas a incidir en los resultados de las elecciones presidenciales de 1970. La campaña en gran escala emprendida por los EE.UU., fue similar a la de 1964; la victoria de Allende se equiparaba a la violencia y la represión”.<sup>1</sup>

Después de vencer S. Allende, el presidente Nixon tomó personalmente nuevas medidas extraordinarias para no permitir que asumiera el cargo presidencial. En el informe del Senado de los EE.UU., se dice que el 15 de septiembre el presidente Nixon comunicó al direc-

---

<sup>1</sup> *Ibídem*, p. 19.

tor de la CIA, Richard Helms, que el gobierno de Allende en Chile sería inaceptable para los EE.UU., e instruyó a la CIA que organizara un golpe militar en Chile para prevenir la asunción de Allende al cargo presidencial.

En el curso de las enérgicas acciones de los servicios especiales estadounidenses y del Departamento de Estado contra S. Allende — el presidente legítimamente electo del país—, se aclaró que el principal obstáculo en el camino del golpe planeado era el general René Schneider, jefe del ejército chileno, quien había desempeñado el cargo de ministro de guerra en el gobierno del presidente E. Frei. Adicto al gobierno constitucional, Schneider se opuso resueltamente al golpe. Entonces se tomó la decisión de eliminarlo, haciendo recaer la culpa de ello en las fuerzas de izquierda y confiando en que semejante crimen empujaría a los militares reaccionarios a dar el golpe. La CIA aprobó el plan, y sus residentes en Santiago se apresuraron a preparar y armar al grupo de asesinos.

El 22 de octubre de 1973, los conspiradores lograron matar a Schneider. El crimen perpetrado provocó un estallido de indignación en la opinión pública chilena. Todo el mundo comprendió que los culpables de esa muerte eran los enemigos de Allende, pues sólo a ellos les convenía la muerte del jefe del ejército.

Los asesinos, que pronto fueron detenidos, confirmaron que habían actuado en favor de los derechistas; pero en aquellos momentos los planes de los conspiradores no se consumaron. Tras la muerte de Schneider, el cargo de jefe del ejército pasó a Carlos Prats, otro constitucionalista consecuente.

La toma de posesión de la presidencia por S. Allende transcurrió con inmenso júbilo del pueblo. Al acto de inauguración asistió un número récord de misiones diplomáticas y amistosas especiales.

El gobierno de S. Allende desde los primeros días de su permanencia en el poder, comenzó a aplicar el programa de la Unidad Popular, cuyo objetivo principal era realizar transformaciones socioeconómicas y políticas radicales. La nacionalización de la extracción del cobre, que proporcionaba al país el 83% de sus ingresos en divisas, puso fin al predominio de los monopolios norteamericanos sobre la principal riqueza minera de Chile. Fueron arrebatadas a los

monopolios la producción de salitre y de hierro. La mayor parte de los bancos pasó a manos del Estado, y los antiguos haberes de la mayoría de los monopolios nacionales fueron incluidos en el sector público de la economía. La reforma agraria fue puesta en marcha: sólo en el primer año de la presidencia de S. Allende, fueron expropiados 1.300 latifundios. Jamás hasta entonces un gobierno había hecho por el pueblo de un país tanto bien en un plazo tan corto. La producción global nacional creció en 1971 un 8%, la industrial un 11%, y la producción de bienes de consumo un 12,7%. Se liquidó casi totalmente el paro. Los ingresos de los trabajadores y los pensionistas crecieron sustancialmente, y aumentó en mucho su poder adquisitivo.

La victoria de la Unidad Popular abrió una nueva página en la historia de Chile. Comenzó a realizarse la revolución cultural. Ante los obreros y los campesinos se abrieron las puertas de las universidades.

El pueblo chileno apoyó al gobierno de Allende. Lo demuestran los resultados de las elecciones. En las elecciones presidenciales, la Unidad Popular obtuvo algo más de 36% de los votos, en tanto que en las elecciones municipales de 1971 llegaron al 50%, y en las elecciones parlamentarias parciales de 1973 la Unidad Popular reunió un 44% de los votos.

Las medidas que tomaba el gobierno de Allende en interés de la nación chilena y en defensa de la soberanía del país provocaron una brusca resistencia en los medios dirigentes de los EE.UU. En apoyo de los partidos de la oposición y los diversos grupos escisionistas, que se pronunciaban contra el gobierno, fue asignado cerca de medio millón de dólares. El PDC y el Partido Nacional (PN) compraron a comienzos de 1971 con dinero de la CIA, estaciones de radio y periódicos. Todos los partidos opositores recibieron dinero para las campañas de las elecciones municipales y parciales parlamentarias de abril y julio de 1971. Se intentaron pasos para dividir la coalición de la Unidad Popular. Los fondos de la CIA se utilizaron para financiar a la oposición durante las elecciones parciales al parlamento en 1972 y las elecciones parlamentarias de 1973. El dinero entregado a los partidos de oposición no sólo se empleó para res-

paldar a sus candidatos en las elecciones, sino que les permitió a estos partidos desplegar su campaña antigubernamental en los años de permanencia de Allende en el poder, llamando a los ciudadanos a manifestar por diversos medios una actitud hostil hacia el gobierno.

La injerencia de los EE.UU. en los asuntos chilenos no se limitó a las acciones de la CIA. Paralelamente laboraban otros departamentos estadounidenses, en particular, el Pentágono, que sostenía por sus canales relaciones con la oficialidad chilena reaccionaria, parte considerable de la cual, incluyendo al general A. Pinochet, había cursado instrucción en los EE.UU. y en las bases de entrenamiento norteamericanas de la Zona del Canal de Panamá. En el período de la presidencia de Allende —se señala en el mismo informe— “se mantenían estrechos contactos con las fuerzas armadas chilenas tanto a través de la CIA como a través del aparato militar. El propósito básico de estos contactos era reunir datos acerca de la disposición a intervenir por parte de las fuerzas armadas chilenas; sin embargo, los representantes de los EE.UU. habían sido instruidos de ejercer influencia sobre los militares chilenos y en general aprobar sus actividades contra el gobierno, pero no prometer el apoyo de los EE.UU. a esfuerzos militares que pudiesen resultar prematuros.”<sup>1</sup>

La presencia militar norteamericana en Chile siempre había sido considerable. De 1959 a 1969, los EE.UU. prestaron a Chile ayuda militar por 163 millones de dólares, más que a cualquier otro país latinoamericano a excepción del Brasil. En esos años, cursaron estudios en los EE.UU. y en la zona del Canal de Panamá, 3 975 militares chilenos. Militares norteamericanos y chilenos colaboraban enérgicamente en el Consejo de defensa interamericano, y las fuerzas de la marina de guerra de ambos países realizaban maniobras regulares cifradas bajo el nombre de *Operación Unidad*.

El general Pinochet, futuro cabecilla de la junta fascista, escribió en su libro *Síntesis geográfico de Chile* que los lazos de amistad con el gran país del norte se fortalecían diariamente, y no sólo en lo económico —porque los EE.UU. ofrecían un vasto mercado para los productos chilenos y al mismo tiempo suministraban equipos y materias primas para el desarrollo industrial de Chile—, sino igual-

---

<sup>1</sup> Ibídem, p. 28.

mente en lo político y lo cultural, y en el pleno apoyo a la postura internacional del “bloque” occidental frente al peligro “rojo”.<sup>1</sup> Los Estados Unidos continuaron fortaleciendo sus nexos con el ejército chileno durante la permanencia del gobierno de la Unidad Popular en el poder, contando ante todo con los militaristas reaccionarios.

De este modo, el imperialismo norteamericano participó directamente en la preparación del golpe militar fascista contra el gobierno de Allende, y en la creación de las condiciones necesarias para su realización. Desde los primeros días del gobierno de la Unidad Popular, ejerció sobre él por todos los medios posibles, una activa presión externa e interna estimulando el sabotaje, la subversión y el caos en la industria y en el comercio, animando a toda costa la actividad subversiva de los partidos burgueses de derecha y de los extremistas tanto de derecha como de “izquierda”. A través de los agentes de la CIA, empujaba a distintos grupos de la población a acciones antigubernamentales y a reivindicaciones irrealizables, invertía recursos enormes en la realización de la campaña de mentiras y calumnias contra el gobierno de S. Allende a través de los medios de información masiva y propagando rumores antigubernamentales.

Las fuerzas de la oposición, la reacción interna y externa dirigieron el golpe principal contra el programa de transformaciones socioeconómicas del gobierno de S. Allende. Torrentes de mentiras en la prensa, provocaciones y desórdenes en las calles, la creación de un ambiente de miedo, la inseguridad, la anarquía social y el caos, el sabotaje en las empresas, y el desabastecimiento de víveres a la población, fueron los métodos que empleó la reacción para luchar contra el gobierno.

En esta labor subversiva contra el gobierno popular tomaron parte activa los monopolios norteamericanos, cuyas inversiones en Chile —hasta su nacionalización por la Unidad Popular— llegaban a cerca de mil millones de dólares. Eran ante todo los consorcios del cobre *Anaconda* y *Kennecott*, así como la *International Telephone and Telegraph* (ITT), uno de los consorcios más importantes del mundo capitalista, y que explota a más de 423 mil obreros y em-

---

<sup>1</sup> E. Boorstein. *Allende's Chile. An inside View*. New York, 1977, p. 75, 76.

pleados en 90 países. Sus activos rebasan los 8.600 millones de dólares, o sea, son aproximadamente equivalentes a todos los bienes públicos de Chile.

Para minar la industria del cobre, los monopolios norteamericanos cesaron el suministro de equipos de los EE.UU. En las minas se producían accidentes y en las empresas se estropeaban las máquinas. Más de mil especialistas de alta calificación abandonaron las empresas de la industria del cobre nacionalizadas y partieron, ante todo, hacia los EE.UU. Los empleados de las compañías norteamericanas infringían el régimen de los trabajos de minería, especialmente en las minas Chuquicamata, Exótica y El Salvador. Como consecuencia de ello, la mina de cobre Chuquicamata, la más grande en el mundo, cuando fue nacionalizada se encontraba en estado crítico.

Los EE.UU. casi no comerciaban con Chile y redujeron bruscamente la exportación de maquinaria y equipos a este país. El gobierno estadounidense suspendió la ayuda económica a Chile. En las negociaciones con la delegación gubernamental chilena en Washington en diciembre de 1972 y abril de 1973, el gobierno de los EE.UU. reclamó el pago de una compensación de 700 millones de dólares a las compañías del cobre norteamericanas como condición previa a la prórroga del plazo de pago de la deuda estatal de Chile a los Estados Unidos. Los bancos y las empresas norteamericanos negaron a Chile los créditos a corto plazo, a cuenta de los cuales se costeara gran parte de las operaciones corrientes de importación de este país. *The Washington Post* escribió a fines de 1973: “El gobierno marxista de S. Allende se ha convertido en el objetivo de una política económica que ha estrangulado la frágil economía de Chile. Esta política nació en un ambiente de lucha económica entre el gobierno de Allende y un grupo de grandes consorcios norteamericanos, cuyos activos fueron nacionalizados de acuerdo con las disposiciones de la plataforma socialista de Allende”.

El presidente Allende declaró en su intervención del 4 de diciembre de 1972 en la sesión de la Asamblea General de la ONU, que su gobierno, por un acuerdo previo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo,

debía recibir créditos por una suma de 80 millones de dólares, pero el pago de esta suma fue suspendido unilateralmente. S. Allende señaló en su discurso que el bloqueo financiero a Chile significaba “presionar a un país con un débil desarrollo económico”, “la aplicación de sanciones contra un pueblo dispuesto a recuperar sus propias riquezas fundamentales”, y “la injerencia premeditada en los asuntos internos de otro país”. “Mi país es víctima de una grave agresión —prosiguió Allende—. El imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina... Somos víctimas de una nueva manifestación del imperialismo. Más sutil, más alerta, y terriblemente eficaz para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano.”<sup>1</sup>

En esta agresión intervinieron activamente la CIA, el Pentágono y los monopolios, cada uno en el “sector” que se le reservó. *The Washington Post* señalaba el 21 de octubre de 1973 que los datos testimoniales en el Congreso de los EE.UU. del director de la CIA, William Colby, pintaban el cuadro de las actividades de la CIA en Chile empezando por la “penetración” en todos los partidos políticos chilenos más importantes, el apoyo a manifestaciones antigubernamentales, y el financiamiento de la prensa opositora y de otros grupos, y concluyendo con la intervención de esta agencia en las negociaciones financieras entre Washington y Santiago en 1972 y a principios de 1973. Después de 1970, señaló el periódico, “la política norteamericana se desarrolló en dos direcciones fundamentales. En primer término, el gobierno de Allende fue privado de todos los créditos, Washington bloqueó incluso los empréstitos concedidos por las organizaciones internacionales, con el fin de agravar la situación económica de Chile... En segundo lugar, la Agencia Central de Inteligencia recurrió a medidas auxiliares para agudizar la crisis económica y estimular con ello a la oposición interna de la coalición gubernamental marxista de la Unidad Popular encabezada por Allende”. *The New York Times* comentó el papel de la CIA en los acontecimientos chilenos en los siguientes términos: “La administración de Nixon asignó a la Agencia en Chile, más de 8 millones de dólares para las actividades secretas de 1970 a 1973 con tal de

---

<sup>1</sup> S. Allende. *Discursos*. La Habana, 1975, p. 538, 539.

hacer imposible... el gobierno del país por el presidente Allende. El objetivo era... “desestabilizar” al gobierno marxista... Altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca reiterada y deliberadamente indujeron a error a la opinión pública y al Congreso acerca de la extensión de la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Chile...”<sup>1</sup>

Según estableció la comisión senatorial, fue precisamente la Casa Blanca quien dio al director de la CIA, R. Halms, las órdenes de organizar el golpe militar en Chile. En el informe de la comisión se cita un extracto del telegrama secreto de la CIA a su residente en Santiago, en el que se señala la necesidad de “tender a la solución militar del problema...” Para ello fueron asignados unos 13 millones de dólares de los fondos federales estadounidenses.

El 11 de septiembre de 1973 por medio de un golpe militar, fue derrocado el gobierno de la Unidad Popular, asesinado Allende, y el país se cubrió de campos de concentración en los que se torturaba, mutilaba y mataba a los patriotas chilenos.

Un gran papel en el éxito del golpe de Estado lo desempeñó la traición del alto mando militar encabezado por el general A. Pinochet, ligado al Pentágono y la CIA. El presidente S. Allende había confiado al general Pinochet los planes de defensa del gobierno, de movilización y acciones militares de las unidades leales a las fuerzas de izquierda, lo que dio a los golpistas encabezados por Pinochet, la posibilidad de tomar la iniciativa y liquidar en su comienzo los focos de resistencia.

L. Brézhnev, Secretario General del CC del PCUS y Presidente del Presídium de Soviet Supremo de la URSS, dijo: “La revolución en Chile fue una brillante manifestación del anhelo del pueblo de ese país de liberarse de la ira y la explotación de la burguesía nacional y los monopolios foráneos. Fue encabezada por hombres de una honradez intachable y de un gran humanismo. Impulsó a las amplias masas de los trabajadores a la edificación de una nueva vida; pero el complot de la reacción chilena, planeado y costeadado —como ahora sabe todo el mundo— por el imperialismo extranjero, tomó a la

---

<sup>1</sup> *The New York Times*. September 8, 1974, p. 1, 26.

revolución de improviso. La dictadura fascista militar anegó el país en sangre. Fueron muertos, martirizados y arrojados a las cárceles decenas de miles de los mejores y más abnegados hijos del pueblo trabajador. Sobre el país cayó una negra noche”.<sup>1</sup>

El golpe militar en Chile llevaba evidentemente marca extranjera. El general C. Prats, jefe de las fuerzas armadas y durante algún tiempo ministro del Interior en el gobierno de Allende, quien se vio obligado a dimitir bajo la presión de los conspiradores poco antes del golpe fascista, escribió en su diario secreto: “Ahora, en que la vida pasiva me permite mirar el pasado inmediato con mayor perspectiva, me convenzo de que he sido partícipe de acontecimientos cuyo origen y desarrollo en medida decisiva no han dependido siquiera de nosotros los chilenos. Vivimos en un mundo en que factores, maniobras y conspiraciones internacionales gravitan decisivamente en la suerte de los pueblos débiles. Creo que hemos subvalorado la gravedad y los alcances de la conspiración manejada desde los Estados Unidos contra Chile”.<sup>2</sup>

C. Prats cayó víctima de esa misma conspiración. El y su esposa murieron al estallar una bomba colocada en su automóvil el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, donde vivían emigrados.

Como resultado del golpe militar en Chile, fue implantada una dictadura fascista que desató represalias sin precedentes por su crueldad. El país fue retrotraído a un dominio del imperialismo y la oligarquía financiero terrateniente no restringido ni por la constitución ni por las leyes. En la actualidad la dictadura fascista militar pretende borrar de la memoria de los trabajadores chilenos los días del gobierno de la Unidad Popular. La junta aplica una política de genocidio contra su propio pueblo, empeñada en liquidar toda oposición. El terror de los “gorilas” chilenos ha afectado casi a cada familia. El país se encuentra convertido en un enorme campo de concentración. Han sido prohibidos todos los partidos, los periódicos y las organizaciones progresistas, y anulado todo tipo de elecciones: sindicales, políticas, estudiantiles y otras. La junta fascista ha asesinado a más de 30 mil personas. Por primera vez en la historia de

---

<sup>1</sup> *Pravda*, 25.11.1976.

<sup>2</sup> C. Prats. *Una vida por la legalidad*. México, 1976, p. 86.

Chile, fue disuelto el Congreso Nacional. Cientos de miles de trabajadores han sido despedidos, y decenas de miles de estudiantes expulsados de las universidades.

La junta ha devuelto a la oligarquía financiera las empresas nacionalizadas, expropiadas o puestas bajo control del Estado. Se restableció el control oligarca sobre los bancos. En el momento del golpe de Estado, se encontraban en manos de particulares 121 225 millones de escudos, y el 18 de marzo de 1974 ya eran 311 319 millones de escudos.<sup>1</sup>

La junta fascista “legitimó” el dominio de los monopolios extranjeros en el país: en septiembre de 1974 se publicó el Estatuto del Inversionista Extranjero. Con este estatuto, la junta trató de dar apariencia de “legalidad” a su política de “puertas abiertas” al capital extranjero, y refrendar por vía jurídica, el levantamiento de todo tipo de restricciones a los monopolios extranjeros que actúan en Chile, asegurándoles el derecho a la exportación de todos los beneficios.

La dirección y la gerencia de la Corporación del Cobre y las minas, nacionalizadas por el gobierno de Unidad Popular, y todo el comercio del cobre han sido entregados a los antiguos gerentes de la *Anaconda* y la *Kennecott*. Estos recibieron el control sobre el suministro de piezas de repuesto, equipamiento, medios de transporte, combustible, explosivos, ropa de trabajo y víveres. La junta declaró que a la compañía *Anaconda* se le pagaría una “compensación” de 453 millones de dólares por el daño que supuestamente le fue infligido. A Chile volvieron también otras compañías norteamericanas: ITT, Dow Chemical, Pepsi Cola, Exxon y otras.

La junta liquidó el sector público, y las empresas industriales principales son explotadas ahora por grupos financieros locales tales como el Banco de A. Edwards y Cía, la Piranha, la Compañía Sud-Americana de Vapores, la Matte-Alessandri, etc. Fueron anulados totalmente los resultados de la reforma agraria, lo cual significa el restablecimiento del imperio de los latifundistas en el campo.

En el presente, cuando el imperialismo estadounidense y la adminis-

---

<sup>1</sup> *Cuadro político de América Latina*, entr. 2, Praga, 1975, p. 210, 211.

tración Reagan, al servicio de las fuerzas más agresivas militaristas de los EE.UU., pretenden asumir el papel de “luchadores por los derechos humanos” y enemigos del “terrorismo internacional”, resulta oportuno recordar que precisamente estas fuerzas derribaron al presidente Salvador Allende, elegido por el pueblo, pisoteando las normas elementales de las relaciones entre los Estados, ahogando en sangre a la revolución chilena, exterminando por medio del terror y las represiones a millares y millares de personas sencillas, ante las que se abría el camino de la libertad y la dicha, el camino a una patria verdaderamente independiente y democrática.

S. SEMIÓN OV

## EL GENOCIDIO EN EL SALVADOR

El Salvador —el país más pequeño de América Central— ha sido, en el curso de muchos decenios, uno de los objetos de agresión por parte de los EE.UU.

A fines del siglo XIX, los monopolios norteamericanos ya tenían posiciones sólidas en el país. En 1913, los Estados Unidos, que ocupaban Nicaragua (donde permaneció hasta 1925 una unidad combativa de la infantería de la marina de los EE.UU.), le impusieron a su gobierno el tratado Chamorro-Weitzel, según el cual, Nicaragua otorgaba a los EE.UU. cualquier territorio en el Golfo de Fonseca para la construcción de una base naval. Este documento menoscababa los derechos de El Salvador, que también tenía salida al Golfo de Fonseca, y provocó enérgicas protestas de la opinión pública salvadoreña. Para contrarrestar la agresión estadounidense, se creó la Liga Patriótica Centroamericana, que se pronunció contra la ratificación del tratado (que en fin de cuentas no entró en vigor).

El presidente de El Salvador, Manuel Enrique Araújo (1911-1913), se esforzó en consolidar la soberanía nacional y aplicar varias reformas sociales y administrativas importantes, pero chocó con la enérgica oposición de los EE.UU. Cuando Araújo condenó la ocupación de Nicaragua por las tropas estadounidenses, el presidente Taft lo acusó de prestar apoyo a las fuerzas nicaragüenses que luchaban contra el dominio norteamericano. Con el fin de hacer frente a la intervención de los EE.UU. en América Central, en 1912 Araújo propuso a los gobiernos de Nicaragua y Honduras instituir un órgano financiero conjunto que permitiera evitar la dependencia esclavizadora de los Estados Unidos en la obtención de empréstitos y créditos gubernamentales para la construcción de ferrocarriles, lo que daba a los Estados Unidos una cómoda excusa para enviar sus tropas so pretexto de asegurar el pago de las deudas. Esta propuesta le costó la vida al presidente: agentes norteamericanos enviados a El Salvador, organizaron un complot contra el gobierno; el presidente

Araújo fue asesinado, y el poder pasó casi durante veinte años a la camarilla venal Meléndez-Quinónez, sostenida por un nuevo organismo represivo: la llamada Guardia Nacional, que desde aquellos tiempos se atiene tradicionalmente a una orientación pronorteamericana.

En 1922 los Estados Unidos ya habían desplazado considerablemente a Inglaterra en El Salvador. El gobierno de Jorge Meléndez recibió del banco neoyorquino un empréstito de 19 millones de dólares con un 8% de interés anual para cubrir la deuda inglesa (de 8 millones de dólares) y la deuda interna (aproximadamente igual a otros 8 millones). Para garantizar el pago de la deuda, el banco recibió desde 1923 el control de las aduanas de El Salvador, que fueron puestas bajo la dirección de W. Renwick, apoderado norteamericano. El 70% de los ingresos aduaneros se destinó al pago de la deuda y sus intereses. Renwick llegó a intervenir activamente en la vida política del país en el transcurso de toda una década.<sup>1</sup> Los instrumentos de la política pronorteamericana en El Salvador fueron los banqueros y los dueños de las plantaciones de café, que se dedicaron a negocios financieros y comenzaron a invertir sus capitales en la industria transformadora salvadoreña.

La crisis económica mundial de 1929 a 1933 asestó un golpe durísimo a la incipiente reanimación industrial observada en El Salvador en los años 20. La crisis minó las posiciones económicas y sociopolíticas de bloque en que se apoyaban los imperialistas norteamericanos en la realización de su política.

El golpe de Estado militar de 1931 promovió al primer plano del escenario político salvadoreño durante muchas décadas a los militaristas reaccionarios, poniendo fin a las más elementales libertades civiles en el país.

Encabezó el país el dictador Hernández Martínez, quien debió su ascenso al poder a la desvergonzada intervención del nuevo embajador de los EE.UU. en El Salvador, Charles Boyd Curtiss. Este último empezó a desempeñar su cargo en octubre de 1931, y en noviembre ya había preparado la conspiración. El 2 de diciembre los

---

<sup>1</sup> R. Quidos Vejas. *El ascenso del militarismo en El Salvador*. San Salvador, 1980, p. 70-88.

conspiradores tomaron *El Zapote* —la principal fortaleza militar de la capital— e inmediatamente establecieron contacto directo con el embajador de los Estados Unidos. Después de una urgente visita a El Salvador del subsecretario de Estado norteamericano para los asuntos latinoamericanos, Jefferson Caffery, el 10 de diciembre de 1931 fue proclamado presidente de El Salvador Hernández Martínez. Con el fin de reforzar las posiciones de la oligarquía local, los EE.UU. e Inglaterra enviaron a las costas salvadoreñas buques de guerra con infantería de la marina.

Al estallar la crisis revolucionaria que puso en peligro el predominio de la oligarquía local y del imperialismo extranjero, los círculos dirigentes de El Salvador aplastaron cruelmente la sublevación popular de 1932. Tras esta represión se encontraba el encargado de negocios norteamericano McCafferty, que exigía del dictador sanguinario, Maximiliano Hernández Martínez, matar tantos hombres como fuera posible (el número de víctimas pasó entonces de 30 mil personas).

En los años 30, el imperialismo yanqui no pudo aprovechar plenamente los frutos del golpe de Estado militar en El Salvador: se aprovecharon de ello más bien sus rivales alemanes, porque Hernández Martínez era admirador del fascismo alemán y del militarismo nipón. Fue el primero en reconocer la ocupación de Manchuria por los imperialistas japoneses y al régimen franquista en España. Pero el gobierno norteamericano guardó una actitud tolerante y “comprensiva” a la orientación profascista de la oligarquía salvadoreña y su cabecilla, e incluso a que en los años de la Segunda Guerra Mundial los hitlerianos montaran en El Salvador una estación de seguimiento de los submarinos y los barcos en las costas de América Central.

Después de que en abril y mayo de 1944 una huelga general barriera la dictadura de Hernández Martínez, los EE.UU. empujaron al coronel Osmín Aguirre Salinas a dar un nuevo golpe de Estado el 21 de octubre de 1944 para proteger los intereses de la oligarquía cafetalera y algodонера y de los banqueros norteamericanos. El régimen de Osmín recurrió a las torturas y los asesinatos más crueles para poner fin al movimiento democrático. En 1950 lo sucedió en el car-

go el coronel Oscar Osorio, que por instrucción de la embajada de los EE.UU., en 1952 aprobó la llamada ley de defensa del orden democrático constitucional.

En octubre de 1960, después de caer el gobierno de José María Lemus, los medios gobernantes de los EE.UU. organizaron otro golpe de Estado sangriento en El Salvador el 25 de enero de 1961. Para encubrir la nueva dictadura militar, fue creado el Partido de Conciliación Nacional que gobernó el país hasta 1979.

En las elecciones presidenciales de 1972 venció el candidato de la coalición de las fuerzas democráticas (Unión Nacional de Oposición); pero la embajada de los EE.UU. en El Salvador le aconsejó al vencedor (el líder de los demócrata cristianos, Napoleón Duarte) conformarse con la falsificación de los resultados de la votación a favor del coronel Armando Molina, testaferro de la oligarquía. El 25 de marzo de 1972 un grupo de jóvenes oficiales depuso al gobierno que había amañado los resultados de las elecciones presidenciales. Fue una acción que debió abrir el camino al proceso democrático, pero la misión militar estadounidense en El Salvador, que se estableció en el cuartel de la Guardia Nacional, movilizó las guarniciones leales a la oligarquía a una ofensiva sobre la capital. El coronel Carlos Guzmán Aguilar, representante de El Salvador en la Junta Interamericana de Defensa, se dirigió desde Washington al jefe de la zona militar de San Miguel (donde se encontraba el centro militar norteamericano de entrenamiento de las unidades para las operaciones antiguerrilleras) con la orden de mandar sus unidades hacia la capital. Con el propósito de restablecer el poder de la oligarquía, los Estados Unidos se valieron también del bloque político militar de los autócratas centroamericanos (el Consejo de Defensa de Centroamérica). La intervención militar extranjera fue coordinada por los títeres norteamericanos de Nicaragua (Anastasio Somoza) y de Guatemala (Carlos Araña Osorio), los cuales enviaron sus aviones militares a bombardear la capital salvadoreña (perecieron más de 200 y fueron heridos más de mil habitantes de la capital).

De resultas de la intervención militar extranjera, la poltrona presidencial de El Salvador fue ocupada por Armando Molina, testaferro de la oligarquía. Recorrió el país una nueva ola de terror blanco.

Fue entonces cuando varias agrupaciones políticas separadas de los partidos integrantes de la Unión Nacional de Oposición, emprendieron el camino de la lucha armada revolucionaria contra el régimen proimperialista y empezaron a formar organizaciones político militares. La primera de ellas fueron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, encabezado por Salvador Cayetano Carpio. A inicios de 1972 el conocido poeta Roque Dalton fundó el Ejército Revolucionario Popular, del que se destacaron luego las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional. En 1978 apareció el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos.

Después de las elecciones de 1977, que terminaron con una victoria de la Unión Nacional de Oposición aún más convincente que en 1972, los círculos gobernantes de El Salvador arrojaron definitivamente la decoración seudodemocrática. Se perfiló cada vez con mayor nitidez el rumbo a un régimen fascista militar como único medio de aplastar cruentamente el estallido social y mantener los privilegios de clase. En febrero de 1977 en la capital hubo un fusilamiento masivo de trabajadores, y el organizador de este acto, Carlos Humberto Romero, pasó a ocupar el cargo presidencial.

De 1972 a 1979 los órganos represivos de la tiranía dieron muerte a más de 2 mil salvadoreños. Fueron secuestrados por la policía secreta y “desaparecieron” cientos de patriotas y demócratas. Dirigió las represalias el mayor Roberto d'Aubuisson, jefe del servicio de reconocimiento militar. Procedente de una familia latifundista, pasó preparación en la academia de policía en Washington, y luego en la “Escuela de las Américas” —el nido de los dictadores militares— en la zona del Canal de Panamá, se instruyó en operaciones antiguerrilleras en el Estado de Carolina del Norte, estudió la experiencia de las operaciones anticomunistas en Taiwán, de donde partió a hacer prácticas en el Uruguay, participando allí en la tortura de los presos políticos. En 1972 fue nombrado jefe del servicio secreto del Estado Mayor General e intimó allí con Medrano, otro asesino, que a la sazón era jefe de la Guardia Nacional. Protegido por este último y por indicación de la misión militar estadounidense, d'Aubuisson fue nombrado jefe del servicio de seguridad nacional.

Las represiones por una parte, y el auge del movimiento revolucio-

nario en los países vecinos y su influencia en el aumento de la conciencia patriótica de las masas populares en El Salvador, por otra, asustaron al ala derecha de la democracia cristiana. Sus líderes salieron de hecho de la Unión Nacional de Oposición y a instancia del presidente de los EE.UU., J. Carter, empezaron a negociar entre bastidores con el tirano Romero sobre la llamada liberalización del régimen para minar el auge revolucionario en el país. Pero a este compromiso se opusieron la Guardia Nacional y la policía secreta de d'Aubuisson, que hizo fracasar las negociaciones.

La crisis política en El Salvador se agravó tras la caída de la tiranía somocista en Nicaragua. En octubre de 1979 la Organización de la Juventud Militar levantó la guarnición de la capital contra la tiranía. Entonces intervino la embajada de los EE.UU., ofreciendo su mediación en las conversaciones entre la guarnición alzada, la Guardia Nacional y el dictador Romero. En consecuencia, éste último abandonó el país y fue a parar al “basurero de los dictadores”, a Miami, asegurando antes condiciones convenientes para los agentes de la CIA y que sus ayudantes mantuvieran sus puestos. Se formó la Junta Cívico Militar integrada por el coronel Arnoldo Majano, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, el representante del Foro de Organizaciones Populares Guillermo Manuel Ungo (líder del Movimiento Revolucionario Popular), el rector de la Universidad Centroamericana Román Mayorga Quiroz y el presidente de la Cámara de Comercio Mario Andino, director de la *Conelca Electronics Co.*, filial de la *Phelps Dodge* norteamericana.

La Guardia Nacional, la policía y grupos militaristas desplegaron el terror contra las organizaciones populares de masas, empezaron a matar a los activistas obreros y campesinos. Al mismo tiempo la CIA y la misión militar de los EE.UU. en El Salvador se dedicaron a la “depuración” del ejército y comenzaron a corromper, sobornar o eliminar a los integrantes de la Organización de la Juventud Militar. Mario Andino, protegido de los monopolios norteamericanos en la junta, en diciembre de 1979 dio la señal de la contraofensiva de la reacción, declarando que las reformas previstas por el gobierno minaban la economía. Esta declaración siguió a la visita a El Salvador de una misión militar estadounidense empeñada en debilitar las posiciones de los “jóvenes oficiales”.

En enero de 1980 la composición de la junta cambió, de ella fue separado el representante del Movimiento Revolucionario Nacional, sustituido por el líder de la derecha democristiana Napoleón Duarte. Se formó un nuevo gobierno en el que predominaron los democristianos y los tecnócratas, designados por recomendación de la embajada de los Estados Unidos. Los gastos militares de El Salvador crecieron de 13,4 millones de dólares en 1960, a 20,4 millones en 1970, y en 1979 alcanzaron ya los 62,0 millones. De 1955 a 1970 cursaron enseñanza en los EE.UU. dos mil militares salvadoreños.<sup>1</sup> Precisamente este cuerpo de soldados y oficiales, con el “adiestramiento” norteamericano, desató el terror en masa, un verdadero genocidio contra su pueblo, sumiéndolo, por voluntad del imperialismo de los EE.UU., en una guerra de muchos años.

Las fuerzas de izquierda de El Salvador comprendieron que su aislamiento convenía al imperialismo y la reacción. En diciembre de 1979 se llegó al acuerdo de unir las acciones de las fuerzas revolucionarias. En 1980 las organizaciones de masa de los trabajadores, las organizaciones y los partidos democráticos y patrióticos formaron el Frente Democrático Revolucionario. El mando único de las organizaciones político militares fue integrado por líderes del Partido Comunista de El Salvador, de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, del Partido de la Revolución Salvadoreña, y del Ejército Revolucionario del Pueblo. El mando recibió el nombre de Dirección Revolucionaria Unificada. En octubre de 1980 estas organizaciones político militares integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y formaron un mando militar único.

La junta respondió al auge del movimiento democrático desplegando el terror en masa, promoviendo sus organizaciones paramilitares: la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), el Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado (MANO), la Falange y la Unión Guerrera Blanca, que uniéndose formaron el Frente Anticomunista Nacional (FAN), encabezado por d'Aubuisson y el empresario A. Mena Lagos.

D'Aubuisson, “asesino patológico” como lo calificó con precisión el

---

<sup>1</sup> *Chile-America*. Roma, 1982, N. 76-77, p. 110-111.

ex embajador de los EE.UU. en El Salvador, Robert White, entra en el grupo terrorista internacional *Cóndor*, creado por la CIA para liquidar a los representantes de la opinión latinoamericana indeseables al gobierno de los EE.UU. D'Aubuisson elaboró el plan de asesinar al arzobispo de El Salvador Oscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, y organizó antes el asesinato de Mario Zamora, fiscal general de El Salvador y activista del partido demócrata-cristiano.<sup>1</sup>

En mayo de 1980, d'Aubuisson y Mena viajaron a los EE.UU., donde visitaron al ex dictador Romero y se entrevistaron con los cabecillas de la Legión Americana y el Consejo de Seguridad Americana, entre los cuales estaban el teniente general D. O'Graham, ex director del servicio de inteligencia del Pentágono, J. Helms, senador republicano del Estado de Carolina del Norte, y Robert Boman, de la Cámara de Representantes, republicano del Estado Maryland. La “delegación” fue recibida ceremonialmente por Roger Fontaine, director de la sección latinoamericana del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y uno de los principales autores del Documento de Santa Fe, en el que se basa el rumbo agresivo de la política exterior de Reagan. Teniendo en cuenta los méritos de d'Aubuisson en la organización de los asesinatos en masa en El Salvador, el general Graham convocó en el Consejo de Seguridad Americana una conferencia de prensa en la que presentó al público a ese verdugo como “un defensor de la seguridad americana”.<sup>2</sup> Cuando se conoció la complicidad de d'Aubuisson no sólo en el asesinato del arzobispo Romero y del fiscal general de El Salvador, sino también de varios ciudadanos norteamericanos, tuvo que abandonar provisionalmente El Salvador e instalarse, protegido por Graham, en la vecina Guatemala, pues Graham es “lobbista” de los ultras guatemaltecos en los EE.UU., donde colaboró con R. Alien (antiguo ayudante del presidente de los EE.UU. Reagan para la seguridad nacional), M. Deaver y P. Hannaford en la firma consultiva *Deaver and Hannaford Inc.* Esta firma “asesora” a los militaristas guatemaltecos y es un puente entre el Pentágono, la CIA y los mili-

---

<sup>1</sup> *Granma*. 14 de mayo de 1982, p. 4.

<sup>2</sup> *Estudios Uruguay*. Roma, 1981, N. 78, p. 19.

taristas reaccionarios de América Central.

Luego visitó los EE.UU. una delegación de la Alianza Productiva de El Salvador (en noviembre de 1980). Formaba parte de la delegación el ministro de Economía, M. Enrique Hinds. Además de R. Fontaine, los atendieron Jeane Kirkpatrick y J. Theberge. Todos ellos pertenecían al citado Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Jeane Kirkpatrick es ahora representante permanente de los EE.UU. ante la ONU. James Theberge es un fascista convencido que empezó su carrera colaborando con el régimen batistiano en Cuba. Trabajó en la *U.S. Information Agency* y en la Dirección para la ayuda internacional norteamericana en el Departamento de Estado, pero su casa siempre ha sido la CIA. Tiene buenas relaciones con el ex secretario de Estado H. Kissinger y con David Rockefeller. Fue amigo personal del último tirano nicaragüense, Somoza “junior”, desempeñando a su lado el cargo de embajador de los Estados Unidos en Nicaragua de 1974 a 1976, y ahora es el embajador de los EE.UU. en Chile al lado de Pinochet.<sup>1</sup> Además de estos encuentros, la delegación fue recibida por un representante del Instituto Hudson tutelado por el Pentágono. Así se preparó el terreno para elaborar la “política salvadoreña” del gobierno de Ronald Reagan.

Al llegar al poder, Reagan declaró a El Salvador zona de intereses nacionales estratégicos de los EE.UU., y para justificar la intervención armada en este país, recurrió a la barata demagogia anticomunista, presentando el proceso democrático en este país como supuesto “complot comunista de la URSS, Cuba y Nicaragua” y pretendiendo desviar así la atención de su propia exportación de la contrarrevolución a El Salvador. Lyn Nofziger, consejero político del presidente estadounidense, declaró en un banquete con motivo de la fundación de un monumento en honor de la guerra de Vietnam: “Nunca más daremos marcha atrás en sitios como El Salvador”.

En 1981 y 1982, El Salvador ha sido anegado en sangre. En 1980 y 1981 los organismos punitivos y las organizaciones militares, dirigidas por consejeros militares norteamericanos enviados por el presidente Reagan, exterminaron a más de 30 mil personas; más de 200 mil salvadoreños han escapado al extranjero huyendo del terror.

---

<sup>1</sup> Ibídem.

Como jefe del grupo de los “consejeros militares” norteamericanos en El Salvador fue nombrado el coronel Eldon Cummings, veterano de la “guerra sucia” en Indochina, que en otros tiempos obró en calidad del “consejero” principal de la banda de asesinos encabezada por Vang Pao, conocido traficante de opio y agente de la CIA, que aterrorizó a la población laosiana.

La operación de “apaciguamiento” de El Salvador estuvo a cargo de otro veterano de la agresión norteamericana en Vietnam, Roy Prosterman, participante en la operación *Phenix*, ligado estrechamente a la CIA y su Instituto Americano para el Desarrollo del Trabajo Libre (*American Institute for Free Labor Development*), que tomó a cargo la construcción en El Salvador de “aldeas estratégicas”, o mejor dicho, campos de concentración, a semejanza de aquellos a donde confinaba el ejército estadounidense a los campesinos sudvietnamitas. Prosterman no negó que deseaba extender a El Salvador “el orden” implantado por los invasores norteamericanos en Corea del Sur y Taiwán y que inútilmente trataron de imponer al pueblo vietnamita; pero dado que Prosterman y Cummings propugnaban una “reforma agraria” como la que realizó el general MacArthur en Japón después de su ocupación, con tal de ampliar la base social de su régimen, y se orientaban al crecimiento de la influencia de la derecha democristiana en el campo, la “oligarquía cafetalera” y sus tutores en los Estados Unidos se opusieron. Los esbirros de d'Aubuisson eliminaron a Prosterman, y Reagan revocó a Cummings.

Al extenderse la política de genocidio en El Salvador, crecieron también los gastos de los EE.UU. para realizar esa política encubiertos con el rótulo de “ayuda”. En noviembre de 1979 los EE.UU. prestaron a El Salvador una “ayuda militar” por la suma de 205 mil dólares y un crédito de 300 mil dólares para los programas de instrucción militar. Inmediatamente después del asesinato del arzobispo Romero, el Congreso de los Estados Unidos otorgó a El Salvador de acuerdo con el programa de “ayuda militar externa” un crédito de 5,7 millones de dólares.

En 1981 la ayuda militar de los EE.UU. creció hasta 7,5 millones de dólares y el número de “consejeros militares” oficiales, hasta 56. El

gobierno de Reagan asignó además 250 millones de dólares en concepto de ayuda económica a El Salvador y costó la instrucción de 1.400 soldados y oficiales salvadoreños en los EE.UU.

Los “consejeros” norteamericanos formaron una unidad punitiva especial denominada batallón *Atlacatl* (mil soldados). En diciembre de 1981 estos verdugos exterminaron a 900 vecinos de la localidad de Mozote en la provincia Morasán. En la base aérea norteamericana *Rickenbacker* (cerca de la ciudad de Columbus en el Estado de Ohio) se lleva a cabo la preparación intensa de los pilotos militares salvadoreños. Aprenden a manejar los aviones de transporte militar C-123 que fueron utilizados en Vietnam para desembarcar a los soldados y el equipamiento militar en pequeñas pistas de tierra.

En el año fiscal 1981-1982, los EE.UU. brindaron a la “clientela” salvadoreña una ayuda militar y económica por 155 millones de dólares. Para el nuevo año fiscal, a partir de octubre de 1982, la comisión de la Cámara de Representantes asignó 105 millones de dólares más y otros 60 millones de dólares para la compra de helicópteros y otro material bélico.<sup>1</sup>

La comisión aprobó también la proposición del gobierno de Reagan de conceder a los verdugos salvadoreños 60 millones de dólares en concepto de “ayuda militar”. Aparte de los 81 millones de dólares concedidos en 1982, recibieron 26 millones de “ayuda militar extraordinaria”, 55 millones en concepto de “ayuda militar urgente” y 35 millones en el marco de la realización de la “iniciativa caribeña” del presidente de los EE.UU.<sup>2</sup>

Dicha “ayuda” ha llevado a El Salvador a una descomposición total de la vida económica, política y cultural. Parece que los estrategas norteamericanos se han propuesto “transportar” El Salvador a la edad de piedra. Según datos oficiales, en los tres últimos años, la producción en el país ha descendido un 20%. La mitad de los trabajadores han perdido el trabajo. La deuda externa alcanzó los 500 millones de dólares.

Los “asesores” norteamericanos recomendaron a la junta celebrar

---

<sup>1</sup> *Granma*. 13 de mayo de 1982, p. 6.

<sup>2</sup> *Pravda*. 16.V.1982.

“elecciones” a la asamblea constituyente para encubrir el genocidio de su propio pueblo.

En vísperas de las elecciones, el 28 de marzo de 1982, el embajador de los EE.UU., Deane Hinton, convocó en la sede de la embajada a los representantes de la oligarquía salvadoreña y sus “partidos”. Se llegó a un acuerdo respecto a la mejor manera de “presentar” los resultados de las elecciones. “El consejo central para las elecciones” anunció que en ellas participaron un millón y medio de electores. En tanto, el número total de posibles electores en el país no rebasa 2,1 millones de personas. 400 mil de ellos han huido al extranjero. Además, según datos del mismo “consejo”, más de 200 mil personas no tienen documentos de identidad. En las elecciones no participaron 25 mil militares. Varias decenas de miles de salvadoreños han caído víctimas de la represión de los militaristas norteamericanos y salvadoreños. En más de una tercera parte del territorio del país las “elecciones” no tuvieron lugar porque se encuentra bajo acción de las operaciones militares o está controlada por los patriotas.

En estas “elecciones” venció, como era de esperar, la coalición de los partidos de derecha, encabezada por d'Aubuisson, que reunió votos para su partido—Acción Nacionalista Republicana— con ayuda de los fusiles automáticos de la Guardia Nacional. Su aliado y compañero fue Medrano, encubierto con el letrado del “Partido de Orientación Popular”. Los democristianos de la derecha fueron desplazados a un segundo plano. A Napoleón Duarte y Jaime Abdul Gutiérrez se les propuso dimitir: los amos ya habían obtenido de ellos todo lo deseado y los tiraron como un limón exprimido.

En el campamento de los fascistas ardieron las pasiones por el reparto del botín. D'Aubuisson reclamó el cargo presidencial. Tras una visita relámpago a El Salvador del general Walters Vernon, ex subdirector de la CIA y consejero especial del Secretario de Estado (especie de procónsul de los EE.UU. en América Latina), fue designado presidente interino y jefe de las fuerzas armadas Álvaro Magaña, uno de los fundadores del Partido de Conciliación Nacional, en el pasado director del banco hipotecario y un baluarte de la reacción salvadoreña. Álvaro Magaña es considerado persona de con-

fianza del gobierno de Reagan. Fue oficial superior en la guerra “del fútbol” contra Honduras, donde se “distinguió” por las feroces represalias contra la población civil. Cursó instrucción en centros docentes militares de los EE.UU. en materia de servicios de inteligencia, subversión y operaciones antiguerrilleras y fue destinado al Estado Mayor del ejército salvadoreño como “intermediario” entre la CIA y los militares salvadoreños. Perteneció al grupo que fabricaba y colocaba en la poltrona presidencial a los tiranos militares salvadoreños. Ahora la poltrona le ha sido confiada a él mismo.<sup>1</sup> Para complacer de algún modo a los líderes de los llamados partidos que tomaron parte en la farsa electoral, se los proclamó vicepresidentes (Pablo Albergue, Mauricio Gutiérrez y Raúl Molina).

La primera medida de la nueva asamblea fue la abolición de la ley de reforma agraria, que la junta había promulgado en marzo de 1980, y la decisión de la plena restitución de los privilegios de los latifundistas; medida que incluso los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria colocados por los propios intervencionistas norteamericanos, comentaron con la frase de que el país sería inundado por ríos de sangre. De esta manera, el presidente de la asamblea, d'Aubuisson, decidió cumplir su promesa de eliminar físicamente a los salvadoreños y quemar los campos y los bosques del país con el napalm suministrado por sus tutores norteamericanos.

El movimiento de solidaridad con los patriotas y demócratas de El Salvador y por el cese de la injerencia de los EE.UU. en los asuntos internos de este país cobra vigor en el mundo entero.

---

<sup>1</sup> *Patria Libre*. Managua, 1982, N. 21, p. 32-33.

A.GLINKIN

## LA ADMINISTRACIÓN REAGAN AGUDIZA EL RUMBO

La llegada a la Casa Blanca de la administración Reagan ha demostrado una vez más que el debilitamiento de las posiciones de los EE.UU. en el mundo y el estrechamiento de la esfera de su dominio en América Latina van acompañados del auge de la agresividad del imperialismo norteamericano. Como declaración programática de la política de la administración Reagan en América Latina puede ser considerado el informe *La nueva política interamericana en los años 80*, preparado por encargo del Consejo de Seguridad Interamericana de Washington en mayo de 1980 en calidad de documento confidencial, y luego hecho público y pregonado ampliamente por la propaganda norteamericana.<sup>1</sup> La importancia de dicho documento se debe a que fue elaborado por un grupo de expertos del partido republicano (el llamado *Comité de Santa Fe*) que participa en la determinación de la política exterior de los EE.UU. El informe comprende un análisis de la situación en la región a comienzos de los años 80 y recomendaciones a la política de Washington en Latinoamérica en el porvenir.

El *Documento de Santa Fe* está impregnado de un espíritu belicista, de furibundo anticomunismo y antisovietismo, de predicación de las pretensiones hegemónicas de los EE.UU. “La proyección del poder global de los EE.UU. supone la cooperación con la cuenca caribeña y el apoyo a América del Sur —afirman sus autores—. La expulsión de las potencias marítimas del Viejo Mundo de Cuba, la cuenca del Caribe y América Latina ha ayudado a los Estados Unidos a lograr la suficiente superioridad de fuerzas para una actividad equilibrada en Europa, Asia y África. América Latina, como Europa Occidental y Japón, es parte básica del poder de América... Los Estados Unidos

---

<sup>1</sup> *A New Inter-American Policy for the Eighties*. Prepared by the Committee of Santa Fe for the Council for Inter-American Security. Washington, 1980.

deben procurar mejorar sus posiciones en todas las esferas de influencia”.<sup>1</sup>

El análisis del *Documento de Santa Fe* permite concluir con todo fundamento que representa un franco desafío a la opinión mundial.

Los “argumentos” empleados en el informe no tienen nada nuevo ni original. En el documento abundan afirmaciones tendientes a fomentar los ánimos de pánico en el sentido de que la distensión internacional “está muerta”, los EE.UU. ya han entrado en la “tercera guerra mundial”, la Unión Soviética ha logrado ganar las dos primeras fases (la fase de “la contención” y la fase de “la distensión”), y los países latinoamericanos caen uno tras otro en las “garras de hierro del oso ruso.”

Se presta particular atención a la región del Caribe, tendida en forma de arco desde Belice en América Central a través de Cuba, Jamaica, Haití, las Antillas Menores, Trinidad y otras islas, hasta Guayana, Surinam y la Guayana Francesa en el continente sudamericano. Atemorizando a todos y a ellos mismos, los autores del informe declaran sin asomo de vergüenza que la cuenca del Caribe, según sus términos “el vientre blando estratégico de los EE.UU.”, se está transformando en una “laguna marxista latina”. El comercio mutuamente ventajoso de la URSS con los países latinoamericanos, el desarrollo de intercambios culturales y científicos entre ellos, y su cooperación política son considerados por los autores del informe a través del prisma del antisovietismo y calificados de “peligrosa penetración” encaminada a implantar el “dominio soviético” en América Latina. “El enemigo está a las puertas”, dicen queriendo asustar.

Llamando a la Casa Blanca a manifestar “firmeza” y confiar en la fuerza armada para resolver los problemas que surgen en las relaciones con los vecinos del sur, evocan las sombras de los “grandes antepasados” James Monroe y Theodore Roosevelt. Se trata, por tanto, no de otra cosa, sino de la predicación de la moderna “política del gran garrote” y de la “diplomacia de las cañoneras”, en la actualidad ya atómicas. Se aconseja emplearlas en primer orden en la

---

<sup>1</sup> *Ibíd.*, p. 4-5.

subregión caribeña, donde las masas populares han desplegado una lucha ofensiva contra los dictadores reaccionarios: los testaferros de los EE.UU. Conscientes de que esta política de los EE.UU. no puede dejar de provocar resistencia por parte de los pueblos y muchos gobiernos de América Latina, los voceros de la hegemonía del imperialismo norteamericano emplean su elocuencia en tratar de convencer a los ingenuos de que los EE.UU. “no tienen la intención” de intervenir en los asuntos internos o internacionales de ningún Estado latinoamericano mientras su política no ayude a la penetración imperialista de una potencia extracontinental.<sup>1</sup> Los países latinoamericanos conocen bien por su propia amarga experiencia el significado real de estas palabras.

Del informe se ve que los imperialistas estadounidenses se encuentran especialmente enfurecidos por los éxitos de la construcción socialista en Cuba, por su consecuente política exterior antiimperialista y la solidaridad con los pueblos que luchan por la independencia, y por el destacado papel que desempeña en el Movimiento de los No Alineados.

Las detalladas recomendaciones ofrecidas en el informe respecto a la “nueva” política interamericana de los EE.UU. en los años 80, reflejan el enfoque militarista en las relaciones internacionales propio del principio del “equipo de Reagan”. Se destacan en primer plano las medidas para reforzar el componente militar del sistema interamericano (del Pacto de Río y de la Junta de Defensa Interamericana), al que deben atribuirse funciones análogas a la OTAN.

Las recomendaciones comprenden amenazas desembozadas de uso de sanciones militares contra los países latinoamericanos, especialmente la Cuba socialista, que desafían la hegemonía del imperialismo norteamericano en la región o rechazan la tutela de Washington. Baste citar, por ejemplo, la siguiente declaración belicosa: “Si la propaganda falla, habrá que comenzar una guerra de liberación nacional contra Castro”.<sup>2</sup> Los autores del *Documento de Santa Fe* aconsejan al gobierno de los EE.UU., en caso de que Panamá no se conforme con la “interpretación norteamericana de los tratados so-

---

<sup>1</sup> *Ibídem*, p. 34.

<sup>2</sup> *Ibídem*, p. 46.

bre el Canal de Panamá” que entraron en vigor en 1979, privar a este país independiente de la soberanía sobre la importantísima vía transoceánica y “establecer sobre el Canal de Panamá el control de la Junta de Defensa Interamericana”.

El mismo espíritu agresivo impregna las recomendaciones para contrarrestar la llamada “actividad subversiva interna” en América Latina, para el despliegue de la ofensiva ideológica, en particular, para atraer a la órbita del *american way of life* a grupos sociales como la joven oficialidad y la élite intelectual, para la penetración en el movimiento obrero de la región con ayuda de la dirección sindical reaccionaria de AFLCIO, la realización de acciones subversivas ideológicas a través del sistema de enseñanza de los países latinoamericanos, etc. En el informe se pone empeño en rehabilitar a dictaduras sanguinarias como la junta de Pinochet en Chile o el régimen de Stroessner en Paraguay, que son elevados a la categoría de los “mejores amigos” de los Estados Unidos y “dignos” de toda ayuda y sostén.

El hegemonismo es el objeto de idolatría de los autores del informe. Señalando que Brasil y Argentina, a la par que los EE.UU. y Canadá, entran en el grupo de los siete productores y exportadores más importantes de productos agrícolas del mundo capitalista, los autores del informe exhortan a crear su bloque, incorporando también a Australia y Nueva Zelanda, para dictar sus condiciones a todos los países importadores de alimentos. Es un modo de ofrecer ahogar cínicamente con la mano huesuda del hambre el afán de libertad, igualdad y progreso de los pueblos. Se llama a los países latinoamericanos asimismo a asegurar un “clima favorable a la inversión” del capital norteamericano, es decir, abrir más ampliamente las puertas a la expansión de los monopolios estadounidenses.

Por ende, los “halcones” de Santa Fe, resumen su credo exhortando a los Estados Unidos a no reparar en medios para la “defensa del Hemisferio Occidental” y recurrir a “acciones resueltas” tales como la ocupación de la República Dominicana en 1965.

Sin ninguna exageración, el informe *La nueva política interamericana en los años 80* puede ser calificado de nuevo catecismo del hegemonismo y el intervencionismo norteamericanos en el hemisfe-

rio occidental, de su plataforma ideológica y su programa de medidas prácticas para la próxima década.

Los planteamientos oficiales de la presente política latinoamericana de Washington fueron anunciados en la intervención del vicepresidente George Bush ante el *Consejo de las Américas*, que une a más de 200 consorcios entre los más importantes de los EE.UU., en las numerosas declaraciones de A. Haig cuando desempeñó el cargo de secretario de Estado, y en los discursos del presidente Reagan en la sede de la OEA y durante su viaje a América Latina en 1982. Todos ellos repiten el mito de la “amenaza soviética” en su variante latinoamericana y declaran sin inmutarse que el “eje URSS-Cuba” constituye un “peligro mortal” para los EE.UU. y “apunta contra su flanco indefenso”. Al mismo tiempo la lucha liberadora de los pueblos de América Latina es proclamada “terrorismo internacional”, y todo cambio progresista en los países del continente, sea en Nicaragua, Granada, Panamá o Guyana, “actividad subversiva comunista”. En contra de los hechos, los representantes de la administración republicana acusan sin cesar y sin ningún fundamento a la URSS y Cuba de querer “establecer su hegemonía sobre la cuenca del Caribe”.

R. Reagan y sus ayudantes necesitan el mito de la “amenaza soviética” para “argumentar” la extensión de las ambiciones imperiales de Washington en América Latina, justificar su política intervencionista respecto a los vecinos del sur, demostrar el “derecho” de los EE.UU. al predominio en la región y a intervenir en sus asuntos internos so pretexto de la defensa frente al “sojuzgamiento por el comunismo internacional”.

En cuanto a los objetivos concretos que persigue la Casa Blanca en América Latina en la perspectiva más próxima, éstos se reducen en lo fundamental a lo siguiente:

— aplastar por la fuerza militar la lucha de liberación de los pueblos, y en primer orden, las acciones armadas de las masas populares contra los regímenes dictatoriales reaccionarios de América Central;

— recrudescer el bloqueo contra Cuba socialista aislándola en lo posible de los demás países latinoamericanos;

— desestabilizar, y si fuera posible, liquidar luego los regímenes progresistas de orientación antiimperialista en la región, valiéndose en particular del “modelo” probado en Jamaica contra el gobierno de M. Manley;

— fortalecer los regímenes militares dictatoriales de los “mejores amigos” de los EE.UU. sin importar cuánto se hayan comprometido a los ojos de los pueblos de América Latina y del mundo entero;

— minar las relaciones comerciales de provecho mutuo, la cooperación económica y científico técnica de los países de América Latina con la URSS y otros países socialistas;

— desunir a los países latinoamericanos y complicar la labor del sistema que han creado de órganos y organizaciones de cooperación interestatal sin la participación de los Estados Unidos tales como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y otros, impidiendo su actuación conjunta en defensa de sus reivindicaciones económicas y políticas;

— restablecer la eficacia de la OEA, que padece una aguda crisis, particularmente de su componente militar; completarlo con nuevas alianzas militares (por ejemplo, la organización del tratado del Atlántico Sur (SATO) y restablecer la “disciplina de bloque” para asegurar, si no el apoyo activo, al menos el “acuerdo tácito” de la mayoría de los países de la región con las medidas tomadas por Washington.

Es del todo evidente que este “programa máximo” de los círculos imperialistas norteamericanos más agresivos contradice el desarrollo social objetivo en la región y trasciende los marcos de las posibilidades reales de que disponen los EE.UU. Empero la política intervencionista que aplica Washington constituye un grave peligro para los intereses vitales de los pueblos de América Latina, crea situaciones conflictivas y focos de tensión militar.

La orientación de la Casa Blanca a la fuerza de las armas y a la política de dictado en la solución de los problemas fundamentales que surgen en las relaciones con los vecinos sureños, ha hallado su expresión ante toda en la denominada “estrategia caribeña” de Reagan. Washington ha escogido como objetivo principal de su

política “ofensiva” a los países de Centroamérica y el Caribe.

Uno de los puntos “calientes” es El Salvador. El pueblo de este pequeño país centroamericano, bajo la dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario de El Salvador, libra una dura lucha armada contra el régimen dictatorial que comete sangrientos crímenes contra la población. A partir del golpe militar de octubre de 1979 y hasta septiembre de 1981, han caído víctimas del terror en El Salvador, según datos de la comisión de derechos humanos de este país, 32 mil habitantes pacíficos. El exterminio de personas inocentes en este país mártir, continúa hasta hoy.

La administración Reagan, apelando a la doctrina de la “lucha contra el terrorismo internacional”, ha aumentado de modo considerable su intervención en el drama de El Salvador inaugurado ya en los tiempos de la presidencia de Carter, y ha declarado a El Salvador “campo de batalla” contra el comunismo internacional, “piedra de toque” de las “relaciones Este-oeste”, acusando a Cuba y Nicaragua de apoyar a los insurrectos salvadoreños, y proclamando a los gobiernos dictatoriales de El Salvador, Guatemala y Honduras luchadores “por los ideales del mundo libre”. Este es el espíritu que impregna el llamado “Libro Blanco” sobre El Salvador, confeccionado por la CIA y publicado por el Departamento de Estado norteamericano en febrero de 1981.

Con el fin de salvaguardar el régimen antipopular de El Salvador, la Casa Blanca ha incrementado bruscamente la ayuda militar y económica a éste, así como los suministros del armamento necesario para las operaciones punitivas contra los guerrilleros. Los organismos oficiales estadounidenses procuran evitar que se sepan los datos sumarios de estas “inyecciones de dólares” a la junta salvadoreña para no dar la impresión de que la junta se mantiene “a flote” sólo gracias al apoyo de Washington. Los cálculos muestran que si en 1979 la “ayuda” norteamericana a través de todos los canales era de 79 millones de dólares, en 1980 alcanzó los 184 millones, y en 1981 los 523 millones, o sea, se sextuplicó con creces en tres años.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Luis María. *América Latina y la crisis de la hegemonía norteamericana*. Lima, 1982, p. 286.

En 1982 sólo la ayuda económica y militar de los EE.UU. al régimen antipopular salvadoreño anunciada oficialmente rebasó los 160 millones de dólares. Los “boinas verdes” y los consejeros militares del Pentágono en El Salvador instruyen a los verdugos locales, controlan los servicios especiales y otros órganos represivos, y planean y dirigen las acciones bélicas contra las fuerzas guerrilleras. En la ayuda a la junta salvadoreña se involucran cada vez más los regímenes reaccionarios de los vecinos Honduras y Guatemala, estimulados por los EE.UU., que han aumentado también sus “dádivas” en dólares a estos regímenes. Sin embargo, la lucha heroica del pueblo salvadoreño ha frustrado las esperanzas de la administración Reagan de una rápida victoria militar de los testaferros de la reacción en este país centroamericano.

Otro punto “caliente” en la región caribeña es Nicaragua. El Washington oficial ha emprendido el rumbo de la preparación de una intervención armada en los asuntos de este país y procura desestabilizar la situación económica y política del país revolucionario que, acabando con la tiranía del clan somocista y superando enormes dificultades, restablece la economía nacional y cumple un programa de vastas transformaciones en bien del pueblo. La Casa Blanca ha “congelado” los créditos concedidos antes a Nicaragua, ha desatado contra ella una “guerra de nervios”, financia y estimula la preparación de las “fuerzas de incursión” reclutadas de los restos del somocismo en los territorios de las repúblicas centroamericanas vecinas y en los propios Estados Unidos. Washington recurre igualmente a otros métodos de presión política y diplomática sobre Nicaragua. Según designios de los estrategas washingtonianos, la política de desestabilización está destinada ante todo a bloquear la profundización del proceso revolucionario nicaragüense e impedir que surja una “segunda Cuba”, y a crear posteriormente las premisas para asfixiar la revolución sandinista.

El Pentágono y la CIA dirigen constantemente la mira hacia Granada, pequeño Estado insular del Caribe, cuyo pueblo derrocó en 1979 a los títeres imperialistas. Documentos publicados por el gobierno progresista de este país, encabezado por M. Bishop, atestiguan que la administración Reagan había proyectado el bloqueo económico y

la realización de un golpe de Estado en la isla.<sup>1</sup> Efectivamente, aprovechando como pretexto las divergencias entre la dirección del partido JEWEL, fuerza dirigente de la revolución de Granada, los EE.UU. llevó a cabo una agresión armada no provocada contra Granada, interrumpió el proceso revolucionario en este país y aplicó un verdadero genocidio al pueblo de uno de los Estados más pequeños del mundo.

Ha crecido la presión de Washington sobre Panamá, especialmente después de que en 1981 pereció en circunstancias misteriosas el general O. Torrijos, líder de la revolución panameña. Reagan trata de conseguir así lo que no logró la administración anterior de J. Carter: menospreciando los tratados norteamericano panameños firmados en 1979, conservar el pleno control sobre el Canal de Panamá, que pertenece legítimamente al pueblo de este país centroamericano.

La creciente agresividad de Washington en la región del Caribe se manifiesta en el incremento de la ayuda militar móvil norteamericana. El Pentágono continúa reforzando el contingente operativo caribeño (variante latinoamericana de las “fuerzas de despliegue rápido”), creado por el gobierno de Carter en Key West (Florida) a 90 millas de las costas de Cuba y transformado a fines de 1981 en el comando caribeño; su zona operativa fue ampliada hasta incluir el Golfo de México y el Litoral del Pacífico de América Central. En la región se llevan a cabo prácticamente sin cesar maniobras en gran escala del Pentágono, se refuerza la 2ª flota de la marina de guerra estadounidense, se modernizan las bases militares existentes en Puerto Rico y en la zona del Canal de Panamá, se realizan con periodicidad “operaciones de patrullaje” frente a las costas de Cuba y de los países de Centroamérica. Según los planes de Washington, la fuerza operativa caribeña debe convertirse en el arma principal de la política intervencionista. Durante la fase caribeña de las maniobras navales militares de la OTAN más importantes en los años posbélicos y cifradas *Ocean Venture-81* y *Ocean Venture-82*, los contingentes norteamericanos ensayaron en Puerto Rico una operación

---

<sup>1</sup> M. Jackson. *Grenada's Revolution. The First Two Years.* —*Political Affairs*, 1981, vol. 60, N. 6, p. 39.

que comprendió el derrocamiento de un “gobierno inamistoso”, la ocupación, la celebración de “elecciones” y el establecimiento de la “democracia” al estilo norteamericano.

Un nuevo paso en la expansión de la presencia norteamericana en la subregión fue la decisión del gobierno de Reagan de construir una base naval militar en la Isla Amapala en el Golfo Fonseca, aprobada de acuerdo con los regímenes dictatoriales de El Salvador y Guatemala. Se trata de una burda violación del derecho internacional, puesto que esto afecta adversamente la soberanía de Nicaragua, cuya jurisdicción, al igual que la de El Salvador y Guatemala, se extiende a esta isla. El pueblo nicaragüense condenó airadamente estas intrigas de Washington. Los EE.UU. declararon también el propósito de construir una nueva base militar en la Isla de la Tortuga, perteneciente a Haití, lo que constituye una prueba más del creciente apoyo que presta Washington al régimen dictatorial haitiano de Duvalier.

Vemos, pues, que la estrategia caribeña de la administración Reagan hace renacer la “política del gran garrote” y la “diplomacia de las cañoneras”, condenadas por la historia, que son particularmente peligrosas en nuestro siglo nuclear. La política estadounidense conduce al fomento de la tensión en esta región del hemisferio occidental.

Otra parte de la estrategia caribeña de la administración Reagan es la económica: el plan de “ayuda” a los países de América Central y el Caribe, esa especie de “mini plan Marshall” pregonado por Washington como panacea de los desbarajustes económicos y como estímulo del fomento en estos países.

El mangoneo de los imperialistas, principalmente de las empresas transnacionales norteamericanas, es una de las causas fundamentales de que la región caribeña sea hasta ahora una de las más atrasadas del mundo; no obstante, los propios Estados Unidos no piensan gastar demasiado dinero para compensar el perjuicio ocasionado por su explotación sistemática a los países del Caribe. Ello se hizo evidente después de que el presidente Reagan leyó su exposición programática de la llamada “iniciativa caribeña” en la sede de la OEA en Washington en 1982. Aunque, según los expertos, los países

centroamericanos y del Caribe necesitan ayuda económica urgente por una suma de 5 mil millones de dólares para superar la grave crisis económica que padecen, Reagan declaró el propósito de los EE.UU. de destinarles en el año fiscal 1982 sólo 350 millones de dólares de ayuda económica y 60 millones de ayuda militar. Con la particularidad de que una tercera parte de la ayuda económica y más de la mitad de la ayuda militar serán brindadas a la junta salvadoreña, y lo demás —como expresó el presidente— “a los amigos o a los futuros amigos”.<sup>1</sup>

El discurso “programático” de Reagan confirmó que el objetivo final del “mini plan Marshall” norteamericano es montar un nuevo bloque político militar de regímenes dictatoriales y reaccionarios en la Cuenca del Caribe bajo la égida de Washington, con cuyas manos la Casa Blanca quisiera ahogar el movimiento emancipador de los pueblos y fortalecer el dominio neocolonialista de los monopolios estadounidenses en la región.<sup>2</sup> Con este fin de largo alcance, se creó a principios de 1982 la “triple alianza” de El Salvador, Honduras y Costa Rica, que formaron la *Comunidad Democrática Centroamericana*, a la que se adhirió seguidamente Guatemala.

Washington procura endosar parte del fardo de los gastos para el “mini plan Marshall” a sus partenaires, en particular, a la RFA, Japón, Canadá y algunos países latinoamericanos; pero, pese a todos sus esfuerzos, la administración de Reagan no ha logrado atraer a sus aliados otanistas y a los grandes países latinoamericanos a la “cruzada anticomunista” en América Central. Europa Occidental y América Latina se han distanciado en general de la “estrategia caribeña” del presidente de los EE.UU., si bien existen diferencias y matices en las posiciones de los distintos gobiernos. La socialdemocracia del mundo también mantiene una actitud negativa a este respecto, considerando que se trata de una política “miope” que al final de cuentas no hace sino obstaculizar la búsqueda de la “tercera vía” que propugna la Internacional Socialista.

Muchos países latinoamericanos sienten preocupación por la perspectiva de la conversión de América Central en un “segundo Viet-

---

<sup>1</sup> *International Herald Tribune*, 25.11.1982, p. 1, 2.

<sup>2</sup> *Respuesta de Cuba. Reagan ante el Consejo de la OEA*. La Habana, 1982, p. 7, 8.

nam”. J. López Portillo, entonces presidente de México, manifestó una iniciativa valiosa, al adelantar en febrero de 1982 una serie de propuestas que responden a los intereses de un arreglo pacífico y democrático de la situación de crisis en América Central y la Cuenca del Caribe. El gobierno nicaragüense, a su vez, expresó su disposición a firmar acuerdos de no agresión y seguridad con Costa Rica y Honduras e iniciar negociaciones con los EE.UU. Los esfuerzos de los Estados adictos a la paz para disminuir la tensión en el Caribe y proclamar la región “zona de paz” han obtenido un amplio apoyo en América Latina y fuera de sus límites. “Ello contribuiría también a la causa de la paz mundial —subrayó L. Brézhnev—. La Unión Soviética es partidaria de tal desarrollo de los acontecimientos”.<sup>1</sup>

Las tentativas agresivas del imperialismo yanqui contra Cuba socialista, encierran una grave amenaza a la paz. El recrudecimiento del bloqueo económico, el blandir de las armas, la intensificación de las acciones de espionaje y subversión, la estimulación de los elementos antisocialistas, y la “guerra psicológica”, son los métodos que utiliza la administración de Reagan. Como afirman Warren Hinckle y William Turner, autores del libro *El pez es rojo. Historia de la guerra secreta contra Castro*, hace muchos años que el imperialismo de los EE.UU. mantiene contra Cuba “la guerra más sucia y más secreta en la historia”.<sup>2</sup> El presidente Reagan con su decisión ha librado a la CIA incluso de las pequeñas restricciones que fueron introducidas después de las escandalosas revelaciones en los años 70 referentes a los manejos criminales de esta agencia de espionaje en muchos países en desarrollo. La decisión de Reagan ha dado “luz verde” a nuevas provocaciones sucias contra Cuba. El gobierno cubano considera que el imperialismo estadounidense recurre al arma bacteriológica. En los tres años últimos en la isla se han dado cinco graves brotes de diversas enfermedades infecciosas que afectan los cultivos agrícolas, el ganado y a las personas. En agosto de 1982 el Senado de los EE.UU. aprobó una resolución “bendiciendo” la intención de la administración de Reagan de utilizar en el “momento oportuno” la fuerza armada contra Cuba socialista.

---

<sup>1</sup> *Pravda*, 10.III.1982.

<sup>2</sup> W. Hinckle and W. Turner. *The Fish is Red. The Story of the Secret War against Castro*. New York, 1981.

Pero Cuba no está sola. Al lado del pueblo heroico de la Isla de la Libertad se encuentran la URSS, otros países socialistas y la opinión mundial. En su discurso con motivo de los veinte años de la derrota de los mercenarios imperialistas en Playa Girón, Fidel Castro señaló que en los años 80, la campaña anticubana tenía aún menos posibilidades de éxito que cuando el pueblo cubano no hacía sino comenzar a colocar los cimientos de la nueva sociedad.<sup>1</sup> Incluso los enemigos de la Cuba socialista se ven obligados a reconocer: “Cuba, un país pequeño, cuyo peso en las relaciones internacionales antes de la revolución era prácticamente nulo, desempeña ahora un papel significativo en la palestra mundial”.<sup>2</sup>

Los luchadores por la libertad y la felicidad de los pueblos son para los imperialistas norteamericanos “terroristas internacionales”, en tanto que los “gorilas” y los dictadores sanguinarios, “los mejores amigos”. Con la mayor rapidez crece la colaboración con el régimen de Pinochet. Reagan ha anulado las sanciones que dictó J. Carter contra Chile, después de que la policía secreta chilena mató en Washington al ex ministro del gobierno de la Unidad Popular, Salvador O. Letelier. La ayuda norteamericana al régimen de Pinochet se incrementa. En 1981 tuvo lugar un intercambio de visitas de representantes del alto mando de las fuerzas aéreas, de la marina y terrestres. J. Kirkpatrick, representante permanente de los EE.UU. ante la ONU, habló en Santiago sobre la plena coincidencia de las posiciones de ambos países en lo que se refiere a la necesidad de detener la “infiltración marxista en la zona”. En 1982 visitaron la capital chilena delegaciones del Congreso estadounidense, encabezadas por T. Baker, líder de la mayoría republicana en el Senado y C. Price, presidente de la Comisión para asuntos de las fuerzas armadas de la Cámara de Representantes, que sostuvieron negociaciones detalladas con Pinochet y otros cabecillas de la junta militar fascista.

Al consolidar el “frente unitario” con las dictaduras militares, la administración de Reagan parte, en lo fundamental, de consideraciones de la estrategia política y militar, puesto que las condiciones

---

<sup>1</sup> *Granma*. 20 de abril de 1981.

<sup>2</sup> *Cuba in Africa*. Pittsburg, 1982, p. 3.

para la expansión económica de los consorcios transnacionales en estos países son más que favorables. Uno de los objetivos perseguidos es sacar del punto muerto el plan de la creación de la SATO, un plan que cuenta ya con muchos años. Este bloque está llamado a unir bajo la égida de los EE.UU., a los países del Cono Sur americano y al régimen racista de Pretoria que se encuentra al otro lado del Atlántico y es aliado “estratégico” de la administración de Reagan en la lucha contra los movimientos de liberación en África; pero los gobiernos de Argentina y Brasil se apartan de esta idea militarista, y sin su participación, todo el plan queda suspendido en el aire. Esta no es sino una de las manifestaciones de las agudas contradicciones que separan a Washington de muchos Estados de la región.

La esencia imperialista de la política estadounidense en América Latina se reveló con fuerza especial en la primavera y el verano de 1982, durante el brusco agravamiento del conflicto anglo argentino por las Islas Falkland (Malvinas), cuando Gran Bretaña realizó una operación militar de gran envergadura con el fin de perpetuar su status colonial de esos territorios.

El curso del desarrollo del conflicto en el Atlántico Sur mostró cómo la postura colonialista de los Estados Unidos permanece en el trasfondo de la aplicación de sus políticas. Ya en vísperas del desembarco de las tropas argentinas en las islas, Reagan en una conversación telefónica dio a entender al presidente argentino que los EE.UU. prestarían su apoyo a Gran Bretaña. Después de empezar el conflicto la “diplomacia de lanzadora” del secretario de Estado A. Haig, que transitó entre Londres y Buenos Aires, revistió desde el principio un carácter unilateral pro inglés. Empleando una táctica de coacción, Haig intentó forzar a Argentina a acceder al plan anglo norteamericano de “administración trilateral”, que debía permitir a Washington afirmarse legalmente en las islas. Más adelante, los EE.UU. anunciaron sanciones económicas contra Argentina.

En menosprecio de sus compromisos ante Argentina dimanantes de la Carta de la OEA y las tesis del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (pacto de Río), Washington prestó a Gran Bretaña activo apoyo político militar y en realidad se convirtió en copartíci-

pe de la agresión colonial imperialista en el Atlántico Sur. Así, los Estados Unidos suministraron al mando inglés datos informativos recibidos a través de satélites respecto al traslado de los buques de guerra argentinos, aumentaron las remesas de técnica militar a Inglaterra, incluyendo los cohetes *Sidewinder* para los cazabombarderos *Harrier*, y estimularon de este modo a Londres a ampliar la agresión armada. En su afán de aumentar la superioridad militar de su principal aliado en la OTAN sobre las fuerzas armadas argentinas, Washington “advirtió” al mismo tiempo, como acostumbra hacer demagógicamente, a otros Estados de las “graves consecuencias de intervenir” en el conflicto anglo argentino. La ayuda técnico material y política que brindaron los EE.UU. a Inglaterra influyó directamente en la derrota militar de Argentina. Esta política de la administración Reagan mostró bien a las claras el verdadero sentido de los llamamientos de los EE.UU. a fortalecer “la solidaridad pan-americana” y fue condenada acerbamente en América Latina.

La política de los EE.UU. fue calificada en la región como traición a los intereses de América Latina. A finales de mayo de 1982, se celebró en Washington una reunión extraordinaria de Consulta de los Ministros de Asuntos Extranjeros de los países de la OEA, en la que se aprobó una resolución que condenaba resueltamente la agresión de Inglaterra y las acciones de los Estados Unidos. La mayor parte de los miembros de la OEA exigieron el cese de los suministros norteamericanos de material de guerra a Inglaterra y la anulación de las sanciones de los Estados Unidos y otros países de la OTAN contra Argentina. En aquellos días el representante de Venezuela dijo en su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU: “El respaldo dado a la agresión británica por los Estados Unidos afecta de manera impredecible la vida de la actual organización regional —la Organización de los Estados Americanos (OEA)— y el sistema de seguridad hemisférica plasmado en el TIAR (pacto de Río)”.<sup>1</sup>

En las declaraciones de los gobiernos de Brasil, Venezuela Ecuador, Panamá, Costa Rica y otros países fue dada una evaluación negativa de las acciones de los EE.UU., que en contra de la decisión obliga-

---

<sup>1</sup> Doc. de la ONU S/PV 2362. 22.V.1982.

toria para ellos de la reunión de los cancilleres de la OEA aprobada por más de los 2/3 de votos necesarios, y uniéndose a una potencia extracontinental, continuó obrando contra Argentina. Los países latinoamericanos, recalcó en la ONU el representante de Panamá, deben extraer enseñanzas de la crisis de Falkland. “Y que no se nos diga aquí —declaró— que hablar de anticolonialismo y antiimperialismo es un cliché, porque la práctica nos está demostrando que el colonialismo y el imperialismo siguen existiendo”.<sup>1</sup>

La práctica muestra igualmente que en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, los países latinoamericanos tienen aliados seguros: la comunidad socialista, el movimiento de liberación nacional y la unidad de acciones de los propios Estados latinoamericanos. La enseñanza más importante de la crisis de las Malvinas ha sido la comprensión por los latinoamericanos de la contradicción radical entre los intereses del imperialismo y los de los países de América Latina, del enorme peligro que encierra para ellos la política militarista agresiva de determinados medios occidentales, y también la comprensión de la necesidad apremiante de activar la lucha por el desarme y la seguridad internacional en unión con todas las fuerzas amantes de la paz. Sólo siguiendo este camino se puede evitar la repetición de lo acontecido en el Atlántico Sur.

Ello tiene un significado especial porque los círculos imperialistas de los EE.UU. e Inglaterra aplican evidentemente una política de incremento de su presencia militar en esta región del mundo y de creación en las Islas Malvinas de importantes bases militares.

En estrecha relación con la crisis de las Malvinas, en las relaciones entre los países del hemisferio occidental ha comenzado a crearse una nueva situación. América Latina, quizás por primera vez en la historia, se ha pronunciado en su aplastante mayoría contra la política de los EE.UU., se ha acentuado gravemente la crisis de la OEA y se ha planteado de nuevo a la orden del día la creación de un foro político propiamente latinoamericano.

Como víctima de la agresión armada directa de las fuerzas imperialistas, Argentina, y junto con ella otros países de la región, han po-

---

<sup>1</sup> Doc. de la ONU S/PV 2373. 4.VI.1982.

dido ver bien el papel de cada cual en la política mundial. En el transcurso de la crisis, la Unión Soviética y otros países socialistas se pronunciaron firmemente por el cese de la agresión británica, condenaron de modo categórico las sanciones de las potencias occidentales contra Argentina y expresaron su disposición a cooperar de manera constructiva con todas las partes interesadas en el arreglo pacífico del conflicto.

A principios de junio de 1982, en La Habana se celebró una reunión del Buró de Coordinación del Movimiento de los No Alineados, en la que el grupo latinoamericano propuso condenar resueltamente la agresión colonialista de Londres y sus tutores norteamericanos. En la declaración aprobada en la reunión, se expresó pleno apoyo a la justa causa de Argentina, se condenó enérgicamente el uso de la fuerza militar por los imperialistas, las sanciones económicas, la presión y el chantaje contra los países en desarrollo, y en particular contra Argentina. Esta es una enseñanza más de la crisis de las Malvinas, una confirmación más de que el camino hacia el incremento de las relaciones de los países latinoamericanos con la comunidad socialista, y hacia una participación cada vez más activa en el Movimiento de los No Alineados ha sido escogido acertadamente porque responde a los intereses nacionales básicos de América Latina.

La segunda sesión especial de la Asamblea General de la ONU para el desarme, transcurrida en junio y julio de 1982, estuvo llamada a dar un nuevo estímulo a las negociaciones sobre problemas concretos y apremiantes para la reducción de las armas y el desarme, marcando un hito en el camino de la convocatoria a la Conferencia Mundial para el Desarme. En su intervención en la sesión, el canciller mexicano, J. Castañeda, subrayó: “El desarme es un imperativo para asegurar la supervivencia de la humanidad. Sentemos las bases para que esta generación no sea la última en la historia de la humanidad”.<sup>1</sup> No cabe duda de que la diplomacia de los países de América Latina puede coadyuvar activamente al éxito de los esfuerzos que emprende la comunidad internacional para asegurar una paz sólida y liquidar el colonialismo y neocolonialismo.

---

<sup>1</sup> Doc. de la ONU A/S-12/PV. 4, 10.VI. 1982.

Los hechos prueban que en América Latina crece la conciencia de que el eje de la política exterior en nuestros días debe ser la lucha contra los actos y los designios agresivos imperialistas, por la paz y por la distensión internacional, contra la carrera de armamentos y por el desarme. Ello reafirmará las tendencias positivas en la política internacional de los países latinoamericanos y elevará aún más su papel en los asuntos internacionales. La solidaridad con Argentina manifestada por la mayoría de los países, ha mostrado una vez más la aspiración de América Latina a la acción común en la palestra mundial.

Las ambiciones imperiales de la administración Reagan provocan una resuelta resistencia entre los pueblos latinoamericanos que poseen tradiciones combativas en la lucha antiimperialista. No en vano los nombres de luchadores como José Martí, Augusto César Sandino y Farabundo Martí se han convertido hoy día en la bandera de las revoluciones populares en esta parte del mundo.

El movimiento antiimperialista de los pueblos es invencible. A él pertenece el futuro cualesquiera que sean los obstáculos que se le interpongan, porque se desarrolla en el cauce común de las fuerzas revolucionarias y liberadoras de la actualidad, dispuestas resueltamente a conjurar el peligro de la guerra nuclear que amenaza a la humanidad y salvaguardar la paz en la tierra.

# PARTE II

Yu. POLIAKOV

## LA CRUZADA ANTISOVIÉTICA DE LOS IMPERIALISTAS

Después del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre en 1917, el imperialismo mundial con la participación activa y rectora de los medios gobernantes de los EE.UU., organizó una agresión amplia, masiva y prolongada contra el joven Estado soviético. La Revolución de Octubre expresó los intereses de la absoluta mayoría del pueblo del país, fue profundamente legal e históricamente fundamentada. Al derrocar el corrompido régimen burgués terrateniente, la revolución rescató al país de una catástrofe nacional, abrió ante los pueblos de Rusia el camino al auge económico y cultural y al progreso multilateral.

Las fuerzas caducas reaccionarias de Rusia, privadas del poder político, el poderío económico y los privilegios, no depusieron las armas, sino que desarrollaron una encarnizada lucha contra el poder obrero y campesino. Asumiendo una actitud egoísta, pensando sólo en sus propios intereses, los viejos elementos reaccionarios se opusieron a todo lo nuevo y progresista; pero esas fuerzas no podían vencer. La rápida derrota de los primeros intentos de la contrarrevolución de desatar la guerra civil (el fracaso de Kerenski y Krasnov cerca de Petrogrado, de Dútov en el sur de los Urales y de Kaledin en el Don) mostraron bien a las claras que el Poder soviético, apoyado por la mayoría absoluta de la población, superaba inconmensurablemente a las fuerzas de la contrarrevolución.

Es entonces cuando aparece en la palestra el imperialismo internacional, el cual intervino abiertamente en los asuntos internos del país soberano. Esta agresión de las potencias imperialistas contra el Estado soviético, llevada a cabo en gran escala y en diferentes formas para liquidar las conquistas del Gran Octubre, eliminar las Repúblicas soviéticas y desmembrar a Rusia y sojuzgar a sus pueblos, se conoce en la historia como intervención antisoviética imperialista.

La intervención se materializó ante todo en el envío de importantes contingentes armados al territorio de las Repúblicas soviéticas para ocupar de modo directo considerables regiones y centros vitales del país. Parte integrante de la intervención fue el establecimiento del bloqueo que cortó prácticamente todas las vías marítimas y terrestres de comunicación de las Repúblicas soviéticas con el mundo exterior.

Al mismo tiempo, en la lucha contra el Poder soviético fueron empleadas en gran envergadura las unidades de las tropas contrarrevolucionarias. Estas unidades realmente fueron tomadas bajo control de los países extranjeros por medio de acciones coordinadas, el envío de jefes y consejeros militares, y el suministro de todo tipo de armas, material de guerra y municiones. Por tanto, las tropas de los guardias blancos pueden ser calificadas con toda razón como instrumento directo de la intervención extranjera.

La intervención se plasmó igualmente en la política del terror y la violencia en los territorios soviéticos ocupados, y en el saqueo de los recursos económicos de esos territorios. Un papel especial dentro del marco de la intervención lo desempeñó la organización de complots, motines, actos de sabotaje en las Repúblicas soviéticas, en algunos casos con la participación directa de representantes oficiales de los Estados imperialistas.

Todos estos actos, que constituían una violación flagrante del Derecho Internacional, una intromisión abierta en los asuntos internos de un Estado soberano, y una agresión injustificada y no provocada, pueden ser calificados, en comparación con la historia anterior, como los mayores actos de terrorismo internacional.

La intervención imperialista antisoviética revistió un nítido carácter clasista y constituyó un ejemplo elocuente de exportación de la contrarrevolución.

Por supuesto, en aquel entonces quizá ningún gobernante del mundo capitalista podía imaginar el significado histórico mundial de la revolución socialista en Rusia en toda su dimensión, comprender que con la victoria de la revolución se iniciaba una nueva época de la historia universal: la época del derrumbamiento del capitalismo y del establecimiento del socialismo a escala mundial; sin embargo, la

mayoría de los líderes capitalistas tenían plena conciencia de la esencia social y clasista de los acontecimientos transcurridos en Rusia. Los imperialistas, al desencadenar la guerra antisoviética, aspiraban en primer orden a liquidar las conquistas de la revolución y restablecer el régimen burgués terrateniente en Rusia. El sentido de comunidad de clase entre los terratenientes, los capitalistas, y los colonizadores de Rusia, derrocados y privados de beneficios y privilegios, y el odio a la “plebe” que había tomado en sus manos el poder estatal, se relacionaba en los medios dirigentes de Occidente con la defensa de sus propios intereses.

Temían que el éxito del desarrollo de la revolución en Rusia sirviera de poderoso impulso al incremento de la lucha revolucionaria en sus países. El auge revolucionario en Europa, América y Asia, que alcanzó especial envergadura entre 1918 y 1923, prueba convincentemente que sus temores eran justificados.

Ahogar la revolución en Rusia significaba asestar un golpe gravísimo al movimiento revolucionario mundial, privarlo de base y apoyo, privar a los trabajadores del mundo entero de un ejemplo inspirador y afianzar la idea de la inmutabilidad del régimen existente.

A la par, desempeñaron un considerable papel los designios imperialistas egoístas inmediatos. Cada una de las potencias imperialistas aspiraba a ocupar unas u otras regiones de Rusia, a transformarlas de un modo u otro en sus colonias. Numerosos documentos prueban la existencia, no sólo de los planes expansionistas de los EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania y Japón respecto a Rusia, sino de un acuerdo entre las potencias de la Entente sobre el reparto de “zonas de influencia” en Rusia.

La nacionalización de la industria y la banca por el Poder soviético causó un perjuicio material directo a los capitalistas de Occidente. Los tenedores de “acciones rusas” en el extranjero, los antiguos dueños de las fábricas, los bancos, las minas nacionalizados, etc., encontrándose entre los partidarios más celosos de la intervención, influyeron sensiblemente en la política de los EE.UU., Inglaterra y Francia.

Al comienzo de la intervención, desempeñó también un determinado papel el deseo de los imperialistas de la Entente de conservar a

Rusia como abastecedora de carne de cañón para continuar la guerra contra Alemania.

El Estado soviético, literalmente desde el primer día de su existencia, en el famoso Decreto de la Paz leninista, ofreció la paz a todos los pueblos y los Estados, dirigiéndose también posteriormente decenas de veces a cada uno de los gobiernos de los países capitalistas con propuestas concretas de poner fin a las hostilidades, defendiendo consecuentemente la idea de la coexistencia pacífica de los Estados con diferente regímenes sociales, sin amenazar a ningún país.

El movimiento revolucionario en los países capitalistas se inspiraba efectivamente en el ejemplo de los obreros y los campesinos de Rusia, que habían derribado por primera vez en la historia, el dominio de los explotadores y mostraban la factibilidad del establecimiento de un nuevo régimen; pero esto no daba fundamento jurídico o moral alguno a las potencias imperialistas para agredir con las armas a la Rusia Soviética.

No sólo perseguían objetivos egoístas los grandes países participantes de la intervención (los EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania y Japón); los círculos dirigentes de pequeños países limítrofes con la Rusia Soviética (Polonia y Rumania) también aspiraban a ocupar territorios soviéticos, y lo consiguieron en cierto grado (la ocupación de Besarabia por Rumania, que nunca fue reconocida por el Gobierno soviético, y el paso en 1921 a Polonia de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental).

La intervención imperialista antisoviética, que duró varios años, reveló plenamente la esencia antihumana del régimen capitalista, provocando acciones militares sangrientas y duraderas, una destrucción inaudita de las fuerzas productivas de Rusia, el surgimiento de hambrunas y epidemias, y enormes pérdidas humanas calculadas en muchos millones de vidas.

La intervención antisoviética imperialista atravesó varias etapas, en el curso de las cuales el centro de gravitación se trasladó de una a otra forma de intervención. Los países de la Entente apoyaron activamente al Gobierno provisional burgués en la lucha contra la revolución ascendente. Una vez establecido el Poder soviético, los gobiernos de la Entente prestaron un enérgico apoyo a las fuerzas con-

trarrevolucionarias (en particular, a las tentativas del mando reaccionario del viejo ejército ruso de cohesionar estas fuerzas en torno a un cuartel general). En noviembre y diciembre de 1917 en varias conferencias (la reunión de representantes militares de la Entente en Yassy en noviembre, y las conferencias de los gobiernos de la Entente del 27 de noviembre y el 22 de diciembre) se idearon las medidas concretas para prestar ayuda a la contrarrevolución de Rusia. El 23 de diciembre Inglaterra y Francia llegaron a un acuerdo respecto a las zonas de acción en el territorio de Rusia. La zona inglesa incluía el Cáucaso, las regiones del Transcaspio y de los cosacos; la francesa, Besarabia, Ucrania y Crimea. Siberia y el Extremo Oriente eran considerados por la Entente zonas de interés de Japón y los Estados Unidos.

Un año después de la Revolución de Octubre, el mundo capitalista se encontró dividido por la Primera Guerra Mundial entre la Entente y la Alianza cuádruple. Ello obstaculizó, naturalmente, la unión de las fuerzas imperialistas; pero incluso en aquellas condiciones, las dos agrupaciones beligerantes actuaban conjuntamente contra la República de los Soviets.

A principios de 1918, el papel principal en la intervención lo desempeñaron los Estados del bloque austriaco alemán.

En violación de las condiciones del armisticio, el 18 de febrero las tropas austriaco alemanas irrumpieron en el interior del país e impusieron a la Rusia Soviética el Tratado de Paz, forzoso y expoliador, de Brest; según el cual el País soviético perdía importantes territorios en el oeste y el sur. Más tarde, en contra de las condiciones de la paz de Brest, las tropas alemanas ocuparon Crimea y otras regiones, en particular, en el Cáucaso. Turquía continuó ampliando la zona ocupada ya en febrero en Transcaucasia.

Al mismo tiempo, se desarrollaba la intervención de los países de la Entente. En el norte soviético desembarcaron sus primeras unidades.

El 9 de marzo de 1918 comenzó el desembarco de las tropas inglesas en Múrmansk. Doscientos soldados ingleses descendieron del barco *Glory* y marcharon en formación hacia la ciudad. El redoble de los tambores y el retumbar de las botas de los soldados anuncia-

ban el comienzo de la intervención armada de la Entente en la República de los Soviets.

Tras la primera, desembarcarían otras unidades en Múrmansk: norteamericanas, inglesas y francesas. Toda la región de Múrmansk resultó ocupada por tropas extranjeras. La intervención en el norte se ampliaba; en agosto fue tomado Arjángelsk. La intervención alcanzó especial envergadura en el Extremo Oriente.<sup>1</sup> El 5 de abril de 1918 la infantería de la marina japonesa comenzó la ocupación de Vladivostok. Desembarcó igualmente un contingente inglés. En los EE.UU. también se procedió a la febril preparación del envío de tropas al Extremo Oriente. El general Graves, quien recibió la orden de prepararse a partir a Rusia, fue llamado al Departamento de Defensa de Washington. Graves tendría a su disposición los regimientos 27° y 31° de infantería dislocados en las Filipinas y varios miles de efectivos de las tropas que se encontraban en los EE.UU.

Para verano de 1918, los invasores y los guardias blancos habían ocupado grandes áreas en la región del Volga, los Urales, Siberia y el Extremo Oriente. Unidades inglesas, cruzando la frontera soviético-iraní, ocuparon la región del Transcaspio.

Al propio tiempo, en la retaguardia soviética los agentes imperialistas, que con frecuencia eran representantes diplomáticos oficiales, organizaban numerosos complots, motines, sabotajes y asesinatos. Sólo en julio de 1918, estallaron grandes rebeliones de los eseristas de izquierda en Moscú, de los de derecha en Yaroslavl y en la región del Transcaspio, en varias provincias del Centro de Rusia y la región del Volga, la rebelión del jefe del Frente del Este, M. Muraviov, y otras.

Las revueltas iban acompañadas del exterminio en masa de los comunistas, los trabajadores de los Soviets, los obreros y los campesinos pobres partidarios del Poder soviético. Durante el motín de Yaroslavl, uno de los más sangrientos (los combates por la ciudad duraron 16 días) millares de personas leales al Poder soviético fueron martirizadas y asesinadas por los guardias blancos. En el curso de las sublevaciones de los kulaks de julio a septiembre de 1918, en 22

---

<sup>1</sup> Véase el artículo de A. Lunin. *Una intervención olvidada. Las tropas de los EE.UU. en la Rusia Soviética en 1918-1920*, insertado en este libro.

provincias fueron exterminados unos 15 mil obreros y campesinos pobres.<sup>1</sup>

Con el apoyo financiero y organizativo de la Entente, surgieron y funcionaron organizaciones militares conspiradoras contrarrevolucionarias como la *Unión por la defensa de la patria y la libertad*, dirigida por el terrorista socialista-revolucionario B. Sávinkov, el *Centro nacional*, la *Unión del renacer de Rusia*, etc. En el verano de 1918, el jefe de la misión británica en Moscú, B. Lockhart, organizó en Moscú una gran conspiración que planeaba derrocar al Gobierno soviético y eliminar físicamente a sus dirigentes. M. Uritski y V. Volodarski, destacados estadistas soviéticos, cayeron víctimas del terror blanco en 1918. El 30 de agosto de 1918, fue cometido el alevoso atentado contra la vida de V. I. Lenin. El jefe de la revolución resultó gravemente herido.

De esta manera la intervención imperialista, ya en el verano de 1918, se desarrollaba en gran escala, con la particularidad de que las fuerzas de los dos bloques imperialistas opuestos, de hecho actuaban unidas contra la Rusia Soviética. La intervención alemana, austro húngara y turca, que llevó a la ocupación de inmensos territorios de Rusia, se entrelazó con la intervención norteamericano anglo franco japonesa, que gradualmente fue cobrando vigor.

El imperialismo mundial llevaba a cabo contra la Rusia Soviética una guerra no declarada, pero que en la práctica alcanzaba las mayores proporciones.

Los Estados Unidos desempeñaron un papel activo en la organización de la intervención. Este papel consistió no sólo en la participación de tropas norteamericanas en la lucha armada en el territorio de Rusia, en el norte y en el Extremo Oriente, no sólo en el envío de una enorme cantidad de armas y municiones a los generales blancos, no sólo en la complicidad en la organización de conspiraciones, actos de diversionismo y motines, sino también en la posición que ocuparon los EE.UU. en el concierto de las potencias mundiales durante la primera guerra mundial. Los Estados Unidos, que se enriquecieron con la guerra e incrementaron bruscamente su potencial

---

<sup>1</sup> L. Spirin. *Las clases y los partidos en la guerra civil en Rusia*. Moscú, 1968, p. 185.

económico, aprovechando el agotamiento de sus aliados, comenzaron a desempeñar un papel preponderante en la política de las potencias occidentales. Ello se refiere también a la cuestión de la intervención antisoviética, cuando los EE.UU., en su actitud irreconciliable hacia la Rusia revolucionaria, apoyaron y estimularon el rumbo intervencionista de sus aliados.

La intervención de la Entente se amplió bruscamente tras la derrota de Alemania en la primera guerra mundial y tras la firma del Armisticio de Compiègne el 10 de noviembre de 1918. Las escuadras inglesas y francesas entraron en el Mar Negro. Los ingleses ocuparon varias regiones del Cáucaso. Unidades francesas, griegas, serbias, rumanas y polacas permanecían en los puertos del sur de Ucrania. Crecieron los contingentes intervencionistas en el norte (donde junto a las inglesas había unidades norteamericanas) y en el Extremo Oriente. Los ejércitos de los guardias blancos en el sur (Denikin), en el Este (Kolchak), y en el norte (Miller) recibían grandes remesas de armas y municiones, y tenían a su servicio asesores e instructores extranjeros.

En la Conferencia de Paz inaugurada en París en enero de 1919, se prestó gran atención a la elaboración de los planes de la intervención antisoviética.

Las potencias de la Entente establecieron un duro bloqueo al país soviético. Todas las fronteras terrestres (a excepción de la frontera con Afganistán) fueron cortadas por las tropas invasoras y blancas durante la mayor parte de la guerra civil. Los barcos militares de la Entente bloquearon todas las vías marítimas a Rusia. En una nota del Gran Consejo Aliado a los países neutrales (1918) se proclamaba la decisión de la Entente de “impedir todo comercio con la Rusia bolchevique”, y se prohibía “comunicarse con la Rusia bolchevique” por correo, telégrafo y radio.

Las derrotas que el Ejército Rojo infligió a los destacamentos extranjeros expedicionarios en el norte, en el sur de Ucrania, en Asia Central y el Extremo Oriente, el vigoroso movimiento antiintervencionista en Inglaterra, Francia y los EE.UU., y las rebeliones revolucionarias en los barcos de guerra y en los regimientos de infantería obligaron a los gobiernos de estos países a retirar sus tropas de la

Rusia revolucionaria.

A partir de la primavera de 1919, se hace especial hincapié en la ofensiva de los grandes ejércitos blancos, cuyas acciones son coordinadas y dirigidas por la Entente. Se acrecienta el suministro de armas, equipo y municiones a estos ejércitos.

S. M. Kírov, destacado dirigente del Partido Comunista dijo metafóricamente que Kolchak tenía en sus manos “una espada forjada en los mejores talleres imperialistas...”<sup>1</sup> Cabe añadir, con la misma razón, que no sólo Kolchak, sino además Denikin, Wrángel y Yudénich disponían de fusiles, ametralladoras y cañones fabricados en empresas de los EE.UU., Inglaterra y Francia.

Los jefes de los ejércitos de los guardias blancos reconocían abiertamente las proporciones y el significado de la ayuda extranjera. El general A. Denikin escribe en sus memorias que de marzo a abril de 1919 recibió del extranjero suministros para un ejército de 250 mil efectivos, 558 piezas de artillería, 12 tanques, más de un millón y medio de proyectiles y 160 millones de balas de fusil.<sup>2</sup> En el invierno de 1918 a 1919, Denikin recibió unos 300 mil fusiles; Kolchak, 600 mil fusiles y unos 600 cañones.

El gobierno inglés comunicó oficialmente que en ayuda a los ejércitos blancos fueron invertidos 100 millones de libras esterlinas. A W. Churchill le asistía, en efecto, toda la razón cuando en 1919 llamó al ejército de Denikin “nuestro ejército”.

A mediados de abril las tropas del almirante blanco Kolchak, que tenía en sus manos Siberia y los Urales, se acercaron al Volga, pero fueron rechazadas y tuvieron que retroceder tras los Urales. En la primavera y el otoño de 1919, los ejércitos del general Denikin se aproximaron a Moscú, y los del general Yudénich a Petrogrado, pero también fueron derrotados.

En 1920, además del ejército blanco del general Wrángel que se hizo fuerte en Crimea, contra la República de los Soviets fueron lanzadas unidades de la Polonia burgués terrateniente. Después de intensas operaciones militares que duraron todo el verano y el oto-

---

<sup>1</sup> S. M. Kírov. *Artículos, discursos, documentos*. Moscú, t. 1, p. 62, 63.

<sup>2</sup> A. I. Denikin. *Ensayos sobre los disturbios rusos*. Berlín, 1925, t. IV, p. 86.

ño, Wrángel fue derrotado y las tropas soviéticas tomaron en noviembre por asalto las fortificaciones de Perekop, liberando Crimea. Los restos del ejército wrangeliano huyeron a Turquía en barcos militares franceses.

Entre 1919 y 1921, al igual que en 1918, en la retaguardia soviética se organizaron conspiraciones contrarrevolucionarias, estallaron motines antisoviéticos, continuaron los actos de sabotaje y terroristas, organizados, como antes, con la complicidad y la dirección de los agentes imperialistas. Entre ellos es preciso nombrar el complot del “Centro nacional” constitucional demócrata monárquico en Moscú y Petrogrado en el otoño de 1919 y la explosión producida en la sede del Comité de Moscú del Partido Comunista de Rusia (bolchevique) en septiembre de 1919, a causa de la cual murieron el secretario del Comité de Moscú V. Zagorski y otros 11 comunistas y fueron heridas 55 personas; y los actos de sabotaje: incendios en depósitos y fábricas de material de guerra (sólo en mayo de 1920 fueron destruidos unos 20 empresas y depósitos militares), la voladura de puentes y acueductos, y el descarrilamiento de trenes.

En las fronteras occidental y noroccidental durante todo el año 1921 y parte del año 1922, continuó la incursión en el territorio soviético de destacamentos armados que tenían sus bases en los países vecinos.

Los invasores japoneses permanecieron en el Extremo Oriente hasta octubre de 1922, cuando, tras las derrotas de las fuerzas contrarrevolucionarias en Volocháevka y Spassk, decidieron evacuar. Las tropas japonesas fueron evacuadas de Sajalín del Norte sólo en 1925.

En Asia Central los Estados imperialistas continuaron apoyando y pertrechando a los destacamentos contrarrevolucionarios de los basmaches (bandidos), la lucha contra los cuales se prolongó hasta la segunda mitad de los años 20.

La intervención extranjera fue acompañada de asesinatos y encarcelamientos de los activistas de los Soviets y los sindicatos, del maltrato de la población civil y numerosas acciones punitivas y represalias, cometidas por los invasores en todos los territorios ocupados por los intervencionistas norteamericanos, japoneses, ingleses, fran-

ceses y demás. De agosto de 1918 a agosto de 1919 en la Región del Norte, ocupada por los ingleses y los norteamericanos, permaneció en las cárceles y los campos de concentración el 17% de la población. En ese mismo tiempo, sólo en la cárcel provincial de Arjánguelsk, estuvieron 38 mil personas, siendo fusiladas 8 mil y muriendo otras 1 020. Vale recordar que la población de la región era de 400.000 habitantes.

Son conocidos numerosos casos de incendios y bombardeos por la artillería de aldeas enteras y el exterminio en masa de sus habitantes por las tropas japonesas y norteamericanas en Siberia y el Extremo Oriente.

De hechos de esta índole, hablan los propios participantes de la intervención. El general Graves, jefe de las fuerzas de ocupación norteamericanas en Siberia, reconoció más tarde: “Las atrocidades eran de tal naturaleza que indudablemente serán rememoradas y relatadas por el pueblo ruso incluso cincuenta años luego de cometidas”.<sup>1</sup>

El saqueo de los territorios ocupados por los invasores revistió carácter organizado. En Nueva York, París, Londres y Tokio se creaban febrilmente diversas compañías para explotar las tierras rusas, ucranianas, del Cáucaso y del Asia Central. El senador norteamericano Sherman explicó con sinceridad en el Congreso por qué creía necesario ampliar la intervención en Siberia. “Siberia —declaró— es campo de trigo y pastos para el ganado, que tienen tanto valor como sus recursos minerales”. “Siberia es el mayor premio para el mundo civilizado desde los tiempos de la apertura de las dos Américas” se hacía eco a lo dicho por el senador norteamericano, el boletín de la Federación Industrial Inglesa.

De los puertos rusos partían continuamente barcos cargados de madera, mena, pieles, lino y cereales.

Como consecuencia de las acciones de los invasores y los guardias blancos, del hambre y del desbarajuste que provocaron, el País Soviético sufrió enormes pérdidas. La población, que constituía (en las fronteras de 1921 a 1939) en 1917 más de 147 millones de habitantes, se redujo en 1922 a 136 millones. La producción de la gran in-

---

<sup>1</sup> W. Graves. *America's Siberian Adventure 1918-1920*. New York, 1931, p. 342.

dustria disminuyó en 1920, en comparación con la de preguerra, en 7 veces. La suma de las pérdidas ocasionadas al País Soviético, calculada en 1922, alcanzó 39 mil millones de rublos de oro, superando la cuarta parte de todo el patrimonio nacional de antes de la guerra. Cálculos posteriores mostraron que esta cifra debía ser aumentada en varios miles de millones de rublos.

Bajo la dirección del Partido Comunista, el pueblo soviético alcanzó la victoria definitiva sobre las fuerzas aliadas de los invasores imperialistas y la contrarrevolución interna. Fue una victoria de importancia histórica.

La intervención imperialista, emprendida con el fin de liquidar por vía militar al primer Estado obrero y campesino del mundo, y apagar un foco del movimiento revolucionario mundial, fracasó. El Estado soviético resultó vencedor en el primer choque armado entre los dos sistemas impuesto por el imperialismo. Los Estados capitalistas sufrieron una derrota que fue muy sensible para los Estados Unidos, el país capitalista más grande y más fuerte, participante y organizador activo de la intervención antisoviética.

A. LUNIN

## UNA INTERVENCIÓN OLVIDADA (LAS TROPAS DE LOS EE.UU. EN LA RUSIA SOVIÉTICA DE 1918 A 1920)

La Revolución de Octubre significó el fracaso de los planes y las esperanzas de largo alcance que alimentaban los medios monopolistas norteamericanos con respecto a Rusia.

Tras la revolución de febrero, Washington había hecho todo lo posible para atar a sí más estrechamente al Gobierno Provisional de Rusia. Los EE.UU. fueron los primeros en reconocer a ese gobierno el 22 de marzo de 1917, y este acto, que movió a proceder igual a Inglaterra, Francia y otros aliados, fue una declaración singular de la pretensión de los EE.UU. de llevar la delantera en los asuntos rusos.

La Revolución de Octubre desbarató los planes norteamericanos. El programa de política exterior de la revolución, cuyo fin primordial era la salida de Rusia de la guerra y la lucha por la paz mundial, hacía temer la pérdida de un aliado en la guerra contra Alemania y la posible necesidad de enviar importantes contingentes norteamericanos en ayuda de los fatigados ejércitos de Inglaterra y Francia. Pero lo que más temía el imperialismo norteamericano era que el programa social de la revolución formulado por el partido bolchevique “contagiara” a otros países.

La prensa norteamericana, obrando operativamente, desplegó, en relación con la victoria de la revolución socialista en Rusia, una amplia campaña de falsificación y predicción del pronto final del bolchevismo. Al prohibir el envío de municiones y víveres a Rusia, el gobierno estadounidense señalaba en una declaración especial del Departamento de Estado hecha con este motivo en noviembre de 1917: “Si los bolcheviques retienen el poder y cumplen su programa de firmar la paz con Alemania, el embargo presente a la exportación

a Rusia se mantendrá en vigor”.<sup>1</sup> A la vez, los Estados Unidos pusieron todo su empeño en apoyar a la contrarrevolución rusa. El 10 de diciembre de 1917, el secretario de Estado norteamericano, R. Lansing, dirigió al presidente Wilson un memorándum señalando la necesidad de la intervención de los EE.UU. para “arreglar la situación” en Rusia. Lansing vinculaba sus esperanzas con las fuerzas de la contrarrevolución que reunió el atamán Kaledin en la región del Don: “Cabe esperar un gobierno ruso estable —se decía en el memorándum— en forma de dictadura militar que pueda ser implementado por tropas leales y disciplinadas. El único grupo capaz de organizar un movimiento con fuerza suficiente para barrer a los bolcheviques y formar gobierno, es a mí juicio, el grupo de altos oficiales encabezado por el atamán de los cosacos del Don, Kaledin”.<sup>2</sup> Wilson estuvo de acuerdo con las ideas comprendidas en este documento.

En aquellos momentos, los EE.UU. sostenían una posición peculiar respecto a la intervención en Rusia, a la que se instaba también en Inglaterra y Francia. Sobre todo respecto a la intervención en Siberia.

La causa de ello era Japón. Precisamente Japón, que de hecho no había participado en la guerra, era capaz, a juicio de la Entente, de llevar importantes contingentes militares a Siberia para ahogar al Poder soviético. Esta idea fue formulada por primera vez por el primer ministro francés, Clemenceau, en una conversación privada con el coronel House, asesor de Wilson, el 1º de diciembre de 1917.<sup>3</sup>

Días más tarde, la cuestión del empleo de tropas japonesas en el Extremo Oriente fue planteada oficialmente por el ex embajador de Rusia en los EE.UU., Bajmétiev. El embajador británico en los EE.UU., Reading, apoyó a Bajmétiev inmediata y enérgicamente. Ambos embajadores argüían la proximidad de Japón al Extremo

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918. Russia*, v. 1, p. 226.

<sup>2</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Lansing Papers 1914-1920*. Vol. VII Washington, 1940, p. 343.

<sup>3</sup> Véase E. M. House. *The Intimate Papers of Colonel House*. Vol. III. London, 1928, p. 399.

Oriente Soviético, la existencia de un gran ejército —el japonés— que no había participado en las operaciones militares, y la disposición del propio Japón a actuar en el Extremo Oriente.

Lansing se opuso enérgicamente a esta proposición, calificando de “insensato”<sup>1</sup> el rumbo que se daba a la intervención. En la primera guerra mundial Japón había reforzado considerablemente sus posiciones en el Pacífico, se había afianzado en China aprovechando que las potencias occidentales estaban distraídas en los eventos europeos, y procuraba afianzarse en Manchuria, anterior zona de influencia de Rusia. Permitir que Japón penetrara en el Extremo Oriente ruso y de allí en el Este de Siberia hacia ricas fuentes de materias primas, significaría su excesivo reforzamiento y un cambio en la correlación de fuerzas en el Pacífico. Los EE.UU. querían evitarlo a todo trance.

El 30 de enero de 1918 el embajador de Gran Bretaña en Japón recibió de su gobierno instrucciones de insistir en que Japón recibiera de los aliados la invitación en forma de mandato a ocupar el Ferrocarril de Siberia. Una copia de este telegrama fue enviada para poner en conocimiento a Washington. El gobierno de los EE.UU. señaló otra vez a los embajadores de las potencias aliadas su desacuerdo categórico con los planes de la intervención japonesa.

La postura de los EE.UU. comenzó a cambiar a fines de febrero de 1918, cuando se aclaró que la Rusia Soviética había firmado la paz con Alemania. El primero en reaccionar fue el embajador en Rusia, Morris, quien comunicó a Washington sus consideraciones sobre el establecimiento del control estadounidense en Vladivostok para “salvar” las reservas militares allí acumuladas. Lansing apoyó a Morris, intimidando a Wilson con la perspectiva de la llegada de los alemanes a Siberia y el paso de las reservas de material de guerra que se encontraban en Vladivostok a manos de Alemania.<sup>2</sup> El 25 de febrero conversando con House, Wilson se pronunció porque los japoneses entraran en Siberia, señalando al mismo tiempo que Japón debía asumir determinados compromisos antes de que sus tro-

---

<sup>1</sup> Véase C. R. Watson. *W. Wilson and Far Eastern Policy (1913-1921)*. N. Y., 1957, p. 216.

<sup>2</sup> *W. Wilson and Far Eastern Policy*, p. 221.

pas intervinieran en el Extremo Oriente.<sup>1</sup>

A comienzos de marzo de 1918, la situación en el Oriente cambió. Ya durante las negociaciones de Brest, en la prensa burguesa aparecieron informes de que Japón estaba dispuesto a firmar una paz por separado con Alemania y actuar aliado con ella contra la Rusia Soviética. Previendo esto, el Gobierno soviético dirigió al gobierno de los EE.UU. el 5 de marzo de 1918 una nota especial que fue entregada a través del teniente coronel Robins, representante de la legación de la Cruz Roja norteamericana en Rusia. Al gobierno estadounidense se le preguntaba directamente si los EE.UU. prestarían a Rusia ayuda en caso de que la Rusia Soviética tuviera que reanudar las operaciones militares contra Alemania en caso de que esta violara el tratado de paz. ¿Ayudarían los aliados? ¿Y cómo concretamente ayudarían ellos y los EE.UU.? Al final de la nota se interrogaba: “¿Qué pasos daría el gobierno de los EE.UU. para prevenir la agresión nipona en el Extremo Oriente?”<sup>2</sup> Pero este llamamiento no podía cambiar ya la actitud del gobierno norteamericano. La verborrea demagógica acerca del rechazo a la agresión alemana en el Este cedió el paso a la preparación abierta de la intervención antisoviética.

El 5 de marzo, es decir, el mismo día que se entregó a Robins la nota del Gobierno soviético, los EE.UU. se dirigieron al gobierno de Japón y a las potencias aliadas. Esta vez los Estados Unidos se adherían al llamamiento de los aliados al gobierno nipón con la petición de intervenir en Siberia.

El proceder de la diplomacia norteamericana en 1918 muestra que los EE.UU. estaban de acuerdo con la intervención contra la Rusia Soviética realizada por sus aliados. Los EE.UU. apoyaron las acciones de Inglaterra, que desembarcó el 9 de marzo tropas en Múrmansk y más tarde participó directamente en las operaciones militares en el norte europeo de Rusia. Los norteamericanos reconocían esta región como zona de influencia inglesa y la situación allí no les preocupaba; pero Siberia era otro asunto, y no pensaban ceder allí frente a los japoneses.

---

<sup>1</sup> E. M. House. *Op cit.*, p. 404.

<sup>2</sup> *Documentos de la política exterior de la URSS*. Moscú, t. 1, p. 208.

El 5 de abril de 1918 Japón, apoyado por Inglaterra y Francia, trató de colocar a los Estados Unidos ante un hecho consumado desembarcando sus tropas en Vladivostok. El embajador de los EE.UU., Francis, pidiendo audiencia al Comisario del Pueblo de Relaciones Exteriores, G. Chicherin, le comunicó que el gobierno norteamericano “se oponía de modo categórico a la intervención japonesa en Siberia”.<sup>1</sup> Sin embargo, la aventura japonesa aceleró la aprobación del plan aliado de intervención en Siberia por parte del gobierno estadounidense.

A mediados de abril, se iniciaron en Washington consultas concretas entre Lansing y K. Ishii, representante especial del ministerio de asuntos exteriores del Japón, respecto a la realización de una intervención conjunta. Se supo que Japón podría mandar a Siberia fuerzas considerables: 400 mil efectivos.<sup>2</sup> Ello significaba para los EE.UU. que los japoneses serían dueños de la situación en Siberia, puesto que los Estados Unidos no podían oponerles en aquel entonces, un fuerte contingente de tropas norteamericanas: las principales fuerzas del ejército norteamericano eran trasladadas intensamente a Europa o ya habían llegado allí, y el tonelaje fundamental de la flota norteamericana se encontraba ocupado en la realización de esta operación. En vano se intentó convencer a Japón de reducir el número de tropas.

El factor que sacó del punto muerto el regateo norteamericano japonés se reveló en la propia Rusia: se trataba de la sublevación del cuerpo checoslovaco.

Esta situación había sido prevista por V. Lenin cuando en su intervención de mayo de 1918 en una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y del Soviet de Moscú, dijo: “La cuestión de la guerra o la paz pende de un hilo, tanto en occidente como en el Extremo Oriente, porque existen dos tendencias: una que hace inevitable la alianza de todos los imperialistas y otra que enfrenta a unos capitalistas con otros; ninguna de estas dos tendencias se manifiesta con solidez... La burguesía norteamericana, ahora enemistada con Japón, puede mañana entenderse con él, y la burguesía

---

<sup>1</sup> *Documentos de la política exterior de la URSS*. T. 1, p. 231.

<sup>2</sup> *Sobre la historia de la guerra civil en la URSS*. Moscú, 1960, t. 1, p. 16.

japonesa puede mañana entenderse con la alemana”.<sup>1</sup>

El cuerpo checoslovaco, de 60 mil efectivos aptos para el combate, en la primavera de 1918 avanzaba lentamente a través de los ferrocarriles de Rusia, desde el Volga hacia Vladivostok, preparándose al traslado a Europa Occidental para participar en las operaciones militares contra Alemania. En el transcurso de marzo y mayo de 1918, los países aliados prepararon la actuación de este cuerpo contra el Poder soviético. Para los EE.UU. este cuerpo resultaba ser la fuerza que podía oponerse a los japoneses en Siberia. Tal suposición se inscribe lógicamente en el panorama de los acontecimientos de la primavera de 1918.

La sublevación del cuerpo checoslovaco comenzó el 24 de mayo. Los checos se rebelaron desde el Volga hasta el Extremo Oriente prácticamente en todas las estaciones importantes del Ferrocarril Transiberiano, donde fueron concentrados previamente todos sus trenes. Junto a destacamentos de la contrarrevolución interna, tomaron en unos cuantos días el poder en muchas ciudades y regiones del Volga, los Urales y Siberia.

En los medios gubernamentales estadounidenses a fines de mayo y comienzos de junio, se celebraron varias conferencias entre Wilson, Lansing, House y representantes de los departamentos militares y otros. Era preciso determinar la nueva política respecto a Rusia, buscar los argumentos para justificar ante el Congreso el cambio de la política del gobierno y definir, ante todo, los métodos para realizar la intervención en Siberia que aseguraran una situación privilegiada a los EE.UU. En una carta fechada el 13 de junio de 1918, House propuso al presidente Wilson intervenir en el Congreso notificando el envío de tropas norteamericanas a Siberia y que la “Comisión de ayuda a los rusos” perseguía el fin de mejorar el suministro de víveres a Rusia. El resultado final de la creación de esta comisión, trataba de persuadir House al presidente, sería que “este programa pondrá en manos de usted la llave para la solución de la situación en Rusia y en el Este en general, satisfará a los aliados y

---

<sup>1</sup> V. I. Lenin. *Informe sobre la política exterior pronunciado en la sesión conjunta del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y del Soviet de Moscú, O.C.*, t 36, p. 332.

posiblemente reconciliará a la mayor parte de Rusia con dicha intervención”.<sup>1</sup> El 6 de julio de 1918 en la Casa Blanca tuvo lugar una conferencia que analizó el llamamiento del Consejo Militar Supremo de los aliados al presidente Wilson del 2 de julio. Se llamaba a “aprobar antes de que sea tarde, las medidas de intervención propuestas” (contra la Rusia Soviética. — A. L.). La conferencia tomó la decisión de aprobar la intervención y estimó posible enviar al Extremo Oriente 7 mil soldados por cada una de las partes: la norteamericana, la inglesa y la japonesa. Se hacía notar en especial, que antes de enviar las tropas, los aliados debían dirigirse a los pueblos de Rusia explicando que acudían allí cumpliendo su deber de aliados al combatir contra Alemania sin perseguir ningún interés egoísta. Las decisiones de la conferencia se exponían en el memorándum de Lansing del 7 de julio de 1918.

El acuerdo de principio que hicieron los Estados Unidos, desató las manos a los aliados. Ya el 10 de julio, el gobierno inglés dio la orden de mandar a Vladivostok un batallón del regimiento de Middlesex acantonado en Hong Kong.

El 17 de julio Lansing envió otro memorándum hipócrita a los embajadores de los aliados en Washington formulando las premisas de la participación en la intervención. El fin de la intervención, según Washington, era ayudar a los checoslovacos y contribuir a la auto-defensa y la autoadministración de los “correligionarios eslavos”. El memorándum finalizaba con la declaración de no intervención absoluta de los EE.UU. en los asuntos internos de Rusia.<sup>2</sup>

A finales de julio fue firmado un acuerdo entre el subsecretario de Estado F. Polk y K. Ishii sobre las proporciones de la participación conjunta en la intervención. Los EE.UU. y Japón enviarían 7 mil efectivos cada uno.

El 2 de agosto el gobierno japonés publicó un memorándum sobre los objetivos de la expedición japonesa a Siberia. Se señalaba que las acciones de las tropas aliadas se realizaban por iniciativa del gobierno de los EE.UU. Para evitar protestas por parte de los Esta-

---

<sup>1</sup> E. M. House. *Op. cit.*, p. 426.

<sup>2</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918, Russia*, V. II, p. 289.

dos Unidos, los objetivos de la intervención eran formulados en el espíritu del memorándum de Lansing. El gobierno norteamericano hizo una declaración análoga el 3 de agosto.

Pronto las tropas norteamericanas y japonesas comenzaron a llegar a Vladivostok. La intervención en el oriente de Rusia era un hecho consumado. Frente a la alianza norteamericano nipona en la lucha común contra el primer Estado socialista del mundo, las contradicciones norteamericano niponas pasaban a un segundo plano, aunque su influencia se haría sentir más de una vez en el curso de la intervención.

Como ya hemos dicho, la actitud de los EE.UU. en el problema de la intervención en el norte de Rusia difería de modo sustancial de su postura en Siberia y el Extremo Oriente. Los Estados Unidos reconocían “los intereses particulares” de Gran Bretaña en el norte europeo de Rusia y apoyaban la elección de esta región para efectuar la invasión de la Rusia Soviética valiéndose del puerto de Múrmansk, que no se hiela. Al igual que en el caso de Siberia, la intervención en esta región se justificaba con la necesidad de “defender de los alemanes” las reservas militares que se encontraban en los puertos de Múrmansk y Arjánguelsk.

El primer grupo de tropas norteamericanas llegó a Múrmansk el 24 de mayo de 1918 a bordo del crucero norteamericano *Olympia*. Este grupo, junto a las tropas de Gran Bretaña y Francia, se ocupó de la “seguridad” de los depósitos y el puerto. En junio de 1918, además del *Olympia*, en Múrmansk se encontraban un acorazado y otros buques de la marina de guerra de los EE.UU.<sup>1</sup> Después de ocupar Múrmansk, los aliados desembarcaron una unidad en Arjánguelsk, derrocando con ayuda de la contrarrevolución interna el Poder soviético y estableciendo un régimen de terror blanco.

El 31 de julio de 1918 los norteamericanos desembarcaron el primer destacamento de 50 hombres en Arjánguelsk, y para el 4 de septiembre habían llegado ya unos 5.000 soldados y oficiales del ejército estadounidense a Arjánguelsk. Otras unidades de las tropas

---

<sup>1</sup> *Frente del Norte. La lucha del pueblo soviético contra la intervención militar extranjera y los guardias blancos en el Norte Soviético (1918-1920). Documentos.* Moscú, 1961.

norteamericanas actuaban igualmente en la región de Múrmansk. A fines de septiembre de 1918, Francis, quien se había trasladado para entonces a Arjánguelsk, comunicó a Lansing que las tropas norteamericanas avanzaban con éxito hacia Kotlas y preparaban una ofensiva contra Vologda.

Las tropas norteamericanas del norte de Rusia quedaban subordinadas en las cuestiones operativas al mando inglés en la persona del general Ironside. Y si en cuanto al odio a los Soviets, los norteamericanos y los ingleses coincidían, en algunas cuestiones de la política en los territorios ocupados divergían. No en lo de exterminar en masa a los comunistas o a los obreros que apoyaban a los Soviets: en esto existía plena comprensión mutua. Las divergencias surgían en decidir con quién iban a contar ante todo en Rusia: con los partidarios de la dictadura desembozada de los oficiales blancos, a lo cual se inclinaban desde el principio los ingleses, o con los representantes de la contrarrevolución “democrática”: los mencheviques y los eseristas, lo que era inicialmente la posición oficial estadounidense tanto en el norte de Rusia como en Siberia. Las divergencias sobre esta cuestión llegaron en el norte al punto de que Francis, a finales de septiembre de 1918, preguntó a Lansing si no sería posible transferir el mando de las tropas inglesas a manos de los norteamericanos.<sup>1</sup>

Al inicio de la intervención en el norte, las tropas norteamericanas, inglesas y francesas, junto a las unidades de los guardias blancos, lograron empujar considerablemente hacia el sur, en dirección a Petrogrado y Vologda, a las unidades, entonces poco numerosas, del Ejército Rojo; pero a finales de 1918 la situación ya había cambiado. Las unidades del Ejército Rojo recibieron considerables refuerzos y empezaron a asestar sensibles golpes a las tropas invasoras. A comienzos de 1919 el Ejército Rojo derrotó cerca de Shénkursk a las fuerzas aliadas de los guardias blancos y los norteamericanos. Esa derrota minó tanto el espíritu combativo de por sí bajo de las tropas estadounidenses, que los soldados norteamericanos comenzaron a pedir abiertamente el retorno a su tierra. Los militares norte-

---

<sup>1</sup> A. Beriozkin. *La Revolución de Octubre y los EE.UU. 1917-1922*. Moscú, 1967, p. 180.

americanos sentían cada vez menos deseos de luchar contra la Rusia Soviética, sobre todo porque la guerra mundial ya había terminado y era imposible encubrir la intervención con la demagogia de la “amenaza alemana”.

El 18 de febrero de 1919 en la prensa norteamericana fue publicada una carta del secretario de Defensa de los EE.UU. a los presidentes de las comisiones militares del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso. En la carta se decía que el presidente Wilson había convenido mandar al norte dos batallones ferroviarios del ejército norteamericano que, además de garantizar la seguridad de las tropas aliadas en las regiones de Múrmansk y Arjánguelsk, debían ayudar a evacuar las tropas norteamericanas y aliadas del norte de Rusia en el más breve plazo posible. No era más que la misma demagogia, pero el 30 de marzo de 1919 una de las compañías del 339º regimiento de infantería (según algunas fuentes, el 339º batallón de infantería) del ejército estadounidense acantonado en Arjánguelsk, se negó a combatir y demandó la evacuación inmediata a los Estados Unidos amenazando, en caso de una negativa, con un alzamiento armado.<sup>1</sup>

En estas circunstancias, ni la llegada en marzo y abril de los batallones ferroviarios con un número total de 720 efectivos ni el nombramiento del general Richardson como nuevo jefe de las tropas norteamericanas, podían cambiar la situación. Hubo que preparar efectivamente la evacuación de las tropas estadounidenses del norte de Rusia, y ya en julio de 1919 los norteamericanos —los primeros de los aliados que lo hacían— empezaron a retirar sus tropas del territorio de la Rusia Soviética. Ahora se podía contar sólo con Siberia.

Las fuerzas intervencionistas llegaban a Siberia en cantidades desiguales. Los japoneses infringieron de inmediato el acuerdo de julio entre Polk e Ishii, sobrepasando considerablemente el número de tropas que habían acordado enviar. Los EE.UU. mandaron a Siberia una división bajo el mando del general W. Graves. El número

---

<sup>1</sup> *Frente del Norte. La lucha del pueblo soviético contra la intervención militar extranjera y los guardias blancos en el Norte Soviético (1918-1920). Documentos.* Moscú, 1961, p. 52.

de tropas norteamericanas junto a las unidades auxiliares alcanzaba los 9 mil efectivos, o sea, mucho menos que los 70 mil y posteriormente 100 mil japoneses; sin embargo, al hablar de las actividades de los norteamericanos en Siberia y el Extremo Oriente, no cabe referirse sólo a sus fuerzas militares. Los norteamericanos tenían allí su legación ferroviaria, destacamentos de la Cruz Roja, funcionarios de otros servicios, gran número de corresponsales, diplomáticos y simplemente espías. Desde los primeros días de su presencia en Siberia, los norteamericanos comenzaron a penetrar de modo activo todas las esferas de su vida interna. Establecían contactos con los eseristas y los mencheviques, mantenían relaciones con las organizaciones cooperativas que desempeñaban un importante papel en la economía siberiana. Adjunto al cuerpo expedicionario norteamericano, había una agencia informativa especial que publicaba sus periódicos y pretendía tomar bajo su control las ediciones locales.

La penetración en la vida interna de Siberia y el Extremo Oriente debía ayudar a los EE.UU. en su rivalidad con Japón. Los japoneses contaban con el apoyo de las bandas armadas de Semiónov, Kalmikov y Gámov, que habían creado y armado ellos mismos. Al mismo tiempo, los EE.UU. ponían sus esperanzas en las organizaciones “democráticas” y tenían amplios nexos con diferentes círculos de la sociedad siberiana. Pero entre los propios norteamericanos tampoco había unidad. La política del Departamento de Defensa no siempre era concertada con el Departamento de Estado, faltando de este modo, coordinación entre los representantes diplomáticos y los militares norteamericanos.<sup>1</sup> La atención del Departamento de Defensa, como de todo el gobierno norteamericano, se centraba ante todo en Europa, donde se acercaba el desenlace de la guerra contra Alemania. La competencia que les hacía su aliado Japón, no provocaba excesivo temor a los militares. El Departamento de Estado, en cambio, tenía muy en cuenta la rivalidad japonesa en la política siberiana y aspiraba por todos los medios a conseguir ventajas para los EE.UU. De ahí el flirteo entre los cónsules norteamericanos y los guardias blancos, y el permanente control sobre las acciones de Japón.

---

<sup>1</sup> W. Graves. *Op. cit.*, p. 120-121.

Fue un gran éxito del Departamento de Estado lograr influir en cierta medida en la política exterior del llamado gobierno siberiano. Los EE.UU. no tenían representantes en Omsk, donde había misiones diplomáticas de Inglaterra y Francia. Los representantes ingleses en Siberia eran encabezados por el Comisario Extraordinario de Gran Bretaña en Siberia, C. Eliot, y el general A. Knox; los franceses, por el Comisario Supremo de Francia en Siberia, E. Regnault, y el general P. Janin, al que estaban subordinados en las cuestiones operativas los checoslovacos. Para contrarrestar su influencia, los norteamericanos lograron que se nombrara secretario del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Gobierno de Omsk y dueño absoluto del ministerio, a cierto Sukin, funcionario de la “embajada de Rusia” en Washington y partidario de los norteamericanos.

Al instalarse en el Extremo Oriente, los norteamericanos no se apresuraron a prestar ayuda militar a los checoslovacos y los guardias blancos, es decir, a lo que oficialmente era uno de los objetivos principales de la intervención. El Departamento de Defensa no apoyó en septiembre de 1918 la proposición del general Graves de enviar una unidad de tropas norteamericanas a la región del Volga en ayuda de los checoslovacos.<sup>1</sup> Washington no quería debilitar las tropas norteamericanas dislocadas en el Extremo Oriente preocupado por la presencia japonesa en su retaguardia. Japón, afianzándose en el territorio del Extremo Oriente y en Siberia Oriental, también declaró que sus tropas no avanzarían al oeste desde Irkutsk “sin el deseo claramente expresado de América en este sentido”.<sup>2</sup>

El gobierno de Siberia no consiguió permiso de los EE.UU. de emplear en la compra de municiones y pertrechos el resto de los créditos no utilizados (400 millones de dólares) y que habían sido concedidos al Gobierno Provisional por los EE.UU., quienes, no obstante, concedieron al gobierno de Siberia papel moneda ruso impreso en los EE.UU. por la suma de 3.500 millones de dólares. Más tarde el gobierno de Siberia siguió recibiendo “dinero ruso” de los norteamericanos. Este control financiero permitió a los EE.UU. sufragar

---

<sup>1</sup> Véase A. Beriozkin. *Op. cit.*, p. 175.

<sup>2</sup> I. Subbotovski. *Los aliados, la reacción rusa y la intervención*. Leningrado, 1926, p. 140.

sus operaciones en Siberia, no en dólares, sino en papeles que tenían en cantidad ilimitada.

El 18 de noviembre de 1918 se produjo un cambio gubernamental en Omsk. El gobierno “democrático” de los eseristas y los mencheviques fue sustituido por la franca dictadura militar del almirante Kolchak, quien recibió el título de Gobernador Supremo.

Los Estados Unidos, sin haber participado directamente en el golpe, pronto se pusieron al lado de Kolchak en su conflicto con el atamán Semiónov, respaldado por Japón. (Semiónov, que se afianzó en Transbaikalia, se negó resueltamente a reconocer a Kolchak como Gobernador Supremo y Comandante en Jefe.)

El litigio se resolvió mediante un compromiso: Semiónov reconoció formalmente a Kolchak, siendo ascendido por ello a teniente general, y Kolchak se vio obligado a conformarse con que Semiónov tuviera cierta independencia en Transbaikalia.

Los EE.UU. también apoyaron a Kolchak en lo concerniente a la compensación que esperaba Japón de él por la “ayuda prestada” en la lucha contra el Poder soviético. Los japoneses esperaban que Kolchak proclamase Vladivostok puerto libre, transfiriera al Japón el control sobre el Ferrocarril Siberiano y le vendiera Sajalín Septentrional. Los norteamericanos no sólo previnieron a Kolchak contra los planes japoneses, sino que frustraron con sus protestas los designios de Japón.<sup>1</sup>

Los Estados Unidos deseaban establecer un control sobre el Ferrocarril Siberiano utilizando para ello su legación ferroviaria; pero en esta cuestión no sólo los japoneses se oponían a los norteamericanos, sino también los demás aliados, que comprendían la importancia de esta importante arteria siberiana de transporte y no deseaban depender de los EE.UU. o Japón. Los aliados insistían en que el ferrocarril fuera controlado por un órgano especial de los aliados: el Comité Ferroviario Aliado. Por ende, Japón también apoyó a los aliados deseando debilitar las posiciones norteamericanas. Las ne-

---

<sup>1</sup> Del telegrama del general Romanovski a P. Vologodski del 28.XII.1918. —De la colección del Archivo Central Nacional de la Revolución de Octubre y de la Construcción Socialista (en adelante —ACNRO)

gociaciones se prolongaron hasta marzo de 1919 y terminaron con la “concesión” de los EE.UU. Al no lograr el puesto del presidente del Comité, los Estados Unidos insistieron en que fuera encabezado por un representante neutral: el ministro de vías de comunicación del gobierno de Kolchak, Ustrúgov. El poder real pasó a manos del norteamericano Stevens, presidente del consejo técnico.

La actitud mercantil de los norteamericanos hacia los sucesos de Rusia se manifestaba abiertamente. Los agentes del gobierno de Kolchak en los EE.UU., no teniendo la posibilidad de utilizar los créditos congelados por el gobierno, se vieron obligados a comprar los materiales que necesitaban, directamente a las firmas productoras en condiciones de pago al contado. A falta de divisas, el gobierno de Omsk hubo de ajustar las cuentas con el oro que los checoslovacos habían robado en Kazán de la reserva de oro de Rusia. Los norteamericanos pidieron a los representantes de Kolchak el pago inmediato del 10% del costo de las mercancías, concediendo un plazo anual para el pago de la suma restante. En los pocos casos que el gobierno estadounidense tomó a su cargo los pedidos de Kolchak, actuó en las mismas condiciones que las firmas privadas, exigiendo el pago previo del 10% del valor total.<sup>1</sup>

Además de las discusiones en cuestiones de suministros, los norteamericanos provocaban el descontento de Kolchak con sus estrechos nexos con organizaciones “democráticas” tales como el partido de los eseristas, a quienes defendieron incluso después del cambio. Más aún, en Vladivostok los eseristas obraban abiertamente con al apoyo directo de la legación militar norteamericana. De esta manera, los representantes de los EE.UU. no sólo creaban vínculos y compromisos con Kolchak, asegurándose así libertad de maniobra a la hora de optar entre la “democracia” y la dictadura. Como consecuencia de esta política, en febrero y marzo de 1919 las relaciones entre los norteamericanos y los partidarios de Kolchak en el Extremo Oriente se tornaron muy tensas.

A la vez, es preciso señalar que los representantes diplomáticos de

---

<sup>1</sup> Véase N. Kakurin. *El papel de las potencias de la Entente en la economía de guerra de los gobiernos blancos durante la guerra civil en la URSS. ¿Quién es el deudor?* Moscú, 1926, p. 535.

los EE.UU., cumpliendo instrucciones del Departamento de Estado, prestaban todo tipo de ayuda a Kolchak. El general Graves escribió más tarde que el cónsul general de los EE.UU. en Siberia, Harris, apoyó a los partidarios de Kolchak en el conflicto con el mando militar norteamericano y “transmitió por cable al Departamento de Estado diariamente y sin comentarios todos los artículos calumniosos, falsos y groseros que aparecían en la prensa de Vladivostok sobre las tropas norteamericanas”.<sup>1</sup>

La falta de comprensión entre los partidarios de Kolchak y el contingente militar norteamericano impedía realizar los planes norteamericanos en Siberia. Así, en particular, cuando en marzo de 1919 los norteamericanos, conforme a un acuerdo del Comité Ferroviario Aliado, se disponían a enviar sus tropas hacia el ferrocarril en la región del Baikal, chocaron con la oposición inesperada del mando de Kolchak. Los norteamericanos debían controlar dos sectores: uno, entre Vladivostok y Jabárovsk, y el otro, desde Verjineúdínsk hasta el Baikal. El primer sector les permitiría controlar los transportes japoneses en la región de Vladivostok; el segundo, las cargas que iban a Siberia Occidental. Kolchak dio personalmente la orden al general Jorvat de impedir a los norteamericanos el acceso a la región del Baikal, especialmente en el sector de Verjineúdínsk-Sliudianka (una región de túneles).

Los hombres de Kolchak miraban con creciente desconfianza la actuación de los norteamericanos en Siberia. El cuartel general del ejército de Kolchak comunicaba a su jefe en un parte del 28 de abril de 1919: “Por falta de información, no podemos hacernos por ahora una idea más o menos clara de los objetivos y las metas concretos de los EE.UU. en Rusia. Los datos existentes permiten deducir que la meta principal de la política estadounidense es conquistar nuestro mercado en el Extremo Oriente desplazando al mismo tiempo la influencia económica de Japón. Cabe suponer igualmente que piensan aprovechar las riquezas naturales, principalmente de Siberia, por medio de la obtención de concesiones ventajosas y privilegios”. El objetivo principal de los EE.UU. en la intervención, según los

---

<sup>1</sup> W. Graves. *Op. cit.*, p. 122.

autores del parte, era “una política de conquista pacífica de Rusia”.<sup>1</sup> Kolchak y sus allegados sentían particular desconfianza de la Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA), una de las organizaciones norteamericanas que obraba en Siberia. Acorde con sus tareas oficiales de “beneficencia e ilustración”, la Asociación abría clubes para la juventud y los soldados donde se dictaban conferencias y se exhibían películas sobre los EE.UU. Las actividades de la Asociación eran, sin lugar a dudas, de carácter antibolchevique y en este sentido no podían menos que convenir a los kolchakovistas; pero a la par de ello, la YMCA se dedicaba afanosamente al espionaje económico y político y a la propaganda activa a favor de los EE.UU., provocando irritación en el gobierno de Kolchak. El 8 de mayo de 1919, al discutir la petición de la Asociación de permitir sus actividades en el ejército y exonerarla, como a la Cruz Roja, de impuestos aduaneros y del pago del transporte de cargas por ferrocarril, la comisión interdepartamental de Omsk tomó la decisión de prohibir las actividades de la YMCA en Rusia. En la reunión se leyó la opinión de Kolchak de que las actividades de la YMCA en el ejército “son intolerables puesto que los objetivos y los propósitos de la Asociación se hallan en contradicción con los principios nacionales y religiosos en que se basa el restablecimiento de Rusia...”<sup>2</sup> La actitud de los partidarios de Kolchak hacia los norteamericanos en la primavera de 1919 se debía igualmente a las vacilaciones del presidente Wilson en lo concerniente al reconocimiento oficial de Kolchak como jefe del poder ejecutivo en Rusia por parte de la Conferencia de Paz de París. Uno de los objetivos principales de la contrarrevolución externa e interna era lograr el reconocimiento de Kolchak, legalizar las relaciones de los países aliados con Kolchak y poder ayudar ampliamente a sus tropas, que en la primavera de 1919 parecían aún capaces de derribar el Poder soviético.

Los representantes de Inglaterra y Francia insistían en que Kolchak fuera reconocido de inmediato. El Presidente Wilson tampoco tenía objeciones de principio, aun oponiéndose formalmente al reconoci-

---

<sup>1</sup> ACNRO

<sup>2</sup> V. Soskin. *Ensayos sobre la historia de la cultura en Siberia en los años de la revolución y la guerra civil*. Novosibirsk, 1965, p. 143-153.

miento inmediato de Kolchak so pretexto de la administración “insuficientemente democrática” del almirante Kolchak. El 13 de mayo Wilson mandó al embajador de los EE.UU. en Japón, Morris, a Vladivostok y luego a Omsk para precisar la postura de su gobierno respecto al futuro régimen en Rusia. Si bien aquel viaje no llegó a realizarse, el gobierno norteamericano, en principio, ya estaba dispuesto a reconocer a Kolchak. Se depositaban las esperanzas en un régimen fuerte capaz de combatir al Poder Soviético, y no en las “fuerzas democráticas” que perdían el tiempo en discusiones. Los círculos gobernantes estadounidenses consideraron que no bastaba con la penetración económica en Siberia para imponerse a la rivalidad japonesa, y decidieron comprar a Kolchak y a todo su ejército, su administración y su política: un régimen “no democrático”, pero lo bastante fuerte para asegurar los intereses norteamericanos en Siberia.

La cuestión estribaba en cómo formalizar el acto de reconocimiento, en cómo explicar el viraje de la “neutralidad” a la amistad con Kolchak. El gobierno de los EE.UU. debía tener en cuenta el creciente movimiento de los trabajadores de su país en contra de la intervención en los asuntos de la Rusia Soviética y en contra de la ayuda a los guardias blancos en la guerra civil. También tenían que contar con los aislacionistas que pedían el cese de toda actividad norteamericana en Europa y, en particular, en Rusia. Era preciso darle un aspecto democrático al régimen de Kolchak para poder presentar la ayuda a éste como “ayuda a la democracia en Rusia” en la lucha contra los “usurpadores bolcheviques”. El 16 y el 17 de mayo se celebraron negociaciones en Washington entre el enviado de Kolchak, Známenski; el subsecretario de Estado, Phillips; y el jefe de la sección rusa del Departamento de Estado. El 18 de mayo Známenski comunicó por telégrafo a sus jefes, que durante las negociaciones se había establecido que “el gobierno norteamericano está dispuesto a brindar vasta ayuda al gobierno de Rusia; se necesita sólo buscar las mejores formas y medios de realizar esta ayuda. Los norteamericanos esperan y expresan su seguridad de que los aliados pronto reconocerán a Kolchak, facilitándose de esta manera las relaciones entre ellos. Están dispuestos a suministrar inmediatamente los artículos que necesitemos en cantidades superiores a nuestras deman-

das y con el pago a crédito”.<sup>1</sup>

Las relaciones entre los EE.UU. y Kolchak se veían entorpecidas formalmente por la falta del reconocimiento oficial a su gobierno y por la falta del otorgamiento, por parte del Congreso, de poderes a la Casa Blanca para ayudar a Kolchak. El 30 de junio Wilson autorizó el viaje, previsto antes para mayo, del embajador estadounidense en Japón, Morris, a Omsk. Ya no se buscaba un ambiente “democrático” que justificara el reconocimiento. La tarea se planteaba de modo práctico: ¿Valía la pena que el gobierno de los EE.UU. ayudara a Kolchak? ¿Sería eficiente la ayuda norteamericana en la lucha contra los bolcheviques o sería inútil? Este pragmatismo ante todo se debía a que el Ejército Rojo había asestado duros golpes a Kolchak. Además de ello, comunicaba Wilson, Morris debía “dar a entender al gobierno japonés que estamos profundamente interesados en la situación de Siberia y que tenemos la intención de aplicar allí una política definida que implica el principio de “puertas abiertas” para una Rusia libre de la dominación japonesa”.<sup>2</sup>

El 11 de julio Morris, acompañado por el general Graves, partió de Vladivostok a Omsk. “Morris debía declarar: si el gobierno de Omsk es capaz de sostener el frente, posiblemente lo reconocemos”<sup>3</sup> —escribió Graves. Al llegar a Omsk a mediados de julio, Morris no pudo dejar de ver la descomposición total que afectaba al ejército y la retaguardia de Kolchak. En un cable al subsecretario de Estado Polk, comunicó el 22 de julio en detalle sus consideraciones pesimistas sobre la capacidad de Kolchak de hacer frente al Ejército Rojo; pero en un telegrama del 27 de julio manifiesta una actitud totalmente distinta. Morris comprendió que ya no se podía encontrar otra fuerza u otro hombre para luchar contra la Rusia Soviética y propuso confiar en Kolchak. Morris aconsejó reconocer al gobierno de Kolchak y sustituir a los checoslovacos, que se negaban a participar en las operaciones militares contra el Ejército Rojo (a causa de las graves pérdidas que antes no habían sufrido), por 25 mil solda-

---

<sup>1</sup> ACNRO

<sup>2</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1919, Russia*, p. 388.

<sup>3</sup> W. Graves. *Op. cit.*, p. 226.

dos norteamericanos. En calidad de medida de primer orden, Morris determinó conceder a Kolchak un crédito de 200 millones de dólares para el suministro urgente de armas y municiones.<sup>1</sup>

Mientras Morris realizaba su visita, el gobierno norteamericano llevaba a cabo la ayuda militar a Kolchak. El Departamento de Defensa de los EE.UU., el 7 de julio de 1919, interpelló al Departamento de Estado respecto a la ayuda prestada al gobierno siberiano. El Departamento de Estado señaló en su respuesta del 19 de julio que el gobierno estadounidense empeñaba todos sus esfuerzos en cumplir el acuerdo de la Conferencia aliada de París respecto al envío de material de guerra a Kolchak. El gobierno de los EE.UU. suministraba ahora armas y equipo en considerables cantidades. El Departamento de Estado comunicaba a la vez que el no reconocimiento oficial al gobierno de Kolchak por parte de los Estados Unidos, estorbaba mucho la prestación de la ayuda.

El análisis del proceder de la diplomacia norteamericana de mayo a agosto de 1919, muestra con nitidez que los EE.UU. fueron abandonando de manera gradual su anterior política de “conquista pacífica” pasando a una intervención activa en los acontecimientos siberianos y al apoyo directo a Kolchak. Este paso se vio entorpecido por el hecho de que, tras las elecciones intermedias celebradas en los EE.UU. en 1918, la mayoría del Congreso pasó a los republicanos, adversarios de la administración demócrata de Wilson. Y aunque ambos partidos tenían una plataforma antisoviética común, las consideraciones de la lucha interpartidista dejaron su huella en la adopción de las decisiones relativas a los asuntos siberianos.

En septiembre de 1919, las tropas de Kolchak obtuvieron por última vez éxitos parciales en la guerra. Esto reanimó un tanto a los partidarios en Washington del reconocimiento inmediato a Kolchak; pero de pronto se agudizaron las relaciones norteamericano japonesas en el Extremo Oriente. Se llegó incluso a que los norteamericanos fueran atacados por los cosacos blancos de Kalmikov, estimulado por los japoneses. El día 16, Graves presentó al mando de Kolchak en Vladivostok un ultimátum amenazando con no entregarle ni

---

<sup>1</sup> A. Geronimus. *La ayuda de los EE.UU. a Kolchak. – Memorias históricas*, 1949, t. 29, p. 40-41.

un fusil más mientras no se pusiera término “a la actividad antiamericana de los agentes de Kolchak”.<sup>1</sup> El servicio de contraespionaje de los guardias blancos comunicó a Kolchak que los norteamericanos “continúan buscando individuos, grupos de personas, organizaciones importantes tales como todo tipo de cooperativas, administraciones locales, provinciales y urbanas con el fin de estrechar sus vínculos con Rusia en oposición a Japón. Además de las relaciones descubiertas con determinados grupos, se relacionan con nuestros obreros a través de la YMCA, y por lo visto, pretenden influir sobre ellos en el sentido que necesitan”.<sup>2</sup>

En octubre de 1919 los aliados llegaron a un acuerdo definitivo respecto a la distribución de las funciones en la ayuda a las agrupaciones de los guardias blancos. Inglaterra y Francia prestarían la atención principal al sur de Rusia apoyando activamente a Denikin. Kolchak y Siberia eran concedidos a los Estados Unidos y Japón. El 16 de octubre en una conversación con el cónsul general de los EE.UU. en Siberia, Harris, Sukin le comunicó que “Kolchak dependía ahora enteramente de la ayuda norteamericana, puesto que Inglaterra no podía seguir prestando ayuda a Kolchak en dinero o municiones”.<sup>3</sup> Harris inmediatamente dio parte al Departamento de Estado de la conversación sostenida. Como señaló Graves, después del cese de la ayuda inglesa a Kolchak “la última esperanza de los monárquicos rusos y sus tutores aliados era lograr el reconocimiento de Kolchak por los Estados Unidos y obtener la ayuda financiera norteamericana”.<sup>4</sup>

Debido a esta situación, el gobierno de Wilson buscaba febrilmente las vías de ayudar a Kolchak y asegurar sus posiciones en Siberia. Los norteamericanos llevaban a cabo un doble juego: por un lado, hacían todo lo posible para sostener a Kolchak, y por otro, elaboraban planes para el caso en que Kolchak cayera. La victoriosa ofensiva del Ejército Rojo y la amenaza de la pérdida de Siberia Occidental exigían medidas urgentes. Con el fin de contener la ofensiva

---

<sup>1</sup> W. Graves. *Op. cit.*, p. 251-257.

<sup>2</sup> Informe del general Riábikov a Kolchak sobre la situación en el Extremo Oriente. Septiembre de 1919. – ACNRO.

<sup>3</sup> *Sobre la historia de la guerra civil en la URSS*. T. II, p. 754.

<sup>4</sup> W. Graves. *Op. cit.*, p. 277.

del Ejército Rojo, se decidió aprovechar a los checoslovacos, que se replegaban lentamente sin presentar combate a las tropas soviéticas, más preocupados de salvar los bienes saqueados que de salvar a Kolchak. Para atraerlos, los norteamericanos les ofrecieron comenzar la evacuación a Europa del cuerpo de ejército en barcos norteamericanos. El 1º de noviembre de 1919, Phillips comunicó a la delegación norteamericana en la Conferencia de Paz de París que "este acuerdo debe ser alcanzado inmediatamente. De otro modo, se fortalecerán y aumentarán su prestigio los bolcheviques".<sup>1</sup> Sin embargo, no se logró convencer al gobierno de Masaryk en Praga, donde temían la indignación que podría estallar entre los soldados del cuerpo de ejército, quienes llevaban luchando varios años sin interrupción y deseaban ardientemente regresar a sus casas.

El 14 de noviembre el Ejército Rojo tomó Omsk. Kolchak con su estado mayor y su "gobierno" retrocedió al Este. Los norteamericanos más perspicaces comprendían que el régimen de Kolchak ya no podría restablecerse. El vigoroso movimiento guerrillero en la retaguardia, y la descomposición de las tropas de Kolchak, incapaces de prestar resistencia al Ejército Rojo, convertía en quimeras las esperanzas de posibles éxitos de Kolchak. Ante los norteamericanos surgió el problema de sustituir a Kolchak y conservar el control sobre el Extremo Oriente. Los japoneses sostenían firmemente en sus manos el Este de Siberia ocupado por Japón y Semiónov. Los representantes norteamericanos en Siberia ahora se proponían impedir la dominación japonesa en el Territorio del Extremo Oriente. Harris pretendía en vano asegurar a Washington que "la partida de Kolchak de Omsk debía considerarse, no como indicación de debilidad, sino más bien de fuerza".<sup>2</sup> Las posibilidades de Kolchak se habían agotado. Los norteamericanos intentaron tomar bajo su control el Territorio del Extremo Oriente instalando allí un "gobierno" dependiente de los EE.UU.

Para ello les vinieron bien los vínculos que ya habían establecido con los eseristas y la influencia de la legación militar norteamericana-

---

<sup>1</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1919, Russia*, p. 311.

<sup>2</sup> W, Graves. *Op. cit.*, p. 262, 263.

na sobre los checoslovacos. El 18 de noviembre de 1919 el general Gajda emprendió un intento de toma del poder en Vladivostok; sin embargo, los norteamericanos, aunque habían incitado a Gajda a intervenir, no se decidieron a apoyarlo abiertamente. Los japoneses abrieron fuego de artillería desde los barcos contra los golpistas reunidos junto al tren de Gajda y las tropas leales a Kolchak consumaron el asunto.

Los Estados Unidos comprendieron que Siberia era una región perdida para la influencia norteamericana. En los EE.UU. crecía el movimiento por el cese de la intromisión en los asuntos rusos. En los puertos del litoral del Pacífico en los EE.UU., los barcos permanecían anclados semanas enteras porque los portuarios se negaban a cargar los equipos para Kolchak. En los cables enviados a Omsk en septiembre y noviembre de 1919 por el ex embajador ruso en Washington, abundan las menciones de la “agitación socialista” entre los obreros norteamericanos, y su negativa a cargar los barcos para Kolchak. Con este propósito, se utilizó con frecuencia a los soldados o a los voluntarios de la “Legión Americana”.

A principios de diciembre, se emprendió un nuevo intento de ayudar a Kolchak. El gobierno de los EE.UU., a través del embajador de Kolchak en París, ofreció materiales de guerra e intendencia por una suma de 50 millones de dólares. Por primera vez los EE.UU. no pedían anticipo. Se suponía que el primer tercio del costo sería pagado tres años después, el segundo, dentro de 4 y el tercero dentro de 5.<sup>1</sup> Pero ya nada podía salvar a Kolchak.

El 16 de diciembre de 1919 en una reunión en Londres, representantes de los EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia y Japón tomaron la decisión de poner fin a la ayuda a los gobiernos de los guardias blancos. Los aliados concedían a los Estados Unidos y Japón el derecho de obrar en Siberia conforme con sus “intereses inmediatos”. Incluso a pesar del evidente fracaso de Kolchak, el secretario de Estado norteamericano, Lansing, expresó el 17 de diciembre el deseo de que Kolchak continuara encabezando el gobierno de Siberia. Graves hizo notar con este motivo, que “por lo visto, los Estados Unidos fueron el último país que perdió la esperanza depositada en

---

<sup>1</sup> *Sobre la historia de la guerra civil en la URSS*, t. II, p. 768.

el almirante Kolchak”.<sup>1</sup>

La ofensiva del Ejército Rojo en Siberia, obligó a Lansing a enviar a Wilson un telegrama el 23 de diciembre de 1919: “El gobierno de Kolchak ha sido derrotado y el ejército de los bolcheviques ha avanzado hacia el Este de Siberia. El ejército bolchevique se aproxima a la región donde se encuentran nuestros soldados. El contacto entre ellos puede significar el comienzo de las hostilidades y muchas complicaciones”.<sup>2</sup> El gobierno norteamericano se encontraba en una disyuntiva: continuar la guerra contra la Rusia Soviética utilizando a sus soldados o abandonar Siberia. El gobierno de los EE.UU. eligió la segunda opción. El 5 de enero de 1920 en una reunión en la Casa Blanca, se decidió evacuar las tropas norteamericanas de Siberia Oriental y del Extremo Oriente no más tarde del 1º de abril de 1920.

El 9 de enero de 1920 el Departamento de Estado envió un memorándum al embajador de Japón en los EE.UU. Shidehara, comunicando su decisión y señalando que los EE.UU. no renunciaban a sus intereses particulares en Siberia y el Extremo Oriente.

La evacuación de las tropas norteamericanas concluyó en lo fundamental en marzo de 1920. Al mismo tiempo se evacuaron las tropas de los demás intervencionistas a excepción de las japonesas. Los últimos soldados norteamericanos abandonaron Vladivostok el 1º y 2 de abril de 1920. La aventura de los EE.UU. en Siberia había terminado.

La intervención norteamericana en Siberia desde agosto de 1918 hasta enero de 1920 constó de dos etapas. La primera estuvo marcada fundamentalmente por la penetración económica y política. Los EE.UU. pusieron en práctica su programa extrayéndole oro a Kolchak. En total, en el período de la intervención en Siberia, fueron llevadas a los Estados Unidos casi 34 toneladas de oro en pago por las armas, las municiones y los uniformes.<sup>3</sup> En este tiempo los EE.UU. se atuvieron en su política a la llamada “neutralidad” sin

---

<sup>1</sup> W. Graves. *Op. cit.*, p. 293.

<sup>2</sup> *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Lansing Papers, 1914-1920.* Vol. II, p. 392, 393.

<sup>3</sup> M. Gubelman. *La lucha por el Extremo Oriente Soviético.* Moscú, 1958, p.135.

aspirar a estrechar nexos con Kolchak; pero incluso en este período, no cabe hablar de neutralidad de los EE.UU. en Siberia. Ya fuera gratuitamente o por dinero, Kolchak recibía armas y municiones norteamericanas. Los fusiles norteamericanos disparaban contra los guerrilleros y los soldados del Ejército Rojo en Siberia. A los Estados Unidos les resultaba más conveniente que los fusiles estuvieran en manos de los soldados de Kolchak y no en la de los norteamericanos. Las tropas “neutrales” norteamericanas protegían el ferrocarril a través del cual Kolchak recibía todo lo necesario para luchar contra la Rusia Soviética. Arguyendo “neutralidad”, en contraposición a Japón, los EE.UU. pretendían penetrar en todas las esferas de la vida interna de Siberia y afianzarse en este territorio económica y políticamente con gastos mínimos.

La segunda etapa de la intervención norteamericana, iniciada en el verano de 1919, estuvo signada por el paso de la “neutralidad” a la intervención abierta en el desarrollo de los acontecimientos y a la prestación de todo tipo de ayuda a Kolchak. Comienza la aproximación política a Kolchak, basada en su reconocimiento como aliado en la lucha contra el primer Estado obrero y campesino en el mundo. A partir del otoño de 1919, los Estados Unidos asumen la carga principal en la ayuda a Kolchak; pero ya ninguna remesa de armas podía salvar al régimen corrupto y, en consecuencia, tampoco los planes de los norteamericanos de afianzarse en Siberia. La decisión de evacuar, tomada el 5 de enero de 1920, cuando Kolchak aún dominaba inmensas extensiones de Siberia Oriental, fue un reconocimiento del fracaso de la intervención norteamericana. Los EE.UU. habían perdido la primera ronda en la lucha contra la Rusia Soviética. La amargura de esta derrota, mezclada con el odio a la URSS, se hizo sentir inclusive en que los EE.UU. reconocieron al Estado soviético sólo después de que lo hicieran todos sus aliados de la primera guerra mundial.

A. PETROV

## LA GUERRA DE VIETNAM

La política de los Estados Unidos respecto a Vietnam y otros países de Indochina a partir de principios de los años 50, tras el triunfo de la revolución popular en China y la guerra provocada por los norteamericanos en Corea, estaba sujeta principalmente a la estrategia de la “contención del comunismo” en Asia. Al tiempo que se desarrollaba la lucha del pueblo vietnamita por su liberación nacional y social, la guerra que sostenía el imperialismo francés en Indochina (1946-1954) para restablecer su dominio colonial pasó a constituir para Washington parte integrante de la confrontación global con el “comunismo internacional”.

Los intereses de los EE.UU. fueron proclamados en los documentos del Pentágono en aquellos años, del siguiente modo: “Para la seguridad de los EE.UU. es importante que se tomen todas las medidas posibles para prevenir la futura expansión comunista en el Sudeste de Asia. Indochina es un área clave y se encuentra bajo una amenaza inmediata. Si Indochina es controlada por un gobierno comunista, cabe esperar que caerán bajo la dominación comunista los países vecinos: Tailandia y Birmania. Si esto ocurre, la correlación de fuerzas en el sudeste asiático se hallará en grave peligro.”<sup>1</sup> En 1950 los EE.UU. reconocieron el régimen pelele del emperador Bao Dai, creado por los colonizadores, e incrementaron de manera considerable la ayuda militar a Francia (de 1950 a 1954 fue de 2.600 millones de dólares y cubrió el 80% de los gastos militares de Francia en Indochina).<sup>2</sup>

A comienzos de 1954, ante las derrotas del cuerpo expedicionario francés en Vietnam, en Washington empezaron a valorar seriamente la posibilidad de la participación directa de los EE.UU. en la guerra,

---

<sup>1</sup> *The Pentagon Papers as Published by “The New York Times”*. New York, 1971, p. 7.

<sup>2</sup> C. Cooper. *The Lost Crusade, America in Vietnam*, New York, 1970, p. 62.

e incluso la utilización del arma atómica táctica. Los EE.UU. emprendieron también esfuerzos para “internacionalizar” el conflicto en forma de acciones conjuntas de las potencias occidentales; sin embargo, estos intentos no se coronaron con el éxito. Al propio tiempo, previendo la retirada forzosa de Francia de Indochina, los EE.UU. preparaban el terreno para ocupar su lugar. En 1950, valiéndose de que Francia dependía de la ayuda militar norteamericana, los EE.UU. consiguieron firmar con ella y con los “Estados adheridos” de Indochina un acuerdo de “defensa y ayuda recíprocas”; desde 1951 empezaron a ayudar directamente al “gobierno” del emperador Bao Dai; en 1954 asumieron por completo la preparación del ejército local e insistieron en que en el gobierno de Vietnam del Sur entrara en calidad de primer ministro su testaferro Ngo Dinh Diem.

En 1954 se firmaron en Ginebra los acuerdos sobre Indochina, que reconocían los derechos de los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya (Kampuchea) a la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial, llamados a asegurar su neutralidad. Los Estados Unidos declararon que no se consideraban sujetos por estos acuerdos, demostrando que tenían sus propios planes de largo alcance en Vietnam.

La reunificación pacífica de Vietnam, prevista en los acuerdos ginebrinos de 1954 sobre Indochina, no respondía a los planes del imperialismo norteamericano en Asia. Los EE.UU. emprendieron el camino de frustrar los acuerdos, perpetuar la escisión de Vietnam y transformar su parte sur en una plaza de armas para realizar sus planes agresivos en Asia, en un baluarte del anticomunismo, y en objeto de la expansión neocolonial. La política estadounidense en Indochina se basaba en la “teoría del dominó”, formulada por J. F. Dulles ya en 1953, conforme a la cual la pérdida de Vietnam del Sur traería como consecuencia el desgaje del “mundo libre” de los países vecinos del Sudeste de Asia y, por consiguiente, a ello había que oponerse por todos los medios.

En el transcurso de 1955 a 1960, en violación de los acuerdos de Ginebra, los EE.UU. enviaron a Vietnam del Sur centenares de miles de toneladas de armas y municiones, realizaron inmensas obras

constructivas estratégico militares (aeródromos, puertos de mar, caminos estratégicos, sistemas de telecomunicación, etc.). La ayuda militar de los EE.UU. a Vietnam del Sur superó en esos tiempos la suma de 500 millones de dólares; por lo que las fuerzas armadas del régimen de Saigón llegaron a 470 mil efectivos. Fue completado en particular, un ejército regular de 150 mil hombres cuyo objetivo, según las concepciones militares norteamericanas de aquellos tiempos, era la ofensiva frontal contra la República Democrática de Vietnam.

La ayuda económica de los EE.UU. a Vietnam del Sur alcanzó en esos años los 1 150 millones de dólares<sup>1</sup>, lo que permitió inundar el país con artículos de consumo que crearon la ilusión de prosperidad. Las esferas política e ideológica de la vida del país estaban bajo el control de expertos norteamericanos, al igual que los órganos de seguridad nacional, la policía, los servicios de información y propaganda, la enseñanza media y la superior.

La participación y el control multifacéticos norteamericanos en la instrumentación y la puesta en marcha del aparato de poder pelele permitieron a los autores del informe secreto del Pentágono hacer la siguiente conclusión: “Vietnam del Sur ha sido esencialmente una creación de los Estados Unidos”.<sup>2</sup>

Los EE.UU., al comprometerse oficialmente a sostener y apoyar al régimen anticomunista del dictador Ngo Dinh Diem, pronto cayeron en el círculo vicioso de una intervención cada vez mayor en Vietnam del Sur para salvar del fracaso a sus testaferros. Ya en los primeros años de existencia del régimen pronorteamericano, se reveló su esencia antipopular y antinacional y las contradicciones y las deficiencias inherentes.

Ngo Dinh Diem, al llegar al poder, desató una represión en masa contra las fuerzas sociopolíticas que abogaban por el cumplimiento de los acuerdos ginebrinos de 1954, por elecciones generales en Vietnam y por la liquidación de la dependencia del extranjero. La base social de la dictadura de Ngo Dinh Diem llegó a reducirse a la cúpula reaccionaria de los terratenientes, la burguesía comercial y

---

<sup>1</sup> *Ensayos de la historia de Vietnam*. Hanoi, 1977, p. 326 (en ruso).

<sup>2</sup> *The Pentagon Papers... Op. cit.*, p. 26.

los burócratas. Ello no concordaba con los intereses de los EE.UU., minaba la imagen que querían dar del régimen saigones como una “democracia nacional” y encerraba el peligro del aislamiento político del clan gobernante, en el que los EE.UU. fundaban sus esperanzas.

La política antipopular de las autoridades, su inflexibilidad en las relaciones con la oposición burguesa nacionalista, las comunidades religiosas no católicas y las minorías nacionales, las represalias y el terror en masa, motivaron la formación de un amplio frente de lucha contra el régimen pelele pronorteamericano. En los primeros años, la resistencia de las masas se reducía a medios políticos pacíficos, pero poco a poco los medios pacíficos comenzaron a ser combinados con formas de oposición armada a los verdugos. La acción organizada de los campesinos de la provincia de Bentre en enero de 1960 sirvió de señal a la sublevación popular contra los reaccionarios saigoneses. En febrero de 1960 los destacamentos guerrilleros dispersos se unieron formando el Ejército de Liberación. El aparato militar policíaco de la dictadura pronorteamericana empezó a perder rápidamente el control sobre el territorio y la población del país.

La dirección de las fuerzas armadas populares patrióticas y la organización política de las masas con arreglo a la experiencia y las tradiciones de la lucha liberadora en Vietnam del Sur, fue asumida por el Frente Nacional de Liberación (FNL), que proclamó como objetivo el logro de la independencia, la democracia, la paz y la neutralidad del Sur y el avance gradual hacia la unificación pacífica de Vietnam.

Comenzó una nueva etapa de la política norteamericana en Vietnam, que estuvo relacionada con el acceso al poder en Washington del presidente J. Kennedy y con el notable debilitamiento del régimen de Ngo Dinh Diem. De acuerdo a la nueva doctrina norteamericana de “respuesta flexible” y a la estrategia de “las guerras contra insurgentes” el centro de gravedad de la confrontación de los dos sistemas sociopolíticos opuestos se transfería a la zona del movimiento de liberación nacional, donde los EE.UU. esperaban conseguir el cambio de la correlación de fuerzas a favor del imperialismo a escala global por medio de una serie de éxitos locales. En este

sentido Vietnam del Sur era de especial interés. Los EE.UU. pretendían emplear este país en calidad de polígono de prueba de la estrategia y la táctica de la guerra “especial” con participación limitada de las fuerzas armadas estadounidenses. Intentando justificar la necesidad de la posterior intervención de los EE.UU., el presidente J. Kennedy dijo: “Vietnam representa la piedra angular del mundo libre en el Sudeste de Asia... Birmania, Tailandia, la India, Japón, Filipinas y obviamente, Laos y Camboya se encontrarán entre los amenazados si la ola roja del comunismo invade Vietnam...”<sup>1</sup> En febrero de 1962 en Saigón se instituyó el mando militar norteamericano, el número del personal militar de los EE.UU. creció de 900 a comienzos de 1961, a más de 16.000 hombres en 1963.<sup>2</sup>

Uno de los elementos principales del plan de “pacificación” de Vietnam del Sur elaborado en los EE.UU. fue el programa de crear bajo control de Saigón una red de “poblados estratégicos”, en realidad, campos de concentración, donde sería confinada toda la población rural de Vietnam del Sur para aislarla de las fuerzas patrióticas del país. Esta idea, tomada de la práctica de los colonizadores españoles en Cuba y de los verdugos ingleses en Malaya, fue aplicada consecuentemente, apareciendo varios miles de “poblados estratégicos”; pero ya a finales de 1963, el 80% de ellos, con la participación activa de la población de Vietnam del Sur, fueron destruidos o transformados en microfocos de la resistencia.

Las unidades armadas patrióticas, dirigidas por el FNL, asestaron duros golpes a las tropas saigonesas, pese a que éstas empleaban en masa en las operaciones los helicópteros y los tanques anfibios norteamericanos y tenían superioridad numérica. Los “consejeros” militares norteamericanos también sufrieron notables pérdidas.

Las derrotas militares y el fracaso del programa de los “poblados estratégicos”, la política interior, privada de flexibilidad, y las luchas intestinas de la camarilla de Saigón llegaron a convencer a los EE.UU. de que el régimen dictatorial de Ngo Dinh Diem era incapaz de controlar la situación en el país y de emprender el rumbo que

---

<sup>1</sup> J. F. Kennedy. *America's Stake in Vietnam. – A Symposium on America's Stake in Vietnam.* New York, 1956, p. 10.

<sup>2</sup> Chester L. Cooper. *The Lost Crusade.* *Op. cit.*, p. 477-482.

era necesario tomar según el punto de vista de los Estados Unidos. Tras intentar varios medios de presión sobre el régimen de Diem, los EE.UU. aprobaron, en fin de cuentas, un golpe de Estado ejecutado el 1° de noviembre de 1963. Diem fue muerto y los militares tomaron el poder en Saigón.

La liquidación de la llamada “Primera República” en Saigón, de sus instituciones estatales, jurídicas y políticas produjo la desorganización del aparato de poder y una extrema inestabilidad política del régimen pronorteamericano: de noviembre de 1963 a julio de 1965 en Saigón hubo más de una decena de golpes y reorganizaciones gubernamentales. En busca de la mejor variante, los EE.UU. probaron en Vietnam del Sur diversas “fórmulas del poder”, o sea, alianzas de militares y políticos civiles, pero se vieron forzados a quedarse con la dictadura militar, dándole luego un “afeite” en forma de fachada de constitucionalismo burgués y libertades democráticas ficticias.

Pese a todos estos esfuerzos, el régimen títere padecía una crisis profunda, su ejército se descomponía, y, lógicamente, se fortalecieron las posiciones militares y políticas del FNL, que en ese período de “interregno” en Saigón, extendió su influencia sobre gran parte del territorio y la población de Vietnam del Sur. Los círculos gobernantes de los EE.UU. opusieron al incremento de la lucha revolucionaria y liberadora del pueblo la teoría y la práctica de “escalada de la guerra”.

La concepción de “escalada” adquirió significado de doctrina de la política exterior oficial de los EE.UU., que admitía el uso en gran escala del ejército norteamericano en los conflictos “locales” en aras del lograr los objetivos estratégicos del imperialismo norteamericano. Vietnam se convirtió en un campo de prueba de la viabilidad de esta doctrina. Para justificar el incremento de la intervención norteamericana, la administración de Lyndon Johnson recurrió a los manidos “argumentos” de la agresión de la RDV a Vietnam del Sur, la sujeción del FNL al control de Hanói, y la necesidad de los EE.UU. de ser firmes para evitar su total fracaso en el Sudeste de Asia.

Para escalar la agresión estadounidense en Vietnam, se utilizó el

pretexto del “incidente de Tonkín”: supuesto ataque a comienzos de agosto de 1964 de lanchas torpederas de la RDV a los destructores norteamericanos *Maddox* y *Turner Joy*, que realizaban operaciones de patrullaje y reconocimiento en las aguas del Golfo de Tonkín frente a las costas de la RDV.<sup>1</sup> La aviación de los EE.UU., para “vengarse”, realizó un ataque contra el territorio de la RDV. Estos acontecimientos, provocados —como se demostró posteriormente en las audiencias en el Congreso de los EE.UU.— por la parte norteamericana, ayudaron al presidente L. Johnson a conseguir la aprobación de la llamada “resolución de Tonkín” en el Congreso en septiembre de 1964. La resolución preveía la disposición de los EE.UU., “si lo determinara el presidente, de tomar todas las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza armada para prestar asistencia a cualquier miembro de la SEATO o a cualquier Estado mencionado en el protocolo del tratado de la SEATO que pidiera ayuda para defender su libertad.”<sup>2</sup> El derecho del presidente a emplear a su consideración e incontroladamente las fuerzas armadas de los EE.UU. en el extranjero sin una declaración oficial de guerra se convirtió durante muchos años en el fundamento jurídico de la escalada de la agresión estadounidense a Indochina.

Al desatar la agresión a la RDV, los círculos dirigentes de los EE.UU. subestimaron la decisión del pueblo vietnamita de oponerle una guerra popular en ambas partes del país. Las acciones de los EE.UU. fueron condenadas resueltamente por la URSS, los países socialistas y todas las fuerzas adictas a la paz en el mundo. La Unión Soviética declaró desde el principio que “no puede permanecer indiferente a los destinos del país hermano socialista y está dispuesta a prestarle la ayuda necesaria”.<sup>3</sup> En febrero de 1965 fue firmada la declaración conjunta soviético vietnamita, en la que se condenaban las acciones agresivas de los EE.UU. y se estipulaban

---

<sup>1</sup> Sobre la esencia real del “incidente de Tonkín” véase U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. Hearing. 90-th Congress, 2nd Session, 20.02.1968. *The Gulf of Tonkin, the 1964 Incidents*. Washington, 1968; J. C. Goulden. *Truth is the First Casualty; the Gulf of Tonkin Affair: Illusion and Reality*. Chicago, 1969.

<sup>2</sup> *The Vietnam War and International Law*. Princeton, 1968, p. 579.

<sup>3</sup> *Pravda*, 27.XI.1964.

medidas para fortalecer la capacidad defensiva de la RDV.<sup>1</sup> La ayuda eficaz multifacética de la URSS y de otros países socialistas permitió a la RDV dar una digna réplica a los intervencionistas.

La ampliación de la guerra y los bombardeos a la RDV no consiguieron mejorar la situación político militar de Vietnam del Sur en interés de los EE.UU. y sus títeres saigoneses. A principios de 1965 el régimen saigonés entró en crisis. Los Estados Unidos decidieron incrementar su intervención armada directa. En marzo de 1965 en Da Nang desembarcó una brigada de infantería de la marina de los EE.UU., y en abril el presidente Johnson dio la orden de la participación de los soldados norteamericanos en las operaciones ofensivas en Vietnam del Sur.

Al efectuar la escalada, los EE.UU. emprendieron esfuerzos para involucrar en la agresión a sus aliados de la OTAN, pero no tuvieron éxito porque sus aliados europeos no estaban interesados en ampliar el foco bélico en Asia. Los EE.UU. contaban con activar el mecanismo del bloque de la SEATO, pero se le sumaron sólo Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y Filipinas. La falta de unidad entre los aliados de los EE.UU., la exhortación tenaz de muchos países a poner fin al conflicto armado, y las protestas de la opinión mundial y la norteamericana contra la agresión de los EE.UU., obligaron a la administración de Johnson a maniobrar y tratar de demostrar que los EE.UU. aspiraban a un “arreglo pacífico”; pero en realidad la administración washingtoniana, en la segunda mitad de los años 60, contaba principalmente con aplastar por las armas la lucha liberadora del pueblo vietnamita, perpetuar la división de Vietnam y mantener su parte sur en la órbita de los intereses imperialistas y neocolonialistas de los EE.UU.

Al llegar a Vietnam del Sur el cuerpo expedicionario del ejército de los EE.UU., el carácter de la guerra cambió radicalmente; se convirtió en “la guerra norteamericana”, en la que las tropas locales saigonesas desempeñaban un papel auxiliar, “apaciguando” las regiones rurales y aplastando las acciones populares. Al comienzo de las operaciones, el mando norteamericano se planteó el objetivo de liquidar o desplazar cuanto antes hacia las lejanas regiones monta-

---

<sup>1</sup> *Pravda*, 11.11.1965.

ñosas las unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y ocupar el Cuartel General del FNL de Vietnam del Sur. Durante las campañas del invierno y la primavera de 1965 a 1966 y de 1966 a 1967, las tropas norteamericanas, valiéndose de su superioridad numérica y empleando en proporciones inmensas la aviación y las fuerzas blindadas, emprendieron acciones ofensivas en la parte oeste y sur de Vietnam del Sur y en torno a Saigón. Paralelamente se activaron los bombardeos del territorio de la RDV, de Hanói y Haifong, de las vías de transporte, los depósitos de gasolina y los centros industriales para así provocar el caos en el transporte y la economía, y minar la moral del pueblo y el ejército de la RDV.

La guerra de Vietnam originó la resistencia de todo el pueblo a la agresión de la más grande potencia imperialista. Sólo de 1966 a 1967, las pérdidas del cuerpo expedicionario de los EE.UU. y de ejército saigónés fueron de 175 mil hombres, 1.800 aviones y helicópteros, hasta 4.000 tanques y vehículos blindados y gran cantidad de otro material de guerra.<sup>1</sup>

A comienzos de 1967 las FALN tomaron la iniciativa, abriendo un segundo frente—el del norte— de las operaciones militares cerca de la zona desmilitarizada y la frontera con Laos, obligando al mando norteamericano a trasladar unidades selectas para defender la base Khe Sanh y disminuir la presión en el sur. En todo Vietnam del Sur actuaban unidades guerrilleras, haciendo fracasar los intentos de “apaciguar” las aldeas y liquidar los puntos de apoyo a los patriotas.

La guerra aérea contra Vietnam del Norte ocasionó enormes destrucciones y pérdidas humanas, pero no desmoralizó a la población, no desorganizó la vida económica ni debilitó el potencial defensivo de la RDV; la dirigencia de la RDV no renunció a ayudar a las fuerzas revolucionarias de liberación en el Sur de Vietnam. El apoyo fraternal de la Unión Soviética y otros países socialistas desempeñó un papel inapreciable en el mantenimiento de la estabilidad económica y la creación de un eficaz y moderno sistema de defensa anti-aérea. En los años de la escalada, y tras la “vietnamización” de la guerra, sobre Vietnam del Norte fueron derribados 4 181 aviones

---

<sup>1</sup> *Le Sud Viet Nam: grande victoire, hiver 1966-printemps 1967*. Hanoi, 1967, p. 71-72.

norteamericanos.<sup>1</sup>

Los EE.UU. continuaron incrementando sus fuerzas intervencionistas y respectivamente, sus gastos en la guerra de Vietnam: de 184.000 efectivos y \$ 5.800.000 a comienzos de 1966, pasaron a 545.000 efectivos y \$ 28.800.000 en 1969<sup>2</sup>; pero al mismo tiempo, en Washington comenzaron a pensar seriamente en “hallar una salida” de Vietnam. La diplomacia norteamericana hizo varios intentos de sondear por canales ocultos la posibilidad de negociaciones confidenciales con la RDV respecto al cese de la guerra y a un arreglo político; sin embargo, las esperanzas de Washington de vencer en definitiva en Vietnam, y la escalada de las operaciones militares hicieron en aquel entonces, imposibles las negociaciones, si bien la dirigencia de la RDV, combinando la lucha armada con la política y diplomática, manifestó su disposición a iniciar las negociaciones si se ponía fin a los bombardeos norteamericanos.

En la primavera de 1968 las fuerzas armadas de los patriotas emprendieron una ofensiva general en todo Vietnam del Sur, atacando más de 60 ciudades y bases militares. Las tropas norteamericano saigonesas sufrieron graves pérdidas. La ofensiva de los patriotas produjo conmoción en los EE.UU. y llevó a la sustitución del jefe de las tropas norteamericanas y a la revisión de la estrategia militar.

Washington se encontró ante un dilema: proseguir la escalada de la guerra, preñada de graves consecuencias para la administración de Johnson en el plano interno y externo, o buscar una salida del atolladero vietnamita. En la decisión del presidente de los EE.UU. influyeron grandemente las protestas en el mundo, las manifestaciones masivas antibélicas dentro del país, así como la apreciación bastante escéptica de la situación dada por los políticos y los especialistas norteamericanos en asuntos internacionales. El 31 de marzo de 1968 Johnson dio la orden de restringir el bombardeo a la RDV a las regiones al sur del paralelo 20. Al mismo tiempo declaró que estaba dispuesto a negociar con sus representantes. Las entrevistas oficiales entre representantes de la RDV y los EE.UU. comenzaron en París el 10 de mayo de 1968. El 1º de noviembre de 1968 el pre-

---

<sup>1</sup> *Ensayos sobre la historia de Vietnam...* p. 339.

<sup>2</sup> *Le Monde*, 25.01. 1973, p. 9.

sidente de los EE.UU. anunció el cese de los bombardeos al territorio de la RDV desde el aire y desde el mar.

La lección desembriagadora de Vietnam constituyó una de las causas más importantes de la revisión de varias concepciones de la política exterior de los medios gobernantes de los EE.UU. La “doctrina Nixon” que trajo aparejada, preveía —en aras de conservar el liderazgo de los EE.UU. en el mundo capitalista— “compartir la responsabilidad” con sus aliados y crear sobre esta base “una fuerza conjunta” para que los aliados y los satélites de los EE.UU. tuvieran mayor participación con sus propios recursos humanos y materiales en la implementación de la estrategia global imperialista que convenía a los Estados Unidos.

Esta revisión tomó en Vietnam la forma de “la vietnamización de la guerra” y Vietnam debía convertirse una vez más en un campo de pruebas de la estrategia norteamericana modificada. La “vietnamización” significaba realizar en Vietnam del Sur varios programas militares, socioeconómicos y político administrativos, financiados por los EE.UU. y llamados a asegurar la superioridad en todos los sectores de las tropas saigonesas sobre las fuerzas patrióticas con el fin de que Saigón asumiera la carga fundamental de la responsabilidad militar y política. La retirada gradual de las tropas estadounidenses y las negociaciones paralelas para un arreglo político debían encubrir la intervención imperialista de los EE.UU. en Vietnam y reducir los gastos financieros norteamericanos.

En las conversaciones de París, los EE.UU. maniobraban para imponer a la RDV y al Gobierno Revolucionario Provisional (GRP) de la República de Vietnam del Sur (RVS), creado en junio de 1969, las condiciones de un arreglo conveniente a los EE.UU. y Saigón. En la política de la administración de Nixon las negociaciones ocupaban un lugar secundario; se le daba prioridad al aspecto militar de la “vietnamización”, que estaba relacionado con las esperanzas de los EE.UU. de lograr la victoria por manos del régimen títere que sostenían.

En la nueva etapa de su política vietnamita, los Estados Unidos prestaron una atención primordial a continuar reforzando y modernizando el mecanismo militar policíaco del régimen saigónés, invir-

tiendo con estos fines 7.500 millones de dólares. En consecuencia, en 1972 las fuerzas armadas de Saigón llegaron a 1 millón 350 mil efectivos, y, según estimaciones del agregado militar de los EE.UU. en Saigón, ocuparon el primer lugar en el Sudeste de Asia, el segundo en Asia y el cuarto en el mundo.<sup>1</sup> Se prestaba particular atención a la preparación del cuerpo de oficiales, que contaba con 100 mil hombres, la mayor parte de los cuales había cursado enseñanza profesional y pasado el moldeamiento ideológico pertinente en los EE.UU. y otros países. La oficialidad saigonesa, en su masa fundamental, constituía el pilar más reaccionario y militarista del régimen pronorteamericano y la base de su sistema político administrativo. Pese a un número tan enorme para un país de tan débil desarrollo y al alto apertrechamiento con armamento y técnica moderna, el ejército saigonés era débil a causa del bajo estado político moral de su personal, de la corrupción y la descomposición del eslabón de mando superior.

La “vietnamización” perseguía ante todo “pacificar” las regiones rurales para aislar así a las fuerzas patrióticas de la población, privarlas del suministro de hombres y material y obligarlas, en última instancia, a cesar la resistencia. Como parte de la “pacificación” eran trasladados por la fuerza centenares de miles de habitantes de las regiones donde actuaban intensamente los patriotas, a “campos de refugiados” en las afueras de las ciudades; estas regiones eran declaradas “zonas libres” de la aviación y la artillería norteamericana. Cabe señalar que en la etapa de la “vietnamización”, los métodos coercitivos eran combinados, con gran flexibilidad, con maniobras en el terreno socioeconómico, lo cual, no obstante, no llegó a producir los efectos esperados. El régimen del presidente Thieu, aun habiendo recibido más de 3.500.000 de dólares en concepto de ayuda y empréstitos, no pudo lograr “estabilizar” la situación del país. Prácticamente todas las capas de la población sudvietnamita pasaron al lado de los enemigos del régimen.

En su afán de asegurar el éxito de la estrategia de la “vietnamización” y de conseguir por manos de sus títeres saigoneses lo que no pudieron alcanzar con la agresión directa al pueblo vietnamita —la

---

<sup>1</sup> *Nghien cun lich su*. Hanoi, 1976, p. 31.

victoria militar sobre las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional— los medios gobernantes de los EE.UU., a despecho de las declaraciones del presidente Nixon, se empeñaban en dilatar en lo posible la evacuación de las tropas norteamericanas de Vietnam del Sur e incrementaban simultáneamente el poderío aéreo y la potencia de fuego estadounidense en las operaciones militares contra los patriotas sudvietnamitas y la RDV. Más aún, Washington decidió extender el conflicto armado a toda la Península Indochina, con el fin de aislar a las fuerzas de liberación de los tres pueblos indochinos, de la RDV, y a estos entre sí, y poder reprimirlas así por separado, cortar las comunicaciones y liquidar las bases de apoyo a los patriotas vietnamitas, minando de esta manera su capacidad de realizar grandes operaciones ofensivas.<sup>1</sup>

En la primavera de 1972 las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional iniciaron la ofensiva general en todo Vietnam del Sur e infligieron graves derrotas a las tropas norteamericano saigonesas, frustrando los planes estratégicos de pacificación, de “vietnamización” e “indochinación” de la guerra. Para salvar a sus títeres saigoneses y, con ellos, todo el conjunto de sus planes políticos en Indochina y en el Sudeste de Asia, los círculos dirigentes de los EE.UU. decidieron utilizar en gran escala el poderío militar norteamericano: “re-americanizar” la guerra. Para participar en las acciones, en la región de Indochina fue movilizada 1/2 de la aviación estratégica, 1/3 de la aviación táctica y 2/3 de los portaviones de los EE.UU. Desde abril de 1972, la aviación norteamericana destruyó total o parcialmente casi todas las ciudades y los centros industriales de la RDV. En mayo de 1972 se organizó el bloqueo del litoral de la RDV por mar y se minaron sus puertos con el propósito de impedir la llegada de la ayuda militar y económica soviética a Vietnam. Sin embargo, el valor del pueblo vietnamita y sus fuerzas armadas multiplicados por la solidaridad internacional, y el apoyo eficaz de la Unión Soviética y los países de la comunidad socialista, ayudaron a Vietnam a resistir.

La situación político militar en Indochina, el ambiente internacional

---

<sup>1</sup> Sobre la intervención de los EE.UU. en Laos y Camboya véase el artículo de V. Zhurkin en la presente compilación.

en general, y la presión de la opinión norteamericana y mundial obligaron a Washington a acelerar la búsqueda de una salida del atolladero de Vietnam.

Las negociaciones sobre el arreglo político del problema vietnamita duraron, con intervalos, cuatro años, y comenzaron en enero de 1969. El gobierno estadounidense las consideraba, junto a la “vietnamización”, el medio de sostener el régimen proimperialista en el sur de Vietnam. Se empeñaba, por tanto, en llevar a cabo las negociaciones desde “posiciones de fuerza”, combinando las maniobras diplomáticas con las acciones intervencionistas en Camboya y Laos, y con la reanudación de los bombardeos a la RDV. Durante largo tiempo los puntos principales de divergencia en la discusión de las condiciones del arreglo, fueron el pretexto para la permanencia de las tropas norteamericanas y de la estructura política en Vietnam del Sur. Los Estados Unidos exigían la “retirada recíproca” de las tropas de los EE.UU. y de la RDV de Vietnam del Sur, rechazaban el principio de reconocimiento del derecho legítimo de la RDV a prestar ayuda a los patriotas del Sur, insistían en resolver los problemas internos de Vietnam del Sur bajo la égida del régimen antipopular de Thieu. En la práctica, los EE.UU. pretendían lograr, a través de las negociaciones, lo que no fueron capaces de alcanzar por las armas: mantener Vietnam del Sur bajo su control y liquidar la lucha de liberación nacional.

Los representantes de las fuerzas patrióticas de ambas partes de Vietnam en las negociaciones de París, dieron pruebas de su firmeza y consecuencia en conjugación con flexibilidad y una actitud constructiva. Merced a sus esfuerzos, en 1972 se acordaron condiciones aceptables para un arreglo político que correspondía a la realidad de la situación existente en Vietnam: la retirada de las tropas de los EE.UU. y sus aliados, la creación en Vietnam del Sur de un gobierno provisional de conciliación nacional con la participación de tres partes —el Gobierno revolucionario provisional de la República de Vietnam del Sur, la administración saigonesa y otras fuerzas políticas sudvietnamitas—, la solución de los problemas internos de Vietnam del Sur por los propios vietnamitas sin la injerencia externa, y el avance gradual a la unificación pacífica del país.

El fracaso de la agresión norteamericana, el auge de las fuerzas de liberación vietnamitas, y los intereses de su estrategia global convencieron a los círculos gobernantes de los EE.UU. de la necesidad de “salir” de Vietnam, aunque en condiciones que no dieran la impresión de una derrota o una renuncia por parte de los EE.UU. a sus “compromisos” ante el régimen saionés. En el otoño de 1972, pese a la existencia de un documento concordado con la RDV, los EE.UU. frustraron la firma del acuerdo, y en el invierno de 1972 emprendieron bombardeos a la RDV sin precedentes por sus proporciones, esperando obligar a la RDV a hacer nuevas concesiones. Al no alcanzar sus propósitos, los Estados Unidos se vieron obligados a ceder y reiniciar las negociaciones. En consecuencia, el 27 de enero de 1973 en París fue firmado el Acuerdo de Cese de la Guerra y el Restablecimiento de la Paz en Vietnam, y el 2 de marzo, el Acta de la Conferencia Internacional para Vietnam que ratificaba y apoyaba el acuerdo parisino.

El acuerdo parisino fue una victoria histórica de los patriotas vietnamitas, del socialismo mundial, de todas las fuerzas progresistas y adictas a la paz sobre las fuerzas del imperialismo y la agresión. Testimonió la derrota del imperialismo en la confrontación global de los dos sistemas sociopolíticos. En realidad significó el reconocimiento por los medios gobernantes estadounidenses de la derrota de su rumbo agresivo en Asia, constituyendo al mismo tiempo un intento de disimular este fracaso, disminuir sus efectos negativos y presentar, incluso, el acuerdo como cierto “éxito” de la diplomacia de R. Nixon y H. Kissinger. Los EE.UU. veían en el acuerdo un medio de prolongar la agonía del régimen saionés, y, en caso de su derrumbamiento, la posibilidad de hacer recaer sobre este la responsabilidad por no haber aprovechado todas las ventajas de la “vietnamización”, en tanto que los EE.UU. supuestamente habían cumplido sus compromisos con su “aliado” asiático.

Los militaristas saioneses, estimulados por los EE.UU., declararon desde el principio su disconformidad con el acuerdo parisino y emprendieron el camino de la violación de sus postulados principales, ante todo, del cese del fuego. Por culpa de Saigón, fueron frustradas las medidas del arreglo político interno, y fue obstruida la labor de la conferencia consultiva de las dos partes sudvietnamitas, de la

comisión militar y de la Comisión internacional para la observación y el control del cumplimiento del acuerdo parisino.

En contra de sus compromisos, los EE.UU. seguían reconociendo a las autoridades saigonesas como las únicas legales, prestándoles respaldo político y ayuda militar y financiera; dirigían las operaciones del ejército saigónés a través de un vasto aparato de consejeros militares estadounidenses disfrazados de personal civil. En violación del acuerdo, los EE.UU. suministraron a Vietnam del Sur miles de equipos militares, cantidades inmensas de municiones y material de guerra. Con el fin de chantajear y prestar, en caso de necesidad, ayuda urgente a los regímenes reaccionarios de Indochina, los EE.UU. mantenían importantes fuerzas aéreas y de la marina de guerra en las aguas del Pacífico y en las bases de Tailandia, amenazando periódicamente, so pretexto de “infracción” del acuerdo de París por la RDV y el GRP de la RVS, reanudar su injerencia armada directa. Por su parte, Saigón no cesaba sus provocaciones militares, y el mando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional se vio obligado a dar la orden de asestar golpes de represalia. Una serie de graves derrotas infligidas ejercieron un profundo efecto demoralizador y desorganizador en las autoridades y el ejército de Saigón. Sin embargo, Thieu y sus generales porfiaban por la continuación de la guerra. Las pretensiones militaristas del “presidente” Thieu, que reprimía las acciones de las masas de la población por la paz, la concordia nacional, y contra la dictadura militar, demostraban la imposibilidad de llegar a un acuerdo con él, y la necesidad de liquidar su régimen antipopular. La ofensiva general del ejército de liberación efectuada en la primavera de 1975 por fuerzas de importantes formaciones regulares que coordinaban sus ataques con las acciones de los guerrilleros y los levantamientos de las masas populares, terminó con la huida a la desbandada de las tropas saigonesas.

Para salvar a su agonizante títere, los EE.UU. enviaron a las aguas de Vietnam del Sur, en calidad de “fuerza de contención”, barcos de la VII Flota. El presidente G. Ford insistía en asignaciones complementarias para la ayuda militar a Saigón y en el permiso del Congreso para utilizar las fuerzas armadas de los EE.UU. en Indochina; pero la administración norteamericana chocaba cada vez con mayores dificultades en la aplicación de su política en Indochina. Ello se

debía, en particular, a la activación dentro de los EE.UU. de fuerzas sociopolíticas que abogaban por el cese de la injerencia en los asuntos de los pueblos indochinos, así como a las limitaciones impuestas por el Congreso de los EE.UU. y a la tendencia general de distensión internacional. Todo ello impidió que la administración norteamericana se decidiera a agudizar el conflicto en aras de la preservación de las posiciones del imperialismo en esta región del mundo. Saigón cayó bajo los golpes de los patriotas el 30 de mayo de 1975. La liberación completa de Vietnam del Sur había terminado.

La derrota de los EE.UU. en Vietnam vino a confirmar la conclusión de que incluso el pueblo de un pequeño país, si está dispuesto a defender su libertad e independencia, si libra una lucha consecuente bajo la dirección del partido marxista leninista, si a su lado se encuentran los países de la comunidad socialista, y si lo apoyan las fuerzas progresistas del planeta, es capaz de oponerse exitosamente a la agresión de la potencia imperialista más poderosa, pese a la inconmensurable superioridad de su potencial militar y económico. La forzada retirada de los EE.UU. de Indochina mostró igualmente la inconsistencia de las concepciones y de la práctica del uso por el imperialismo de regímenes títeres militaristas y reaccionarios, que existen exclusivamente merced al apoyo que reciben del exterior, y que reprimen la lucha revolucionaria liberadora de las masas populares en aras de los intereses de la estrategia global del imperialismo.

V. ZHURKIN

## **DESLIZÁNDOSE POR LA VERTIENTE (INTERVENCIONES NORTEAMERICANAS EN ASIA A CO- MIENZOS DE LOS AÑOS 70)**

En situaciones críticas, la política de los círculos gobernantes de los EE.UU. se distingue, como regla, por diversas formas de utilización de la fuerza en la arena internacional. A la vez esta política, relacionada con la influencia de distintos factores externos e internos, refleja tanto el grado en que Washington procura adaptarse a las realidades del mundo, como el carácter contradictorio y zigzagueante de tal adaptación.

La “política crítica” de los Estados Unidos a comienzos de los años 70 se configuró bajo la influencia de varios factores principales: en primer término, la inercia del viejo rumbo intervencionista del período de la “guerra fría” (defendido y estimulado por las poderosas fuerzas del complejo militar industrial) y, en segundo lugar, la influencia de las nuevas realidades de la época: el cambio de la correlación de fuerzas en la palestra mundial y los cambios en los propios Estados Unidos. En este artículo se presta atención principalmente a la tendencia intervencionista revelada nítidamente en las acciones de política exterior de los EE.UU. a principios de los años 70.

El comienzo de los años 70 puede ser considerado como una etapa especial ante todo porque en la actitud de Washington hacia los más diversos problemas internacionales se manifestaron considerables diferencias (permaneciendo invariable la esencia de la tendencia intervencionista) en comparación con los años 60. Estas diferencias se hacen sobre todo evidentes si se compara, por ejemplo, el proceso de la toma de decisiones sobre la brusca ampliación de la agresión en Vietnam entre 1964 y 1965 con la preparación y la ejecución de las acciones intervencionistas a principios de los años 70.

Cuando en 1971 se publicaron varios documentos secretos del Pen-

tágono,<sup>1</sup> se conocieron muchos detalles de la preparación de la agresión contra Vietnam. Sus puntos principales, que ya eran conocidos, habían sido denunciados convincentemente por la opinión pública mundial, pero estos documentos del Pentágono permitieron analizar en concreto cómo habían sido tomadas las decisiones sobre la agresión.

Un rasgo característico de este proceso fue ante todo el hincapié hecho en el uso de la fuerza. En todos los documentos se subraya tenazmente que sólo el uso de la fuerza por los Estados Unidos puede asegurarles el éxito. Esta idea impregnaba el Memorándum del secretario de Defensa, R. McNamara, del 16 de marzo de 1964, aprobado por el Presidente L. Johnson, y el Memorándum sobre las acciones en el campo de la seguridad nacional *Objetivos de los EE.UU. en Vietnam del Sur* del 17 de marzo de 1964, que dieron inicio a la preparación de la guerra aérea contra la RDV. Esta es la idea principal manifestada en todos los documentos aprobados o elaborados después de las resoluciones de marzo: el Plan Operativo de la Junta de Jefes de los Estados Mayores N37-64 del 17 de abril de 1964 (el plan de los bombardeos); el guión de treinta días para la preparación de los bombardeos confeccionado el 23 de mayo de 1964 por W. Bundy, J. McNaughton y W. Sullivan<sup>2</sup>, las disposiciones de un grupo de altos funcionarios militares y civiles (R. McNamara, D. Rusk, M. Taylor, J. McCone y otros) en la reunión en Honolulu del 30 de mayo de 1964 y todas las decisiones posteriores que prepararon el terreno para los ataques aéreos a la RDV el 5 de agosto de 1964<sup>3</sup> y el comienzo de los bombardeos masivos a partir del 8 de febrero de 1965.

Se contaba ante todo con la “superioridad tecnológica” de los EE.UU. Los autores de los planes de la escalada estaban convencidos de que los bombardeos obligarían a la RDV a capitular en breve plazo. A la par con los preparativos de los bombardeos, se llevaba a cabo la preparación del desembarco de nuevos contingentes de tro-

---

<sup>1</sup> *The Pentagon Papers*. New York, 1971.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 255, 259, 270-272.

<sup>3</sup> *United States-Vietnam Relations 1945-1967*. Study Prepared by the Department of Defense, Book 3, IV, C, 1, p.a. – 15.

pas norteamericanas en Vietnam del Sur; pero al principio se trataba de un número relativamente pequeño de tropas: unos cuantos batallones. Incluso tras los primeros bombardeos en masa a la RDV, el presidente Johnson tomó la decisión (en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 1° de abril de 1965) de enviar a Vietnam del Sur sólo de 18 mil a 20 mil soldados.<sup>1</sup> Ello quedó registrado en el Memorándum sobre las acciones en el campo de seguridad nacional del 6 de abril de 1965.<sup>2</sup> Sólo al percatarse de que los bárbaros bombardeos no quebrantarían la voluntad del pueblo vietnamita, la administración de Johnson emprendió el camino de la intervención a gran escala con tropas terrestres de los EE.UU. en Vietnam del Sur.

Bajo una constante presión de los militares —la Junta de Jefes de los Estados Mayores y el comandante en jefe en Vietnam del Sur, W. Westmoreland, quien el 7 de junio reclamó el envío de unos 200 mil soldados a Vietnam del Sur—, L. Johnson, el 17 de julio de 1965, es decir, pasado casi medio año del comienzo de los bombardeos, tomó la decisión de mandar a Vietnam del Sur 125 mil soldados.<sup>3</sup>

Es significativo que las “decisiones críticas” sobre el comienzo de los bombardeos a la RDV y la amplia intervención en Vietnam del Sur fueron tomadas relativamente sin prisa, con plena confianza en la impunidad y la omnipotencia de los EE.UU. Especialistas en el enfoque sistémico, llevados por R. McNamara a laborar en el Pentágono, prepararon numerosas variantes y alternativas del despliegue de la agresión, partiendo de la idea de que sería una pequeña “excursión militar” que acabaría pronto con la victoria.

La posible reacción de la opinión pública estadounidense tampoco preocupaba a Washington. La llamada Resolución de Tonkín del Congreso, que permitía al presidente “emprender todas las medidas necesarias, incluido el uso de las fuerzas armadas”, fue aprobada en el Senado por 88 votos contra 2, y en la Cámara de Representantes por unanimidad; con la particularidad de que el proyecto de resolución no fue preparado en el Congreso, sino elaborado por el subse-

---

<sup>1</sup> *Ibídem*, Book 4, IV, C 5, p. 31.

<sup>2</sup> *The Pentagon Papers*, p. 452, 453.

<sup>3</sup> *United States - Vietnam Relations, 1945-1967*, Book 4, IV, C. 5, p. 31.

cretario de Estado, W. Bundy, ya el 25 de mayo de 1964 como adición al primer guión de la escalada del 23 de mayo.<sup>1</sup>

Este ambiente de preparación no precipitada de las acciones agresivas, de la seguridad en su retaguardia, su poderío y en una pronta victoria ofrece un brusco contraste con los actos espasmódicos e históricos de la administración de Johnson en los años posteriores de la agresión a Indochina. El conjunto de los factores que determinaron su fracaso y que obligaron a los círculos dirigentes de los EE.UU. a tener en cuenta las realidades de la situación en el mundo, repercutió claramente en las acciones intervencionistas a comienzos de los años 70; aunque entonces también se hacía hincapié en el uso de la fuerza, no obstante el fardo de la catástrofe de Vietnam, la indignación de la opinión mundial, y las manifestaciones impetuosas de la opinión pública en los EE.UU. ejercían presión sobre los organizadores de las intervenciones.

La primera crisis política internacional importante de los años 70 fue originada por la irrupción de las fuerzas armadas estadounidenses y las tropas saigonesas en Camboya (Kampuchea) iniciada en abril de 1970. Al preparar la “acción camboyana”, los Estados Unidos perseguían varios objetivos.

Ante todo aspiraban a tomar pronto el control de este país del Sudeste de Asia, importante en el sentido estratégico, adquiriendo al mismo tiempo a un nuevo partenaire y ampliando el frente de lucha contra los movimientos de liberación nacional. Los organizadores de la intervención en Camboya perseguían también objetivos relacionados directamente con la política de los Estados Unidos en Vietnam. La intervención debía ser, en particular, una exhibición de fuerza de los EE.UU. en esta región del mundo y equilibrar la reducción del número de tropas norteamericanas en Indochina iniciada en 1969. Al llevar el frente fuera de los límites de Vietnam del Sur, se pretendía crear condiciones más favorables para aplicar la política de “vietnamización” en el propio Vietnam del Sur. Por último, se preveía realizar en Camboya la primera prueba de la eficacia del programa de “vietnamización” y establecer qué capacidad de combate habían alcanzado en el curso de la aplicación de este pro-

---

<sup>1</sup> *The Pentagon Papers*, p. 294-296.

grama, las fuerzas armadas del régimen de Saigón.

Los preparativos de las amplias maniobras en Camboya comenzaron en los primeros meses de 1970. En febrero de 1970 el secretario de Defensa, M. Laird, viajó a Saigón para discutir “sobre el terreno” los planes de las operaciones en Camboya. Laird y los generales norteamericanos en Saigón acordaron que en las acciones en el territorio camboyano se aprovecharían al máximo las fuerzas armadas del régimen saigonés. Con estos planes Laird regresó a Washington.

Sin embargo, a la sazón, la situación en Camboya había cambiado radicalmente: el 18 de marzo se produjo un golpe militar que provocó una resuelta resistencia del pueblo camboyano. En esta situación, en Washington empiezan a imponerse los partidarios de una intervención abierta del ejército norteamericano en esta región de Indochina.

A inicios de abril Laird encargó al general C. Abrams, comandante de las fuerzas armadas de los EE.UU. en Vietnam del Sur, presentar en el más breve plazo posible, los planes de “acciones de emergencia” en Camboya. Abrams propuso realizar un ataque contra Camboya con fuerzas norteamericanas y unidades del régimen saigonés.<sup>1</sup> En los círculos gobernantes de los EE.UU. se revelaron divergencias sobre las acciones contra Camboya entre los partidarios de una rápida intervención del ejército norteamericano y los que proponían que participaran sólo unidades saigonesas, sin la participación de tropas terrestres de los EE.UU., aunque con el apoyo de la aviación norteamericana. Los generales norteamericanos en Saigón seguían presionando, reclamando acciones urgentes y activas contra Camboya. En esta situación, los partidarios vacilantes de la “intervención limitada” se unieron rápidamente a la línea general.

El 22 de abril tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que colocó los preparativos de la intervención estadounidense contra Camboya sobre una base práctica. Inmediatamente después de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, se le encargó a H. Kissinger, ayudante del presidente, convocar al Grupo de Acción Especial Washingtoniano (GAEW)<sup>2</sup>, el cual comenzó sus labo-

---

<sup>1</sup> Véase R. Evans, R. Novak. *Nixon in the White House*. New York, 1971, p. 250.

<sup>2</sup> Organismo especial adjunto al Consejo de Seguridad Nacional y creado durante el

res el 23 de abril y, en realidad, no las interrumpió hasta el comienzo de la intervención de las tropas norteamericanas en Camboya. En esos días en la labor del Grupo participaron H. Kissinger; A. Johnson, subsecretario de Estado para asuntos políticos; D. Packard, subsecretario de Defensa; T. Moorer, presidente de la Junta de Jefes de los Estados Mayores; R. Helms, director de la CIA; M. Green, subsecretario de Estado para los asuntos del Este de Asia y el Océano Pacífico; D. Dulin, asistente del ayudante del secretario de Defensa; y el teniente general J. Vogt, jefe del departamento operativo de la Junta de Jefes de los Estados Mayores.

El Grupo de Acción Especial Washingtoniano formuló en su primera reunión, cuatro opciones: 1) entrar en Camboya; 2) bombardear masivamente el territorio de Camboya; 3) prestar una vasta ayuda al régimen militar de Camboya; y 4) proponer convocar a una nueva Conferencia en Ginebra sobre Camboya.<sup>1</sup> Al mismo tiempo, sin prestar atención especial a la cuarta opción, no militar, el Grupo comenzó a preparar detalladamente el plan de intervención de las tropas saigonesas en la región de Camboya que se adentraba en el territorio de Vietnam del Sur a unas 35 millas de Saigón y se conoce como el *Pico del papagayo*.

El 26 de abril tuvo lugar otra reunión del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo aprobó el plan de la penetración de las tropas saigonesas en la región del *Pico del papagayo* y discutió los planes para la entrada de las fuerzas armadas norteamericanas en la región camboyana del *Anzuelo*, que también se adentraba bastante en el territorio de Vietnam del Sur. Las propuestas de utilizar las tropas norteamericanas, hechas anteriormente en reiteradas ocasiones, se colocaban ahora sobre una base práctica.

Ya antes, el 24 de abril, H. Kissinger había sostenido (como muchas veces en el pasado) un rejuego político con los cinco miembros de su aparato, que, como suponía, estarían en contra de la intervención en Camboya. El rejuego perseguía el fin de revelar los sucesos y los factores eventuales que podrían oponerse a las acciones de los

---

período presidencial de R. Nixon para dirigir las acciones estadounidenses en situaciones de crisis.

<sup>1</sup> *Time*, May 11, 1979, p. 18.

EE.UU. Durante el re juego, Kissinger escuchó los argumentos contra la intervención; se señaló, en particular, que tales acciones (tanto más si iban a participar tropas norteamericanas) constituirían una grave escalada de la guerra en Indochina, se podía esperar un estallido de indignación en los EE.UU., así como consecuencias negativas en el extranjero. Al día siguiente Kissinger y el presidente Nixon discutieron pormenorizadamente la probable reacción de la Unión Soviética, China y los aliados de los Estados Unidos. Las discusiones tenían el propósito de disminuir en lo posible los efectos negativos para los EE.UU. de la intervención en Camboya, si se tomara la decisión correspondiente.

En la mañana del 28 de abril, el presidente Nixon comunicó que la decisión había sido tomada: las fuerzas armadas de los Estados Unidos se trasladarían al *Anzuelo* y el *Pico del papagayo*.

El Grupo de Acción Especial Washingtoniano comenzó a preparar apresuradamente el guión de la intervención, que debía iniciarse el 30 de abril. Se confeccionó el horario de las acciones, que comprendía cuatro partes: “hora”, “acciones”, “departamento responsable”, y “comentarios”.

El 29 de abril las tropas del régimen saigonés, asesoradas por los consejeros militares norteamericanos, irrumpieron en la zona del *Pico del papagayo*, y al día siguiente un gran contingente de las fuerzas armadas estadounidenses entró en la región camboyana del *Anzuelo*. La agrupación de 24 mil efectivos norteamericanos y unidades del régimen saigonés desataron la agresión contra Camboya bajo el nombre de Operación *Victoria total* N42 y N43 (con anterioridad durante 18 meses se habían efectuado las operaciones *Victoria total* N1-N41 en el territorio de Vietnam del Sur).

La intervención en Camboya fue un craso error. Provocó, como era de esperar, una tempestad de protestas en el mundo entero. A la resuelta advertencia del Gobierno soviético expresada en la Declaración del 5 de mayo de 1970, y las protestas de los gobiernos de otros países de la comunidad socialista, se sumaron las manifestaciones enérgicas de todas las fuerzas adictas a la paz, los actos de protesta, y declaraciones en la prensa de conocidas personalidades de diferentes países.

Una ola de manifestaciones multitudinarias recorrió los propios Estados Unidos. El 9 de mayo se celebró una jornada nacional masiva de protesta contra la intervención en Camboya. Hubo grandes manifestaciones de repudio en Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, St. Paul, y otras ciudades de los EE.UU. Se produjeron huelgas estudiantiles y fueron cerrados 448 universidades y *colleges*. Más de la mitad de los miembros del Senado norteamericano se pronunciaron públicamente contra la intervención en Camboya. Según las encuestas, este paso de Washington fue censurado por el 75% de norteamericanos.

El gobierno de los EE.UU. estaba preocupado también por la reacción de sus aliados. Según el periódico *Washington Evening Star*, Europa Occidental “no aprobó” las acciones norteamericanas en Camboya. “Pocas veces el prestigio norteamericano ha caído tan bajo en Europa Occidental”<sup>1</sup> —señaló el diario. Los gobiernos de la RFA, Francia, Noruega y otros países eurooccidentales expresaron de una u otra forma su desaprobación al proceder de los Estados Unidos en Camboya.

Todo ello se conjugaba con la resuelta oposición de las fuerzas patrióticas de Camboya a los intervencionistas que habían irrumpido en el país. A pesar de que en la operación se utilizó en gran escala la aviación, los tanques, y otros medios militares, la ofensiva de las tropas norteamericanas y sudvietnamitas pronto fue contenida y luego detenida en general. En el curso de los combates, algunas unidades saigonesas fueron derrotadas totalmente. El mando norteamericano comenzó a incrementar con urgencia las fuerzas, y el 10 de mayo de 1970 ya habían llegado a Camboya unos 40 mil soldados, 16 mil de ellos norteamericanos. En lugar de haber aliviado la situación de sus unidades que actuaban en Vietnam del Sur, los Estados Unidos se encontraban atascados en una nueva campaña militar.

De esta manera, los Estados Unidos se encararon de nuevo con las realidades de la presente correlación de fuerzas en el mundo y tuvieron que tomar medidas para salir de la aventura camboyana. El 29 de junio de 1970 las tropas terrestres de los EE.UU. fueron retiradas

---

<sup>1</sup> *Washington Evening Star*, 4.05.1970.

de Camboya. Proseguían, no obstante, las acciones de las tropas saigonesas apoyadas por la aviación norteamericana. En general, la intervención en Camboya fue un fracaso porque los objetivos que se planteaban sus organizadores no fueron alcanzados.

Sin embargo, la política agresiva de los EE.UU. en Indochina no experimentó cambios sustanciales después de estos reveses. Una confirmación de ello fue otra intervención norteamericano saigonesa, emprendida en febrero de 1971 en Laos que también dio riendas a una aguda crisis internacional.

Los objetivos básicos de la intervención norteamericano saigonesa en Laos repetían los objetivos del ataque a Camboya, si bien con un aspecto algo renovado. La acción de Laos también debía servir de exhibición de fuerza para compensar la reducción del número total de tropas de tierra de los Estados Unidos en los frentes de Indochina. A la par, se le atribuía un importante papel en la comprobación de la capacidad combativa del ejército saigonés reequipado e instruido de nuevo en el marco del programa de la “vietnamización”. La acción laosiana, emprendida por fuerzas terrestres saigonesas con el apoyo múltiple y activo de la artillería y la aviación de los Estados Unidos, debía servir de especie de modelo a las futuras operaciones en Indochina.

Sus organizadores procuraron tener en cuenta los efectos políticos externos e internos desfavorables para ellos de la intervención en Camboya. Precisamente por esto, en el ataque contra Laos, las tropas terrestres estadounidenses no tomaron participación activa: fue realizado con fuerzas del régimen saigonés; pero en general, la intervención en Laos se desarrolló en el cauce general del despliegue de la agresión de los EE.UU. en Indochina.

El procedimiento de la elaboración de la decisión sobre la agresión a Laos muestra elocuentemente cuán amplia era la magnitud de la influencia del Pentágono en la elaboración del rumbo estadounidense en Indochina. La primera propuesta de organizar un ataque contra Laos, formulada en Saigón por representantes de las autoridades locales, así como por el mando de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, fue llevada a Washington el 15 de enero de 1971 por el secretario de Defensa, M. Laird, al regreso de uno de sus numerosos

viajes a Indochina.

Las proposiciones que traía Laird provocaron una acalorada discusión en Washington. Al comienzo, en particular el presidente R. Nixon, quien temía una nueva crisis política interna y sentía preocupación por las consecuencias internacionales de la acción laosiana, se pronunció contra los planes de atacar Laos; pero los militares presionaban, recalcaban con obstinación que el error cometido en Camboya no se repetiría: las tropas terrestres de los EE.UU. no intervendrían en Laos y, por tanto, supuestamente se podrían evitar las consecuencias externas e internas negativas de esta operación. En cuanto a las tropas saigonesas, Laird declaró reiteradas veces que, incluso si fallara la operación, los helicópteros norteamericanos podrían retirar fácilmente estas tropas al territorio de Vietnam del Sur; por tanto serían puestas enseguida fuera de peligro, y la operación transcurriría con rapidez. Estos argumentos decidieron la cuestión.

En la preparación del ataque a Laos, tuvo una importante participación el Grupo de Acción Especial Washingtoniano, que elaboró una serie de variantes de la política respecto a Laos. La decisión definitiva se aprobó el 3 de febrero de 1971 después de una reunión, celebrada la víspera, de un estrecho grupo de personalidades dirigentes y miembros del Grupo de Acción Especial Washingtoniano: el secretario de Estado W. Rogers, M. Laird, H. Kissinger, T. Moorer, R. Helms, así como el embajador de los EE.UU. en Saigón, E. Bunker.

El 8 de febrero una agrupación saigonesa de 20 mil efectivos con el apoyo de 1.500 aviones y 600 helicópteros norteamericanos agredió el territorio de otro Estado soberano. En la primera etapa de la operación se planteaba el objetivo principal de tomar la ciudad de Sépone, importante punto estratégico, cuya ocupación permitiría cortar Laos en dos partes, dividir las unidades de las fuerzas patrióticas que operaban en Laos, infringiéndoles de esta manera una grave derrota.

La agresión en Laos provocó una nueva crisis política internacional. Las airadas protestas que suscitó esta acción agresiva en el mundo, fueron una prueba convincente de cuán incompatible es la política “de posiciones de la fuerza” con las realidades de la situación inter-

nacional contemporánea.

En la Declaración del Gobierno soviético del 25 de febrero de 1971 se subrayaba que “las acciones de los Estados Unidos, que con tanta facilidad renuncian a los compromisos internacionales contraídos, conducen a minar los fundamentos en los que se basan las relaciones interestatales. Los Estados Unidos asumen una grave responsabilidad por las nuevas complicaciones en la situación internacional.”<sup>1</sup> La intervención de los EE.UU. en Laos fue censurada no sólo por los países socialistas, sino también por varios países capitalistas. Así mismo, hubo enérgicas manifestaciones de protesta en los EE.UU. Después del ataque a Laos, en diferentes medios estadounidenses crecieron bruscamente las demandas de establecer plazos fijos para la evacuación de las fuerzas armadas estadounidenses de Indochina.

A todo ello se sumaban los importantes reveses en los campos de combate. La ofensiva de las unidades saigonesas fue detenida por las fuerzas armadas patrióticas ya en los primeros días. El traslado a Laos de nuevos contingentes del ejército saigonés y de algunas unidades de destino especial de los Estados Unidos, no podía salvar a los intervencionistas de la derrota. No se logró tomar Sépone. En el transcurso del mes de febrero, en una serie de encarnizados combates con amplia utilización de los tanques y la artillería, las unidades de los intervencionistas que agredieron Laos fueron derrotadas. En unas cuantas semanas de combates, los Estados Unidos perdieron cientos de aviones y helicópteros.

Según testimonios de la prensa norteamericana, en Laos se libraron varias de las batallas más cruentas de la guerra de Indochina. Al comenzar la intervención en Laos, el Vicepresidente pelele de Vietnam del Sur, Nguyen Cao Ky, declaró que se trataba del comienzo de una larga campaña que duraría hasta finales de la temporada seca en mayo y sería reanudada luego de la temporada de los monzones.<sup>2</sup> Sin embargo, la resistencia de los invasores fue quebrantada rápidamente, y el 24 de marzo de 1971 sus restos fueron arrojados de Laos.

---

<sup>1</sup> *Pravda*, 25.11.1971.

<sup>2</sup> Véase *Facts on File*. 11-17.02.1971, p. 102.

La enseñanza que recibieron los intervencionistas en Laos puso en evidencia una vez más, la falta total de perspectivas de la política de acciones agresivas locales. Mostró palpablemente que también las formas modificadas del uso de la fuerza, que los Estados Unidos quisieron probar a comienzos de los años 70, producen los mismos efectos que los medios anteriormente utilizados.

La creciente ola de derrotas en los frentes de Indochina conducía inexorablemente a los invasores norteamericanos al fracaso de la agresión. En fin de cuentas, la muerte de más de 50 mil norteamericanos en Indochina y el gasto de más de 150 mil millones de dólares en la aventura indochina, no dieron resultados. Un ejército de más de medio millón de soldados norteamericano fue derrotado en Indochina.

Cabe señalar que los rasgos característicos de la “política crítica” de Washington se revelaron palpablemente a comienzos de los años 70 también en las crisis en que los EE.UU. no participaron de modo abierto con sus fuerzas armadas, pero en las que en realidad fueron protagonistas, o en las crisis surgidas por culpa de los satélites norteamericanos, tales como Israel, que son armados por los norteamericanos y actúan con la connivencia de Washington. Ello se reflejó nítidamente, en particular, en la aguda situación que surgió en septiembre de 1970 en el Próximo Oriente.

La causa principal de la permanente tensión en el Próximo Oriente, sigue siendo como antes la política agresiva de Israel, su renuncia a abandonar las tierras árabes ocupadas como resultado de la agresión israelí de 1967. El motivo inmediato de la crisis de 1970 fue el choque entre el ejército jordano y los destacamentos de guerrilleros palestinos que se encontraban en Jordania. Israel procuró aprovechar inmediatamente la situación creada, en cuya provocación desempeñó un papel significativo. El ejército israelí comenzó a preparar la intervención en Jordania. En el Próximo Oriente surgió el peligro de una nueva guerra de grandes proporciones.

En estas condiciones, los Estados Unidos emprendieron varias acciones graves rayanas en la intervención directa con sus fuerzas armadas en los asuntos de los países del Próximo Oriente. Las condiciones cambiaban rápidamente, la maquinaria de la Administra-

ción funcionaba con gran celeridad (durante varios días entre el 16 y el 21 de septiembre de 1970, el Grupo de Acción Especial Washingtoniano sesionó ininterrumpidamente), revelándose la tendencia a adoptar soluciones espasmódicas y extremadamente peligrosas en una situación aguda y compleja.

Los planes de acción de los EE.UU. se basaban, en lo fundamental, en el uso de la fuerza: principalmente en forma de concentración y traslado ostentativo de tropas. Con ello se perseguía a la vez influir psicológicamente tanto sobre los países árabes, como sobre sus aliados. Según la prensa norteamericana, fue un ejemplo de balancearse al borde de la guerra, de exhibición premeditada de la fuerza, ampliamente pregonada para lograr el máximo efecto psicológico.<sup>1</sup> En la prensa se “infiltraban” uno tras otro, datos sobre el traslado de buques de guerra de los EE.UU. al Mar Mediterráneo y su parte oriental, y sobre la puesta en disposición de combate de la aviación de transporte militar, batallones y brigadas.

Cuando se vio que el fomento artificial de la sicosis bélica no alcanzaba su propósito, empezaron a discutirse planes de ataque contra Jordania: diversas versiones de agresión israelí, desembarco de unidades norteamericanas en Amman, y ataques aéreos por fuerzas de la aviación de la VI Flota de los EE.UU. contra las posiciones de los guerrilleros en el Norte de Jordania. Todos estos proyectos culminaron con la decisión tomada el 21 de septiembre sobre la eventual intervención de Israel en Jordania y sobre el uso de la VI Flota de los EE.UU. contra los países árabes y la URSS en caso de que éstos acudieran en ayuda de las víctimas de la agresión.<sup>2</sup> Según testimonio de uno de los funcionarios de la Casa Blanca, en este momento “la paz pendía de un cabello finísimo”.<sup>3</sup> Surgió el peligro de la confrontación más grave desde los tiempos de la crisis del Caribe en 1962.

Pero merced a la firme postura de los países árabes, que lograron poner rápidamente fin al derramamiento de sangre en Jordania, y de sus aliados (por ejemplo, la Declaración de TASS del 18 de sep-

---

<sup>1</sup> *International Herald Tribune*. September 28, 1970, p. 6.

<sup>2</sup> *The New York Times*. October 8, 1970, p. 12.

<sup>3</sup> R. Evans. R. Novak. *Op. cit.*, p. 265.

tiembre de 1970 comprendía una severa advertencia a cuantos preparaban la intervención contra Jordania), los EE.UU. e Israel se vieron obligados a renunciar a sus planes de actuación militar en Jordania.

Cierta semejanza con el proceder de Washington en el Próximo Oriente en 1970 se reveló en la política estadounidense respecto al conflicto indio paquistaní de 1971, que amenazó con desembocar en una gran crisis política internacional. El conflicto fue provocado por la política chovinista del régimen burocrático militar de Pakistán, que desató sangrientas represalias contra la población de Pakistán Oriental (actual Bangladesh), la que había logrado la autonomía y votó en las elecciones de 1970 en favor de los adversarios de ese régimen. A causa de la represión de los militaristas, 10 millones de bengaleses huyeron a la India. Las tropas de Pakistán cometieron numerosas violaciones de la frontera india. Los acontecimientos cobraron carácter internacional y amenazaban complicar la situación en el Sur de Asia.

El 3 de diciembre comenzaron las operaciones militares entre Pakistán y la India. Partiendo de la práctica de sus guerras anteriores contra la India (1947-1948, 1965), los generales paquistaníes esperaban que sería una lucha con éxito alternativo al lado de la línea fronteriza; sin embargo, el fortalecimiento de la India (incluidas sus fuerzas armadas) en la segunda mitad de los años 60, la lucha activa de la población de Bangladesh contra las tropas paquistaníes privadas así de una segura retaguardia, frustraron estos cálculos. Las tropas indias y los destacamentos de liberación de Bangladesh infligieron en breve plazo una rotunda derrota a las tropas paquistaníes que capitularon en Dakka el 16 de diciembre de 1971.

Los EE.UU. intentaron intervenir en el conflicto indio paquistaní al lado de Pakistán. Testimonio de ello son los protocolos secretos, publicados en *The Washington Post* por el observador J. Anderson, sobre las reuniones del Grupo de Acción Especial Washingtoniano celebradas el 3, el 4 y el 6 de diciembre de 1971. En estas reuniones fueron debatidas distintas variantes de intervención velada y directa en el conflicto.

La tentativa directa de tal intervención se emprendió en el estilo

“clásico” norteamericano: con la ayuda de un grupo de buques de guerra. El 10 de diciembre un grupo de ocho buques de la VII Flota de los Estados Unidos salió del Golfo de Tonkín; el 14 de diciembre entró en el Océano Indico y se dirigió al Golfo de Bengala. El grupo incluía al portaviones atómico *Enterprise*, el más grande de la Flota de los EE.UU. A bordo de los buques se encontraban 2 mil infantes de la marina. Al principio la acción tenía como propósito ejercer presión sobre la India. “Hemos estudiado los papeles secretos de la Casa Blanca relativos a esta guerra de dos semanas —escribía Anderson—. Muestran claramente que este grupo operativo, que incluía el portaviones *Enterprise*, el barco más potente de la Marina, había sido enviado a aguas indias para una “exhibición de fuerza”.<sup>1</sup> Y esta “exhibición de fuerza” era interpretada en un sentido muy amplio.

De los protocolos del Grupo de Acción Especial Washingtoniano se deduce que entre los objetivos del grupo de barcos de guerra estaba: obligar a la India a trasladar buques y aviones del frente paquistaní en dirección a este grupo; atenuar el bloqueo naval indio del litoral de Pakistán Oriental; y obligar a la India a tener parte de los aviones en disposición combativa para asegurar su defensa contra un eventual ataque de la aviación del grupo operativo.

Es decir que además de la mera “exhibición de fuerza”, se trataba de atraer sobre sí parte de la aviación y de la flota india. No se descartaba la posibilidad de un choque con la India. “La situación —se decía en la orden dada al grupo operativo— posiblemente requerirá la presencia y la utilización del portaviones para asegurar la protección de los intereses de los EE.UU. en el área”. Se obligaba al grupo a “emprender operaciones aéreas y marítimas de la Marina de Guerra por orden de una instancia superior para proteger los intereses norteamericanos en la región del Océano Indico”.<sup>2</sup> Por consiguiente, se trataba también de la posibilidad de una intervención armada directa en el conflicto.

La entrada en la región de los buques de guerra norteamericanos

---

<sup>1</sup> J. Anderson *U.S. Show of Force in Bay of Bengal*. — The Washington Post. December 31, 1971, p. 87.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

provocó bruscas protestas de la India. El 15 de diciembre el embajador indio en los EE.UU. expresó al Departamento de Estado la “honda preocupación” de su gobierno.<sup>1</sup> La Unión Soviética hizo serias advertencias acerca del peligro de la intervención externa en el conflicto.<sup>2</sup> La opinión norteamericana expresó su alarma.

Debido a estas circunstancias, el grupo operativo de los EE.UU. abandonó el Golfo de Bengala a comienzos de enero de 1972. La “exhibición de fuerza” fracasó una vez más.

La conducta de Washington en las cuatro crisis políticas internacionales de principios de los años 70, reflejó varias características típicas de la política del imperialismo norteamericano: el recurso ante todo de la fuerza (incluida la fuerza militar) al considerar las distintas variantes de acción en situaciones críticas, y el manejo irresponsable de esta fuerza agravando peligrosamente la situación internacional.

En estos episodios de la política exterior del imperialismo norteamericano se reflejó algo más: la falta de perspectivas de la política “desde posiciones de fuerza”. En cada una de las crisis consideradas de comienzo de los años 70, esta política de los EE.UU. los llevó al fracaso.

---

<sup>1</sup> *The New York Times*. December 15.1971, p. 1, 17.

<sup>2</sup> Véase *Declaración de TASS del 6 de diciembre de 1971 y Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS del 18 de diciembre de 1971*. – *Izvestiya*, 6.12.1971; 18.12.1971.

A. KISLOV

## LA POLÍTICA INTERVENCIONISTA EN EL PRÓXIMO ORIENTE

El Próximo Oriente, encontrándose en el empalme de tres continentes, siempre ha sido objeto de gran atención por parte de los pretendientes a regir los destinos del mundo.

Las actividades del imperialismo norteamericano en el Próximo Oriente crecieron tras la primera guerra mundial. Los monopolios estadounidenses se empeñaron en obtener concesiones petroleras allí, pese a la resuelta oposición de Inglaterra y Francia, que dominaban en la región a la sazón. Como resultado de una enconada lucha con sus rivales ingleses, las poderosas compañías petroleras norteamericanas con gran ayuda del aparato estatal de los EE.UU., poco a poco penetraron en la industria de extracción de petróleo de los países del Próximo Oriente. Sin embargo, ya en 1940, las firmas inglesas controlaban allí el 72% de las reservas de petróleo exploradas, en tanto que a los norteamericanos les correspondía sólo el 9,8%<sup>1</sup>; pero los Estados Unidos lograron crear en vísperas de la segunda guerra mundial, una base para la futura expansión en el Próximo Oriente. Las concesiones norteamericanas en Arabia Saudita constituyeron su principal puesto de avanzada.

Las tendencias intervencionistas de la política de los EE.UU. en el Próximo Oriente se manifestaron marcadamente finalizada la segunda guerra mundial. En los años posbélicos, el Próximo Oriente pasó a ocupar uno de los primeros planos en las prioridades de la política exterior norteamericana. Lo cual se explica por el hecho de que, paralelamente a la expansión económica de los EE.UU. en la región, crecía indeclinablemente su significado estratégico militar y político en los planes globales de los EE.UU.

En condiciones de una aguda pugna histórica en la palestra internacional entre las fuerzas por la paz, el progreso y el socialismo, de un

---

<sup>1</sup> *International Socialist Review*. May 1971, p. 32.

lado, y las fuerzas de la agresión, la reacción y el imperialismo, del otro, los EE.UU. comenzaron a atribuir al Próximo Oriente un significado primordial en el plano de la lucha en el “tercer mundo”, en el que han crecido inconmensurablemente el papel y la influencia de los Estados árabes.

Como resultado de una encarnizada lucha interimperialista, los monopolios petroleros norteamericanos en el período entre las dos guerras mundiales y en los primeros años posbélicos, lograron ocupar sólidas posiciones en el Próximo Oriente. Ello les ha permitido, controlando parte considerable de la extracción del petróleo en el Próximo Oriente, obtener beneficios inmensos y continuamente crecientes. Basta recordar que, por ejemplo, en la década anterior a la brusca agudización de la crisis energética y al impetuoso crecimiento de precios del petróleo, o sea, de 1963 a 1972 inclusive, los monopolios norteamericanos obtuvieron por cada dólar invertido en la extracción del petróleo en el Próximo Oriente casi 5 dólares de ganancia. Constituyendo sólo el 2,5% de la suma total de inversiones de los EE.UU. en el extranjero, las inversiones en el petróleo del Próximo Oriente constituyeron el 21,7% de los ingresos totales de las inversiones en el extranjero transferidos a los EE.UU.<sup>1</sup>

El Próximo Oriente, situado en las cercanías inmediatas de las fronteras de la Unión Soviética y de otros países de la comunidad socialista, es considerado en Washington no sólo en el plano político y económico, sino también una importantísima plaza de armas estratégico militar, una especie de pista de despegue, desde la que se puede amenazar a las regiones más alejadas de la Unión Soviética y a los países socialistas de Europa Oriental. Prueba de ello es la presencia permanente durante decenios en las aguas que lo bañan de la VI y la VII Flotas norteamericanas con armas nucleares a bordo, y los planes de crear una V Flota especial para controlar el Golfo Pérsico y el Océano Indico. “Uno de los problemas estratégicos primordiales para los autores de la política de los EE.UU. —se subraya en el estudio *Política exterior y seguridad nacional de los EE.UU.*— es conservar el Próximo Oriente y el Mediterráneo como un área en la que pueda establecerse eficazmente el poderío norte-

---

<sup>1</sup> *California Management Review*. 1975, N. 4, p. 24.

americano”. Más aún, los EE.UU. no sólo persiguen asegurarse el acceso a la región, sino igualmente “prevenir la penetración de la influencia foránea (especialmente la soviética...) en el área”.<sup>1</sup>

Además, el control sobre una parte considerable del petróleo del Próximo Oriente es considerado por el imperialismo norteamericano como una importante palanca complementaria para influir sobre otros países consumidores del petróleo, ante todo sobre sus aliados eurooccidentales y Japón.

En los primeros años posbélicos, los EE.UU. procuraron coordinar su política con Inglaterra y Francia, que tenían aún en el Oriente Árabe posiciones inconmensurablemente más sólidas que los EE.UU. Como resultado, el 25 de mayo de 1950 apareció la “Declaración Tripartita” de los EE.UU., Inglaterra y Francia, conforme a la cual estos tres países, eludiendo a la ONU, asumían de hecho de forma unilateral, el papel de garantes del armisticio de 1949 entre los países árabes e Israel y se arrogaban el derecho a decidir los niveles de las fuerzas armadas y los armamentos de estos Estados.

Al mismo tiempo, los autores de la declaración no escatimaron palabras altisonantes. Los EE.UU., Inglaterra y Francia proclamaron solemnemente que “si sus gobiernos descubren que cualquier Estado del Próximo Oriente prepara una violación de las fronteras o las líneas del armisticio, su obligación como miembro de las Naciones Unidas, será emprender acciones tanto en el marco de la ONU como fuera de esta organización, con tal de prevenir tal violación”.<sup>2</sup> El verdadero valor de estos compromisos se reveló durante la agresión anglo franco israelí a Egipto en 1956.

El carácter imperialista de la “Declaración Tripartita” era tan evidente que incluso los gobiernos pro occidentales de entonces de Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita, Yemen, Irak y Jordania estimaron necesario formular en el acto una réplica común, en la que se subrayaba que “no admitirían acción alguna que ocasionara perjui-

---

<sup>1</sup> *Foreign Policy and U.S. National Security. Major Postelection Issues.* New York, 1976, p. 76, 77.

<sup>2</sup> *U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. A Selected Chronology and Background Documents Relating to the Middle East,* Washington, 1975, p. 200, 201.

cio a su soberanía o su independencia”.

Simultáneamente los EE.UU. emprendieron en el Próximo Oriente, al igual que en otras áreas del mundo, el fortalecimiento de sus posiciones integrando a los países del área en diversos bloques militares, creados o proyectados por las potencias imperialistas bajo la égida norteamericana.

Los EE.UU. incrementaron sus actividades en este sentido especialmente después de la creación de la OTAN. En el transcurso de los años 1950 y 1951, los EE.UU., Inglaterra y Francia, así como Turquía adelantaron reiteradas veces la proposición de crear el llamado Mando Mesoriental, a cuya disposición pasarían las fuerzas armadas de todos los Estados del Próximo Oriente. Además, los EE.UU., Inglaterra, Francia y Turquía recibirían la posibilidad de introducir sus tropas en los territorios de los países miembros del mando con fines de “defensa común”. Estos planes también fueron rechazados por los países árabes, que los calificaron de un intento de conservar el dominio imperialista en el Próximo Oriente, cambiando únicamente la etiqueta.

La renuncia de los países árabes a apoyar el plan de crear un Mando Mesoriental, la firme postura de la Unión Soviética, que advirtió a los gobiernos de los EE.UU., Inglaterra, Francia y Turquía acerca de las peligrosas consecuencias de sus designios agresivos, así como la aguda lucha imperialista entre los EE.UU. e Inglaterra por el papel rector en el futuro bloque, predeterminaron el fracaso de la tentativa de realizar este plan; no obstante, los EE.UU. e Inglaterra no cesaron en sus esfuerzos de ensamblar en una u otra forma un bloque militar en el Próximo Oriente, en el que, además de las potencias occidentales y Turquía, debían entrar los países árabes e Israel. Sólo en 1953, tras el recorrido por la región de J. F. Dulles, quien llegó a la conclusión de que en el Próximo Oriente no existían condiciones reales para crear una organización que fuera completamente análoga a la OTAN y que integrara a todos los países de la región, se promovió la idea de organizar un bloque de países sólo musulmanes.

El nuevo sistema comenzó con la firma el 2 de abril de 1954 de un tratado militar entre Turquía, que desde 1952 ya era miembro de la

OTAN, y Pakistán con idea de extenderlo luego a otros países del Próximo Oriente. Cuando en septiembre del mismo año, Pakistán, junto a los EE.UU., Inglaterra, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas, firmó el Tratado de Defensa Colectiva de Asia Sudoriental (SEATO), se perfiló definitivamente el plan norteamericano de rodear a la Unión Soviética y otros países socialistas por un sistema de bloques militares entrecruzados, que forman una cadena continua desde Europa hasta el Extremo Oriente.

En abril de 1964 los EE.UU. ampliaron la ayuda militar a Irak, donde se encontraba entonces en el poder el régimen reaccionario del testaferro inglés Nuri Said, y en febrero de 1955 se firmó en Bagdad un tratado sobre cooperación mutua entre Irak y Turquía que colocó los cimientos del Pacto de Bagdad, bautizado por el lugar de su nacimiento. El 4 de abril, a la nueva alianza político militar se unió Inglaterra, el 23 de septiembre, Pakistán, y el 11 de octubre, Irán.

Los Estados Unidos, aunque apoyaban activamente la idea de la creación de este pacto, formalmente no entraron en él.<sup>1</sup> Esta actitud de los EE.UU. se debía a varias razones, y ante todo a que no deseaban complicar aún más sus relaciones con la mayoría absoluta de los países árabes, los cuales calificaron este pacto con pleno fundamento como “instrumento de preservación del dominio occidental”.

A mediados de los 50, sobre todo tras la revolución de julio de 1952 en Egipto, los círculos gobernantes de los EE.UU., sin apartarse de la política de bloques, emprendieron intentos activos de acercarse a los países árabes sobre la base del neocolonialismo: estrategia que contaba ante todo con la promesa de ayuda económica. “Un programa de gran expansión y de larga duración para la participación norteamericana en el desarrollo económico de áreas subdesarrolladas —declaraban en aquellos años M. Millikan y W. Rostow— puede y debe ser uno de los medios más importantes de alcanzar los

---

<sup>1</sup> Los EE.UU. se hicieron “miembro asociado” del pacto cuando, después de abandonarlo Irak —como resultado de la revolución de julio de 1958 y de la rescisión por la República de Irak del convenio con los EE.UU. sobre ayuda militar y económica—, el Pacto de Bagdad, al quedarse sin Bagdad, recibió el nombre de Organización del Tratado Central (CENTO).

propósitos de la política exterior norteamericana”.<sup>1</sup> Sin embargo, la concesión de ayuda norteamericana a los países del Próximo Oriente en aquella etapa, por lo común, se condicionaba estrictamente a la conservación en ellos de las relaciones sociales más reaccionarias posibles sostenidas por camarillas y regímenes monárquicos y feudales antipopulares.

Después del ignominioso fracaso de la agresión tripartita contra Egipto en 1956, las demás potencias imperialistas ya no disputaban el liderazgo a los EE.UU. en el Próximo Oriente, y los Estados Unidos obraban abiertamente como herederos de los viejos imperios coloniales: Inglaterra y Francia. La correlación de fuerzas creada entonces entre las potencias imperialistas en el Próximo Oriente, tal como la interpretaban en Washington, debía ser refrendada por la “doctrina Eisenhower”, formulada en el mensaje especial que el presidente de los EE.UU. envió al Congreso el 5 de enero de 1957. Dicha doctrina, aprobada por una resolución conjunta del Congreso de los EE.UU., el 9 de marzo de 1957 proclamó de forma unilateral el derecho del presidente de los EE.UU. a intervenir, incluso militarmente, en los asuntos internos de cualquier país del Próximo Oriente para luchar contra el “comunismo internacional”.

El 14 de julio de 1958 en Irak fue derrocada la monarquía, y el nuevo gobierno declaró la salida de Irak del Pacto de Bagdad. El imperialismo norteamericano, encubriéndose con la “doctrina Eisenhower”, recurrió a una desembozada intervención armada. Empeñados en asestar un rotundo golpe a las fuerzas antiimperialistas del Próximo Oriente y prevenir la expansión del ejemplo iraquí a los países árabes vecinos, los EE.UU. desembarcaron el 15 de julio su infantería de la marina en el Líbano, y el 17 de julio apoyaron desde el aire un desembarco inglés en Jordania.

Los intentos de los EE.UU. de asumir funciones policíacas en el Próximo Oriente chocaron con una resuelta oposición de la mayoría de los Estados árabes independientes, apoyados firmemente por los países adictos a la paz encabezados por la Unión Soviética. No se logró ahogar la revolución en Irak. También del Líbano y Jordania

---

<sup>1</sup> M. F. Millikan, W. W. Rostow. *A Proposal. Key to an Effective Foreign policy.* New York, 1957, p. 1.

los EE.UU. e Inglaterra tuvieron que evacuar sus tropas a finales de 1958. De ese modo, fracasaron los cálculos de los Estados Unidos relacionados con la intervención armada directa en los asuntos de los países del Próximo Oriente para enrumbar su desarrollo socio-económico y político en la dirección deseable para los EE.UU.

El posterior auge del movimiento de liberación nacional en el Próximo Oriente, puso, en general, en tela de juicio el porvenir del imperialismo norteamericano en el área. En Washington se expresó cada vez con mayor frecuencia el temor de que la participación directa en la confrontación militar en el Próximo Oriente no haría sino acelerar aún más el deterioro de las posiciones económicas y estratégico militares de los EE.UU. en toda el área.

Todo ello predeterminó el paso a una nueva etapa en la política de los EE.UU. en el Próximo Oriente, que coincidió con la llegada a la Casa Blanca de la administración demócrata de John Kennedy, quien proclamó la política de “las nuevas fronteras”. En su aplicación al Próximo Oriente, esta política estadounidense (en ello se distinguía de modo cardinal de la política de “las nuevas fronteras” en otras regiones) consistía en hacer hincapié cada vez más en la cooperación militar con Israel, el cual abrigaba sus propios planes expansionistas. Precisamente esta tendencia —el uso de Israel como principal instrumento para alcanzar sus objetivos— empezó a prevalecer totalmente en la política de los EE.UU. en el Próximo Oriente ya en la primera mitad de los años 60.

En 1962 se llegó al primer acuerdo sobre el suministro de armas a Israel directamente desde los Estados Unidos, en particular el suministro de misiles antiaéreos norteamericanos *Hawk*, y el envío a los EE.UU. de militares israelíes para aprender su manejo. Estos misiles empezaron a llegar a Israel a finales de 1963. En 1966 se firmó el acuerdo sobre el envío a Israel de los cazas norteamericanos *Skyhawk* y los tanques *Patton*.

Ello no significa, por supuesto, que antes de los 60, los EE.UU. no apoyaran los designios agresivos de Israel, que desde sus primeros días de existencia fue un puesto de avanzada norteamericano en el Próximo Oriente. Israel y los EE.UU. habían firmado ya en 1952 un acuerdo de asistencia para la seguridad mutua, conforme al cual

Israel se comprometía, en particular, a “poner a disposición de los EE.UU. equipos, materiales, servicios y otras ayudas”, a participar junto a los EE.UU. en “la defensa del área, parte de la cual constituye”, así como en las medidas de “protección de la seguridad internacional.”<sup>1</sup>

Pero en aquel entonces, los EE.UU. aún no habían contraído abiertamente compromiso militar alguno con Israel. Sólo a partir de los años 60 y especialmente después de llegar a la Casa Blanca la administración de Lyndon Johnson y después de la ampliación de la intervención armada de los EE.UU. en Vietnam, las armas norteamericanas empezaron a fluir abiertamente a Israel en vastos torrentes. Al mismo tiempo, los EE.UU. redujeron notablemente su flirteo con los países árabes, disminuyendo, en particular, de un modo brusco el volumen de la ayuda económica que les prestaban.

A mediados de los años 60 Israel se convirtió en la fuerza de choque principal del imperialismo norteamericano en el Próximo Oriente, con ayuda de la cual Washington confiaba alcanzar sus metas. Prueba elocuente de ello fue la llamada “guerra de los seis días” — agresión israelí en 1967—, en cuya base, como se subrayó en la Declaración del Soviet Supremo de la URSS sobre la situación en el Próximo Oriente del 15 de julio de 1970, yacía “la política del imperialismo, empeñado en asestar un golpe al movimiento de liberación de los países árabes y conservar sus posiciones estratégicas y económicas en el área, especialmente la posibilidad de explotar sus riquezas petroleras”. Al mismo tiempo, señalaba la Declaración, “la agresión israelí en el Próximo Oriente, apoyada por los medios neocolonialistas, no está dirigida sólo contra los Estados árabes. Cuanto ocurre en esta región, en el empalme de los continentes asiático y africano, tiene relación directa con los destinos de los pueblos de todos los países de Asia y África, con los destinos de la paz universal y de la seguridad de los pueblos”.<sup>2</sup>

Sin embargo, por medio de la agresión israelí no se logró aplastar el movimiento de liberación nacional de los pueblos árabes y consolidar con ello las posiciones norteamericanas en el Próximo Oriente.

---

<sup>1</sup> *Treaties and Other International Acts Serie*. N. 2675. Washington, 1953, p. 1, 2.

<sup>2</sup> *Pravda*, 16 de julio de 1970.

Todo lo contrario, este movimiento alcanzó nuevos éxitos. Consiguieron la independencia los pueblos de Bahrein, Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos. No se logró derribar al régimen republicano en Yemen. Terminó con la victoria la lucha por la independencia de Yemen del Sur, donde se creó la República Popular Democrática de Yemen, cuyo pueblo emprendió activamente la reestructuración social del país. Después del triunfo de la revolución, comenzó una nueva vida en Libia. Se operaron cambios progresistas de orden social en Irak y Argelia.

Tal desarrollo de los acontecimientos en el Próximo Oriente provocó evidente descontento en los Estados Unidos, donde se hablaba cada vez más alto de la necesidad de buscar nuevas vías para lograr los objetivos norteamericanos en el Próximo Oriente. Su base objetiva era la evidente inconformidad de los métodos de la política de los EE.UU. en el Próximo Oriente con la situación política concreta creada tanto en esta región del globo, como en el mundo en general. Ello se reveló con nitidez particular después de la guerra de octubre de 1973. En este sentido tuvo también un gran significado la crisis energética que abarcó a todo el mundo capitalista desde fines de 1973.

La esencia de los métodos de los EE.UU. en el Próximo Oriente en el transcurso de la mayor parte de los años 70 podría ser formulada como una política de “arabización” e “iranización”, insertada en la doctrina general de la política exterior de los EE.UU., que se plantea el propósito de frenar el movimiento de liberación nacional en los países del “tercer mundo”, valiéndose en primer término de los regímenes locales. En un plano de larga perspectiva, este rumbo en el Próximo Oriente significaba cierto alejamiento de la designación de Israel como única fuerza de choque pronorteamericana en el área. Tal desviación parcial, a juicio de Washington, debía dar a los Estados Unidos posibilidades complementarias de maniobrar políticamente en el Próximo Oriente, creando condiciones para diversificar y ampliar al máximo el número de partenaires y clientes norteamericanos, por un lado, y premisas para fortalecer los círculos pronorteamericanos en los países árabes, por otro lado.

Washington tenía la convicción de que los enormes suministros de

armamentos norteamericanos a aquella región del mundo desempeñarían un importante papel en la sujeción de los países del Próximo Oriente a los Estados Unidos. Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo de Estudio de la Paz, en los primeros cinco años posteriores a la guerra de octubre de 1973, los países del Próximo Oriente recibieron el 70% de todas las armas norteamericanas exportadas a los países en vías de desarrollo.<sup>1</sup> En este sentido, se depositaban esperanzas particulares en Irán y Arabia Saudita, considerados como clientes privilegiados de los EE.UU.

Por ejemplo, resulta difícil sobrestimar el papel atribuido, no sólo en los cálculos regionales, sino globales de Washington al régimen del sha de Irán, que literalmente un año antes de su caída sin gloria, fue caracterizado por el presidente de los EE.UU. J. Carter como “isla de estabilidad en una de las regiones más intranquilas del mundo”. Y no se trataba sólo de las funciones de gendarme regional que ejerció con cierto éxito durante varios años el sha de Irán en la región del Golfo Pérsico, la cual aporta dos tercios a la exportación mundial de petróleo.

Al ocupar el segundo lugar en el mundo por el volumen del petróleo exportado, y disponiendo por ello de enormes reservas de divisas, el régimen del sha dedicaba estos medios no a elevar el nivel de vida del pueblo, sino a la compra desenfrenada de armamentos y a otros gastos improductivos. En pocos años Irán absorbió el 40% de la exportación de armas norteamericanas, convirtiéndose en su principal importador. El sha no escatimaba recursos en ello, y Washington, por su parte, anuló todas las restricciones a la venta de material de guerra a Irán. Como resultado, Irán recibía con frecuencia armas que aún no figuraban en el armamento del propio ejército norteamericano.

A los ojos de Washington, Irán era una importante plaza de armas en la frontera sur de la Unión Soviética, que se utilizaba ampliamente para la labor de las estaciones de exploración radiotécnica, que suministraban a Washington información sobre las pruebas de la tecnología coheteril soviética. Según los planes de los estrategias del Pentágono, las inmensas reservas de armas norteamericanas que

---

<sup>1</sup> *World Armaments and Disarmament*. SIPRI Yearbook 1979. London, p. 177.

había acumulado Irán, en caso de necesidad, podrían ser aprovechadas no sólo por las fuerzas armadas iraníes, sino también por las norteamericanas, cuyo transporte a Irán sería considerablemente más fácil y acelerado sin el equipo pesado. Muchos de los planes de los Estados Unidos en el Próximo Oriente estaban relacionados asimismo con el papel del sha iraní en calidad de “vidriera” de “lo que pueden lograr los países en vías de desarrollo con la ayuda de los Estados Unidos”.

Al igual que a Irán, se prestaba particular atención a Egipto. Washington consideraba uno de los mayores éxitos de su política exterior el haber logrado separar al régimen de Sadat en Egipto de las fuerzas progresistas del mundo árabe y la Unión Soviética, su rumbo al acuerdo separado con Israel que concluyó con la firma bajo la égida de los EE.UU., de los tratados de Camp David en septiembre de 1978, y luego con su participación en el llamado “Tratado de Paz” firmado entre Egipto e Israel el 26 de marzo de 1979.

Sin embargo, resultó que esta vez, al igual que luego de la “guerra de los seis días” de 1967, Washington no tenía motivos especiales para tal euforia. A comienzos de 1979 en Irán se produjo la revolución que llevó al derrocamiento del régimen pronorteamericano. La revolución sacudió hasta los cimientos el edificio de la política de los EE.UU. en el Próximo Oriente, erigido en el transcurso de la mayor parte de los años 70. El consiguiente derrumbe del bloque CENTO mostró definitivamente la esterilidad de las esperanzas de Washington de que los países clientes claves controlarían la situación en interés de los EE.UU. en una u otra vasta área del mundo subdesarrollado sin la intervención militar directa norteamericana.

No obstante, también después de la revolución en Irán, la línea estratégica general del imperialismo norteamericano en el Próximo Oriente, dirigida al sojuzgamiento económico y político de los países de la región, al aplastamiento en ellos de los movimientos de liberación nacional, y al empleo de la región como plaza de armas estratégico militar contra la Unión Soviética, siguió invariable. Han cambiado de nuevo sólo el arsenal de recursos y la elección de medios tácticos para alcanzar los mismos viejos objetivos estratégicos.

El elemento nuevo más evidente es la acentuación mucho mayor

que antes, del uso directo de la fuerza armada norteamericana para resolver la situación regional en un sentido favorable a los EE.UU., lo cual halló su reflejo en la “doctrina Carter”, formulada por el presidente de los EE.UU. en su mensaje al Congreso *Sobre la situación en el país* del 23 de enero de 1980.

La esencia de este rumbo de la administración estadounidense se reducía ante todo a sinceras pretensiones de los EE.UU. a dictar sus ordenes en cualquier región del mundo que Washington declare zona de sus “intereses vitales”. Cuando, en opinión de los círculos gobernantes norteamericanos, estos intereses se vean perjudicados, se proclama el “derecho de los EE.UU. a intervenir amenazando con emplear todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar”.<sup>1</sup>

En el mensaje se exponía, en particular, una serie de medidas enfiladas contra los países en vías de desarrollo y ante todo contra los países del Próximo y el Medio Oriente. Se trataba en concreto de formar sobre una base permanente las “fuerzas de despliegue rápido” intervencionistas de 200 mil efectivos que deben estar dispuestos al traslado a cualquier región que tenga, desde el punto de vista de Washington, importancia estratégica. Entre otras “iniciativas concretas llamadas a ayudar a los EE.UU. a reaccionar a las crisis fuera de Europa”, el mensaje preveía “elaborar y crear un nuevo ejército aéreo completado con aviones de gran capacidad de carga y con capacidad de vuelo intercontinental”, “proyectar y formar un contingente de navíos que, previamente colocados en sus posiciones, ayudarán a llevar el equipo pesado y las municiones para tres brigadas de infantería marina”, así como asegurar medios para el transporte de las “fuerzas de despliegue rápido” a muchos miles de kilómetros del territorio de los EE.UU. En el mensaje se planteaba igualmente la tarea de dedicarse de lleno “a estudiar las posibilidades de utilizar más activamente los objetivos militares” tanto en el Próximo y el Medio Oriente como en las proximidades inmediatas de esta región.

Estas ideas del presidente Carter fueron apoyadas con actividades militares y político militares aún más enérgicas de los EE.UU. tanto

---

<sup>1</sup> *The Department of State Bulletin*. February 1980, vol. 80, N. 2035, p. 13.

a escala global, como directamente en la región del Próximo Oriente. Las actividades se desarrollaban en varias direcciones: se ampliaba la presencia militar de los Estados Unidos en el Próximo Oriente; se aspiraba a establecer allí para su empleo bases militares y otros objetivos militares, y, por último, para la protección de los intereses norteamericanos, se organizaban fuerzas de gendarmería local que pudieran “compensar” el fracaso del régimen del sha en Irán.

Para asegurar con su política y disimular con su propaganda este rumbo en extremo peligroso a la causa de la paz, Washington aprovechó en lo posible los acontecimientos relacionados con la revolución de abril de 1978 en Afganistán y especialmente con la llegada a este país en diciembre de 1979, a solicitud del gobierno de Afganistán, de un contingente limitado de las fuerzas armadas soviéticas para ayudar al pueblo de Afganistán a rechazar la agresión exterior. Se desplegó igualmente una gran campaña propagandística cuando el 4 de noviembre de 1979 estudiantes iraníes ocuparon la embajada de los EE.UU. en Irán y detuvieron al personal que allí se encontraba.

Pero, como muestran los datos, los EE.UU. procedieron activamente a elaborar y realizar su programa intervencionista en la región del Próximo Oriente mucho antes de los acontecimientos señalados. Los primeros trazos de este rumbo extremadamente peligroso y provocador, aparecieron enseguida tras llegar a la Casa Blanca en enero de 1977 la administración de Carter y se reflejaron en la directiva presidencial N 18 ya en agosto de 1977.

Precisamente en cumplimiento de esta directiva, los EE.UU. comenzaron a incrementar activamente sus fuerzas de choque en las aguas del océano mundial adyacentes a la región del Próximo y el Medio Oriente. Además de concentrar en esta región varios grupos de choque con portaviones, Washington por primera vez después de la segunda guerra mundial envió allí importantes unidades de tropas terrestres norteamericanas con dotación de tanques, medios antitanque, helicópteros, artillería y otros armamentos pesados, así como con sus propios medios de desembarco. El significado que atribuyen los estrategas norteamericanos a ese incremento de fuerzas de cho-

que es reafirmado por el hecho de que, según informaciones de la prensa occidental, en Washington se estudia incluso la posibilidad de utilizar en la región del Golfo Pérsico unidades de la “reserva extraordinaria de defensa” de los países de la OTAN. Aparte de ello, los EE.UU. han propuesto crear el llamado cuerpo europeo de despliegue rápido con el fin de extender la esfera de influencia del bloque agresivo de la OTAN a la región del Próximo Oriente.

Se intensifican los trabajos para ampliar la base norteamericana en el pequeño atolón coralino Diego García en la parte central del Océano Indico. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, después de una labor intensa en este atolón, cuya población había sido deportada forzosamente ya en 1970 y 1971, se preparó allí una pista de despegue y aterrizaje capaz de recibir a los bombarderos estratégicos B-52. A orillas de la laguna coralina, ahondada y ampliada, se han construido potentes instalaciones portuarias y de almacén (en particular, enormes depósitos para combustible), capaces de asegurar el servicio a portaviones gigantes y submarinos nucleares dotados de cohetes nucleares, sin hablar ya de otros buques de menor envergadura. En el atolón funciona un centro de radiocomunicación y radar, un sistema desarrollado de defensa antiaérea y otros objetivos militares que convierten Diego García en una base multipropósito de las fuerzas aéreas y navales de los Estados Unidos.

Resulta significativo que paralelamente, los Estados Unidos han tomado sin disimulo el rumbo a torpedear las conversaciones soviético norteamericanas sobre la limitación de las actividades militares en la cuenca del Océano Indico. La parte norteamericana, después de interrumpir a comienzos de 1978 las conversaciones, se niega obstinadamente a reanudarlas.

Pero la base del atolón Diego García, dado que se encuentra a considerable distancia de la región de Próximo Oriente, a juicio del Pentágono, no puede resolver todas las tareas estratégicas y tácticas que puedan ser planteadas allí al aparato militar norteamericano. Este factor explica el deseo de Washington de obtener cerca del Golfo Pérsico bases y puntos de apoyo que podrían ser utilizados por el cuerpo expedicionario norteamericano. Relacionando la solu-

ción de este problema con promesas de amplia ayuda militar, Washington se aseguró el acuerdo de países tales como Omán, Somalia y Kenia al empleo de bases y puntos de apoyo en sus territorios por las fuerzas armadas norteamericanas. Washington asume también los gastos de reestructuración y reequipamiento de los objetivos que utilicen sus fuerzas armadas en estos países.

En el mismo plano, es decir, en el plano de la creación y el fortalecimiento de los puestos de apoyo militares de los EE.UU. en el Próximo y el Medio Oriente y en su “periferia” cabe considerar igualmente el convenio turco norteamericano de 1980 sobre la “cooperación en el terreno de la defensa colectiva”. Washington espera ampliar de nuevo considerablemente con ayuda de este convenio, las posibilidades de utilizar sus casi tres decenas de bases en territorio turco, que fueron restringidas seriamente a causa de la agudización de las relaciones con los EE.UU. después de la intervención militar de Turquía en Chipre en 1974.

Pero, quizás, donde más ha avanzado Washington en el cumplimiento de sus planes agresivos en el Próximo Oriente es en las relaciones con Israel y Egipto. Los EE.UU. ya utilizan realmente el territorio de estos países y los objetivos militares en ellos situados para sus propias necesidades, en particular, para los vuelos de los aviones de reconocimiento norteamericanos y para las actividades de algunas otras unidades de las fuerzas aéreas estadounidenses desde territorio egipcio (por ejemplo, durante el intento sin gloria y fallido de intervención armada en Irán para liberar a los “rehenes” norteamericanos en abril de 1980). Los puertos egipcios e israelíes son visitados cada vez más frecuentemente por buques de la marina de guerra estadounidense, incluidos los mayores portaviones. Antes de haber concluido la ocupación israelí de la península de Sinaí, esta ha sido sustituida por la ocupación de la península por las llamadas “fuerzas multinacionales” creadas en base a los acuerdos de Camp David dirigidos a asegurar el dominio político militar de los EE.UU. en el Próximo Oriente. El núcleo de estas fuerzas son las unidades de choque de la 82ª división de desembarco aéreo de los EE.UU., una de las primeras incluidas en las “fuerzas de despliegue rápido” norteamericanas.

Sin embargo, las “fuerzas multinacionales” y sobre todo sus contingentes norteamericanos por lo visto no piensan limitarse a la ocupación fáctica del territorio egipcio. “En los círculos del Pentágono comunicaron —señaló a este respecto *The New York Times*— que, en su opinión, cualesquiera unidades norteamericanas de las fuerzas multinacionales, en caso de emergencia, pueden ser utilizadas para operaciones fuera de Sinaí”.<sup>1</sup>

En los Estados Unidos no se oculta lo que se entiende como “casos de emergencia”. Atemorizando a los países árabes con la “amenaza soviética”, Washington advierte al mismo tiempo abiertamente que se decidirá a la intervención armada en sus asuntos internos si llega a considerar que el desarrollo de los acontecimientos en estos países no se produce según el guión norteamericano. El presidente de los EE.UU., R. Reagan, declaró abiertamente en una de sus conferencias de prensa que los Estados Unidos “no permitirán” que Arabia Saudita sea “un nuevo Irán”.<sup>2</sup> Incluso la difamada “doctrina Eisenhower” afirmaba, no obstante, que la intervención armada de los EE.UU. en el Próximo Oriente se realizaría a “solicitud” del país correspondiente. Ahora el presidente R. Reagan, arrojando hasta esa hoja de parra, proclama abiertamente la disposición de los EE.UU. a intervenir en los asuntos internos de Arabia Saudita de forma unilateral.

Después del asesinato de A. Sadat, A. Haig, entonces secretario de Estado norteamericano, hizo una declaración análoga respecto a Egipto: “Consideramos nuestras relaciones (con Egipto —A.K.) de importancia vital para nuestros intereses en la región y tendremos hacia ellas la actitud correspondiente”.<sup>3</sup> Estas palabras del jefe del departamento de política exterior de los EE.UU. fueron calificadas en el mundo de abierta amenaza de intervenir por vía armada en el desarrollo de los acontecimientos de Egipto si éste no le convenía a Washington. El propio Haig tampoco lo ocultó, declarando reiteradas veces tanto pública como confidencialmente que los EE.UU.

---

<sup>1</sup> *The New York Times*, February 28, 1982, p. 13.

<sup>2</sup> *Weekly Compilation of Presidential Documents*. October 5, 1981, vol. 17, N. 40, p. 1067.

<sup>3</sup> *The New York Times*. October 13, 1981, p. A23.

estaban dispuestos a “recuperar el prestigio de América” en el Próximo Oriente y “continuar su papel de líder en el área”.<sup>1</sup>

En breves términos, Washington pone enorme empeño en crear una cadena continua de bases y puntos de apoyo militares norteamericanos a lo largo de la línea que parte del extremo sur de África, pasa por el litoral oriental del continente, y atraviesa la región del Próximo Oriente hasta las fronteras meridionales de la URSS y más al este. No por casualidad, D. Middleton, conocido analista militar, escribió en *The New York Times* que el Sudoeste de Asia —desde Israel hasta Omán— rivaliza ahora con Europa Central en calidad de foco del planeamiento militar de los EE.UU.

El incremento sin precedentes de las fuerzas armadas de los EE.UU. en el Próximo Oriente para intervenir directamente por vía militar en los asuntos de la región, se realiza bajo el pretexto de la “necesidad de defender los intereses vitales” de los EE.UU. frente a la mítica “amenaza soviética”. Procurando, según expresión figurada de *New York Daily News*, “hacer entrar los hechos de la realidad en los estrechos marcos del antisovietismo”,<sup>2</sup> la administración de Reagan considera también su política respecto al Próximo Oriente ante todo desde el punto de vista de la confrontación global con la Unión Soviética. En este sentido basta recordar el primer viaje de A. Haig al Próximo Oriente en calidad de nuevo secretario de Estado en abril de 1981. A juzgar por sus palabras, consideraba casi como tarea primordial de esta visita crear una “alianza estratégica” dirigida contra la Unión Soviética o al menos un “consenso estratégico” desde Pakistán en el Este hasta Egipto en el oeste, que incluiría igualmente a Arabia Saudita, Jordania, Israel y Turquía.

Según los planes de Washington, el primer eslabón de la cadena de esta alianza que se preveía imponer al Próximo Oriente debía ser el acuerdo separado de Camp David entre Israel y Egipto bajo la égida de los EE.UU.; pero incluso los países árabes considerados por los EE.UU. como participantes potenciales en el “consenso estratégico” antisoviético, están convencidos de que la verdadera amenaza a la región no parte de la Unión Soviética, sino del aliado más próximo

---

<sup>1</sup> *Ibíd.*, p. A14.

<sup>2</sup> *New York Daily News*. April 14, 1981.

de los EE.UU.: Israel. Al informar de la reacción de los países árabes a los llamamientos antisoviéticos de A. Haig *The New York Times* escribió: “Personalidades oficiales jordanas y sauditas han declarado públicamente lo que sus gobiernos vienen diciendo hace años, que Israel representa el mayor peligro a la seguridad de esta región dado que continúa ocupando las tierras arrebatadas a los árabes en 1967”.<sup>1</sup>

Más aún, al firmar el “tratado de paz” con Egipto en base a los acuerdos de Camp David, Israel consideró que se había asegurado cierta seguridad en el flanco sur y comenzó a aplicar una política aún más agresiva en las demás direcciones. Los permanentes cañoneos al Líbano por tierra y mar, los bombardeos masivos desde el aire, durante los cuales perecen centenares de hombres, ante todo la población civil de este país que vive bajo constante amenaza de una nueva agresión en gran escala de los militaristas israelíes; el ataque pirata de la aviación israelí al reactor atómico iraquí cerca de Bagdad y los vuelos provocadores de los aviones israelíes sobre el territorio de Arabia Saudita; las amenazas de atacar las instalaciones atómicas de Libia y las cruentas represalias contra la población de los territorios árabes ocupados; las resoluciones del Knesset (parlamento israelí) sobre la legalización de la anexión fáctica de la parte oriental de Jerusalén en 1980 y de las Alturas del Golán —territorio sirio ancestral— en 1981 (esta última siguió inmediatamente a la firma del acuerdo sobre la denominada “cooperación estratégica” entre los EE.UU. e Israel), y por último, la intervención armada de Israel en el Líbano, el asedio a Beirut en julio de 1982, y el genocidio de los refugiados palestinos, son sólo algunos de los frutos de Camp David. En 1982, los Estados Unidos se atrevieron a hacer una intervención descarada en el Próximo Oriente: los *marines* desembarcaron en el Líbano y, de hecho, lo ocupan.

Por ello, no sólo las exhortaciones de Washington al “consenso estratégico” con Israel sobre un fundamento antisoviético, sino también los intentos de estructurar dicho “consenso” sobre la base del acuerdo de Camp David provocaron la más brusca condena y la más resuelta resistencia del mundo árabe. Con tal de vencer esta resis-

---

<sup>1</sup> *The New York Times*, April 9, 1981, p. A12.

tencia, Washington recurrió a suministros aún más masivos de armas al Próximo Oriente. La historia no conoce otro “tratado de paz” con el cual estuviera relacionada de modo tan directo una escalada tan pronunciada de la carrera armamentista, emprendida tanto por sus participantes inmediatos como por los países vecinos.

Según datos de 1981 del influyente y competente Instituto Internacional de Estocolmo de Estudio de la Paz, las remesas, en grandes proporciones, de armas norteamericanas al Próximo Oriente “en grado considerable son el resultado del tratado de paz de Camp David firmado entre Israel y Egipto”. Sólo a estos dos países en los marcos del acuerdo de Camp David, fueron prometidos gratuitamente y como empréstitos para la compra de armamento norteamericano, 4.500 millones de dólares. En esta relación apareció incluso la expresión irónica: armas para la paz.<sup>1</sup>

Sin embargo, esta suma gigantesca representa sólo una parte de los inmensos recursos que dedican los EE.UU. a la carrera armamentista en el Próximo Oriente. Aparte de este “subsidio por vez única”, en 1980 el volumen de la ayuda militar norteamericana a Israel fue de cerca de mil millones de dólares, en 1981 creció a 1.400 millones de dólares, en 1982 permaneció aproximadamente al mismo nivel, y en 1983 se proyectaba incrementarlo a 1.700 millones de dólares. En lo que se refiere a Egipto, sólo en el primer año después de la firma del “tratado de paz” con Israel sus compras militares en los EE.UU. casi se quintuplicaron y alcanzaron unos 2.500 millones de dólares. Después del trato de Camp David, las dimensiones de la ayuda militar de los EE.UU. a Egipto fueron cada año aproximadamente de mil millones de dólares, y en 1983 esta suma debía aumentar a 1.400 millones de dólares.<sup>2</sup>

Israel y Egipto no son los únicos en el Próximo Oriente que reciben ayuda militar norteamericana en grandes proporciones. Los Estados Unidos venden armamento y equipo militar a cualquier régimen reaccionario y militarista que oprima a su pueblo con tal de que actúe desde posiciones antisoviéticas. El incremento del torrente de

---

<sup>1</sup> Véase *SIPRI Yearbook. 1981*. Stockholm, 1981, p. 112.

<sup>2</sup> *Congressional Presentation. Security Assistance Programs; Fiscal Year 1982*. Washington, 1982, p. 120, 516-517, 522-523.

armas norteamericanas a Sudán, Somalia y varios otros países árabes, y el trato, sin precedentes por su escala, con Arabia Saudita para suministrarle armas modernas y “servicios militares” por una suma total de 8.500 millones de dólares son pruebas más que convincentes de esta actitud.

Pero incluso en Washington no pueden menos que comprender lo precario del apoyo a la carrera de armamentos y a la descarada intervención armada en los asuntos de otros países. Allí no han olvidado aún la experiencia del sha de Irán, cuyo régimen cayó bajo el empuje de la revolución a pesar de que el país estaba lleno de armas norteamericanas. Por ello, al activar su presencia militar en el Próximo Oriente, los Estados Unidos tampoco renuncian a los medios no militares de presión sobre los países de la región. Para dividir el mundo árabe, procuran aprovechar las dificultades internas de los países del Próximo Oriente, los litigios y las diferencias entre ellos, fomentan las discordias nacionales, étnicas y religiosas entre los países del Próximo Oriente. Los EE.UU. contribuyeron, por ejemplo, a atizar las contradicciones entre Irak e Irán, el conflicto entre los cuales desembocó en septiembre de 1980 en una guerra abierta.

Ahora Washington apuesta abiertamente a la solución por la fuerza militar de los problemas que proclama de forma unilateral “vitales” para los EE.UU. Estas tendencias intervencionistas de la política exterior estadounidense se manifiestan con especial nitidez en su actitud hacia el desarrollo de los acontecimientos en el Próximo Oriente; pero, al cifrar sus cálculos en la fuerza grosera y en la intervención desembozada en los asuntos de los países del Próximo Oriente, el imperialismo norteamericano no puede esperar que estos métodos sean ahora más eficaces que hace uno o dos decenios.

